

**La desarticulación del gremio de maestros en Chile
bajo el régimen militar (1973-89) y los factores que
determinaron
el quiebre del Compromiso Histórico en el ámbito
educacional**

**Inauguraldissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der
Philosophie im
Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-
Universität zu
Frankfurt am Main**

**vorgelegt von Omar Antonio Cofré
1998**

INDICE	Pagina
Introducción	4
Objetivo de la investigación. Estado actual y déficit en la discusión.	
Antecedentes sobre el material informativo	
Parte I	32
1 Descripción del concepto Compromiso Histórico en el marco de la Constitución de 1925 y actores sociales que participan.	32
1.1 El sindicalismo docente en el magisterio: La Asociación General de Profesores (AGP)	37
1.2 Acerca del Compromiso Histórico y de algunos conceptos educacionales en las tesis de Antonio Gramsci	62
1.3 Las opiniones de los gremios de maestros respecto del Compromiso Histórico	67
1.4 La falta de consensos educacionales bajo el gobierno de la Unidad Popular	73
Parte II	84
2 El régimen militar y las diversas manifestaciones del quiebre del compromiso histórico en el marco educacional, sindical y en las instituciones de la sociedad civil	84
2.1 Algunas reflexiones sobre Compromiso, continuidad y quiebre en la sociedad chilena	85
2.2 Quiebre del Compromiso Histórico en el sector docente	93
2.3 Coerción sindical y corporativismo gremial	106
2.4 El Corporativismo gremial en reemplazo del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (SUTE)	110
2.5 Imposición del Estatuto de la Carrera Docente	122
2.6 El sistema universitario en el marco de la política de ruptura	139

2.7	La Constitución de 1980	153
2.8	La municipalización y privatización de la educación y el término del Estado Docente	158
2.9	La prensa y los cambios educacionales	171
Parte III		189
3	La controversia respecto del quiebre del Compromiso Histórico en educación y la valoración que actores relevantes hacen de él	189
3.1	Colegio de Profesores	189
3.2	Gonzalo Vial / Enrique Froemmel, ex-ministros de educación del régimen militar	192
3.3	La Iglesia Católica Chilena	197
3.4	El Partido Radical	204
3.5	El Proyecto Interdisciplinario de Investigaciones Educacionales (PIIE)	208
Parte IV		212
4	Elecciones en el Colegio de Profesores: triunfo de la oposición y movilización social	212
4.1	Antecedentes generales	214
4.2	Antecedentes coyunturales	216
4.3	El revés electoral del corporativismo	228
Parte V		245
Conclusiones generales		245
Abreviaciones		248
Bibliografía		249
Personas entrevistadas		257

Introducción : Objetivo de la investigación. Estado actual y déficit en la discusión. Antecedentes sobre el material informativo

El trabajo que a continuación presento tiene por objetivo responder a la pregunta acerca de las razones que llevaron al régimen militar en Chile, durante el periodo 1973-89 al quiebre del Compromiso Histórico que había existido en la sociedad durante casi 50 años y que implicó, por medio de una serie de reformas, la desarticulación de todo el sistema nacional de educación. De este Compromiso tanto los estratos sociales como los partidos políticos del país, habían obtenido determinados beneficios los cuales se manifestaban en el ámbito de la salud, la escolaridad, la vivienda y los derechos civiles. Todo ello había quedado establecido en la Constitución política del Estado, aprobada por la población en 1925.

Al iniciar mi investigación quisiera referirme al aspecto conceptual de Compromiso Histórico el cual se origina del planteamiento de *bloque social* propuesto por Antonio Gramsci en 1923 y su relación o validez con la problemática socio educacional de Chile y de algunos países de América Latina. Dejo sí de antemano establecido que no es mi intención tematizar el planteamiento del autor italiano porque ello implicaría apartarme demasiado del objetivo del presente estudio; no obstante debo hacer algunas precisiones de carácter teórico que pueden ayudar al lector a comprender de mejor forma el marco del trabajo que aquí presento; ello además porque justamente mi tesis está ligada con un concepto que, a partir de la década de 1970 se ha venido discutiendo con crecido interés en diferentes círculos académicos y políticos de Europa y de América Latina: el Compromiso Histórico.

Primero que nada hay que decir que Chile, debido a su temprana industrialización, especialmente en el norte donde existen ricos yacimientos de salitre y cobre se produce, hacia el cambio de siglo, una rápida concentración de trabajadores y un desarrollo acelerado de las organizaciones, primero mutuales, luego sindicales y políticas, que competirán, con otros grupos existentes por el control del Estado y sus instituciones. La crisis del salitre al final de la primera guerra mundial significó no solamente la bancarrota económica para el Estado chileno sino también la pérdida de su vigencia como instrumento de dominación al servicio de los sectores oligárquicos del país. La aparición de robustas organizaciones sindicales en el norte (Federación Obrera de Chile, FOCH) así como la configuración en las grandes ciudades de la llamada clase media chilena que busca

desplazar a los sectores oligarcas en el mando de la nación, son el signo distintivo de la década. Producto de esta situación nueva que se produce en el país, en la cual sobresale la imposibilidad individual de los agentes sociales en pugna por imponerse sobre los otros, éstos se ven conminados a establecer pactos de cohabitación que implicará el desafuero de la Constitución de 1833 y la implementación de una Constitución moderna, integradora y participativa. Aun cuando la mayoría de la población aceptó este cambio, sectores maximalistas tanto de izquierda como de derecha, estuvieron en desacuerdo pero finalmente tuvieron que aceptar (con reticencias) los nuevos rumbos que tomaba el país.

Los valores y aspiraciones de la clase media fueron en gran parte aceptados como ley y los trabajadores organizados obtenían una serie de ventajas cívicas y sociales; sin embargo quienes continuaban teniendo la mayor influencia en esta nueva etapa seguían siendo los oligarcas. La diferencia estaba en que, a partir de 1925 había un Estado administrado por la clase media en cuyas instituciones políticas y culturales los trabajadores manuales y empleados públicos tenían bastante que decir.

Considerando estos factores, mi tesis central es que en la sociedad chilena de los años 20 se produce un compromiso histórico implícito, el cual está potenciado por todos los sectores en pugna, pero que será dirigido principalmente por la clase media; ella es la única que puede relacionarse no sólo con las clases antagónicas sino también con los substratos sociales que en cada una de estas clases coexisten. Formal y funcionalmente el carácter de este Estado ya no es opresor como el de 1833, sino más bien participativo en lo social y pluralista en lo ideológico. Cualquier forma de violencia política está deslegitimada. La iglesia se separa del Estado, las Fuerzas Armadas quedan sometidas al poder político, el Estado organiza y financia la educación, la que a su vez pasa a ser gratuita, pluralista y en sus niveles básicos obligatoria. Además de ello la población se beneficiaba con nuevos derechos civiles y libertades públicas.

El autor italiano A. Gramsci es quien en los años 20, plantea la tesis del Compromiso de clases en Italia y Europa en contraposición a la propuesta maximalista de *clase contra clase, muro contra muro* levantada por los partidos marxistas de aquella época. Punto central de su tesis es el establecimiento de acuerdos de gobernabilidad y participación de manera de impedir el aislamiento de los asalariados y lograr así configurar, dentro de las estructuras mismas de un Estado de carácter capitalista, una sociedad civil democrática, no excluyente en la cual quedasen asegurados los intereses fundamentales tanto de la clase

media como de los trabajadores manuales. Para Gramsci, la realidad de la Europa occidental era muy distinta a la de la Rusia revolucionaria del 1917 y por ello tanto las tácticas como las estrategias en la lucha social deberían ser distintas. Según Gramsci, los cambios en la Rusia, posterior a la revolución de 1917 se realizaban en un marco sociopolítico de mucho retraso y lo peor de todo, carentes de democracia. En la Europa occidental sin embargo existían forma democráticas de convivencia, partidos políticos que podían enfrentarse pacíficamente en el debate y estructuras sociales, económicas y sindicales que tenían ya casi un siglo de existencia. No obstante ésto, la amenaza de la guerra, del autoritarismo estaban presentes; por ello, según Gramsci, era necesario profundizar la democracia existente desarrollando las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las escuelas para, de este modo, ir creando al transportador de una nueva cultura: el *intelectual orgánico*, el cual debía estar imbuído de un espíritu democrático, liberador. La tesis de destrucción de un Estado para, sobre sus ruinas, construir otro, era para Gramsci una aventura política que podía terminar con un absoluto aislamiento de los trabajadores.

Esta particular forma de entender la lucha social (criticada fuertemente como liquidacionista por los partidos de orientación socialista de la época) consiguió imponerse posteriormente en algunos países de Europa y lo más sorprendente aún, dichos planteamientos estructuralmente parecidos, se hacen presentes en algunas sociedades de sudamérica a través de vías que sería aventurado definir. Cómo podría Gramsci difundir sus ideas si cuando no estaba clandestino estaba en la cárcel, podrá preguntarse con razón más de algún lector. Sin embargo no considero excéntrico afirmar que sí. Veamos: varios de los postulados gramscianos están, en rasgos generales, representados en la Constitución de 1925. Dejo constancia no haber encontrado material bibliográfico al respecto. La vaga información existente sobre el contacto del teórico peruano José Carlos Mariátegui y Antonio Gramsci, cuando el primero vivió en Italia en los años 20, no es antecedente suficiente para elaborar una tesis, aun cuando es posible, para investigadores especialmente interesados en el tema, rastrear algunas pistas en la documentación de la época. De mi parte puedo señalar que Mariátegui estuvo realmente bien informado de lo que en Chile ocurría en el movimiento de profesores hacia 1925 y escribió tres interesantes artículos sobre la reforma educacional en Chile (Temas de educación, Amauta, Lima ,1928). Quiénes eran los informantes que Mariátegui tenía en Chile y con quiénes discutía

los problemas de la Asociación General de Profesores que era el gremio de docentes más grande de Latinoamérica y que tuvo, según I.Núñez, una significativa participación en la elaboración de la Constitución de 1925 ?. Otra información importante Gramsci-Mariátegui podría encontrarse en la documentación del *internationale wissenschaftliche Begegnung über Kultur und Politik bei Mariátegui und Gramsci*(encuentro científico internacional sobre cultura y política en Mariátegui y Gramsci) realizado en Hamburgo en 1985. Y un último antecedente en la documentación del simposio *Gramsci en América Latina* realizado en Brasil en 1988, donde se escuchó también hablar de la ligazón, visible o invisible, de Gramsci y Mariátegui lo cual puede llevarnos a un reflexión de otras dimensiones. Baste pensar, dice el exponente José Aricó, que es en América Latina (1950) cuando por primera vez se traducen y publican los escritos de Gramsci y que sus argumentaciones y métodos interpretativos sobre *estado, cultura, hegemonía, bloque, sindicato o nacionalidad*, encuentran en Mariategui a uno de sus más formidables contemporáneos.

Interesante es observar que el bloque social que Gramsci planteaba para la Europa de mediado de los años 20 (en el texto usaremos *histórico* usando la expresión de Enrico Berlinguer) adquiriera una cierta coincidencia estructural en un país como Chile, a través de una Constitución (1925) que dará origen a un Estado democrático en el cual todos los actores sociales tenían la posibilidad real de acceder organizadamente a él. Un Estado, como diría Osvaldo Verdugo, formal y en ocasiones injusto, pero que era el único que hacía posible un sistema que: „nos servía para resolver civilizadamente nuestros problemas“.

Los diferentes gobiernos, partidos y coaliciones que administran el Estado posterior a la Constitución de 1925, trataron de hacer prevalecer un espíritu de colaboración entre los sectores sociales para evitar polarizar la lucha política que naturalmente seguía expresándose en la sociedad. Escasos son los periodos en que este espíritu fue soliviantado por la intolerancia y el uso de la violencia. En ocasiones los hechos desbordaron el acuerdo establecido en la Constitución, pero de ninguna manera fueron la regla general. La sucesión de fracasados golpes de mando, dirigidos con influencia militar en los años treinta, así como el conflicto entre radicales y comunistas a fines de los años 40 que dejó a estos últimos fuera de la legalidad, son excepciones que bien podrían confirmar la regla.

Incluso el presidente Salvador Allende (1970-73) a quien los militares y la derecha política chilena derriban por medio de un golpe de Estado (1973) acusando a su gobierno y al mismo presidente de la república de incurrir en actitudes totalitarias y anticonstitucionales, mantuvo este espíritu negociador en educación al no imponer reformas, como su proyecto de Escuela Nacional Unificada, por no tener los consensos necesarios en la población para un cambio de tal naturaleza.

En este contexto, es la clase media chilena quien durante varias décadas va a administrar el Estado, controlando el sistema educacional, influyendo en los colegios profesionales y adquiriendo connotada presencia en los gobiernos democráticamente elegidos.

El general Augusto Pinochet Ugarte asumió la dirección de un gobierno (1973-89) que se autodenominó *de Reconstrucción Nacional* el cual contó, en sus primeros años, con la anuencia de amplios sectores políticos y también de la clase media chilena quienes, desde sus instituciones de la sociedad civil habían ayudado a socavar la gestión gubernamental del presidente Salvador Allende.

No obstante, los nuevos gobernantes, lejos de favorecer a esta base social de apoyo, impusieron múltiples medidas, especialmente en lo educacional las que, a la vuelta de unos años, acabarán por debilitar la influencia de la clase media en este ámbito.

Uno de los gremios directamente afectados por las políticas del gobierno es el de maestros el cual, en una sociedad como la chilena, reúne al sector que más genuinamente representa los intereses e ideología de la clase media. Sobre este sector y sus complejas relaciones con el régimen militar está estructurada esta investigación.

Mi tesis se basa principalmente en que, como producto de las innumerables medidas económicas adoptadas por los militares para reducir los gastos del Estado, se sacrifica al sector educacional por medio de la entrega de la enseñanza pública al sector privado y municipal. También en este mismo contexto los maestros, quienes por su cantidad, constituían una pesada carga económica para el Estado y por su influencia y cultura democrática eran poco fiables como aliados en el proyecto autoritario del régimen, sufren la desarticulación de sus gremios y la imposición de una serie de medidas administrativas y reformas que perjudicarán considerablemente su status, le debilitarán como agente de cambios y perderán su condición de interlocutores ante las autoridades y ante la sociedad civil. Esto es precisamente lo que yo llamo quiebre del Compromiso Histórico en el ámbito educacional.

El descontento de los maestros que ya se hace visible a comienzo de los años 80, se irá transformando en un movimiento opositor que contribuirá significativamente a la derrota electoral de los militares y a su posterior retirada del gobierno.

El gremio de maestros, a lo largo de sus historia comprometió su capacidad creativa, experiencia y espíritu democrático en el mejoramiento del sistema educativo chileno. Ciertamente nunca hubo uniformidad en sus concepciones respecto del modelo educativo que debía implementarse en el país; ello porque en el gremio confluían opiniones muy diferentes; pero, el estilo de buscar consensos actuó casi siempre como una práctica que favoreció el desarrollo del sistema educativo mismo.

Desencadenada la crisis social de los años sesenta, tanto el Estado, representado por una red de instituciones supraestructurales y partidos políticos, ven agotados sus mecanismos de comunicación y la sociedad chilena se va trizando en bandos políticos casi irreconciliables.

Al asumir la izquierda política chilena el control del gobierno (1970) y obtener una alta representatividad en la supraestructura parlamentaria, los partidos de derecha y parte del centro político establecen pactos para cerrar el paso a las reformas políticas, sociales y económicas en marcha. A dicha actitud se suma el maximalismo de algunas fracciones influyentes en el régimen del presidente Salvador Allende y las actitudes cada vez más politizadas de los mandos militares quienes miraban con recelo los cambios que se planificaban para el país. Todas estas condiciones, escuetamente resumidas, dan el marco en el cual se va a gatillar la intervención de una Junta Militar de Gobierno que va a deponer al gobierno constitucionalmente elegido para instaurar un régimen autoritario, el cual se prolongó por 17 años en el poder. Dicho gobierno pretendió convertirse en una instancia de unidad y reconstrucción nacional. Los militares chilenos recogen las demandas de la clase media para imponer un modelo político autoritario de gobierno. No obstante dicho autoritarismo rebalsó los límites de la represión históricamente conocida por la población chilena y condujo al país a una polarización que perjudicó sobremanera los intereses económicos y educacionales de la clase media y junto con ello a la cultura política del país basada en la búsqueda de consensos en la solución de los grandes problemas nacionales.

Estos hechos van a provocar un nuevo desplazamiento de la clase media hacia la oposición desde donde fustigarán al gobierno hasta provocar, aliados con grupos de diferente signo, la desestabilidad del régimen.

La discusión sobre el Compromiso Histórico y los factores que determinaron su quiebre tiene múltiples aristas. Para los representantes educacionales del régimen militar la educación en Chile: „no representa un valor para la sociedad (Enrique Froemmel) ni tiene en la población una importancia relevante. Dejan implícitamente expuesta la tesis de que los cambios producidos en educación fueron necesarios por muchos factores entre los que sobresalen la presencia de un „desorden educacional„(A.Pinochet); la formación de jóvenes que no encuentran ocupación en ningún ámbito por estar el sistema orientado hacia profesiones liberales (Gonzalo Vial), o porque el sistema universitario se vició al quedar bajo el influjo de los partidos políticos (A.Prieto).

Para los representantes del sindicalismo docente Pedro Schulak, Julio Valladares, Jorge Pavez y Osvaldo Verdugo, el régimen militar quebró una tradición que había comenzado a originarse ya en los albores de la independencia y que se basaba en privilegiar el diálogo como mecanismo de entendimiento entre los agentes sociales y políticos que participaban en el proceso educativo.

Según la Iglesia Católica el régimen militar actuaba en educación de manera arbitraria, sin considerar la opinión de los maestros ni de los usuarios del sistema . Manifiesta el Episcopado que se impuso en las escuelas un modelo educativo que dejaba a los „privilegiados de la fortuna“ en óptimas condiciones para acceder a las mejores escuelas y universidades del país; en cambio los desposeídos de bienes tuvieron que conformarse con un sistema educativo de baja calidad lo cual acentuó los conflictos pedagógicos estimulando los resentimientos sociales.

Los teóricos y sindicalistas vinculados al ex gobierno de la Unidad Popular como Iván Núñez, junto con acusar al régimen militar de violentar la tradición dialoguista en el país, le increpan, en el ámbito de la educación, un comportamiento que rompía con la cultura democrática de los educadores. La imposición de reformas educacionales sin consulta, así como la proscripción del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (en adelante SUTE) y la imposición de un Colegio de Profesores de corte corporativista con dirigentes cooptados serían, a juicio de los autores mencionados, muestras de un estilo desacostumbrado de gobierno que no encuentra precedentes en la historia del país. No

obstante al referirme a I. Núñez debo aclarar también algo más. Importante es decir que el autor mencionado, desde sus cargos tanto en el magisterio como en el Ministerio de Educación Pública y en institutos de investigaciones como el Proyecto Interdisciplinario de Investigaciones Educativas (en adelante PIIE), ha tenido una visión macroeducacional que le ha permitido conocer a fondo el sistema; sin embargo él ha mantenido un esquema de interpretación contradictorio el cual resumiré en cortas palabras: en el periodo en que el mencionado autor, como militante socialista, se ubica en la bancada de la oposición a los gobiernos de Alessandri y Frei Montalva, fustiga al sistema educacional por considerarlo autoritario, desfasado de la realidad, teorizante e incluso clasista por ayudar a reproducir las estructuras sociales de desigualdad que en el país existen. Bajo el gobierno del presidente Salvador Allende, Núñez junto a una fracción mayoritaria del magisterio proponen una reforma al sistema cuya columna vertebral es la puesta en práctica de una *Escuela Nacional Unificada*. Ello implicaba, como paso previo, democratizar el sistema, incorporando nuevos agentes al proceso educativo: padres, gremios, sindicatos, centros productivos, empresas, asociaciones culturales, etc. Núñez y el allendismo ponen el acento principalmente en la creación del *hombre nuevo* para una sociedad socialista. El perfil de este hombre nuevo se deja reconocer fácilmente en los documentos ideológicos de los partidos de orientación marxista los cuales, unos con mayor o menor énfasis, proponen modelos educacionales puestos en práctica en algunos de los llamados países socialistas. Dicha reforma como daré cuenta en el presente trabajo no logró imponerse por no encontrar los consensos necesarios en el conjunto de la sociedad. Cuando el régimen militar asume la conducción del país y comienza a implementar su política de desarticulación del sistema educativo, Núñez asume paradójicamente la defensa del sistema que el mismo había estado ayudando a liquidar en los años anteriores. De esta manera resulta que el sistema educacional *clasista y discriminatorio pre-1973*, no resulta para Núñez tan abyecto como las medidas autoritarias del régimen: „(...)..la educación chilena era reconocida como una de las mejores de la región“: (...) „existía unanimidad en torno a la igualdad de oportunidades y tanto el Estado como la sociedad se esforzaban por perfeccionarla“(Ruptura y Construcción de Consensos, 1988). Se percibe en la lectura de sus documentos un cambio substancial de postura, una cierta mistificación del pasado. Si es cierto como dice Núñez que el sistema educacional pre-régimen militar permitía el libre juego de ideas, posibilitaba la

sindicalización, los bajos sueldos de los maestros eran compensados con varios meses de vacaciones, el perfeccionamiento profesional era gratuito y el Estado corría con todos los gastos de la educación, por qué azuzar en extremo a los profesores y a los políticos de la Unida Popular para desarticular el sistema y tratar de imponer un tipo de escuela que al final acabó siendo punto de convergencia del antireformismo con lo cual aisló más a su propio gobierno. (?)

En mi opinión los teóricos de la *Escuela Nacional Unificada* debido a los cambios políticos que en el país ocurrían, asumen en primera línea una oposición política descartando *a priori* todo lo que pudiera venir del régimen. Este estado de confusión según mi opinión fue provocado por el nuevo gobierno quien desde un comienzo desbarató toda forma de diálogo, intervino escuelas, prohibió la existencia de gremios y reprimió en educación con desacostumbrada rudeza. Como si fuera poco, impusieron un gremio cooptado formado exclusivamente con adherentes al régimen incluso pagados desde el Ministerio de Educación para cumplir esas funciones. De esta manera la relación autoridades-maestros estuvo sesgada por los opuestos de adscripción u oposición (Verónica Monsalve) lo cual imposibilitó de antemano el análisis mesurado y la búsqueda colectiva de soluciones a los grandes problemas educacionales que el país efectivamente tenía. Lo diré en forma más clara: el régimen militar polarizó en extremo a la comunidad educacional y en ese contexto los maestros e investigadores fueron arrastrados por la marejada de la descalificación. De ahí entonces que la polémica educacional se orientara a la defensa o desarticulación del sistema educacional sin que hubieran propuestas intermedias, y los teóricos del allendismo como Ivan Núñez al no tener estructuras educacionales modelos que defender, se refugiaron consciente o inconscientemente en la defensa del sistema educacional tradicional, otrora tan criticado por ellos.

Para el Colegio de Profesores nominado (Eduardo Gariazzo, Silvia Peña) el sector educacional estaba siendo manipulado por los grupos políticos quienes habían convertido escuelas, universidades y Ministerio de Educación en zonas de influencia en las cuales predominaban, más que los criterios de excelencia profesional, las opiniones políticas. De esta manera se había llegado, según ellos, a un caos educacional que ponía en peligro no solamente el sistema sino también la propia seguridad del Estado. En este contexto, según Gariazzo, el Sindicato de Profesores (SUTE) se había alineado con las políticas del régimen de S. Allende perdiendo su carácter gremial para convertirse en herramienta política

de quienes administraban el gobierno. El nuevo Colegio de Profesores debía, a juicio de sus dirigentes, levantar el perfil profesional de los maestros al margen de opiniones políticas partidarias. Igualmente El Colegio de Profesores debía mejorar las condiciones económicas del magisterio y aportar creativamente al desarrollo del proceso educativo del país colaborando con las autoridades y con su programa de reconstrucción nacional.

En estas opiniones están representados los principales sectores que tienen ingerencia en el proceso educativo chileno. Mayoritariamente se trasluce una actitud de condena a los cambios implementados durante el régimen militar. Dicha condena no queda circunscrita solamente a los contenidos de las reformas sino también a la manera cómo éstas se llevaron a la práctica, es decir, sin consulta a quienes eran, además de agentes del proceso educativo, protagonistas en la configuración del Compromiso Histórico en la educación chilena: el magisterio organizado.

Usando conceptos diferentes, todos, de una u otra forma coinciden en que hubo un quiebre en la tradición educacional del país el cual rompió con un compromiso que se había mantenido vigente en el país por cerca de 50 años. Incluso adherentes y representantes del régimen militar tienen que aceptar que los cambios fueron impuestos sin consideraciones de ningún tipo. Al mencionar la politización, el caos y la incompetencia del sistema educativo anterior a 1973, tratan de encontrar las justificaciones para las medidas impuestas.

Para algunos investigadores (Rafael Echeverría, Ricardo Hevia, Guillermo Briones, Iván Núñez) el régimen militar careció en verdad de política educacional y se dejó arrastrar por los expertos económicos que buscaban alivianar el monto de los gastos del Estado. Además, agregan los autores, los militares impusieron un sistema educacional autoritario con un movimiento gremial de profesores disminuído y atemorizado el cual bien podría ayudar a la implementación del proyecto de *reconstrucción nacional*.

La libertad de educación sólo como efecto propagandístico, la desarticulación de un gremio dinámico e influyente en la sociedad y la reducción del presupuesto educacional como efecto economicista en un estricto esquema de autoritarismo, son las líneas que a mi parecer delimitaron el marco en el cual se sacrificó el Compromiso Histórico.

Parte I

En la primera parte de mi trabajo me he propuesto focalizar el Compromiso Histórico de 1925 y los actores sociales relevantes que en él participan. Antes sí, vamo vamos a definir el concepto como la convergencia de diferentes estamentos y grupos sociales representados por gremios, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil los cuales, durante el periodo de recesión económica nacional y mundial de los años 20, establecieron en la sociedad chilena un pacto de gobernabilidad que permitió activar tanto el proceso económico estancado por la crisis del salitre, como también su sistema político, y dentro de éste, el sistema nacional de enseñanza.

Decir que bastó el desencadenamiento de la crisis para que los actores sociales se apresurasen a buscar fórmulas de arreglo sería equivocado. En todos los estratos sociales, incluso en los mesocráticos, existió la tentación del protagonismo en cuanto a querer erigirse como los conductores del nuevo Estado. La iglesia quiso mantener hasta el final su influencia pero debió caducar ante el laicismo. Los militares intentaron acaparar la conducción del Estado y desplazar a la sociedad civil pero fracasaron porque a la fecha la tradición pluralista ya había hecho escuela en las instituciones del país. Los gremios y partidos políticos en los cuales activaban los grupos de orientación marxista, anarquista, cristianos y corporativistas pese a tener intereses comunes se enfrentaron en sórdidas disputas ideológicas que no aportaron demasiada luz a la solución de los conflictos pero sí contribuyeron a perfilar la cultura política del país de los próximos cincuenta años. Lo cierto es que, ningún estamento ni partido político pudo imponerse sobre los demás. Ello, lejos de dividir a los chilenos les conminó a buscar fórmulas de cohabitación política las que actuaron, como cimientes en la configuración del Compromiso Histórico. Ciertamente dicho compromiso en ocasiones fue vulnerado por razones que sería largo describir. Baste señalar la imposición de la *ley de seguridad interior del Estado* (1949) para poner fuera de la legalidad al Partido Comunista o la actitud de sectores políticos maximalistas, tanto en la derecha como en la izquierda, que privilegiaron, sin éxito, a finales de los años 60 y comienzo de los 70 la política de confrontación a través de prácticas orgánicas paramilitares.

En este Compromiso hay como ya he dicho una cultura hegemónica que es la de la burguesía agraria-industrial, la cual debe empezar a cohabitar con otras formas de pensamiento que se expresan en el ámbito de la vida pública. Pero, para que ello sea así, el

Estado chileno a partir de 1925, tuvo que terminar con una serie de prácticas autónomas de gremios, institutos y asociaciones, todas las cuales renacen como sindicatos, partidos políticos, escuelas y asociaciones culturales insertas en la nueva institucionalidad del país. Aspecto relevante es la amplia discusión que se realizó en la sociedad civil en la que a los maestros, en opinión del investigador I. Núñez, (*El magisterio chileno 1900-36 sus primeras organizaciones gremiales*) les cupo un destacado papel en la formulación y difusión de los nuevos preceptos constitucionales.

Sobre los actores sociales que participan del Compromiso Histórico debo señalar lo siguiente: la clase dominante hacia los años 20 en Chile la constituye una alianza económica agrario-industrial que se habían mantenido sin mayores contrapesos casi un siglo en la administración del Estado. Aun cuando hacia finales del siglo XIX tanto conservadores como liberales se habían disputado el poder en un conflicto que acabó en guerra civil y en triunfo para los conservadores; éstos debieron buscar fórmulas de negociación con la oposición liberal para dar estabilidad política al país.

Ambas fracciones desde el punto de vista ideológico están separados por la adscripción de unos, los conservadores, al catolicismo ortodoxo heredado del imperio español y otros, los liberales, reticentes al catolicismo, se inscriben mas bien en las corrientes masónicas y agnósticas de la época. La rivalidad entre ambos partidos, sumado a la recesión económica mundial, les lleva a una crisis política en la dirección del Estado y les obliga a buscar fórmulas de arreglo con los nuevos actores sociales emergentes: la clase media. Ésta, formada por empleados públicos, maestros, artesanos e intelectuales busca negociar mejores condiciones de vida con los grupos dominantes y al mismo tiempo postula a una inserción más significativa en la conducción política del país. Consciente de no disponer de las fuerzas necesaria para imponer su proyecto político propio, la clase media busca alianzas con los obreros organizados quienes, por efecto de la temprana industrialización han formado importantes organizaciones gremiales y políticas en el país. Ambos sectores sociales: clase media y trabajadores manuales van a dar el impulso a un compromiso social que permitirá distensionar conflictos económicos y políticos de los grupos históricamente dominantes pero que, al mismo tiempo hará posible el mejoramiento de sus propias condiciones de vida. En este contexto se aprobarán reformas sociales que les beneficiarán y tendrán acceso a los cargos de dirección en el gobierno sobre la base de un compromiso por medio del cual todos los agentes sociales obtenían particulares beneficios.

Papel significativo en la gestación de la Constitución de 1925 lo juega la Asociación General de Profesores de Chile, AGP, que a la fecha se ha convertido en la organización gremial de los maestros. Esta organización, la primera de perfil sindical de los docentes, moviliza a un amplio espectro de sus asociados tras un programa que promueve el mejoramiento de las condiciones laborales de los maestros, la ampliación del sistema educativo para hacer posible la aplicación de la ley de enseñanza primaria obligatoria (aprobada en 1920) y la democratización del país.

En la nueva Constitución de 1980 con la cual los militares reemplazan a la de 1925, ni los maestros, ni las organizaciones de la sociedad civil, ni la iglesia, ni muchos menos los círculos políticos opositores tuvieron, como lo demostraré más adelante, oportunidad de manifestar sus opiniones respecto de ella. Solamente un cuestionado plebiscito dio el marco legal a esta decisión.

El profesorado chileno por medio de su gremio la AGP, apoyó la Constitución de 1925 y naturalmente continuó, desde las escuelas y desde sus gremios, exigiendo la vigencia de dicho Compromiso que otorgaba al Estado la tuición sobre todo el sistema educacional chileno(Estado Docente). Sin embargo, debido a los vaivenes de la política, la AGP bajo el gobierno autoritario de Carlos Ibáñez fue reprimida provocando su dispersión y transitoria desaparición de la escena gremial. Posteriormente aparecerá con nombres distintos: Unión de Profesores de Chile y Federación de Educadores de Chile. Ambas van a reactivar la discusión y las demandas de tipo sindical.

En la segunda mitad de los años treinta se establece en Chile una coalición formada por los partidos políticos de la clase media y de trabajadores manuales(industriales) constituyéndose una alianza (Frente Popular) hegemonizado por el Partido Radical, partido en el cual militan una gran cantidad de docentes, entre ellos el futuro presidente de la república, Pedro Aguirre Cerda quien enfrenta la campaña con el lema „gobernar es educar“. Pese a que la coalición posteriormente fue liquidada el Partido Radical pudo mantenerse en el gobierno durante más de 20 años.

Los gremios que suceden a la AGP, establecen eficientes mecanismos de contacto con las autoridades, mejorando el nivel de relaciones que se había entorpecido por la represión de C. Ibáñez contra el magisterio. No obstante, las grandes demandas económicas de los maestros no logran ser solucionadas. Miles de jóvenes son incorporados a las aulas pero la estructura educativa continuó siendo la misma. Esto ha llevado a algunos investigadores a

afirmar que, en verdad, bajo el periodo de los gobiernos radicales hubo crecimiento de matrículas, pero no desarrollo educacional, dos conceptos que a menudo se interpretan como sinónimo.

Tanto la Unión de Profesores y la Federación de Educadores de Chile mantienen relaciones de trabajo y de consulta con las autoridades pero devendrán ocasiones en que, por razones salariales, profesionales o reformas educacionales, se van a enfrentar en la arena pública de los conflictos sociales.

Los problemas económicos de los maestros ni antes ni después de 1925 fueron solucionados. Sin embargo una serie de garantías de carácter social y profesional eran el elemento compensatorio que ayudaba a amortiguar las tensiones existentes originadas por los bajos salarios.

La politización en el país a partir de la mitad de los años sesenta encuentra al sector docente gremialmente unificado pero políticamente fraccionado. Junto con implementarse en el país significativos cambios educacionales tanto en la educación básica como media, los maestros, partidarios de transformaciones más profundas, impulsan demandas que devendrán en claros enfrentamientos con el gobierno.

Al inicio de la década de los años setenta el gremio de profesores y los trabajadores de la educación se unifican en una gran organización gremial a nivel nacional que se denominó Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (SUTE). Muchos de sus representantes asumen responsabilidades en la nueva coalición gobernante y como gremio, promueven un proyecto de reforma educacional (Escuela Nacional Unificada, en adelante ENU) que encendió una áspera polémica a nivel nacional.

Polarizado el país fracciones casi irreconciliables por efectos de la politización excesiva que a la sazón se vivía, y atendiendo a la gran cantidad de opiniones críticas al modelo de escuela propuesto por el gobierno de la época, el presidente Salvador Allende decide retirar el proyecto por considerar que los consensos necesarios no se expresaban con transparencia en la sociedad civil.

Parte II

En la segunda parte de mi investigación me ocupo de la gestión gubernamental de los militares (1973-1989) en el ámbito de la educación y en sus relaciones con el magisterio chileno y otras instituciones de la sociedad civil.

En el año 1973 el carácter de este Estado de Compromiso es roto cuando los militares toman el control del país e imponen un gobierno *de facto*. Naturalmente toda la sociedad fue protagonista de los cambios que en todo orden, y a toda máquina se realizaban, y en este contexto la educación fue una de las áreas en las que el régimen militar actuó con el máximo de intransigencia; este es el tema principal sobre el cual se ocupa la presente investigación.

En efecto la irrupción de los militares al poder en Chile (1973) violentó una tradición constitucional que se había originado casi a mediados del siglo XIX y que, con pocas excepciones, se había mantenido vigente durante casi todo el siglo XX.

A diferencia de otros países latinoamericanos, Chile contaba, en su vida republicana, con escasas intervenciones de los uniformados en el gobierno. Ello había sido así, quizás no tanto por la vocación democrática de las Fuerzas Armadas de someterse al veredicto electoral, sino mas bien por una presencia constante de las instituciones de la civilidad y de sus partidos políticos en la solución y discusión de los grandes problemas nacionales.

Los gobernantes, provenientes de diferentes vertientes ideológicas, respetaron con relativa consecuencia determinadas formas de convivencia, planteamientos educacionales y formas de dirimir conflictos sociales en los cuales el uso de la violencia quedaba excluído. Eso es lo que yo podría definir como signos de un Estado de Compromiso.

La manera de lograr estos acuerdos se hacía, según lo señala el profesor Raúl Atria: *a la chilena*, o sea, *de a poquito*, de manera de no forzar a los actores sociales a confrontarse con situaciones extremas lo cual en parte era el componente garante de la paz social. Para este esquema regía, según el mismo autor, una *ley de oro*: participaban de las ventajas que ofrecía el Estado *solamente aquellos que se organizaban*. De esta forma el Estado reglamentaba las vías de participación y al mismo tiempo comprometía la adhesión de los civiles a un sistema que tenía muchas deficiencias pero que también tenía la virtud, como institución, de asegurar una convivencia nacional pacífica sobre la base del otorgamiento de ciertos derechos sociales y libertades públicas a la ciudadanía.

En el plano educacional los cambios que los gobiernos implementaron en el presente siglo, apuntaron específicamente a ampliar el sistema, asegurar la gratuidad de la educación básica, modernizar el proceso de enseñanza y aprendizaje por medio de reformas técnico pedagógicas, etc. En los años sesenta se plantean, tanto en círculos gubernamentales como de la oposición, reformas estructurales que buscaban cambiar en parte el perfil de un sistema educacional que para muchos parecía anquilosado.

Pese a las diferencias de ideas que existieron en diversos ámbitos de la vida académica y política del país en torno a reformas educacionales, sobresale la disponibilidad que tanto gobernantes como gremios e instituciones no gubernamentales tuvieron para discutir las propuestas. Esta es una de las tradiciones importantes que se rompe con la irrupción de los militares al gobierno y con la imposición de medidas que en poco tiempo fueron cambiando el carácter del Estado.

Otras muestras representativas de este quiebre son, en lo político la discriminación de ideas, el uso de la fuerza y la puesta en escena de métodos de violencia e incluso de tortura para acallar y eliminar opositores lo cual estaba deslegitimizado no sólo en la Constitución de 1925 sino también en la cultura política de la población. En lo jurídico una desacostumbrada complacencia de las autoridades superiores de la justicia con las autoridades militares.

Pero la presente investigación no pretende investigar el trasfondo político ni los juicios morales del régimen o de su sistema jurídico. Lo que en este trabajo se ofrece es un estudio sobre las medidas educacionales implementadas por los militares en el ámbito educacional y que permiten afirmar por un lado la existencia y quiebre del Compromiso Histórico, y por otro, investigar las razones que condujeron al régimen a optar por este último camino.

Al asumir los militares el control del gobierno proscribieron al sindicato de maestros y en su reemplazo crearon un Colegio de Profesores. Mientras los dirigentes del primero fueron perseguidos y en muchos casos expulsados del servicio, las nuevas autoridades nominaron, dentro de sus adherentes, a una planta directiva que debía asumir la representación de cerca de 120.000 docentes. No podría hablarse en esta fase (1973-1985) de sindicalismo. En verdad lo que hubo fue colaboración de parte de los profesores que adherían al nuevo régimen. El gobierno intentó materializar una serie de medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida del profesorado pero dichos intentos se estrellaban con las cifras de los técnicos económicos quienes, no podían ni sabían cómo encontrar los recursos para hacer

compatible los intereses del proyecto de reconstrucción del gobierno y las demandas económicas del profesorado.

El neoliberalismo económico tuvo que sacrificar instituciones y estructuras y entre estas últimas el sector docente y educacional aparecen como las primeras víctimas en las nuevas políticas de *ajuste*.

Las organizaciones contestatarias del magisterio que aparecen disminuidas y atemorizadas hacia comienzo de los años 80 como la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH) van a ir aportando, hacia mediado de los años 80, una creciente vitalidad que les permitirá, unida a otras fracciones del Colegio de Profesores, desplazar por medio de elecciones libres al corporativismo docente e iniciar un camino de recuperación de la autonomía gremial. Esta lucha por la democratización del principal gremio del país es vista por el autor de este trabajo como un proceso que permite abrir las compuertas de una movilización social la cual posibilitará la recuperación de la democracia después de 17 años de régimen autoritario en Chile.

Dentro de las medidas rupturistas que considero en la presente investigación para confirmar mi tesis de quiebre del Compromiso Histórico sobresalen en lo gremial, como ya lo he dicho, la prohibición del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación. Junto con su proscripción, varios de sus dirigentes son expulsados de las escuelas, algunos encarcelados otros obligados al exilio, incluso algunos fueron muertos o desaparecieron en las cárceles del régimen. En reemplazo del SUTE se impone una institución de carácter corporativista llamada Colegio de Profesores, cuyos representantes son designados por el gobierno. Esta organización asume la función de representar a los maestros ante la opinión pública y ante las autoridades. Su existencia estará estrechamente vinculada a la defensa de las políticas educacionales del régimen hasta que, huérfanos de apoyo, deberán entregar(1986) la representación de la institución a los dirigentes elegidos democráticamente por las bases.

Los militares imponen un Estatuto de Carrera Docente en la cual reglamentan en términos laborales, económicos y profesionales la relación de los maestros con el Estado. Dicha medida tuvo exclusivamente un efecto propagandístico por cuanto éstos no fueron consultados y quedaron, como se demuestra en la investigación, en una situación más desventajosa que la existente antes de la promulgación del Decreto. El aumento salarial entregado les significó a la vez un aumento de horas de clases que no era proporcional al

salario ofrecido. Tampoco se consideraba en este Estatuto el derecho a perfeccionamiento profesional que los maestros habían conseguido como prerrogativa profesional en periodos anteriores. Otro discordante acápite del Estatuto establecía una dependencia arbitraria de los maestros con los directores de escuelas, estos últimos, nombrados desde el Ministerio de Educación, debían calificar a los docentes por su trabajo, disciplina, presentación personal y otras actitudes que más tenían que ver con formas de control ejercidas por directores de escuela en calidad de "pequeños dictadores"(Schulak) que con el proceso educativo mismo.

En este esquema de imposición de medidas, el sistema universitario comienza también a desintegrarse. Solamente la universidad de Chile ve caer drásticamente su capacidad de matrícula entre 1973 y 1981 en casi un 50% (Andrés Sanfuentes). Las carreras con rango académico quedan reducidas a 12 y las pedagogías pierden su condición de estudio universitario. Al mismo tiempo la legislación abre las compuertas para que instituciones privadas puedan ofrecer educación superior produciéndose un fenómeno de proliferación de universidades que sobrepasaron la cincuentena y cuyo rendimiento, con algunas excepciones, ha sido puesto seriamente en duda por académicos, intelectuales, y científicos chilenos.

La década de los años 80 se inicia con la imposición de una nueva Constitución redactada por partidarios del régimen y sometida a un referéndum en el cual la oposición, silenciada, poco pudo decir sobre tan relevante acontecimiento. El oficialismo controló no solo los lugares de votación sino también las cifras que posteriormente se entregaron a la población y a la opinión pública internacional.

Sobre este punto me detengo un instante para aclarar que la Constitución de 1980 impuesta por los militares, se origina en un momento histórico en que todas las instituciones políticas y gremiales de oposición así como los derechos ciudadanos se encuentran conculcados. El gobierno constitucional había sido derrocado el 11 de septiembre de 1973 y su presidente había resultado muerto después de un tormentoso bombardeo a la casa de gobierno. Desde ese momento habían transcurrido 7 años y miles de sus seguidores permanecían en el exilio, o dispersos en el país. No existe en aquellos años prensa independiente, parlamento, partidos políticos, ni gremios que puedan oponerse u opinar sobre la nueva Constitución. Las autoridades militares encargaron su redacción a expertos constitucionales vinculados a los partidos de la derecha chilena. El debate nacional,

necesario en cualquier democracia sobre un tema que compromete los derechos ciudadanos de todo un país, quedó circunscrito a las esferas militares y de adherentes políticos al régimen.

No existió tampoco interés por promover, ni por informar debidamente a la población, sobre los cambios que se irían a operar en la nueva Constitución. La oposición, perseguida y sin recursos, tampoco tuvo la fuerza para oponerse a su aplicación. Incluso la Iglesia Católica chilena con toda su influencia en la población civil y en ciertos grupos cercanos al régimen, nada pudo hacer para impedir la consumación de una Constitución *de facto*. En este sentido poco es lo que puede compararse con el proceso de 1925 en el cual como ya lo he dicho los maestros, por medio de su gremio (AGP) participaron activamente en el proceso de información y discusión de la Constitución que debía votarse.

Dos argumentos fundamentales se vislumbran en el discurso de los militares para justificar la nueva Constitución. El primero, por cierto muy convincente, se refiere a las necesidades de modernidad en una sociedad que se acerca al año 2.000 para lo cual la legalidad de 1925 aparece obsoleta y desfasada de la realidad; el segundo está circunscrito a la necesidad de crear los mecanismos para consolidar un modelo de sociedad que cierre el paso a los grupos políticos que pretenden socavar la estructura política del Estado en la búsqueda de aventuras totalitarias, hecho que, en opinión de los militares, habría sido posible si hubiera continuado vigente la Constitución de 1925.

La Constitución de 1980 restringe considerablemente los poderes del presidente de la república al tiempo que crea nuevas instituciones en las cuales las Fuerzas Armadas aparecen jugando un rol protagónico. Este hecho ha llevado a afirmar a muchos juristas y a políticos opositores al régimen militar que, lo que realmente se ha establecido en Chile es una forma de democracia protegida o democracia vigilada (Genaro Arriagada) en la cual las instituciones de la civilidad, así como los partidos políticos, las 2 cámaras parlamentarias e incluso el presidente de la república, tienen funciones limitadas y controladas por organismos no elegidos por la ciudadanía.

En efecto, al momento de la transición democrática, un Tribunal Constitucional, un Consejo de Seguridad Nacional, una fracción de senadores designados, además de una considerable y poco usual autonomía de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, daban el marco a una forma de democracia que venía a ser el corolario de un sistema que había roto

los pilares principales en los cuales descansaba la democracia de compromiso originada en 1925.

En lo político-administrativo el régimen militar privatiza y municipaliza la enseñanza. En poco tiempo cientos de escuelas son traspasadas a manos de los alcaldes para su administración. Otras tantas son entregadas por el Ministerio de Educación a sectores empresariales privados para que asumieran, según se dijo, mayor responsabilidad en el proceso educativo. Lo que comenzó siendo una medida *optativa y experimental* en el caso de la municipalización, pasó a convertirse en ley impositiva que transformó toda la estructura educativa del país.

Es en el periodo comprendido entre finales de los años 70 y comienzo de los 80 cuando el quiebre del Compromiso Histórico en educación queda definitivamente consolidado. La sucesión de medidas educacionales inconsultas impuestas por el régimen así como la creciente oposición de los maestros que desembocará en un *diálogo de sordos* es la demostración más evidente de esta ruptura. Para el estudio de este tema me he apoyado en entrevistas personales, documentaciones tanto del gobierno como de los gremios, y también monografías escritas por investigadores educacionales vinculados al magisterio.

Parte III

En la tercera parte de mi trabajo me ocupo de representar la controversia respecto del quiebre del Compromiso Histórico en educación y la valoración que agentes sociales importantes del país hacen de él. Por medio de estas opiniones busco reforzar mi tesis y por ello puse especial hincapié en la heterogeneidad de las instituciones e ideas que se expresan. Los expositores, con pleno conocimiento de la situación se refieren a temas de hondo significado como por ej. las reformas impuestas por el régimen militar, la situación de los gremios de maestros, la dignidad profesional del magisterio y los efectos del modelo educacional en una sociedad a las puertas del siglo XXI.

Uno de los aspectos sin duda que provoca mayor pesar al profesorado chileno es el nivel de represión que contra ellos se desató, especialmente contra los sindicalistas opositores que osaran azuzar a los maestros a movimientos reivindicativos. Estos podían contar con el despido casi seguro de las escuelas, lo cual en ocasiones iba acompañado de arrestos y relegaciones como ocurrió muchas veces con dirigentes del magisterio: „conté las veinte primeras veces que estuve en la cárcel, después ya no conté más“, llegó a decir el presidente del Colegio de Profesores Osvaldo Verdugo, refiriéndose a los años como

dirigente gremial. Peor suerte corría el profesor Manuel Guerrero, secretario general de AGECH quien fue secuestrado y asesinado por un escuadrón vinculado a carabineros de Chile.

La llamada dignidad profesional de los maestros quedó reducida a los niveles mínimos. Sin gremios, marginadas las pedagogías de la universidad, sin Escuelas Normales, no considerados en las decisiones educacionales, con miles de despedidos y viviendo con bajos salarios, los profesores enfrentan, en mi opinión, la peor crisis de su historia.

La sociedad chilena no permaneció indiferente ante el drama en la educación. Desgraciadamente los mecanismos de protesta estuvieron sometidos a los múltiples rostros de la represión. Pese a todo, instituciones como la Iglesia Católica, personalidades académicas, de la cultura, partidos políticos de la oposición (en receso), organizaciones estudiantiles y el sector sindical histórico del magisterio, mantuvieron una línea constante de denuncia dentro de las escasas posibilidades que tenían. Sus opiniones respecto del Compromiso Histórico así como la de diferentes personeros del régimen militar las he resumido y confrontado unas con otras de manera de hacer más expedita la comprensión del fenómeno educacional en estudio.

Parte IV

El cuarto capítulo de este trabajo está dedicado a la demanda que con mayor fuerza se cristaliza en el sector educacional docente: la democratización del gremio de maestros. El régimen militar insiste en el reconocimiento del Colegio de Profesores como institución legítima pero es obligado también a dialogar con la oposición sobre temas que en verdad no solucionaron ningún problema. El asesinato del profesor Manuel Guerrero, secretario general de la Asociación Gremial de Educadores de Chile, en Marzo de 1985, puso las conversaciones en el punto cero.

Conscientes que las protestas y movilizaciones reprimidas de los maestros no iban a cambiar la conducta del gobierno respecto de los principales temas y reformas educacionales, los maestros deciden centrar su lucha en la democratización del Colegio de Profesores; ello en la esperanza que con la institucionalidad a su favor, sus demandas podrían tener mayor resonancia ante las autoridades y ante la opinión pública nacional e internacional las que muestran claros signos de animosidad contra el régimen del general Pinochet.

Pese a los esfuerzos del oficialismo por dilatar tal evento y ante la falta de argumentos, se establecen plazos para realizar las elecciones. Este hecho informado en detalle por la prensa se convirtió en el acontecimiento político de finales de 1985.

El claro triunfo de la oposición en estas elecciones abrió las compuertas para una movilización social que va adquirir grandes dimensiones. El régimen militar, a la sazón, preparaba las condiciones para poner en escena un nuevo plebiscito que debería cambiar su propia Constitución, de manera de permitir que el general Pinochet permaneciera en el gobierno hasta 1998. Pero la población chilena cualitativa y cuantitativamente más organizada que en 1980 y con menos temores, dijo en el plebiscito No a esa reforma. De esta manera la sofisticada propuesta de entrar a competir en el esquema constitucional de los militares para arrebatarse la hegemonía, desde dentro de su legalidad, resultó ser, al igual que en la elección del profesorado en 1985, el único camino viable que permitió la recuperación de la democracia en Chile. Difícil resulta poder desligar un aspecto del otro. De una u otra forma todos los componentes que se manifiestan en el quiebre del Compromiso Histórico están conectados entre sí. Creo que para poder entender mejor el quiebre en educación, es necesario conocer lo que ocurrió con las instituciones políticas más representativas del país. Al investigar sobre la uniformidad de ideas en las escuelas básicas, en los niveles superiores y en el gremio de docentes, es necesario conocer lo que ocurrió con la tradición de pluralidad que existía en todos los estratos educacionales en donde se expresaban, en un marco de respeto recíproco, ideas e ideologías diversas, las cuales eran el soporte principal de este compromiso sobre el cual trata el presente trabajo.

Parte V

Concluyo en mi trabajo con la afirmación de que los maestros organizados no solamente jugaron un rol importante como defensores de la tradición dialoguista en el país, sino que además lograron articular un movimiento opositor exitoso, capaz incluso de obligar al gobierno a deponer su intransigencia. En este contexto los maestros obligan al gobierno a llamar a elecciones libres en el Colegio de Profesores. Las bases del magisterio, pese a sus diferencias ideológicas del pasado, logran unirse obteniendo un triunfo categórico como oposición y lo más importante, le demuestran al país que el régimen autoritario en un universo electoral de más de 120.000 personas es claramente derrotable. Aventurado sería tal vez decir que, a partir de eso se abren las compuertas de una movilización social que acabará con el régimen militar 3 años más tarde; no obstante, dicho acontecimiento puede

ser valorado como hito importante que permitió posteriormente obligar al régimen a una negociación que tendría como consecuencia la cohabitación social sobre la base de dos consensos: la entrega del gobierno a los civiles y el respeto a la constitución de 1980.

El déficit en la investigación, lo veo en el hecho de que, si bien es cierto diversos autores como por ej. Iván Núñez, Ricardo Hevia, Rafael Echeverría, Tomas Cox, Jacqueline Gysling etc. se han ocupado del tema, pienso que, a la fecha de iniciar este trabajo en Alemania (1991) en su mayoría los estudios eran parciales y desconectados entre sí. Algunas investigaciones, siendo de gran valor, son a mi parecer, demasiado técnicas por cuanto se han ocupado específicamente de las reformas implementadas por el régimen militar sin atender demasiado a los trasfondos políticos-económicos o ideológicos que había detrás de ellas. Otras investigaciones han discurrido justamente en lo contrario y, a partir de un estudio crítico de las medidas educacionales impuestas, asumen un carácter de cuestionamiento político al gobierno militar.

Desde mi punto de vista la polémica educacional en el periodo del regimen militar estuvo entrampada por los factores propios de la falta de diálogo: los agentes del proceso educativo chileno llegaban a las negociaciones sabiendo de antemano que el interlocutor que tenían enfrente estaba deslegitimado. No quisiera referirme en esta parte a las relaciones entre el Colegio de Profesores cooptado y el gobierno porque dicho gremio, a mi juicio, no tenía independencia para discernir; existía porque así lo querían los gobernantes. La falta de diálogo a que me refiero se da principalmente entre el gobierno y los maestros agrupados primero en las orgánicas que recogían la tradición del sindicalismo docente, luego entre gobierno y AGECH y finalmente entre gobierno y Colegio de Profesores democratizado.

Lo novedoso de este planteamiento es que, a partir de la democratización del Colegio de Profesores, se abre un nuevo proceso que permitirá la recuperación de la democracia en Chile. Esta tesis ha sido considerada por el ex ministro de educación Enrique Froemmel como *exéntrica*. No obstante insisto en que, es a partir de la gran movilización de los profesores(1985), cuando la sociedad civil logra recuperar la confianza en su propia capacidad de actuar. Ayudan a ello la visita del Papa y la pérdida del consenso de Pinochet dentro de las Fuerzas Armadas. Estas empiezan a ver con excepticismo la prolongación del régimen más allá de los plazos fijados por la Constitución de 1980. Pinochet debe asumir su aislamiento y sin uniforme se enfrenta en la arena política a una oposición crecida que

lo derrota, primero a él y posteriormente a su sucesor un civil que representa y personifica al neoliberalismo Hernan Büchi. El ex ministro de Pinochet es para la derecha chilena la mejor carta del régimen, no así para los porfiados electores que dan un claro triunfo electoral al otrora gran opositor de S.Allende e igualmente opositor de A.Pinochet, Patricio Aylwin. Patricio Aylwin es elegido con los votos de los partidarios del régimen de la Unidad Popular y de la Democracia Cristiana. Tal vez una nueva muestra del espíritu consensual de los chilenos, pero esta vez no necesariamente sobre lo que se quiere, sino sobre lo que no se quiere.

La movilización social activada por el magisterio fue un factor de primer orden que contribuyó a cambiar cualitativamente la correlación de fuerzas sociales en el país y con ello su historia inmediata. En este contexto mi aporte al estudio del proceso chileno está en haber podido recoger, entre los actores del proceso, una gran variedad de opiniones que permiten configurar objetivamente las razones por las cuales el régimen militar quebró el Compromiso Histórico y cómo, su base de apoyo, la clase media, fue distanciándose y transformándose en uno de los ejes principales que ayudará a desestabilizar al régimen posibilitando su posterior salida.

Al momento de presentar mi exposé en la J.W.Goethe Universität de Frankfurt am Main (1991), no existía ni en Chile ni en el extranjero, según mis antecedentes, un trabajo de esta naturaleza. Los estudios realizados al respecto son parciales, algunos técnicos en exceso, otros imbuídos de claras evaluaciones políticas. Mi investigación se ocupa de los cambios educacionales y de los componenets políticos e ideológicos que se pretendieron imponer, así como las consecuencias que dichos cambios provocaron en el comportamiento de la clase media chilena.

Acerca del material informativo y las fuentes de información

El presente trabajo ha sido estructurado en base a entrevistas que he realizado en Chile con destacadas personalidades gremiales y educacionales del país. Todos ellos han jugado un papel importantísimo en las discusiones y conflictos educacionales producidos en Chile a partir de 1973. Las entrevistas en su mayoría fueron, con autorización de los entrevistados, grabadas por el autor de este trabajo y se encuentran a disposición de quien desee verificar las afirmaciones aquí expuestas.

Fuentes primarias

Dentro de éstas debo mencionar las entrevistas que sostuve con las personalidades mencionadas entre los que se cuentan:

Los dirigentes del Directorio del Colegio de Profesores democratizado (1991-92). La información por ellos entregada ha sido de inconmesurable valor para poder estructurar los capítulos de esta investigación y para reconstituir una parte de la historia de los profesores bajo el régimen militar. Varias entrevistas con la ex secretaria general del SUTE profesora Livia Videla de quien recibí detallada información sobre la gran polémica educacional de los años 1970-73. A ellas se suman los significativos aportes reflexivos e informativos entregados por el ex ministro del régimen militar señor Enrique Froemmel, así como de la consejera Nacional del Colegio de Profesores Sra. Verónica Monsalve. Todas estas opiniones son componentes valiosísimos que me han permitido configurar con el máximo de objetividad el presente trabajo.

Primärliteratur

- Decretos, Leyes y Directivas Presidenciales
- Boletines de gremios: Colegio de Profesores cooptado, Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH) y del Colegio de Profesores democratizado. La información relacionada con la Asociación Gremial de Educadores de Chile me fue proporcionada de manos de su primer presidente, profesor Jorge Pavez
- Discursos de autoridades, ponencias de instituciones, y declaraciones públicas de dirigentes gremiales relacionadas con temas y conflictos educacionales. Una de las mayores dificultades encontradas por el autor fue la falta de sistematización en el material existente tanto en los archivos públicos del Ministerio de Educación como del Colegio de Profesores. En el primer caso pude constatar que el autoritarismo no valoró el trabajo de archivo como tarea importante en educación. En el segundo caso puede entenderse por las dificultades que los maestros tuvieron para mantener sus gremios, protocolar sus reuniones y archivar información la que, en cualquier momento podía, en manos de los aparatos represivos, comprometer la seguridad física y laboral de quién(es) la poseyeran. Por su parte el Colegio de Profesores cooptado entregó al Colegio de Profesores democratizado solamente documentación dispersa en forma de periódicos, decretos, ponencias, resoluciones del Colegio y leyes del gobierno las que, en parte, he utilizado en mi investigación .

Fuentes secundarias

Trabajos con carácter de investigaciones parciales, monografías, antologías, artículos de prensa, compilaciones, ponencias, estadísticas y entrevistas cuyas referencias bibliográficas precisas figuran en el texto y en su mayoría se encuentra en Chile. Se agregan también trabajos en forma de artículos y monografías realizados por autores alemanes o bien chilenos radicados en Alemania.

De especial relevancia son los trabajos del profesor Iván Núñez Prieto quien a través de sus publicaciones en forma de monografías sobre el movimiento sindical de los maestros me ha proporcionado una información de incommensurable valor. Destaco de igual manera los estudios realizados por el equipo de investigadores del Proyecto Interdisciplinario de Investigaciones Educativas (PIIE) quienes, bajo la dirección de I. Núñez, entregaron a la opinión pública chilena (1984) un estudio crítico y documentado, en dos volúmenes, acerca de las principales reformas educacionales impuestas por el régimen militar y las implicaciones de ellas, tanto en la población usuaria como en el sector docente.

Otro trabajo importante usado por el autor fue la monografía de Pedro Castro acerca de la situación de la educación en Chile bajo los gobiernos de Eduardo Frei, Salvador Allende y Augusto Pinochet.

En esta obra, que fuera una de las primeras publicaciones sobre educación dadas a conocer en Chile y en el extranjero y a la cual muchos investigadores han recurrido, el autor hace una descripción cronológica comentada de los principales cambios educacionales implementados en estos 3 periodos. Al mismo tiempo se refiere de manera especial a la situación de magisterio y sus negociaciones con los diferentes gobiernos.

De Raúl Atria y Matías Tagle destaco sus investigaciones historiográficas sobre la formación del Estado en Chile publicadas en la revista de estudios sociales de la Corporación de Promoción Universitaria (CPU); muy especialmente destaco el capítulo referido al año 1925, cuando se aprueba la Constitución de consenso de la cual se origina, según mi tesis, el Compromiso Histórico en la sociedad chilena.

Otros trabajos de gran ayuda en mi investigación fueron las investigaciones y documentos monográficos de Cristián Cox y Jacqueline Gaysilin, especialmente destaco su trabajo sobre la *historia de la formación del profesorado en Chile 1842-1987*. De igual forma no puedo dejar de destacar la obra de Paulo Freire, *Pedagogía de los Oprimidos* y los trabajos de Mario Manacorde sobre el principio educativo en Gramsci. En esta misma línea señalo

la documentación sobre Gramsci en América Latina, (congreso realizado en Brasil en 1988) y la obra de Mariátegui misma. Toda esta documentación me han puesto sobre la pista para descubrir el significado real del pensamiento gramsciano en las sociedades latinoamericanas.

La documentación en forma de decretos y leyes fueron puestas a disposición por el archivo del Colegio de Abogados de Chile. El Ministerio de Educación, en lo formal apoyó la presente investigación, pero debo decir que una buena parte de su material de archivo se encontraba a la fecha (1991-92) disperso y por lo tanto era de difícil acceso. Algo similar ocurrió en el archivo del Colegio de Profesores el cual, por falta de recursos, no contaba con personal suficiente para mantenerlo. El responsable del archivo manifestó al autor de este trabajo que una gran parte de la documentación del Colegio o había desaparecido o bien nunca había existido la preocupación de la antigua directiva por mantener un acopio fluido y actualizado de la información.

Las fuentes informativas donde es posible encontrar gran parte de la información mencionada se encuentran en:

- Archivo del Colegio de Profesores de Chile y de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH). Posteriormente AGECH se integró al Colegio de Profesores de manera que su documentación es posible encontrarla en esta última institución.
- Archivo del Museo Pedagógico de Santiago (sección prensa)
- Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional (Parlamento) en Santiago
- Biblioteca Nacional de Santiago
- Biblioteca del Centro de Investigación y desarrollo Educacional (CIDE), institución privada que se financia con recursos de la Iglesia Católica chilena
- Biblioteca del Proyecto Interdisciplinario de Investigaciones Educativas (PIIE) institución privada que se financia con la venta de sus investigaciones y con recursos en forma de donaciones de la Fundación Ford
- Biblioteca del Arzobispado de Santiago, dependiente de la Iglesia Católica chilena
- Biblioteca de la Corporación de Promoción Universitaria CPU, institución de carácter privada vinculada al mundo universitario y que se financia con recursos de la Fundación Konrad Adenauer
- Biblioteca de la Universidad de Chile

- Biblioteca del Colegio de Abogados de Chile, Sección Archivo y Leyes Educativas
- Biblioteca del Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas dependiente del Ministerio de Educación Pública
- Biblioteca de la Universidad J.W.Goethe de Frankfurt
- Biblioteca Iberoamericana de Berlin

Parte I

1 Descripción del Compromiso Histórico en Chile en el marco de la Constitución de 1925 y actores sociales que participan

En esta primera parte del trabajo presentaré el concepto aclaratorio básico de Compromiso Histórico que se origina en la sociedad chilena cuando se establece la Constitución de 1925. En esta Constitución quedan representados los intereses de los tres sectores sociales más importantes del país: la burguesía agraria-industrial, la clase media y el proletariado organizado. Rol importante en la redacción y discusión de esta Constitución lo juega la Asociación General de Profesores (1923) la que, hacia el periodo, es la primera expresión sindical de los maestros en Chile. Este gremio por su significativo trabajo educacional y cultural en la sociedad y su compromiso en el proceso previo a la dictación de la nueva Constitución, se va a convertir en uno de los inspiradores del Compromiso Histórico; no obstante quedará entrampado por las promesas de reforma educacional hechas por el presidente Carlos Ibáñez (1928) quien buscó legitimarse a través de los maestros para después reprimirles y prohibir sus organizaciones.

Junto con definir las peculiaridades más importantes del Compromiso Histórico en Chile, incorporo, como antecedente teórico, algunas conceptualizaciones hechas al respecto por el autor italiano Antonio Gramsci quien, en el periodo de entreguerras, en Europa, se refiere a la necesidad de que las organizaciones de la sociedad civil, sean éstas sindicatos, organizaciones culturales o partidos políticos, se incorporen a la institucionalidad que otorga el Estado y participen en él para, desde dentro, ir provocando las transformaciones democráticas que la sociedad requiere. Esta tesis que resultó ser muy criticada en su tiempo, después de la segunda guerra mundial y cuando el movimiento socialista mundial se encontraba a las puertas de su colapso como sistema alternativo al capitalismo moderno, adquirió significativa vigencia en algunos países de América y Europa .

En un contexto de exteriorización de posiciones, doy a conocer resumidamente algunos puntos de vista que los gremios de maestros tuvieron respecto de la educación, del carácter del Estado y del Compromiso Histórico. Finalizo la presente parte con una descripción del intento de reforma educacional propuesta por la Unidad Popular (1970-73), la posición del gremio de maestros de aquella época (SUTE) y un breve estudio acerca de la polémica que desató en la población este intento de reforma.

El compromiso de 1925 y sus actores relevantes

La clase dominante hacia los años 20 en Chile está formada por un sector agrario latifundista que había controlado durante gran parte del siglo XIX el gobierno casi sin contrapeso y una fracción que denominaremos burguesía industrial-minera la cual estuvo vinculada a la actividad comercial y bancaria. Ambas fracciones hacia el cambio de siglo, uno de tipo conservador y otro liberal van a rivalizar en el afán de hegemonizar la conducción política del país. Desde el punto de vista ideológico les separa la adscripción de unos, los conservadores, al catolicismo ortodoxo heredado del imperio español y otros, los liberales, reticentes al catolicismo, se inscriben mas bien en las corrientes masónicas y agnósticas de la época.

Desde el punto de vista político les divide la concepción de gobierno. Mientras para los liberales el presidente de la república debía mantener en un estado democrático prerrogativas especiales, propias de su alta investidura y de la confianza ciudadana expresada en elecciones definidas en aquel periodo como libres, los conservadores optan por una subordinación del ejecutivo a las decisiones del Parlamento. Se agregaba además el discutido tema de la interrelación Iglesia- Estado. Para los liberales debía existir una clara separación de poderes y funciones; para el clero y los conservadores, Estado e Iglesia debían complementarse recíprocamente en sus funciones. En lo económico los conservadores privilegiaban la forma de producción basada en la gran Hacienda con todas las formas tradicionales de inquilinaje mientras que el liberalismo optaba por las formas de producción industrializadas puestas en práctica en Europa y Norteamérica .

La clase media conformada por empleados públicos, intelectuales, maestros de escuelas, artesanos, profesionales, así como pequeños y medianos comerciantes, irrumpen a comienzos del presente siglo como actores sociales de relevancia. Este estamento adquiere protagonismo en la administración del Estado y en la organización del sistema nacional de enseñanza. Su influencia en los asuntos políticos de la nación está en parte potenciada por los conflictos originados en las fracciones conservadoras y liberales y por el fortalecimiento de un Estado centralizado que actúa como instancia administradora y reguladora de los intereses de la nación.

El movimiento obrero bifurcado en varias vertientes: minero, industrial y de servicios, constituye el tercer eslabón social que participa en la configuración del Compromiso

Histórico. Los primeros rasgos organizados de este sector aparecen como resultado de la temprana industrialización en el norte del país. En esa región se encuentran los grandes yacimientos y en consecuencia una gran concentración de obreros asalariados. El perfil ideológico del movimiento obrero chileno se nutre de diversas tendencias siendo significativas de mencionar el anarcosindicalismo español, los principios programáticos de las revoluciones rusa y mexicana, las corrientes ideológicas de los partidos marxistas ya en un proceso de expansión; e incluso un temprano movimiento sindical social-cristiano desde donde surgirá Clotario Blest quien llegará a ser el fundador de la Central Unica de Trabajadores de Chile y líder sindical histórico indiscutido de los obreros.

En la Constitución de 1925 subyacen intereses económicos y políticos diferentes los cuales debieron ser transados por las diferentes partes que la suscriben. Ello va a permitir en los próximos 50 años una estabilidad política que en Chile sirvió para integrar a nuevos actores sociales al proceso democrático que se gestaba. En este contexto la nueva Constitución posibilitó condiciones favorables para el desarrollo productivo del país, acentuó el carácter pluralista de la sociedad chilena, especialmente en el ámbito de la educación y de la confrontación política; y delimitó claramente los poderes del Parlamento y del Ejecutivo, quedando este último con significativas atribuciones que permiten afirmar que Chile tuvo, durante el periodo mencionado, un régimen presidencialista.¹

Las Fuerzas Armadas en la nueva Constitución de 1925 quedaban subordinadas a las decisiones del poder político, siendo el presidente de la República su jefe supremo; en la Constitución de 1980 en cambio, (como veremos más adelante) se reducen considerablemente los poderes del presidente de la República sobre las Fuerzas Armadas las cuales participan en comisiones especiales para bloquear las atribuciones tanto del Parlamento como del Ejecutivo y defender lo que ellos llaman eufemísticamente el *Estado protegido*. Además mantienen atribuciones especiales sobre los altos mandos como por ej. sus relevaciones, hecho que no sucede en ninguna otra democracia del mundo. Como si fuera poco se designa al jefe del Estado de aquella época (1980) general Augusto Pinochet jefe del ejército chileno hasta que el mismo decida renunciar, hecho que al cumplir 80 años, y después de 15 años de dictada la Constitución, todavía no ocurría. Pero volviendo a

¹ Al respecto debo agregar que la Constitución que le antecede definía el sistema político chileno como *parlamentarista* y en un sórdida lucha por el poder se habían enfrentado en una guerra civil *presidencialistas* y *parlamentaristas*. Los primeros representados por la tendencia liberal de finales del siglo XIX, liderizada por José

la Constitución de 1925 debo precisar que los cuerpos parlamentarios representados por la Cámara de Senadores y Diputados se renovaban cada 8 y 4 años respectivamente y el presidente era elegido cada 6 sin posibilidad de una reelección inmediata. También en esta Constitución, aun cuando las mujeres todavía no se integran al proceso electoral, se establece el derecho a voto obligatorio. Al mismo tiempo se confirma la decisión de entregar enseñanza primaria obligatoria y gratuita a toda la población en edad escolar, aspecto este último que la diferencia claramente del espíritu de la Constitución de 1980.

El Estado pasa a ser la institución encargada de fomentar el desarrollo del país; la educación es entendida como un derecho de los ciudadanos y el Estado asume la responsabilidad de su organización y financiamiento. El respeto a la propiedad y a la educación privada así como al trabajo, quedan también en la Constitución de 1925 debidamente garantizados.

En la promulgación de esta Constitución, el gremio de maestros de la época, Asociación General de Profesores (AGP), juega un rol preponderante por cuanto promueve la discusión, redacta proposiciones e incluso dirige varias comisiones del debate final en el cual debían concretizarse todas las propuestas que se incluirían en el plebiscito nacional.

El periodo en que entra en vigencia esta Constitución, está caracterizado como de gran agitación política y social. Hay inquietud en círculos militares, el presidente Arturo Alessandri es depuesto de su cargo, la derecha política se muestra desconfiada ante los nuevos actores sociales emergentes, y tanto el centro como la izquierda con sus gremios y fracciones políticas existentes apoyan una Constitución que aunque para algunos no era el modelo ideal (entre otras cosas por discriminar a la mujer al privarle su derecho a elegir) por lo menos acababa con ancestrales odiosidades entre una minoría que detentaba el poder económico y una mayoría de la población inquieta y empobrecida.

Algunas ponencias aprobadas en la Constitución de 1925 se dejan resumir en los siguientes puntos:

El Estado es la institución que debe fomentar el desarrollo socioeconómico del país.
La educación debe ser entendida como un derecho de los ciudadanos y el Estado debe velar porque este derecho se cumpla.

Manuel Balmaceda, presidente de Chile; y los segundos por la fracción conservadora. El conflicto se dirime a favor de estos últimos pero en 1925 será la fracción Liberal la que definirá el perfil de la nueva Constitución.

Todas las personas son iguales ante la ley. Ningún ciudadano puede ser perseguido por su ideas políticas religiosas o de cualquier índole

Se consagra la libertad de asociación y de credo y el Estado se separa de la iglesia

- El Estado debe garantizar el respeto de la propiedad privada así como la libertad de trabajo. También queda garantizada la libertad de empresa y el establecimiento de sociedades anónimas.²

En esta Constitución ya se vislumbran ciertos componentes relevantes de lo que será la convivencia futura del país. Varias de las propuestas de los trabajadores asalariados y de los maestros fueron aprobadas e integradas como capítulos o fragmentos de esta Constitución que estuvo vigente hasta 1973. Otras iniciativas no tuvieron el consenso necesario y no fueron consideradas en el documento final que se plebiscitó.

Digamos para resumir que, en el contenido de esta Constitución, así como en su gestación, se perfila un tipo de sociedad en la cual se concilian intereses económicos y formas diversas de pensamientos los que se canalizan a través de libertades de asociación, culto, educación, trabajo, etc. En este marco el Estado chileno asumía funciones que aseguraban una relativa igualdad ante la justicia además que garantizaba el respeto a los derechos públicos, sociales y privados.

Algunos investigadores como el ex ministro de educación del régimen militar Gonzalo Vial han definido esta Constitución y este Estado como el recurso que permitió establecer en Chile la cultura de compromisos que hizo posible que el país, no se desbordara hacia fórmulas rupturistas y de revolución social, estableciendo estilos de gobierno mesocráticos que, como puede verse en las realidades de otros países latinoamericanos, era difícil encontrar.

Importante es también acotar que en el periodo en que se mantuvo en vigencia este compromiso se expresaron tentaciones putchistas en círculos militares y se usó en ocasiones la fuerza de los gobernantes para acallar conflictos sociales en la población civil. Igualmente se manifestó la tentación de grupos maximalistas de izquierda por levantar propuestas revolucionarias rupturistas. Sin embargo estas desviaciones no constituyeron lo cotidiano en la vida política del país y mas bien pueden ser consideradas dentro de la historia como las excepciones que confirmaban la regla pero que no deben ser ser ignoradas.

1.1 El sindicalismo docente en el magisterio: La Asociación General de Profesores (AGP)

Los antecedentes del movimiento gremial de los profesores de finales del siglo XIX y comienzos del actual están circunscritos a una serie de asociaciones de carácter mutual-cooperacional. Estas organizaciones se formaron en virtud a una expansión educativa en la cual tanto el Estado como la iglesia jugaron roles preponderantes en la estructuración y conducción del proceso educativo.

Pese a los contradictorios intereses profesionales y económicos entre los docentes y las instituciones nombradas, los maestros no logran romper el círculo de un espíritu colaboracionista existente en el profesorado el cual buscó siempre la negociación con las autoridades tratando de evitar cualquier forma de enfrentamiento. Sin embargo esta forma de conciliación iba a tener también un límite. En el año 1923 se funda la Asociación General de Profesores (en adelante AGP) que es la primera organización amplia, de signo reivindicativo sindical. Originariamente formada por maestros primarios supo incorporar a la acción gremial a vastos sectores de la docencia, sin exclusiones políticas, generacionales, profesionales o ideológicas.

Antecedentes a este hecho importantes movilizaciones de protestas de los docentes originadas especialmente por el atraso en el pago de sus salarios (1922). Gran responsabilidad se le asigna a la falta de voluntad política del presidente de la república de aquél entonces don Arturo Alessandri, para enfrentar los asuntos económicos del magisterio y a la lentitud de los parlamentarios en sus funciones legislativas.

Los maestros, agitando un encendido discurso anti-partidos en el cual podrían rastrearse rasgos corporativistas del gremialismo docente, exigen que sus asociados renuncien a cualquier forma de participación en ellos. No obstante creo que, la negación a participar en partidos es también una forma de protesta por la larga tramitación a que eran objeto los maestros en la cancelación de sus salarios y a la lenta aplicabilidad de la ley de enseñanza primaria obligatoria que había sido aprobada en 1920 pero que no se ponía efectivamente en práctica.

Cuatro características principales se observan en la dinámica del magisterio las que, a juicio de algunos autores (Gómez Catalán, Núñez) posibilitan la aparición de la AGP:

2 Ver Constitución política del Estado chileno, 1925

- La excesiva politización oficial de los grupos de maestros activos en las asociaciones de maestros hasta la fecha existentes.
- La incapacidad de las asociaciones para representar los intereses de sus socios con independencia y voluntad.
- El tipo de legislación laboral que ponía fuera de la ley a cualquier agrupación de maestros por ser éstos empleados públicos.
- La crisis económica en los hogares de maestros quienes, además de soportar a veces varios meses sin salario, temían ser despedidos por violación del Estatuto administrativo en caso de apoyar algún movimiento gremial.

Pese a estas dificultades los maestros apuestan a su única posibilidad de éxito: buscar alianzas con otras agrupaciones de trabajadores descontentos, de manera de constituir un amplio frente representativo que fuese capaz de concitar el interés nacional y sensibilizar la capacidad de entendimiento del presidente y de las autoridades parlamentarias.³

En efecto, los docentes encuentran gran receptibilidad pero no en las comisiones parlamentarias sino en la opinión pública, y en una extensa gama de asociaciones y gremios de empleados y de obreros. Incluso estamentos sujetos al ámbito militar y policías en retiro adhieren a las reclamaciones del profesorado.⁴

En Diciembre de 1922 se reúnen en Santiago, en una Convención, delegaciones de maestros provenientes de casi todo el país. Objetivo de este encuentro es analizar la situación socioeconómica y profesional de los educadores. De esta convención surge la AGP, cuyo primer presidente será el profesor Víctor Troncoso, antiguo miembro de la Federación de Profesores de Instrucción Primaria.

El programa que logra movilizar a los afiliados de la AGP se deja resumir en los siguientes puntos:

- Salarios aceptables y pagados con regularidad
- Reforma a la caja nacional de empleados
- Abolición de las medidas coercitivas del Estatuto administrativo
- Fiel cumplimiento de la ley de enseñanza primaria obligatoria⁵

3 Iván Núñez, *El Magisterio chileno, sus primeras organizaciones gremiales*, Edit. PIIE, Santiago, 1982, pag. 40

4 Iván Núñez, *Ob. cit.* pag. 40

5 Iván Núñez, *Ob. cit.* pag. 40

La AGP crea un espacio diferente en la sociedad chilena, incentiva el estudio de concepciones pedagógicas nuevas, promueve casas del maestro donde se estimula la creación artística y literaria; propone la lectura de pensadores sociales connotados y asume la tarea de defensa y representación de los intereses económicos y profesionales de los docentes:

„Lo más granado del pensamiento chileno no conservador, tiene tribuna en la Asociación: sacerdotes, positivistas, masones, liberales, comunistas, anarcolibertarios(...) y pedagogos de todas las corrientes exponen libremente en los hogares de la Asociación.⁶

La AGP no demuestra mayor interés por las expresiones del mutualismo pasivo y corporativista. Propone, como valores superiores de organización, la solidaridad y la comunicación. En ambos elementos ve los mecanismos que pueden hacer posible el entendimiento entre las personas y las asociaciones que en el campo de la educación actúan. Sin lugar a dudas, la AGP es la primera muestra de sindicalismo docente, aun cuando, para los efectos oficiales no tenía otro reconocimiento que el de una simple asociación gremial.⁷

La aparición de la AGP en la sociedad chilena coincide con un crecimiento del descontento popular. El salitre ya no es comercializado a los precios de comienzos de siglo y su demanda experimenta un enorme descenso en los mercados internacionales. A ello se agregaba una serie de despidos en los yacimientos del norte del país. Las arcas fiscales veían reducir sus ingresos lo que naturalmente repercutía en la estabilidad de la balanza de pagos y como consecuencia la tensión social crecía.

En este contexto los grupos sociales pertenecientes a la clase media emergen en el ámbito político tratando de liderizar el descontento de la población e intentando arrebatarse espacios de poder que habían sido patrimonio exclusivo de las elites dominantes.

Es en este periodo cuando empieza a adquirir fisonomía el compromiso social entre los estamentos de la clase media y los trabajadores pertenecientes al ámbito industrial-minero. Ambos sectores hasta la fecha discriminados social y económicamente pasarán a jugar un rol activo en la generación de autoridades políticas e incluso, a través de sus partidos representativos, asumirán en las próximas décadas funciones gubernamentales que le

⁶ Iván Núñez, Ob. cit. pag. 59

⁷ Según disposiciones establecidas en la Constitución así como en el reglamento administrativo, los maestros en su condición de empleados públicos no podían organizarse en gremios con carácter reivindicativo.

imprimirán al proceso político chileno, de cara a la realidad de otros países latinoamericanos, una peculiaridad especial.

Los grupos de la clase media como los empleados públicos y privados ya no se identifican como típicos funcionarios subalternos en la estructura del aparato estatal o en empresas vinculadas al comercio de exportación e importación. Tampoco los maestros de escuelas son los dóciles funcionarios que cumplen pasivamente una labor educativa que lleva consigo la reproducción del sistema social vigente. A la sazón estos sectores de la clase media tienen una identificación política. Han creado sus intelectuales orgánicos (Gramsci), poseen influencia en el sistema educacional, en la prensa y además se relacionan con estratos de la burguesía liberal a través de instancias culturales e ideológicas como por ejemplo la Francmasonería.⁸

Esta particularidad le permite a la clase media chilena convertirse en intermediaria entre los grupos sociales con intereses económicos antagónicos, quienes, producto también de la crisis estructural por la cual atraviesa el país, desean buscar puntos de convergencia para defender sus respectivos intereses.

De esta forma, y por medio de negociaciones gremiales y políticas los estamentos de la clase media logran hacer confluir en un incipiente compromiso social a diferentes fracciones laborales, intelectuales, profesionales y empresariales del país. Por cierto se trata de un compromiso social que requerirá de desarrollo y de confianza recíproca.

El Partido Radical, nacido en el siglo pasado entre las familias vinculadas a la industria minera, con planteamientos liberales y de inspiración laica, busca dar conducción política a la clase media que se muestra renovadora y crítica con el ordenamiento social establecido en aquel periodo.

Este mismo partido, que se había enfrentado a los grupos conservadores y eclesiásticos de la sociedad, aspira a una modernización del país a través de un proyecto político integracionista que no excluya a ningún estamento social.

Su planteamiento educacional reviste gran interés, por cuanto es la primera organización política que propone, no sólo *medidas* sino *cambios profundos* en el sistema nacional de

8 Esta organización ya se había hecho presente en Chile en el periodo de la lucha independentista. Tuvo como destacados miembros a algunos de los héroes nacionales, entre los que se cuentan Bernardo O'Higgins considerado en Chile como el Padre de la Patria y los hermanos Carrera de similar estatura histórica que el primero. A ello se agrega el significativo hecho que en el presente siglo, a lo menos 6 presidentes de la República, han pertenecido a la Francmasonería. Ver Revista Análisis, Documento especial, 8 -14 -Agosto-1988, Santiago, pp. 40, 41, 42

enseñanza. Tanto la ley de enseñanza primaria obligatoria como el fortalecimiento del Estado Docente son exigencias del radicalismo chileno.

El Partido Radical compromete su imagen pública defendiendo la ampliación y gratuidad del sistema educacional y reivindica el derecho ciudadano a este servicio. Igualmente exigen la profesionalización de los maestros así como el mejoramiento cualitativo de la educación.

En el marco de esta política los radicales dirigen especial atención hacia los gremios de maestros donde logran, después de vanos intentos en las asociaciones gremiales de carácter mutualista de comienzos de siglo, formar núcleos de docentes que actuarán como portavoces del ideario radical en las organizaciones sindicales de los años posteriores. Esta labor le reporta al Partido Radical una notable influencia no sólo en los estratos de la clase media sino incluso en franjas de la población obrera.⁹

La burguesía industrial expresa en el periodo un visible interés por participar de un proyecto nacional desarrollista. Esto, a mi juicio, porque ve en esta alternativa económica, casi su única posibilidad de sobrevivencia como estamento social con pretensión hegemónica.¹⁰

A saber, la otrora floreciente industria del salitre se encuentra en situación desmejorada. No existen en el país condiciones para el desarrollo de una industria sustitutiva. Una homogeneidad de intereses económicos y aspiraciones políticas con los segmentos del agro tampoco existe.

En una coyuntura económica de estancamiento y retroceso de los grupos dominantes empieza a articularse en la sociedad chilena, especialmente en la clase media, un amplio movimiento que suscribe un programa de libertades públicas, aspira a un crecimiento económico, a un sistema educacional menos elitista y a una mayor participación de la población en las decisiones nacionales.

Para los trabajadores afiliados al movimiento obrero este proyecto, sin ser el suyo, le resultaba atractivo ya que le abría espacios de participación hasta la fecha vedados. En este

9 Un elemento importante de considerar es que una gran cantidad de maestros, en todos los niveles de la estructura educacional, adhieren a este partido lo que sin duda le da una presencia nacional que potenciará su aspiración de convertirse en partido gobernante.

10 En efecto la crisis económica mundial 1929 y la pérdida, casi total, de los mercados del salitre, dejan al empresariado chileno en desmejoradas condiciones para imponer proyectos. La política estatista de apoyo a la industria privada sin duda les favorece, no obstante deben pagar un precio: compartir el poder.

marco se fortalecen los gremios de obreros y se crean partidos políticos de signo socialista, incluso con representaciones parlamentarias.

Para la clase media, la implementación de un proyecto no rupturista, dialogante y que plantea transformaciones es un triunfo en sus aspiraciones de hegemonizar un periodo histórico de entendimiento social. Este proceso está basado en la armonización de intereses grupales entre los que sobresalen: respeto a la propiedad privada, promulgación de leyes de beneficio social, libertad de pensamiento y de asociación, y uno de los factores más importantes, la posibilidad de acceder al gobierno o parlamento a través de un sistema eleccionario no discriminatorio.

Desde el punto de vista político se expresa la confirmación de la clase media como estamento unificador entre los estratos sociales antagónicos de la sociedad lo que consecuentemente dará origen a una particular forma de cultura de clase media. Esta cultura tiene sus manifestaciones públicas en la identificación que diversos estratos sociales del país, tanto de sectores populares como de empresarios sienten con este sector y en el reiterado discurso de los políticos alabando el aporte y esfuerzo de dichos grupos al desarrollo del país.

Algunos de los valores transmitidos por esta clase media se dejan ver en la declaración de principios de la AGP emanada de la Convención de 1923 en la cual prescinde de toda cuestión de carácter religioso y de política partidaria:

„El fin de la institución es alcanzar la felicidad individual y colectiva de sus asociados, procurando mantener siempre la dignidad y los derechos humanos. Para el logro de este fin trabajará por obtener la satisfacción de todas las necesidades y aspiraciones de sus asociados y de la colectividad por medio de la evolución y la reforma.(...)para elevar y defender la dignidad del magisterio, proteger moral y socialmente a sus asociados y propender al mejoramiento social, profesional y económico del profesorado“.¹¹

La amplia alianza que se gesta en la AGP permite la participación en ella de maestros provenientes de todas las esferas educativas del país. Ello posibilita a que el Gremio se convierta en polo de atracción que adquiere notable relevancia en casi todas las instituciones educacionales existentes.

Muchos de los antiguos integrantes de las primeras asociaciones mutuales se incorporan también a la AGP porque, según ellos, les da garantías de amplitud y pluralismo.

11 Declaración de principios de la AGP en 1923, cit. por Iván Núñez en El Magisterio chileno,..Ob. cit. pag. 43

En la dirección del Gremio predominó, pese al apoliticismo manifestado, la ideología del Partido Radical la cual, si bien es cierto se mantuvo cautelosa en cuanto a la manera cómo desarrollar su política de alianzas, no pudo mantenerse impermeable a las confrontaciones e igualmente se vio envuelta en conflictos con otros grupos políticos presentes en el Gremio.

De cualquier forma, y pese a las desaveniencias de los docentes en las actividades gremiales, es en este periodo cuando se va configurando el Compromiso Histórico el cual recogerá los intereses educacionales de las tres capas sociales más importantes de la sociedad chilena: la burguesía agraria-industrial, la clase media con activa presencia en la administración del Estado y en la estructura educacional, y la clase trabajadora organizada en una federación obrera¹² que en aquel periodo contaba ya con casi medio siglo de experiencias en su lucha por conseguir mejores condiciones de vida.¹³

Hubo también dentro de la sociedad otros actores sociales los cuales no estuvieron dispuestos a buscar formas de entendimiento ni tampoco apoyaron el diálogo; mas bien optaron por permanecer al margen de todo acuerdo. Entre ellos mencionaría a la franja aristocrática proveniente de la oligarquía agraria con un poder político disminuido pero con gran influencia económica. En el otro extremo se visualizan fracciones de obreros e intelectuales de orientación anarco-socialistas los cuales se mostraron muy escépticos hacia cualquier forma de entendimiento con las capas dominantes. El espíritu de ambos extremos aunque no se impuso en el posterior esquema institucional del país, estuvo siempre presente en la tentación maximalista de los sectores que subscribían este compromiso.

Debo decir que al inicio de la década de los años 20 Chile se encuentra en un estado de franca inestabilidad y efervescencia social¹⁴. Los cambios que se preveían, provocaban inquietud la cual se percibía en las instituciones estatales, partidos políticos y por cierto en el ámbitos financiero.

12 Federación Obrera de Chile-FOCH. Aquí harán escuela los líderes del sindicalismo histórico del Partido Comunista chileno.

13 Las primeras manifestaciones del movimiento obrero organizado aparecen por primera vez en Santiago y Valparaíso hacia 1860. Dentro de los primeros gremios se cuentan los obreros portuarios y de imprenta, sastres, panificadores y zapateros. Dos décadas más tarde se fundan en la región norte del país, bajo el nombre de *mancomunales salitreras* las primeras organizaciones de trabajadores mineros. Podría decirse que estas organizaciones son un equivalente, en cuanto a sus objetivos de las *mutuales* del Magisterio

14 Razones de ello son la crisis del salitre, el agotamiento del sistema parlamentario, la alta cesantía en el norte y la ausencia de proyectos políticos viables para gobernar al país.

El movimiento estudiantil universitario, fundado en 1906, levanta un programa de reformas socioeducacionales y se une a las organizaciones obreras para dar mayor fuerza a las peticiones. Los gremios de la clase media y sus representaciones políticas realizan denodados esfuerzos para lograr establecer un arco de unidad que abriera las puertas a un régimen no solamente pluralista sino también pluriclasista. Este régimen debía ofrecer seguridad y desarrollo a todos los chilenos y al mismo tiempo ser garante de un Estado de Derecho en el cual la libertad individual y colectiva, así como la justicia social, fueran pilares fundamentales en la convivencia nacional. Resultado de este esfuerzo es la formación de una alianza liberal que lleva a las elecciones presidenciales de 1920 como candidato a Arturo Alessandri Palma, político populista, representante de los sectores medios, hijo de una familia de emigrantes italianos quien logró incluso concitar gran simpatía entre los mineros del norte del país, región de la cual provenía.

Alessandri Palma, hombre crítico a las estructura plutocráticas de la nación enfrenta al candidato conservador Luis Barros Borgoño a quien vence por estrecho margen de sufragios. Para la Alianza liberal, Alessandri representaba el símbolo de las aspiraciones de la clase media y de ciertos sectores populares. Incluso muchos obreros, dice Clotario Blest, fundador de la CUT, estaban fascinados por Alessandri quien dialogaba con todo el mundo.

Alessandri, dice Blest:

„(...) representaba a los estratos de la clase media y su discurso era encendido popular y directo“¹⁵

Su función histórica sería arrebatarle poder a una oligarquía debilitada y en retroceso, incapaz de poner al país en movimiento. El proyecto de Alessandri se ve posible de materializar sobre la base de la creación de un Estado protector que pueda cumplir no sólo la función de mediador entre los estamentos sociales en conflicto, sino que también pueda darle un impulso a la economía estatal y privada; esto último por medio del otorgamiento de créditos y franquicias a empresarios chilenos interesados en invertir y crear fuentes de trabajo en el país.

Para la franja conservadora Alessandri representaba:

„(...) la ruptura de la tradición republicana, por sus reivindicaciones maximalistas y de semblanza rusa.“¹⁶

15 Ver: Mónica Echeverría, Antihistoria de un luchador: Clotario Blest, biografía, Santiago, 1993, pag. 120

El gobierno de Alessandri se iniciaba en una atmósfera de claras discrepancias debido a que el Parlamento continuó en manos de una coalición conservadora, dispuesta a entabrar cualquier tipo de reforma que pudiera revertir el carácter de una institucionalidad que por cierto le era favorable. Esto se tradujo en la práctica, en que el gobierno no pudo cumplir con su programa lo que derivará, después de corto tiempo, en incredulidad de parte de muchos adherentes del régimen, reduciendo finalmente la base social de apoyo de la Alianza Liberal.

En este marco se inserta también un periodo de agitación social que llevó a miles de personas a protestas callejeras las cuales fueron reprimidas violentamente por los cuerpos policiales del Estado. Dice Clotario Blest que Alessandri estaba preso por su indecisión y sus contradicciones:

„Alessandri en esa época cumplió, enviando una cantidad de proyectos de leyes sociales que el Congreso archivó y seguían archivados hasta el año 1924. Alessandri propició esas leyes pero más adelante propició muchas masacres de trabajadores. Allí lo tienen retratado de cuerpo entero“.¹⁷

Efectivamente la fracción opositora tramitó con intencionada lentitud las leyes y proyectos destinados a solucionar acuciantes problemas de la población. Esta situación adquiere una dimensión mayor cuando incluso los institutos armados se ven afectados por el no pago de sus salarios y la demora excesiva en el trámite de leyes que les favorecían. Frente a este hecho, la oficialidad joven decide expresar públicamente su malestar asistiendo al Congreso (sede del Parlamento) para protestar con sus sables a través de una acción ruidosa en el salón de reuniones plenarias. Este hecho, original y único, fue la premonición de un golpe militar.

La crisis del salitre por efecto del cierre de varios de los yacimientos viene a complicar más la vida del país. El presupuesto fiscal se ve disminuido y la cesantía aumenta con celeridad. El presidente Alessandri, incapaz de resolver las demandas que se fueron acumulando, e incapaz también de enfrentarse con los estamentos conservadores del Parlamento y de la economía, va perdiendo popularidad y apoyo en la población; en las puertas del fracaso (1924) entrega el poder a los militares y emigra a la Argentina.

16 Mariana Aylwin, Carlos Bascuñán, Chile en el siglo XX, , s/f, pag. 110

17 Mónica Echeverría, Ob. cit. pag. 121

Pese al revés de este experimento populista, en el país se manifiesta un anhelo por buscar fórmulas globales de solución a la crisis. Así se entiende que las organizaciones sociales y los partidos busquen nuevamente recomponer el diálogo en el país.

En este periodo la AGP consigue su reconocimiento legal como asociación lo que le permite recibir ingresos, comprar bienes y mantener una infraestructura que facilite su labor. Pese a que esta legalización no la autorizaba para asumir funciones gremiales, en el hecho se vislumbra una disponibilidad la cual debe ser interpretada como gesto de *tolerancia* de parte del Estado para con los intereses profesionales y económicos del profesorado. Esta tolerancia (en forma de legalización) va a tener sus vaivenes según las relaciones que los docentes vayan teniendo con los diferentes gobiernos.

La primera confrontación significativa la tuvo la AGP con el gobierno de Alessandri a raíz del no pago de sus salarios y de una discutida clasificación que se había hecho con los maestros en la escala de empleados públicos. Publicitadas ampliamente las quejas por la AGP, se llega a una situación de enfrentamiento con el presidente de la república quien ya había ordenado medidas represivas contra los responsables de las protestas. La respuesta masiva de la opinión pública y de un crecido número de gremios a esta actitud definida como prepotente del gobierno, obligó al presidente a dialogar, cambiar el tono del lenguaje y ceder ante las peticiones.¹⁸

La AGP se perfila como una organización con un gran compromiso en la educación y en la defensa de los intereses de los maestros. Igualmente se define como gremio pluralista, con vocación democrática y sensible a los problemas sociales de la población. La AGP representa el más y considerable movimiento de toda América Latina había dicho el teórico peruano José Carlos Mariátegui mientras que Gabriela Mistral, poetisa y posterior premio Nobel de literatura afirmaba que:

„ La AGP era la única agrupación que sentía viva en Chile“. ¹⁹

Sobre la influencia social e ideológica de la AGP en el contexto de la problemática nacional me parece útil hacer algunas reflexiones que puedan ayudar a entender con mayor claridad el fenómeno central del presente estudio.

18 Estas peticiones se referían al cambio de clasificación de los maestros en la escala pública, el pago de sueldos atrasados, el término de las persecuciones políticas y sindicales etc.

19 Jose Carlos Mariátegui, Temas de educación, Lima, s/f, pag. 70

Sin duda que resulta difícil entender el nacimiento y crecimiento de este gremio sin valorar en justa medida la coyuntura social que el país en aquel periodo vivía.

Las estructuras políticas del Estado se encontraban agotadas y en permanente confrontación. El gobierno estaba condicionado por las disposiciones de un Parlamento que le era adverso e incluso hostil. De esta manera poco o nada le permitía realizar sin su consentimiento. La Iglesia Católica, portadora de las tradiciones del postcolonialismo y estrechamente vinculada a los políticos conservadores ha perdido, hacia el periodo, credibilidad y las voces que piden una clara separación con los poderes del Estado van siendo cada vez más numerosas.²⁰

El Estado, se encuentra por efecto de la crisis económica en una situación de bancarrota,²¹ viéndose incluso imposibilitado de pagar los salarios de sus empleados.

Las precarias condiciones de existencia de las Fuerzas Armadas que también se sienten perjudicadas en sus aspiraciones de mejorar su calidad de vida y equipamiento para sus instituciones les llevan a exteriorizar su malestar y se suman al crecido flujo de inconformismo. A este cuadro se agregan las huelgas de los mineros en el norte en demanda de mejores remuneraciones las que culminan con enfrentamientos entre la fuerza pública y los trabajadores con víctimas fatales. Todo este espectro definido como de recesión, tensiona sobremanera la convivencia entre los actores sociales y políticos en el Chile de los años 20.

En este marco la consolidación de la AGP es sólo posible por la confluencia de estratos sociales e ideologías diversas las que, ante la crisis estructural del sistema representado por el Gobierno y el Parlamento, ofrecen a los maestros y a otros sectores de la ciudadanía una alternativa renovada. En esta alternativa el diálogo pasa a ser el componente principal que actúa como puente de plata en las ásperas relaciones de los agentes sociales en conflicto.

Afirman los representantes de la AGP que, el interés por sacar al país del estancamiento en que se encuentra, debe ser el gran objetivo nacional en torno al cual deben unirse voluntades sin distinción de credo religioso, status social o ideología política.

20 Incluso altas personalidades de la iglesia chilena asumieron posiciones extremas en el conflicto Iglesia Estado de comienzos de siglo. El Arzobispo Mariano Casanova llegó a atacar de esta manera los cambios educacionales: „Los defensores de la educación pública justifican a ésta diciendo que ayudará a hacer posible el sufragio universal; pero ésta a su vez no servirá más que para incrementar la desunión social y minar la influencia de la iglesia" Mariano Casanova, citado por Pedro Castro en „La educación en Chile de Frei a Pinochet“, Salamanca, 1976, pag. 27

21 La caída de los precios en los mercados externos repercutió drásticamente en Chile: entre 1929-32 el precio total de la producción de salitre cayó en un 95% desde 1.050 millones de pesos en 1929, hasta 58 millones en 1932. Fuente: Mariana Aylwin, Ob. cit. pag. 135

En opinión de Iván Núñez nadie mejor que el gremio de maestros podría representar estas aspiraciones puesto que lograba reunir dentro de sus afiliados a hijos de trabajadores asalariados, jóvenes universitarios, normalistas, profesores provenientes de entidades conservadoras y también reunía a núcleos de maestros e intelectuales sensibilizados muchos de ellos con el espíritu laico y libertario de la tradición republicana e independentista.

Confluían también en el gremio estamentos de la masonería quienes dedicaron ingentes esfuerzos para alcanzar entendimientos con el ala liberal de la burguesía chilena vinculada a la producción industrial y políticamente interesada en un proyecto nacional desarrollista. De igual modo la AGP reunía a profesores de orientación socialista y anarquista, quienes habían formado grupos de trabajo para el estudio de la realidad nacional, de los procesos sociales en la Europa de la postguerra e igualmente mostraban gran interés por el estudio de las revoluciones rusa y mexicana y sus posibles similitudes o diferencias con el proceso chileno.

Por las razones recién expuestas puedo deducir que para la AGP fue de especial relevancia establecer puntos de convergencia con otros gremios, como por ejemplo, el de empleados particulares, las asociaciones del sector público y con la misma Federación Obrera de Chile (FOCH), de manera que sus propuestas tuvieran una mayor gravitación en el diálogo nacional que estaba en marcha.

El investigador Núñez plantea que en la política de relaciones y alianzas de la AGP, ésta habría privilegiado al movimiento obrero(*El magisterio chileno 1900-36 sus primeras organizaciones gremiales*). Esta apreciación no parece sin embargo ser del todo correcta puesto que, como se verá mas adelante, el proyecto nacional desarrollista²² al cual los maestros se incorporan con particular entusiasmo, no privilegia precisamente a los trabajadores asalariados sino que tiende a favorecer los intereses de una clase social que se había mantenido siempre en el poder, que fue además defensora de un sistema plutocrático de gobierno y que, al ver revertida la situación nacional por efectos de la crisis económica mundial que le afectaba, optó por establecer alianzas.

22 El proyecto nacional desarrollista consistía en diversificar la industria con ayuda estatal. Al mismo tiempo el Estado creaba su propia red productora y de servicios generando trabajo y capitales. En lo social integraba a amplios sectores de la población a las tareas productivas y a ciertos beneficios sociales del Estado como educación salud y vivienda etc. Igualmente se ampliaba la participación política de los ciudadanos en las decisiones del Estado asumiendo la clase media un rol intermediario en los grandes conflictos nacionales.

Desde la perspectiva de los sectores dominantes estas alianzas buscan aumentar su propia base social de apoyo que les asegure la sobrevivencia como estamento hegemónico. Para ello han tenido que llegar a compromisos con adversarios, tolerando su incorporación a la tarea de administración y control de los diferentes poderes del Estado como por ejemplo Justicia, Parlamento, Gobierno, Educación etc.

En este esquema los grupos de la clase media asumen la función aglutinadora y se transforman en punto de convergencia que posibilitan una relativa estabilidad política indispensable para el proyecto en marcha.

El Partido Radical se perfila como la organización política representativa de la clase media. En su propuesta económica abogan por el establecimiento de una institución central (con capitales y administración del Estado chileno) que incentive la industrialización del país sobre la base del otorgamiento de créditos y de asesoramiento técnico a pequeños y medianos empresarios. Dicha iniciativa supone también la posibilidad de que el Estado cree sus propias fuentes de producción y de servicios sin que esta iniciativa perjudique a la empresa privada la cual es valorada, por el radicalismo, como un agente importante de cambio y de progreso social.

Enfrentado a una crisis estructural de conducción el gobierno del presidente Arturo Alessandri es derrocado por los militares quienes buscan aunar voluntades y canalizar el descontento popular.

Como causas principales de este descontento señalaré los bajos salarios de los trabajadores, la alta cuota de cesantía²³ y las excesivas tramitaciones burocráticas para satisfacer las demandas económicas de militares y empleados públicos a quienes incluso se le adeudaban sus salarios.

El carácter del nuevo gobierno no fue reaccionario sino mas bien autoritario. Los jóvenes militares se mostraron partidarios de favorecer un compromiso social. Con ese objetivo llegaron a proponer una reforma constitucional que cambiase la fisonomía del anquilosado sistema político y jurídico de la nación;²⁴ en otras palabras optaban por una Constitución adaptada a los nuevos tiempos.²⁵

23 Cerca de 60. 000 obreros del salitre llegaron a Santiago solamente en 1924 en busca de trabajo. Fuente: Mónica Echeverría, Ob. cit. pag. 120

24 Ver Iván Núñez, El Magisterio chileno..., Ob. cit. pp 55, 56

25 La anterior Constitución databa de 1833

La AGP, aún mostrándose cautelosa con la nuevas autoridades también firmó una declaración de apoyo crítico que, a mediano plazo, resultará muy polémica.²⁶

En la primera fase de su gestión los militares estuvieron dispuestos a dialogar con los empleados y obreros. Posteriormente cuando lograron, sobre la base de medidas populistas, concitar cierta ascendencia en la población laboral, desarrollaron sus relaciones con la oligarquía lo cual generó nuevamente conflictos de credibilidad que derivaron en un nuevo golpe de Estado el que apartó a los militares del poder y permitió el restablecimiento del sistema anterior. El ex presidente Alessandri fue llamado de su exilio (Marzo 1925) para que asumiera nuevamente las funciones de gobernante y los militares se distanciaron del poder con la aspiración de lograr un reconocimiento de su real vocación constitucionalista.

Instalado Alessandri nuevamente en el gobierno se procede a la redacción de una nueva Constitución Política para el país.

En esta tarea la AGP asume un rol destacado. Tal como ya lo he expresado, debido a la amplitud de sus principios toma la iniciativa de elaborar una propuesta de consenso y organiza, junto a gremios de intelectuales, trabajadores manuales, profesionales y obreros, un congreso constituyente.²⁷ En este encuentro, que en su época tuvo especial resonancia, pudieron manifestarse opiniones ideológicas provenientes de todas las vertientes del pensamiento:

„(...) desde liberales y radicales hasta anarco libertarios, incluyendo una numerosa y combativa fracción de mujeres que luchaban por la igualdad y la liberación femenina.“²⁸

El congreso fue dirigido por representantes de la AGP quienes no sólo tuvieron la responsabilidad mayor en la mesa directiva, sino también les cupo una activa participación en los relatos, fundamentación de las ponencias y redacción de los acuerdos. Estos fueron presentados con carácter de propuestas al gobierno, alcanzando amplia difusión en la prensa de la época.

A la comisión oficial encargada de discutir y redactar la carta constitucional asistieron representantes de numerosos partidos políticos, estamentos sociales, gremios, instituciones culturales, intelectuales, etc. Todas ellas plasmaron un anteproyecto de Constitución, el que, con modificaciones, fue aprobado en un plebiscito en Agosto de 1925.

26 Iván Núñez . El Magisterio chileno..., Ob. cit. pp. 55, 56

27 Iván Núñez, El Magisterio chileno..., Ob. cit pag. 57

28 Iván Núñez, El Magisterio chileno..., Ob. cit. pag. 57

El 18 de septiembre del mismo año era promulgada la nueva Constitución política del Estado. En ella quedaba consagrada la separación de la iglesia y el Estado. Este hecho que provocaba una gran oposición de parte del Partido Conservador, era a la vez una de las más sólidas aspiraciones programáticas del Partido Radical.

En el contexto de las reformas significativas que se incorporan a la nueva Constitución pueden señalarse el reemplazo del régimen parlamentario por uno presidencial. También se suprimía la Comisión Conservadora y el Consejo de Estado, dos corporaciones intermedias que actuaban como nexos entre el Ejecutivo y el Congreso tanto en materias ejecutivas como legislativas. De esta manera los canales de influencia institucionalizada de la antigua fronda aristocrática y del Partido Conservador desaparecían. En el nuevo esquema la lucha era por la reubicación en las nuevas esferas institucionales. En opinión de Raúl Atria :

„El contenido del conflicto seguía igual, pero el marco dentro del cual se desarrollaba cambiaba significativamente y provocaba cambios en la táctica“.²⁹

El principal aspecto que ocupó la atención de los maestros durante este periodo, en lo referido a educación, es la implementación de una reforma en el sistema nacional de enseñanza. Para tal efecto se promueve una intensa discusión en las escuelas y locales gremiales de los educadores. Síntesis de la controversia es el llamado *Plan de Reconstrucción Integral de la Educación*.³⁰

La originalidad de esta propuesta estaba en haber sido elaborada en la base magisterial, con participación de todos los estamentos docentes y en consulta con la población usuaria. La discusión referida a la propuesta misma estuvo marcada por un sesgo confrontacional. Por un lado las corrientes reformistas aspiraban a una escuela amplia, integrada a los problemas sociales del país, con una educación crítica y programas escolares adaptados a la realidad nacional. Una educación que se orientara en los valores del humanismo, que fuera entendida como requisito para la liberación del individuo y que estuviera al servicio de las grandes mayorías de la población.

Desde otro ángulo las posiciones más conciliadoras y conservadoras insistían en una educación integrada a los tiempos que se vivían, pero, que estuviera orientada por los valores del respeto a la jerarquía, el estímulo a la calidad y al esfuerzo individual, la subordinación a las autoridades educacionales y la prescindencia de cualquier idea política

29 Raúl Atria, Matías Tagle, Estado y Política en Chile, Cap. VIII: tensiones políticas y crisis económica: el caso chileno 1920-1938, Santiago, 1991, pag. 237

30 Iván Núñez, El desarrollo de la educación en Chile hasta 1973, Santiago, 1985, pag.1 .

que pudiera entorpecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se mostraron bastante críticos con lo que ellos llamaron

„la utilización política de la educación“.³¹

Los profesores con muchas dificultades, lograron ponerse de acuerdo en el tipo de reforma que deseaban implementar. Finalmente optaron por una que satisfizo las aspiraciones de las mayorías y que contempló también el planteamiento de minorías que por motivos diversos no estuvieron muy convencidas de las benevolencias de la reforma educacional.

El ministro de educación del presidente Carlos Ibáñez (militar elegido en 1927) don José Salas, asume la defensa del plan de reforma educacional presentado por la AGP. El Decreto Nr. 7.500 de Diciembre de 1927 le da legalidad a la reestructuración.

La reforma educacional plantea cambios en la metodología, en los contenidos y también propone reajustes financieros que permiten ampliar y mejorar el sistema de enseñanza.

Una segmento representativo de maestros reformistas, asumen funciones gubernamentales en el Ministerio de Educación desde donde dirigen y supervisan el proceso en marcha.

Para los investigadores Cristián Cox y Jacqueline Gysiling la reforma del año 1928 siendo significativa no logra interpretar las aspiraciones de un segmento importante del profesorado como eran los egresados de los institutos pedagógicos de las universidades. Ello porque:

„(..)quiénes dirigieron la reforma eran los maestros agrupados en la AGP que era expresión del profesorado primario. „³²

Por cierto que en el periodo se estaba todavía lejos de hablar de homogeneidad. La segmentación de gremios y de intereses es un componente que acompaña todas las luchas gremiales del magisterio en el presente siglo. Esta situación se tradujo a veces en fuertes rivalidades entre los agentes gremiales y políticos que al interior del magisterio actuaban. Los investigadores C. Cox y J. Gysiling señalan por ejemplo el error de la AGP de querer reproducir en su proyecto de reforma en 1928 la estructura formativa de las Escuelas Normales en las universidades. Este hecho que provocó arduas polémicas en la época se manifestó en los requisitos de ingreso que se dispusieron en los cuales se le daba extraordinaria importancia:

31 Este argumento se convierte en el eje central de la crítica conservadora a las tendencias reformistas en la educación a través de casi todos los periodos en el presente siglo. Por ser reiterativo terminó considerándose en una especie de valor sagrado en el que todos coincidían pero del cual todos se servían.

32 Cox-Gysiling, La formación del profesorado en Chile 1842-1987, Santiago, 1990, pag. 115

„(...) a la formación general por sobre la formación profesional y en la primacía de contenidos técnico-artísticos dentro de la formación general”³³

En opinión de los autores citados, el papel de la AGP en la Universidad de Chile, concretamente en la formación de profesores secundarios habría sido mas bien de interventor que de reformador y es justamente, a partir de esta discrepancia que se genera una discusión gremial y educacional de grandes proporciones.

Cox y Gysiling afirman que:

„La escuela de profesores secundarios reglamentada bajo el Decreto ley 1. 225 de Abril de 1928, es quizás el primer intento de crear una Escuela Unica de Pedagogía ya que, paralelamente se reforman las Escuelas Normales y se crea la escuela de profesores primarios. Esta escuela es de tuición del Ministerio de Educación y no de la universidad. La intención de las nuevas autoridades ministeriales era por una parte concentrar bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación la formación de todos los profesores de la enseñanza, y por otro, concentrar en los institutos universitarios (Decreto ley Nr 600 de Marzo de 1928) la investigación pura, desligada del aprendizaje profesional”³⁴

El Decreto que reglamenta el funcionamiento de la Escuela de Profesores Secundarios determinó algunos criterios fundamentales que debían considerarse en la selección de los futuros maestros. Entre estos criterios se cuentan :

- Selección rigurosa acentuando aspectos referidos a la salud, moral, carácter y vocación del postulante.
- Los postulantes deben vivir con su familia o bien en casas consideradas como respetables. La contraveniencia de esta disposición era razón para ser obligado a retirarse del establecimiento.
- Especial atención se brindó a las técnicas manuales. Dicha enseñanza tenía como objetivo adaptar la actividad educativa a una vida de eficiencia productiva
- La Escuela de Profesores Secundarios debía propender a acrecentar el respeto por la familia y el sentimiento por la benevolencia.
- Relevante atención se debía brindar también a la educación física como componente importante en el robustecimiento de la voluntad y el carácter.³⁵

En opinión de los investigadores Cox y Gysiling, en los puntos recién enumerados queda de manifiesto la ausencia de ciertos criterios universitarios en la proposición de nuevos estudios pedagógicos. Según estos investigadores, los criterios de selección hablan:

33 Cox-Gysiling, Ob. cit.pag. 115

34 Cox-Gysiling, Ob. cit. pag. 115

35 Cox-Gysiling, Ob, cit. pag. 116

„(...) claramente de los distintos componentes de clase social en juego tras la división de profesores primarios y profesores secundarios y sus respectivas instituciones de formación y criterios sobre el saber que es importante transmitir. Tras la sustitución aludida de los criterios académicos por otros morales y prácticos, está jugando la oposición trabajo manual versus trabajo intelectual; los profesores primarios socialmente más cerca o recién ascendidos de las posiciones *manuales* interviniendo el mundo del saber y de las posiciones de clase media más establecidas representadas por la educación secundaria y universitaria. Un cambio de tal magnitud, de los principios de reclutamiento de la profesión suponía sin embargo un poder que la AGP no tenía“.³⁶

Iván Núñez en cambio, observa el proceso reformista dirigido por la AGP como un movimiento democratizador y renovado. Las apreciaciones socio-pedagógicas a las cuales hacen alusión los autores recién mencionados, Núñez no las precisa; mas bien pareciera prestar su atención a los fundamentos sociopolíticos implícitos en la reforma de la AGP.

En su trabajo: „El magisterio chileno: sus primera organizaciones gremiales 1900-36,, el autor pone de relieve que la propuesta de la AGP:

„(...) en el terreno educacional, sin dejar de inspirarse en las corrientes renovadoras de la pedagogía europea, intenta elaborar soluciones nacionales a partir de una comprensión de las peculiaridades chilenas y buscando una afirmación de la identidad nacional“.³⁷

Una de las particularidades destacadas y dignas de mencionar en este capítulo es, en opinión de Núñez, el rechazo de la AGP al „falso patriotismo declamatorio y ritual,, donde muchas instituciones e instancias educativas encontraban una fuente de inspiración interpretativa de la historia de Chile.

„Los maestros se negaron a participar con sus alumnos en ceremonias patrióticas; repudiaron también el militarismo y las prácticas belicistas.“³⁸

En lo cultural Núñez observa que la AGP, a través de su revista Nuevos Rumbos:

„(...) estuvo abierta a todas las expresiones del pensamiento avanzado universal, sobre todo a Latinoamérica“.³⁹

Y agrega el autor que:

„En el acontecer político nacional la AGP busca sus aliados en el movimiento de los trabajadores, privilegiando la unidad con los obreros, aunque distanciándose de los partidos políticos“.⁴⁰

En el estudio de este material se observa una clara diferenciación de enfoques entre los autores Cox-Gysiling e Iván Núñez. En el análisis de Cox-Gysiling se deja traslucir una crítica sustancial a la desviación maximalista de la AGP que intentó imponer sus propios parámetros de la educación a otros estamentos, especialmente a los maestros de la

36 Cox-Gysiling, Ob. cit. pag. 117

37 Iván Núñez, El Magisterio chileno..., Ob cit. pag. 54

38 Iván Núñez, El Magisterio chileno..., Ob. cit. pag. 54

39 Iván Núñez, El Magisterio chileno..., Ob. cit. pag. 54

40 Iván Núñez, Ob. cit. pp. 45 y 53

enseñanza media. Poco considera la AGP, en opinión de estos autores, la percepción diferente que los maestros secundarios tienen del proceso educativo y que, por su historia y función dentro de la estructura, estaban más identificados e interesados en funciones de investigación del saber y de la abstracción intelectual que de la formación técnico-manual, la educación física y la imposición de preceptos morales.

Núñez en tanto valora la posición de la AGP como organización gremial de docentes que promueve una reforma estructural del sistema educativo en la cual se acentúa una forma de integración escolar que intenta colectivizar la educación incorporando a nuevos actores al proceso de reforma. El mérito de la AGP, a juicio de Núñez, es que ésta fue la primera expresión sindical organizada de los maestros que pudo reunir a todos aquellos sectores del profesorado que estaban de acuerdo con la propuesta reformista de los años 20. En este movimiento se habrían creado las bases para la construcción de los consensos educacionales, puesto que se mantuvo al margen de la contingencia política y de los conflictos sociales, privilegiando el acuerdo entre todos aquellos que intervenían en el proceso educativo. Es en este periodo donde Núñez intenta encontrar los indicios primarios de lo que posteriormente llegará a ser el Compromiso Histórico, teniendo al Partido Radical como núcleo aglutinador de la fracción docente.

Por su parte el historiador de la Universidad de Chile Hernán Ramírez Necochea define el periodo de finales de los años 20 como de „confusión y efervescencia“ diciendo que la caída de los precios del salitre y la enorme desocupación en el norte trajo naturalmente frustración y escepticismo en la sociedad chilena. Afianza esta afirmación con una cita de El Mercurio de 1927:

„Partidos políticos dispersos, agotados, incapaces de inspirar fe y confianza. Organismos constitucionales aplastados de rutina y saturados de improbidad (...). Hay en el ambiente, en esa atmósfera que crean las grandes aspiraciones colectivas, ansias de autoridad. Los pueblos reclaman el orden como base de su salud y de su bienestar, pero el orden no puede existir sin la autoridad“.⁴¹

Ramírez Necochea discurre en la suposición que nos induce a pensar la forma cómo, el principal periódico del país, iba, junto con la crisis, creando la atmósfera y entregando argumentos a los militares para que asumieran el control del gobierno y restablecieran la autoridad perdida. La crítica velada que plantea Ramírez Necochea es la ingenuidad de la AGP de no haber visualizado desde un comienzo la manipulación de la cual era víctima y

que, a corto plazo, actuaría en contra de su propia sobrevivencia. En efecto, el régimen del Coronel Carlos Ibáñez le ofreció al gremio la gran oportunidad de llevar adelante su reforma. Para ello debía pagar un precio: integrarse oficialmente al gobierno a lo cual la AGP accedió.

Desde el Ministerio de Educación se dirigió la primera fase de la reforma. Muchos de los miembros de la AGP ocuparon altas funciones ministeriales así como en funciones intermedias y en direcciones regionales de educación. El desenlace resultó ser una catástrofe para los docentes puesto que, a poco andar, la reforma fue prohibida, la Asociación General de Profesores disuelta y los dirigentes exonerados del servicio y reprimidos.

El profesor Hernán Ramírez Necochea afirma que el gobierno del Coronel Ibáñez contó con el respaldo pasivo de la clase media pues ésta vio en él a un buen intérprete de sus aspiraciones. El gobierno, fuerte y nacionalista, se le presentó como exponente de sus propios ideales e incluso de su descontento y hasta de sus frustraciones. El apoyo de la clase media al régimen militar de Ibáñez se exteriorizó fundamentalmente en la colaboración que este gobierno encontró en el Partido Radical y en el Partido Demócrata, ambos exponentes políticos de los estratos de la clase media.⁴²

El distinguido pensador peruano y uno de los teóricos de la izquierda latinoamericana de este siglo José Carlos Mariátegui, ve en la AGP a una organización que representa el más interesante y considerable movimiento de maestros de toda América. No obstante muestra también su escepticismo sobre la participación de la AGP en el gobierno de Ibáñez. A juicio de Mariátegui, el Gobierno del Coronel Ibáñez busca solamente en los maestros puntos de apoyo para su propia legitimación. El acercamiento a la AGP le reporta prestigio y ascendencia en la sociedad civil pero en realidad el proyecto ibañista nada o poco tiene que ver con los planteamientos innovadores de la AGP.

En opinión de Mariátegui el error de la organización de maestros ha estado en subestimar la relación entre los grupos conservadores y estamentos militares y no reparar en que, sus ideales de renovación, a poco andar se estrellarán (como efectivamente ocurrió) con los espíritus más tradicionalistas de la sociedad, representados veladamente en el gobierno.⁴³

41 Hernán Ramírez Necochea; El fascismo en la evolución política en Chile, Revista Araucaria N° 1, Madrid, 1978, pp. 15-17

42 Hernán Ramírez Necochea, Ob. cit, pp. 15-17

43 José Carlos Mariátegui, Temas de Educación, Lima, s/f, pag. 70

La reforma educacional de 1927-28 adoleció, según mi punto de vista de varios defectos: se pretendió desarrollar un modelo educativo democrático e integracionista en una sociedad marcadamente estratificada. Esta es una de las razones que permiten entender el porqué amplios sectores de la población, casi no percibieron los cambios que se estaban desarrollando.

Los grupos conservadores del ámbito docente se sintieron prontamente discriminados por los representantes más ortodoxos de la reforma y reaccionaron poniendo en tensión todo su potencial de influencias, reclutando nuevos adeptos y desautorizando al movimiento reformista. El principal argumento que esgrimieron fue que la reforma era contraproducente pues no era capaz de respetar los valores tradicionales de la población y se basaba en conceptos pedagógicos extranjerizantes.

„La irregularidad de la enseñanza se hallaba en íntima relación con su extranjerismo, la copia literal e inadaptada de los modelos foráneos: el antiguo liceo francés, luego el real Gimnasium alemán, más tarde de nuevo el liceo francés“.⁴⁴

Mucha razón tuvieron estas opiniones escuetamente descritas pues a poco andar, la reforma se vio envuelta en un atolladero de discusiones estériles, conflictos escolares, divisiones, interpretaciones, persecución a directores de escuelas (que eran los que más se oponían), acusaciones y contra-acusaciones. Todo esto derivó en un sistema escolar al borde del colapso.

Frente a esta situación, el gobierno reaccionó anulando el proceso de reforma, arremetió contra el gremio de maestros, detuvo a sus representantes, les despidió de sus trabajos o bien les obligó a exiliarse. De esta manera el régimen militar mostraba el término de su tolerancia con los profesores. Dejaba también en claro que su simpatía por la reforma educacional estuvo muy cerca de ser sólo un ardid para recibir la adhesión de los educadores y a partir de ello lograr una legitimación en la población civil.⁴⁵

Según mi parecer, la dirección gremial de los profesores no pudo escapar a una actitud oportunista en el sentido de mantener un discurso pluralista, defensor de los valores democráticos y al mismo tiempo dar legitimidad a un régimen autoritario de dudosa representatividad. El gobierno del Coronel Ibáñez surgía en medio de una crisis estructural del

44 Gonzalo Vial: Un siglo de educación chilena: notas para su estudio. Conferencia del autor en la Fundación Adolfo Ibáñez de Valparaíso, documento mimeografiado, s/f

45 Interesante resulta la similitud que se presenta medio siglo mas tarde cuando el régimen militar del general Augusto Pinochet ofrece también una serie de mejoras sociales a los maestros, promoviendo el Colegio de Profesores como símbolo de mayor status y estableciendo una Carrera Docente que en la teoría venía a ser la culminación de una vieja aspiración del Magisterio chileno.

país prometiendo bienestar a una población desorientada que veía pasivamente la intervención de las Fuerzas Armadas en el gobierno.

Los reformadores de la AGP pensaron equivocadamente que el conservadurismo educacional sería sobrepasado por las medidas impuestas o que lo inmovilizarían a través de leyes y decretos.

Contrarios a lo que la AGP pensaba, los maestros anti-reformistas supieron elaborar una estrategia de defensa del sistema vigente, descalificando la medida por provenir de un gobierno autoritario el cual difícilmente podía representar el espíritu conciliador y democrático del pueblo chileno ni de sus maestros.

Cancelada la reforma se estableció un criterio autoritario de enseñanza. Se prohibió el funcionamiento de los gremios de maestros y en las escuelas los profesores regresaron a formas pedagógicas que se creían superadas.

El inicio de los años 30 está marcado por una crisis estructural que se expresa en todos los ámbitos de la sociedad chilena: caída del gobierno, crisis económica producida por el cierre de los yacimientos salitreros, dispersión y fraccionamiento de las organizaciones gremiales, polarización de los partidos políticos, estancamiento en el proceso de expansión educativa etc.

En este periodo el movimiento gremial de los profesores se encuentra en una coyuntura de reflujo y segmentación que es el resultado de la falsa opción de colaborar con el gobierno de Ibáñez. Sin embargo ello no se prolongará por mucho tiempo pues los sectores políticos buscarán formas de convivencia de más largo aliento. Se reinician diálogos y se retorna al espíritu de búsqueda de consensos. A la fecha Chile ya tiene en vigencia una nueva Constitución política que facilita la participación de agentes sociales nuevos quienes se habían mantenido en el pasado en roles políticos subalternos. Los grupos nucleados en la clase media, convertidos en actores relevantes, promueven una línea estratégica basada en la conciliación de intereses entre las diferentes partes en conflicto. Cuentan para ello casi con una década de experiencias; algunas por cierto fracasadas pero que de todas formas servirán como referentes en el momento de definir los nuevos rumbos políticos que en el país se van a implementar.

La coyuntura internacional observa en Europa el ascenso del fascismo, fenómeno que en Chile adquiere también presencia a través del Movimiento Nacional Socialista (MNS) que logra reunir la simpatía de militares, universitarios y estamentos de la clase media.⁴⁶

Pese a los esfuerzos de las organizaciones políticas e instituciones de la civilidad por establecer formas de entendimiento y colaboración, los trabajadores respondieron a la incapacidad del gobierno por resolver sus problemas, con una huelga nacional que culminó con Ibáñez en el exilio(1931). Nuevas elecciones pusieron en la dirección del país a un presidente radical el cual no corrió mejor suerte porque también fue derrocado al poco tiempo de asumir la presidencia. Esta vez se trató de un golpe militar (4 de Junio de 1932) organizado por oficiales jóvenes, vinculados a gremios de obreros e intelectuales quienes proclaman la república socialista. Esta república tuvo una duración de apenas 12 días. Aún cuando este acontecimiento fue efímero, va a tener una cierta trascendencia histórica por cuanto estimula el reagrupamiento de los gremios y fracciones políticas que se encontraban dispersas después de la frustrante experiencia con el coronel Ibáñez. Efectivamente en torno a este movimiento militar, se unificarán varios grupos políticos que existían en el ámbito universitario, sindical, de empleados públicos y profesionales y darán origen al Partido Socialista de Chile que contó entre sus fundadores con uno de los líderes de la sulevación, Marmaduke Grove.

El Partido Socialista va adquirir en los próximos decenios gravitante importancia por su espíritu pluralista y una cierta originalidad en la conceptualización de un proyecto político que se vincula a los trabajadores, a la cultura nacional, a la historia de Chile y al carácter latinoamericanista de un tipo de socialismo democrático, no ortodoxo, el cual encontró muchas dificultades en la configuración de un planteamiento teórico que legitimara su existencia.

El Partido Socialista se define ideológicamente marxista pero el concepto de Dictadura de Proletariado, eje central del movimiento comunista internacional (y criollo), es criticado por ser antidemocrático y sectario. La propuesta socialista será la formación de la República de Trabajadores en la cual participen todos los estamentos laborales, además de intelectuales, técnicos y profesionales. El tipo de sociedad a construir será socialista, pero

46 Un estudio documentado se encuentra en: Simone Schwarz, Chile in Schatten faschichtischen Bewegungen. europäischer und chilenischer Strömungen in der 30 bis 70 Jahre, Ffm, 1997

con libre expresión política de los grupos que no se sientan identificados con este hipotético régimen.⁴⁷

Sus detractores sin embargo ven en el Partido Socialista a una organización en la cual han encontrado espacio muchas aventuras y tendencias políticas que han ido desde la Social Democracia, hasta los grupos de corte guerrillero, trotskistas y escisiones de las fracciones comunistas pro china y prosoviéticas. Todos encuentran apoyo en golpes de mando dirigidos por minorías audaces que han escalado hasta posiciones de dirección dentro de ese partido. Aluden los detractores del socialismo chileno a sus orígenes y desarrollo: nacido de un golpe militar, su posterior colaboración con el coronel Ibáñez, un cierto apoyo al intento golpista del general Viaux en 1969 así como una permanente práctica a la lucha fraccional de grupos al interior del partido le darían a esta organización poca transparencia democrática.

La experiencia de la República Socialista de los 12 días se ve prontamente sobrepasada por la instauración de un nuevo gobierno nacido de un golpe cívico militar. Esta vez la jefatura del gobierno queda en manos de Rolando Merino, un personaje políticamente moderado; tres días más tarde será destituido por una Junta civil en la que participa nuevamente el izquierdista Marmaduke Grove.

Se suceden con posterioridad golpes y contragolpes, lo que refleja una estabilidad institucional muy precaria en el país que recuerda a la ya vivida un siglo antes en el llamado periodo *de anarquía* que culminara con la Constitución de 1833. La actual crisis queda parcialmente superada con las elecciones presidenciales de Octubre de 1932 en la cual compiten Marmaduke Grove (militar de orientación socialista), Arturo Alessandri, (por la coalición radicales, demócratas y una fracción de liberales); Enrique Zañartu, (liberal) y Elías Laferte, (comunista). La elección dio como triunfador a Arturo Alessandri con más del 50 % de los votos emitidos.⁴⁸

Este segundo periodo de Alessandri está caracterizado por una radicalización de las fuerzas sociales en las que sobresale el auge del Partido Comunista y de los grupos socialistas, así como una creciente militancia de los trabajadores chilenos en gremios, cooperativas y partidos políticos. Esta polarización menguaba incluso el populismo del propio Alessandri

47 Ver Julio César Jobet El Partido Socialista en Chile, Santiago, 1972

48 Bello, Galdames, Thompson, cit. por Raúl Atria en Estado y política en Chile, Ob. cit. pag. 239

quien aparecía ahora ante la derecha con un cariz de respetabilidad que nada tenía que ver con el Alessandri rebelde de 1920.

Punto importante para comprender esta etapa de polarización es la aparición en la sociedad chilena de grupos nazi-fascistas que buscaban erigirse en alternativa de gobierno. Como contrapartida aparecen milicias republicanas que se proponen proteger al gobierno de Alessandri de intentonas golpistas y milicias socialistas que se proponen detener el avance de los grupos fascistas en la sociedad civil. Estos factores redujeron la cultura política del país a meros enfrentamientos callejeros entre unos y otros bandos.

En medio de este clima de creciente violencia y agitación, Alessandri dicta la Ley de Seguridad Interior del Estado para reprimir a los grupos de izquierda que habían iniciado una sucesión de huelgas y que comprometían incluso los transportes de ferrocarriles del Estado. Los radicales frente a la derechización del presidente abandonan el gobierno para sumarse a una alianza con los partidos de izquierda en la cual ellos, asumían la dirección del proceso. De esta manera Alessandri ve romperse la coalición que le llevó al gobierno y decide recurrir a la derecha en busca de su apoyo; incluso incorpora a algunos de sus representantes al gobierno en cargo de alta representatividad.

Hacia finales del segundo periodo de Alessandri los gremios y partidos políticos del Centro y de la izquierda entran nuevamente en negociaciones para alcanzar acuerdos de gobernabilidad. Una de las tesis más atrayentes en estos círculos es la del Frente Popular, réplica de los modelos de España y Francia, que tiene como objetivo detener el avance de las corrientes fascistas en Europa y en el mundo.

En este empeño dicen sus defensores, es indispensable buscar la alianza de todos los sectores democráticos de la sociedad.

El Partido Radical incorporado al Frente Popular busca el entendimiento con sus aliados en torno a la estrategia económica del llamado Proyecto Nacional Desarrollista que pretende como ya lo he dicho, dar un impulso a la industria nacional sobre la base de una estrecha colaboración entre intereses del Estado y del empresariado privado. Por medio de este acuerdo este último sector recibe ayuda estatal y espacio para crecer y modernizarse. A cambio se compromete a participar activa y creativamente en la planificación y cumplimiento de los proyectos socioeconómicos propuestos por el Estado.

1.2 **Acerca del Compromiso Histórico y de algunos conceptos educativos en las tesis de Antonio Gramsci**

A decir verdad la incorporación del pensamiento gramsciano en la presente investigación cumple solamente la función de recoger los aspectos teóricos esenciales del concepto Compromiso Histórico que el autor sardo desarrolla en la Italia de los años 20. Dicha tesis como es sabido, no va a quedar circunscrita solamente a la realidad local de Italia sino que va a ser tema de permanente discusión y variadas interpretaciones en los círculos gremiales y culturales de diferentes países no solamente de Europa sino también de América Latina.

Punto central en la tesis de Gramsci es la percepción de que los obreros, aislados de los estratos de la clase media y de un sector de la burguesía, difícilmente van a poder emprender los cambios políticos y económicos que la sociedad requiere y que a los trabajadores manuales interesan.

En el Estado participativo moderno propuesto por Gramsci, los diferentes estamentos sociales deben hacer concesiones y establecer acuerdos de gobernabilidad que posibiliten una paz social necesaria para el desarrollo colectivo del país e individual de cada estamento. Establecido este acuerdo y hegemonizado en un periodo determinado por la burguesía, el proletariado estaría en condiciones de potenciar su capacidad de gobernabilidad sobre la base de un crecimiento permanente en las diferentes esferas de poder. Por supuesto que ello tiene su costo porque los partidos representativos de los trabajadores, y éstos mismos, independiente incluso de los partidos y agrupados en gremios y otras asociaciones de la civilidad, deberán competir en el ámbito de la cultura, de la política y de la ideología con el resto de los estamentos sociales. No obstante, precisarán de educación adecuada y de intelectuales (orgánicos les llama Gramsci) que defenderán en el terreno de la cultura y de la ideología las ideas democráticas a que el socialismo postula. La marginación o automarginación del proletariado de la vida política de un país implica un retardo en el desarrollo social y económico de la sociedad lo cual crea, según Gramsci, condiciones para el establecimiento de dictaduras y gobiernos autoritarios.

En el esquema tradicional del marxismo de los años treinta esta tesis apareció como sofisticada y liquidacionista por cuanto, a decir de los más ortodoxos del movimiento comunista internacional, pretendía subordinar al proletariado en acuerdos de gobernabilidad con estratos de la burguesía, restándosele el rol histórico y protagónico que debería cumplir: ser los *liberadores de la humanidad*.

En el caso chileno he podido comprobar que, en el Estado que se va configurando a partir de 1925 (con la nueva Constitución política) quedan representados todos los sectores relevantes de la sociedad. El conservadurismo se ve obligado a ceder espacio y cohabitar con los estamentos de la clase media, y ésta para ser reconocida como estamento mediador en los conflictos sociales y al mismo tiempo administradora del aparato estatal, necesitó de una base de apoyo que encontró en el movimiento obrero.

Entendido así, la Constitución de 1925 resultó ser algo mucho más trascendental que una alianza de grupos políticos y sociales ya que posibilitó la formación de un Bloque Histórico que toma cuerpo en el Estado que se origina de esa Constitución y al que los grupos maximalistas de izquierda y derecha han denominado Estado colaboracionista y Estado socializante respectivamente.

En este compromiso de 1925 hay evidentemente una cultura hegemónica: la de la burguesía agraria e industrial. Este estamento social de notable influencia tuvo que acabar, en el marco de esta Constitución, con ciertas prácticas autónomas de partidos políticos, escuelas, gremios y asociaciones ilícitas existentes en la sociedad, todas las cuales renacieron como partidos políticos, sindicatos, asociaciones culturales, etc. institucionalizados e integrados a la estructura y supraestructura del Estado.

La ampliación del sistema educativo y su obligatoriedad en el nivel básico, el establecimiento de leyes sociales que beneficiaban a los trabajadores, el pluralismo ideológico en la sociedad, así como la libertad de prensa y la participación del Estado con grandes capitales en un proyecto de industrialización nacional (Corporación de Fomento) son a mi juicio componentes que corresponden a un proceso político de compromiso, en el cual podrían rastrearse los primeros gérmenes del concepto gramsciano de Bloque Histórico.

No está demás agregar que las tesis de Gramsci, aun teniendo universalidad, fueron escritas de cara a la realidad italiana y europea, con actores sociales de fisonomía propia y en escenarios donde se habían dado procesos sociales y políticos muy distintos a los de las repúblicas sudamericanas. Sin embargo, los masivos movimientos migratorios de Europa a América hacia el cambio de siglo, hacen suponer que los planteamientos que estuvieron en discusión en Europa llegaron también a las grandes ciudades de Sudamérica donde los emigrantes se instalaron no solamente con sus familias sino también con sus ideas, su literatura, sus costumbres, sus intelectuales y su manera propia de hacer política.

Pero veamos algunos aspectos esenciales en las tesis educacionales de Gramsci. Lo primero que él plantea es su claro rechazo a la enseñanza enciclopedista y paternalista del saber. El opone a la concepción tradicional de „educación pasiva y mecanicista“ el „ejercicio del pensamiento y de hábitos para relacionar el fenómeno causa-efecto“.⁴⁹

En su polémica con los idealistas Gentile y Lombardo Radice acerca de cuestiones educacionales, Gramsci advierte el abuso que éstos cometen en la enseñanza, al considerar al niño, en su cuerpo e intelecto como dos componentes separados. Uno que hay que ayudar a formar (educación material) y otro que hay que llenar: la cabeza. Ésta pasa a ser, según Gramsci, una especie de recipiente en la cual hay que vaciar conocimientos a través de una acción mecanicista de repetición de conceptos.⁵⁰

Es justamente esta última apreciación crítica de Gramsci la que en los años sesenta se conocerá en América Latina como: „la concepción bancaria de la educación“ que el brasileño Paulo Freire denuncia cuando escribe:

„La narración, cuyo sujeto es el educador conduce a los educandos a la memorización mecánica del contenido narrado. Más aún, la narración los transforma en vasijas, en recipientes que deben ser llenados por el educador. Cuánto más vaya llenando los recipientes con su depósito, tanto mejor educador será. Cuánto más se dejen llenar dócilmente, tanto mejor educandos serán.“⁵¹

En la visión bancaria de la educación agrega Freire:

„ (...) el *saber* es una donación de aquéllos que se juzgan *sabios*, a los que juzgan *ignorantes*. Donación que se basa en una de las manifestaciones instrumentales de la ideología de la opresión: la absolutización de la ignorancia que constituye lo que se llama alienación de la ignorancia según la cual ésta se encuentra siempre en el otro.“⁵²

Especial dedicación atribuye Gramsci a la discusión sobre el rol del Estado en el control de la educación. Distante de proponer una escuela de predominio estatal, centralizada, Gramsci apuesta por una educación libre. Esta libertad de escuela enfatiza, es sólo posible si es independiente del Estado. En este sentido las cooperativas, las municipalidades, los sindicatos e incluso los partidos políticos podrían asumir las funciones educativas, solamente media una condición y es, la generación democrática de dichas instituciones.⁵³

En el mismo periodo en que Gramsci planteaba estos conceptos, en Chile se habían creado ciertas formas de educación alternativa patrocinadas por organizaciones diversas las que,

49 Mario Manacorda, El principio educativo en Gramsci, España, 1977, pag. 23

50 Mario Manacorda, Ob.cit. pag. 192

51 Paulo Freire, Pedagogía del oprimido, España, 1972, pag. 76

52 Paulo Freire, Pedagogía del., Ob. cit. pag. 77

53 Mario Manacorda, Ob. cit. pag. 27

aun no teniendo reconocimiento oficial por parte de las instituciones educacionales estatales, promovieron la educación como expresión valorativa de progreso social.

Iván Núñez, interviniendo en un foro con altas personalidades de la educación chilena afirma:

„En las primeras décadas de este siglo, hubo en dos sectores relativamente antagónicos o diferenciados en la sociedad chilena, una interesante preocupación por lo educacional (...). Por una parte, en diversos sectores, lo que podríamos llamar en grueso, el bloque dominante, había mucho interés por hacer educación al margen del Estado. La iglesia, los grupos liberales masonicos, las Fuerzas Armadas cumplían un rol educativo bastante significativo en su tiempo. Y por otra parte el movimiento obrero en sus orígenes también tuvo vocación educativa traducida prácticamente en la creación de redes de escuelas que después desaparecieron y que estaban totalmente al margen del Estado. A ellos no les interesaba que les reconocieran títulos ni ninguna cosa. Al contrario, ellos querían, conforme a su propia cultura, crear redes de transmisión que no tenían nada que ver con lo oficial o dominante. Desgraciadamente la tradición se perdió.“⁵⁴

Sin duda resulta difícil, por la falta de documentación, poder rastrear el pensamiento gramsciano en la sociedad sudamericana de los años 1920-35; sin embargo puedo concluir que algunos de sus conceptos relacionados ideológicamente con la educación, políticamente con la formación del Bloque Histórico y éticamente con la caracterización humanista y democrática del socialismo, adquieren relevancia en algunos grupos políticos vinculados al movimiento gremial y cultural de la época. Esta tendencia a la cual hago alusión tiene expresión, a mi juicio, en la formación del Partido Socialista de Chile el cual surge de la confluencia de sectores políticos, ideológicos y sociales heterogéneos entre sí. En esta organización se agrupan obreros, campesinos, artesanos, profesionales, empleados, intelectuales e incluso estamentos minoritarios de oficiales del Ejército y de la Fuerza Aérea. Hay, sin embargo, un predominio de los intelectuales en los mandos de dirección del Partido, pero su definición ideológica se inscribe dentro de la variante del marxismo renovado, al cual muchos de sus fundadores llamaron también „marxismo democrático“.

En la política de formación de los Frentes Populares, que se originan primero en España y Francia y que también encuentra expresión en Chile, incluso con el triunfo en las urnas(1936), me es posible visualizar el espíritu gramsciano que se incubaba en la tesis del Bloque Histórico. Paradojalmente los partidos comunistas tradicionales defenderán esta tesis que en su esencia poco se distancia de lo planteado por Gramsci 10 años antes, en su controversia con la dirección de la Internacional Comunista en Lyon. Al respecto dice la escritora Rosana Rosanda que cuando la Internacional Comunista decidió poner en

vigencia la política de „clase contra clase, muro contra muro,, (Congreso de Lyon 1926) Gramsci manifestó que:

„Eso era una locura.“⁵⁵

En este periodo A.Gramsci elabora también su tesis de Bloque Histórico:

„ (...)bloque de las fuerzas que iban formándose y que estaban interesadas en un cambio del orden existente.“⁵⁶

Agrega también R. Rosanda que en el mencionado congreso de Lyon se impuso equivocadamente una estrategia de Bloque Histórico entendido solamente entre obreros, campesinos e intelectuales con hegemonía del proletariado. Su definición fue de bloque histórico revolucionario⁵⁷ a lo cual Gramsci se opuso con energía porque conducía solamente al aislamiento de los trabajadores.

En el concepto gramsciano de Bloque Histórico, se reconoce la existencia de una clase social hegemónica sobre otras. Luego, en la estructura del Estado, esta clase mantiene su predominio pero, para mantener su rol protagónico, necesita establecer pactos sociales los que al mismo tiempo:

„(...)acaban con ciertas formas de autonomía pero éstas renacen bajo formas de partidos políticos, sindicatos, asociaciones culturales, en el nuevo Estado que se origina“⁵⁸

Para Gramsci, según la autora Christiane Buchi-Glucksmann:

„La unificación histórica de las clases dirigentes es la historia de los Estados; esta unidad clase-Estado, debe ser estudiada de manera concreta como resultado de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Dichas relaciones marcan un proceso en el curso del cual la burguesía como clase, para unificarse en el Estado debe eliminar a fuerzas antagónicas y tener el consenso activo o pasivo de las otras.“⁵⁹

La autora mencionada agrega además que:

„El Estado como modo privilegiado de constitución y unificación de clases, tendencialmente pleno y hegemónico, suplanta el concepto Bloque Histórico en el cual muchos comentaristas han visto el aporte original y privilegiado de Gramsci al marxismo“.⁶⁰

54 Iván Núñez, Hacia la estructuración de consensos educacionales: actas de una discusión, Edit. CIDE, Santiago, 1985, pag. 165

55 Rosana Rosanda, La revolución de Occidente, El País, España, 24.1.1991

56 Rosana Rosanda, Ob.cit., 24.1.1991

57 Rosana Rosanda, Ob. cit.

58 Antonio Gramsci, cit. por Christine Buci-Glucksmann en Gramsci y el Estado, España, 1978, pag. 341

59 Christine Buci-Glucksmann, Ob. cit. pag. 341

60 Christine Buci-Glucksmann, Ob. cit. pag. 341

1.3 Las opiniones de los gremios de maestros respecto del Compromiso histórico

Tal como ya lo he expresado, el movimiento gremial de los profesores encuentra sus primeras manifestaciones a comienzos de siglo en organizaciones de carácter mutual-cooperativistas. En el año 1923 se funda la Asociación General de Profesores (AGP), que es la primera organización amplia, de signo reivindicativo sindical. Esta agrupación se encuentra imbuida de los principios revolucionarios de Córdoba (1918) y Perú (1920) y participa activamente en la configuración de la nueva Constitución Política de Chile (1925) y en el intento de una reforma educacional (1928) que debía cambiar estructuralmente el sistema educativo chileno. Posterior a su desarticulación, por efectos de la política represiva del coronel Ibáñez, el profesorado intenta a mediados de los años 30, recomponer su estructura. Con menos representatividad que la AGP, se constituye la Unión de Profesores de Chile (UPCH) a la cual se afilian los maestros dependientes del Estado. Su programa, a diferencia de la AGP, no plantea cambios estructurales en educación. El trauma de la reforma educacional de 1928 está todavía presente y las reivindicaciones de la UPCH se circunscriben a demandas de tipo social, material y profesional.

En lo político adhieren los maestros de UPCH con entusiasmo al proyecto desarrollista del Frente Popular el cual trata de conciliar con relativo éxito los intereses tanto de la burguesía nacional como de la clase media y de los trabajadores manuales. La ingerencia de los maestros en los temas de discusión nacional es moderada pero ello tampoco impide que éstos no se adscriban a los partidos que se enfrentan en la arena política formando en el

gremio comisiones que adherían a tal o cual ideología. Estas comisiones lejos de ser prohibidas por las autoridades fueron a menudo escuchadas y consideradas en los debates educacionales que a nivel de ministerio, gobierno y gremios se realizaban.

Sin embargo las asociaciones de maestros permanecen, hacia el periodo todavía estigmatizadas por un constante afán de diferenciación (de acuerdo a su función dentro del sistema) lo que implicaba también una dispersión constante. No obstante y pese a las diferencias que entorpecieron el trabajo sindical, prevaleció en los maestros la necesidad objetiva de unidad. El gremio influía en la medida que estuviera unificado.

Con posterioridad al quiebre de la UPOCH surge la Federación de Educadores de Chile (FEDECH) que es una forma de compromiso entre unidad e individualidad gremial; vale decir los maestros pudieron mantener sus gremios segmentados por área pero al mismo tiempo, dichos gremios, pertenecían a la Federación Nacional, la cual negociaba con los gobiernos las principales demandas del profesorado. Por medio de FEDECH los maestros son incorporados nuevamente al Consejo Nacional de Educación, organismo encargado de coordinar y dirigir los grandes lineamientos educacionales del gobierno. De esta manera FEDECH se vinculan a nivel institucional con la Superintendencia de Educación Pública y con el Centro de Investigaciones Pedagógicas permitiendo que los maestros se integrasen en forma mucho más orgánica a la fórmula denominada de Compromiso Histórico.

A FEDECH sobreviene el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (SUTE-1970) que reúne no solamente a los maestros sino también a los empleados de servicio, personal paradocente y otras categorías administrativas del sistema educativo. El SUTE, a juicio de su secretaria general la profesora Livia Videla, fue:

„Expresión de diálogo, de compromiso, de búsqueda de soluciones colectivas a los grandes problemas educacionales del país; y fue también expresión de un proceso de concientización individual y colectiva acerca del rol social del maestro incorporado ahora como agente de cambios, a las grandes tareas de transformación social que el país vivía.,⁶¹

En efecto el SUTE es una organización plurisectorial que surge, no como una instancia de compromiso por efecto de un quiebre, sino es el corolario de un proceso de unificación gremial y en él participan más de 120.000 afiliados. El SUTE a través de sus dirigentes y de sus postulados adhirió mayoritariamente al gobierno de la Unidad Popular. A diferencia de los gremios anteriores, asumió una actitud marcadamente política; ello no porque cuantitativamente fuesen más, sino porque su existencia se dio en un marco histórico

caracterizado por una fuerte ideologización en la población civil. Pocos gremios en Chile, al momento de tener que decidir sobre una cuestión fundamental, asumieron una actitud de tanta amplitud como el de los profesores. Las puertas del gremio y de las escuelas se abrieron para recibir a los más variados grupos de personas que deseaban expresar sus opiniones respecto de los cambios que se estaban discutiendo. De esta forma hubo congresos regionales, provinciales y comunales de educación donde fueron escuchadas las argumentaciones no solamente del oficialismo, sino también de la disidencia. En términos generales todos coincidían en la necesidad de los cambios, el problema estaba en el cómo implementarlos; bajo qué parámetros ideológicos o políticos debía cambiarse la orientación del sistema escolar, para servir a qué tipo de sociedad (?).

Los partidarios del gobierno le imprimían a la reforma una línea ideológica demasiado comprometida con los valores del llamado „socialismo científico“ lo cual despertaba intranquilidad entre sus detractores. Necesario es decir que, la actitud de los maestros estuvo, particularmente en el último año del gobierno del presidente Allende, sesgada por la posición política que los profesores tenían, hecho que años más tarde se volvería a repetir de diferente manera cuando los maestros, bajo el régimen militar determinaron su apoyo o rechazo a los cambios (Verónica Monsalve) en razón a la opinión que tenían del régimen.

Sobre la reforma en el año 1972-73 opinan los políticos, los militares, la prensa, la iglesia, los estudiantes, los padres etc. Las opiniones de los maestros están nuevamente divididas. La derecha prepara las condiciones sociales y económicas para un golpe de Estado que arrastrará a una parte considerable de la clase media donde sobresalen comerciantes, transportistas, empresarios, colegios profesionales, grupos de estudiantes; incluso los militares, soliviantando su juramento de no intervención en temas propios de la política contingente, visitan al ministro de educación de la época Jorge Tapia, para hacerle presente por medio de un manifiesto político su rechazo a la reforma.⁶²

No hay acuerdo suficiente y el presidente Allende decide, ante la falta de consensos, retirar el proyecto como muestra de una voluntad de compromiso.

61 Livia Videla, Entrevista 1992

62 Carlos Prats González, Memorias, Edit. Pehuén, pag. 27, Santiago., 1985

El SUTE, durante todo el periodo de discusión mantiene una postura amplia, dispuesto a defender el proyecto pero también dispuesto a dialogar y a escuchar las opiniones disidentes. Pocas veces en la historia de Chile, un tema educacional despertaba tanta polémica de la cual el autor fue testigo a través de su participación en incontables encuentros informativos, foros, seminarios y congresos organizados por las diferentes federaciones estudiantiles del país y por el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación. Aquí me detengo un instante para explicitar algo. Era efectivamente el tema educacional la causa de tanta confrontación? Pienso que no. Pese a que el tema revertía una gran importancia para la población, en la situación en que se encontraba Chile, la reforma educacional pasaba a ser solamente la punta de un iceberg en una sociedad que se encontraba a las puertas del quiebre institucional. El SUTE en mi opinión sí tuvo una actitud de valoración respecto del Compromiso Histórico y pese a las tendencias rupturistas, cada vez más significativas en el Sindicato, que desechaban las fórmulas de arreglo por considerar al Estado caduco, prevaleció hasta el final en el gremio la tendencia a buscar arreglos para salir de una crisis que ya en 1973 se hacía insostenible.

En consecuencia, y tomando en consideración las particularidades políticas del proceso chileno originado a partir de 1925 y las definiciones de las diferentes agrupaciones gremiales del magisterio, me permito usar el vocablo *integración* para definir la relación existente entre Estado y Magisterio. Los gremios de maestros, a pesar de las diferencia que tuvieron con las autoridades educacionales, no se ven enfrentados al aparato estatal, así como tampoco ponen en duda la vigencia del sistema. Sin embargo su condición de trabajadores asalariados, activó en ocasiones conflictos como las huelgas de Mayo de 1950 y la de Abril-Mayo de 1968 que corresponden más a una relación *trabajadores-patrón Estado* que a cuestionamientos estructurales del sistema.

Punto importante de parte del Estado es su reconocimiento de los gremios docentes puesto que, el estatuto administrativo prohibía la existencia de sindicatos en la administración pública. El mecanismo usado era el otorgamiento a los maestros de personalidad jurídica como *asociaciones mutuales* para administrar sus bienes pero en la realidad el funcionamiento de estas asociaciones era igual que el de un sindicato. Los distintos gobiernos no hicieron mayor cuestionamiento y les reconocieron como tales discutiendo con ellos pliegos salariales, leyes, reformas educacionales, e incluso más, se llegaron a tolerar los partidos políticos organizados al interior de los gremios.

Otro componente importante de destacar en esta exposición acerca de la actitud de los gremios respecto del Compromiso Histórico es la fuerte presencia de los maestros en los sectores de la clase media asalariada, la cual actuaba como nexo entre los estratos obreros y contribuía a que éstos no se levantaran en actitud de rebeldía contra el sistema. En este contexto las capas medias y dentro de ellas el magisterio organizado, ayudaron a que los sindicatos de obreros a veces fuertemente azuzados por los partidos de izquierda participaran democráticamente en las instituciones de la sociedad civil y buscaran mecanismos pacíficos de entendimiento con los gobiernos y sectores empresariales.

El movimiento sindical de los maestros en sus diferentes expresiones percibe que, el fortalecimiento del Estado implica obtención de recursos para la educación y un mejoramiento de sus condiciones materiales de vida; por eso los profesores estuvieron dispuestos a apoyar la intervención del Estado en la economía. Pero ello naturalmente suponía compromisos. El Estado necesitaba de los maestros para legitimarse en la sociedad y los maestros actuaban como *correas transmisoras* (I. Nuñez) de valores al servicio del sistema, exigiendo sí, como contrapartida tres demandas: a) expansión educativa; b) mejoramiento de sus salarios; c) participación de los gremios en las políticas educacionales de largo aliento. Estas tres demandas se vislumbran ya en las peticiones de las organizaciones mutuales de comienzo de siglo, se acentúan bajo el periodo de la AGP y se establecen como parte consubstancial en todas las plataformas reivindicativas de los diferentes gremios de maestros existentes en Chile entre los años 1936 y 1973.

Pudo el Estado satisfacer siempre las demandas de los maestros? No; y las razones son varias. El Estado, surgido del compromiso de 1925 tenía sus limitaciones. Satisfacer las demandas económicas de decenas de miles de empleados públicos y resolver los problemas de infraestructura y crecimiento escolar, le significaban gastos que no siempre estaba en condiciones de asumir. Por esas razones es que el movimiento de maestros tuvo que moverse discretamente dentro de parámetros que no pusieran en riesgo al sistema en sí. Ciertamente es que el Estado va paulatinamente ampliando la cobertura escolar e invirtiendo fuertes sumas de dinero en el mejoramiento del sistema escolar pero también es cierto que dichos progresos no fueron el resultado de iniciativas gubernamentales sino más bien consecuencia de largas y pacientes negociaciones entre gremios y autoridades.

Las organizaciones de maestros defendieron el Compromiso Histórico desde diferentes perspectivas: apoyaron la institucionalidad democrática así como el proyecto de

industrialización propuesto por la clase media especialmente a partir del momento en que los radicales asumen el gobierno (1938). Ayudaron a integrar a las organizaciones obreras al proyecto de Compromiso. Ello es posible porque en la estrategia de sobrevivencia política de la clase media chilena se consideraba absolutamente indispensable mantener a los obreros dentro del marco constitucional ofrecido por el Estado de manera de evitar la confrontación social. Nadie mejor que los maestros, por su estrecha relación con la población, podía cumplir esta función amortiguadora de conflictos.

Los gremios de maestros no asumen un discurso rupturista que implique un cambio del sistema social. Podría incluso decir que el discurso histórico de los gremios fue de tipo conciliador lo que incluso despertó enconadas críticas de parte de los sectores más radicalizados del profesorado, quienes buscaban pasar a formas de lucha cualitativamente superiores.

Para finalizar, es necesario agregar que durante largos periodos el movimiento gremial de los profesores estuvo bajo la influencia del Partido Radical quien a su vez había sido uno de los procursores del Estado de Compromiso originado a mediados de los años 20. Este partido portador de una particular tradición en la historia de Chile de establecer alianzas de gobierno con la derecha y con la izquierda, se relacionó con la clase obrera chilena a través de su influencia en los gremios de maestros y de empleados públicos, y con la clase empresarial a través de las fracciones masónicas ubicadas en la supraestructura del Estado (tribunales de justicia, universidades, gobiernos). Sin embargo al producirse la crisis en la institucionalidad chilena, hacia finales de los años 60 y que implicó además el fraccionamiento de casi todos los partidos políticos, el Partido Radical quedará dividido en, a lo menos, tres grupos los cuales terminarán, por efectos también del régimen militar, casi desapareciendo. El nuevo gremio de maestros que surge bajo el régimen militar ya no tendrá el sello del radicalismo sino de la pragmática alianza de marxistas y demócrata-cristianos. Sobre las complejas relaciones entre este gremio y el régimen militar doy cuenta en la segunda parte de este trabajo.

1.4 La falta de consensos educacionales bajo el gobierno de la Unidad Popular

He considerado necesario dedicar especial atención a este periodo pues aquí es cuando con mayor nitidez comienzan a perfilarse las fisuras que posteriormente desencadenarán la

crisis estructural del sistema político chileno que culminará con el quiebre del Compromiso Histórico

En efecto, bajo la presidencia del socialista Salvador Allende, Chile experimentó en lo que va corrido del presente siglo, uno de los momentos de agitación social más intensos de su historia.

Desde una óptica internacional diría que tanto partidos políticos, movimientos sociales y gobiernos de todos los continentes estuvieron interesados en prestar atención al experimento político de la Unidad Popular el que, a decir de muchos, y del propio Allende, era único en la historia de Chile y de Latinoamérica.

La originalidad principal de este gobierno podría resumirla como una intención de construir una sociedad socialista dentro de los marcos de una estructura constitucional definida por gran parte de la coalición de adherentes al nuevo régimen como burguesa.

Una segunda característica significativa era la disponibilidad de entendimiento entre marxistas, cristianos, laicos y masones. Todos ellos confluyeron en un programa el cual ofrecieron al país y que el presidente Allende sintetizó en la frase: „vía chilena al socialismo“.

La tercera originalidad era resultado de las dos primeras y radicaba en que, para lograr este objetivo, no recurrían a las formas insurreccionales de lucha sino a los mecanismos tradicionales existentes en la sociedad : las elecciones.

En este periodo se agudizaron aceleradamente los conflictos entre los actores sociales en pugna. La sociedad civil, ya trizada por los conflictos bajo la experiencia democratacristiana, se divide radicalmente entre partidarios y opositores al régimen del presidente Allende.

Las instituciones son tensionadas y se ven envueltas en una diáspora de interpretaciones jurídicas las que, lejos de educar políticamente a la población, la confundieron con argumentos y contra-argumentos provenientes de uno y otro bando. En muchos casos dichas argumentaciones estuvieron revertidas de una retórica demagógica que causó un daño considerable a la cultura política del país.

En lo educacional el gobierno de la Unidad Popular, intentó llevar adelante una reforma que proponía cambios cualitativos y cuantitativos en el sistema nacional de enseñanza y que se deja resumir en un modelo denominado Escuela Nacional Unificada (ENU).

Habría sí que decir antes que, en el periodo del presidente Eduardo Frei (1964-70), se realizó una reforma educacional que cambió varias de las estructuras del modelo, ampliando la cobertura escolar y modernizando los planes y programas de estudio. Todo ello logrado con una vasta oposición de los docentes quienes se mostraron mayoritariamente insatisfechos con los cambios educacionales del régimen demócratacristiano.

El modelo educacional propuesto por la Unidad Popular era algo distinto. Se basaba en el concepto de Escuela Nacional Unificada que encontraba, según I. Núñez, sus orígenes en un proyecto educacional largamente discutido en la UNESCO en los años 60. Para el autor Pedro Castro (Educación en Chile de Frei a Pinochet) se inspiraba en la experiencia soviética llamada „escuela del trabajo“ la que a su vez procedía de la concepción de Carlos Marx acerca de la „educación polivalente“. Para los demócratacristianos chilenos, dice el mismo Castro, el experimento se acercaba bastante a la ley de reforma educacional del Perú la cual gozaba de significativa influencia en los medios informativos chilenos. Para los gremialistas de la Universidad Católica de Santiago, la ENU era una copia del modelo educacional vigente en la RDA.⁶³

El estudio y adaptación a la realidad chilena del proyecto fue hecho por una comisión técnica integrada por funcionarios del Ministerio de Educación, del Centro de Perfeccionamiento del magisterio en consulta con los diferentes gremios de maestros que en el país existían.

En este concepto de escuela se establecían planteamientos teóricos que tenían como objetivos crear instancias escolares más participativas y democráticas. La tesis central de este modelo era que, el sistema educativo chileno para poder desarrollarse tenía que estar adaptado a las necesidades económicas, sociales y culturales del país. La reforma educacional de la Unidad Popular se proponía cambiar la concepción enciclopedista de la educación por una de mayor pragmatismo que valorara también el trabajo manual como

63 Ver Pedro Castro, Ob. cit., pp. 134 -135 y FEUC, ENU, El control de las conciencias, Santiago., 1973, pp. 28-29

actividad dignificadora y creadora del ser humano. En ese contexto el educando debía vincularse, en cierta etapa de su formación, a los centros productivos, sea en las ciudades o en las regiones rurales del campo y del desierto, de manera de provocar una familiarización con las formas diversas de trabajo manual-productivo. Dicha medida considerada por sus precursores como paso importante en el cambio cualitativo de la educación, fue considerada por los detractores del modelo⁶⁴ como una acción de desarraigo del niño de la escuela, para obligarles a trabajar en granjas o fábricas, incentivando así un proceso de proletarización en la población escolar.

En el fundamento político de la reforma propuesta por el gobierno de Salvador Allende se partía de la premisa que, en el seno de la humanidad, coexistían dos concepciones económicas y de vida antagónicas. Aludían al respecto al sistema capitalista, el cual según la apreciación hecha por los teóricos de la reforma, „vivía la mayor crisis de su historia“⁶⁵ al mostrarse incapaz de resolver sus propias contradicciones de crecimiento y que, para poder mantener su estructura hegemónica en el mundo tenía que agudizar las relaciones de explotación con los países subdesarrollados.

Por otro lado aludían al sistema socialista el cual:

„(...)en pocas décadas ha evidenciado su capacidad real de superar las contradicciones fundamentales del capitalismo sobre la base del establecimiento de relaciones de cooperación entre los países“.⁶⁶

En el análisis estructural que los partidos políticos que conformaban el bloque de la Unidad Popular hacían de la sociedad, la definían como inmersa en una profunda crisis. El sector educacional se veía en consecuencia directamente afectado puesto que en él se cristalizaban todas las contradicciones existentes en la población. La educación en Chile, según los expertos, era deficiente, discriminatoria y jerarquizante lo cual, a su vez, era un impedimento para imaginarse y desarrollar la sociedad del futuro, la sociedad que debía proyectarse hacia la construcción del socialismo en los inicios del año 2.000.

La efervescencia, por más y mejor educación, era uno de los rasgos distintivos del periodo que encontraba significativa audiencia tanto en la población civil como en los gremios de docentes e incluso en los estudiantes secundarios y universitarios. En la idea de más y

64 Entre otros Patricio Aylwin (ex-presidente de Chile), Jaime Guzmán (ideólogo del gremialismo), Juan de Dios Vial (ex-rector de la Universidad Católica), Javier Leturia (ex-presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica)

65 Superintendencia de Educación Pública, Informe sobre Escuela Nacional Unificada, pag.1, Santiago, Diciembre 1972

66 Superintendencia de Educación Pública, Informe sobre Escuela..., Ob. cit. pag. 1

mejor educación coincidían las más variadas corrientes de opinión. Las interrogantes de fondo eran: qué tipo de reforma había que implementar, cómo, y de dónde saldrían los recursos.

Para los partidarios del régimen, la existencia de un modelo educacional erigido sobre la base de una estructura social fraccionada y de corte piramidal, significaba un claro impedimento para poner en movimiento los fundamentos de la sociedad del futuro. Reconocían que había mayor participación por parte de la población en el proceso educativo, también reconocían un proceso de modernización en marcha iniciado por el gobierno demócratacristiano y una forma distinta de pensar y hacer; pero las transformaciones económicas y sociales que se anunciaban ameritaban un cambio cualitativo profundo, que abarcara no sólo a una parte sino a todo el sistema nacional de enseñanza.

La crítica a la estructura educativa vigente apuntaba también a que éste no entregaba los técnicos ni los obreros calificados necesarios para hacer posible el desarrollo de las fuerzas productivas, requisito insoslayable en la estrategia de cambio social en cualquiera de los países subdesarrollados.

Tampoco el sistema preparaba, según los precursores de la ENU, profesionales idóneos que aportaran creativamente a las propuestas de modernización; por el contrario éstos se integraban a funciones burocráticas o bien asumían cargos en el esquema mercantilista de la economía.

La dinámica social del periodo contrastaba, a juicio de los defensores de la ENU, con una educación enciclopedista, acrítica con los fenómenos sociales, elitista en lo social, improductiva en lo económico y pasiva en el sentido de ser un factor observador y no provocador de cambios. Poco era entonces lo que la nueva sociedad podía esperar de esta educación.

Siendo el sistema educativo incapaz de renovarse por si mismo, los planteamientos substanciales acerca del modelo educacional debían entonces provenir, en opinión de los reformadores, de la propia comunidad interesada, vale decir, de sus usuarios. De esta manera podía entenderse el gran debate que en torno al tema, en todos los estamentos organizados y representativos del país, se desarrolló.

El programa de la coalición gobernante partía también de la premisa que en Chile había estancamiento económico y pobreza generalizada. Agregaban los reformadores que miles

de empleados, profesionales y empresarios estaban, debido a la estratificación rigurosa del sistema, impedidos de ascender en sus expectativas económicas y sociales:

Rezaba el programa de la Unidad Popular que:

„Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo (...) y cabe por tanto el reemplazo, la destrucción del orden vigente por un nuevo ordenamiento social al cual se llegará mediante el cumplimiento de dos metas básicas: preservar, hacer más efectivos y profundos los derechos democráticos y las conquistas de los trabajadores, y transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder.“⁶⁷

También en el programa se insiste en la transformación educativa, especificando que ésta será una tarea, más que de técnicos y pedagogos, de toda la comunidad. El congreso del SUTE de Diciembre de 1971 en el cual participan todas las organizaciones representativas de la sociedad, sirve como marco referencial para aclarar muchas de las proposiciones, dudas, críticas y planteamientos disidentes relacionados con la reforma educacional en estudio.

El congreso se caracterizó por su amplitud pero también por una politización desmedida de sus delegados lo que desdibujó en parte la perspectiva estratégica de los cambios. Dicho congreso fue, si es que así pudiera decirse, una proyección del gran debate político del Chile de 1971.

Perfil y caracterización de los objetivos generales de la reforma

En los inicios de 1970 los reformistas adscritos a la Unidad Popular; parten de la base de que el proceso de cambios educacionales deberá ser, progresivo, continuo y sistemático y estará enmarcado en un contexto de democratización social del país que considere los valores políticos, sociales y culturales de la nación.

Estas consideraciones a su vez no son absolutizadas como verdades únicas sino son componentes dinámicos y contradictorios de un proceso revolucionario en marcha.

La ENU, dicen los representantes del gobierno, será nacional:

„(...) porque se inspira fundamentalmente en la idiosincrasia del pueblo y exaltará los valores de la chilenidad dentro del marco de la soberanía y del respeto a la voluntad libertaria de los chilenos que luchan por la emancipación del colonialismo ideológico cultural y económico. (...) Sera también unificada porque considera la cultura como un conjunto orgánico de procesos

67 Programa electoral de la Unidad Popular, Ediciones Universidad Técnica de Chile, Santiago, 1970

vitales que habrán de integrarse como un todo en la personalidad de los estudiantes y chilenos en general.⁶⁸

Agregan que será democrática en un triple sentido:

Ofrecerá una amplia gama de oportunidades educacionales y culturales a todos los componentes de la comunidad, asegurará la permanencia en la escuela, la continuidad de estudios y promoverá la participación de los usuarios en la determinación de los objetivos educacionales.

El nuevo tipo de educación será también productiva porque estimulará el trabajo como valioso factor socializador y formativo de la juventud. En este sentido se aspira a cambiar la mentalidad consumista e individualista de los educandos por otra productiva y solidaria. Los reformadores proponen que en la nueva escuela se incentive el carácter científico-tecnológico de la enseñanza porque ellos son componentes ineludibles para incorporar a las *masas* a las tareas de desarrollo.

En lo referente a los objetivos generales, la ENU debía contribuir a la formación de una sociedad socialista, promoviendo la formación de un hombre armónico, plenamente desarrollado, capaz de liberar al país de su retraso y configurar una sociedad justa, soberana y libre.⁶⁹ Además, decían los teóricos de la reforma, la ENU debía promover la unificación del pueblo en torno a los grandes objetivos del proceso revolucionario en marcha.

Desde otra perspectiva la ENU debía estimular en los alumnos la creación de hábitos, opiniones, actitudes y conductas valorativas hacia el trabajo colectivo, la convivencia democrática y el compromiso social, favoreciendo el contacto directo con los trabajadores. También debía acentuar el valor del trabajo físico como componente substancial de la nueva sociedad. Entendido así, cada chileno debía convertirse en una agente innovador y promotor de cambios sociales.⁷⁰

Otros principios importante enunciados en los objetivos específicos de la reforma pueden sintetizarse en los 6 siguientes puntos:

- Exaltar la nacionalidad por medio del cultivo de valores auténticos de la chilenidad, promoviendo también la relación solidaria y cultural con otros países de América Latina

68 Superintendencia de Educación, Informe ENU..., Ob.cit. pag. 13

69 Waldo Suárez, Iván, Núñez, Livia Videla, E. Peralta; Perspectiva de estructura y funcionamiento de la educación chilena, ediciones Universidad Técnica del Estado, Santiago, s/f, pp. 14-23

70 Superintendencia de educación, Informe ENU, Ob. cit. pp. 14, 15, 16

- Desarrollar en la juventud una concepción científica de la sociedad, el hombre y la naturaleza.
- Incentivar el humanismo socialista
- Desarrollar la enseñanza general politécnica de acuerdo a los planes económicos del país
- Cambiar la mentalidad consumidora propia del mundo capitalista
- Reemplazar el espíritu competitivo por uno de solidaridad social⁷¹

La estructura, organización y operacionalidad de la ENU fue otro de los aspectos que animó de manera considerable el debate; sin embargo, por la tecnicidad y lo complejo del planteo gubernamental he decidido restringir los antecedentes solamente a los tópicos que en las páginas anteriores he descrito.

La Escuela Nacional Unificada vista en la perspectiva de sus detractores

La Universidad Católica de Chile asumió, por medio del gremialismo, movimiento de corte corporativista vinculado a los partidos de la derecha, la defensa del carácter del sistema educacional hasta la fecha vigente. Al mismo tiempo puso de relieve el cúmulo de contradicciones del proyecto reformista en marcha, denunciando a la ENU como símbolo de una agresión ideológica al Estado democrático y a la sociedad librepensadora.

En un documento profusamente difundido llamado *ENU el Control de las Consciencias*, estudiantes y académicos de esta universidad entregan una argumentada opinión que sintetiza los planteamientos de una parte de la población la cual, además de no sentirse interpretada por la reforma educacional, temía seriamente por el quiebre del sistema educativo chileno el cual, decían, era una instancia de democracia y libertad que había enorgullecido a los chilenos. „El remedio es peor que la enfermedad“ llegó a decir un conocido político conservador (Francisco Bulnes) en uno de los debates en la Cámara de Senadores haciendo alusión al proyecto de democratización de la enseñanza que el gobierno había enviado a la contraloría de la república como paso previo a la implementación de la reforma.

⁷¹ Superintendencia de educación, Informe ENU, Ob. cit. pag. 15

En la introducción del documento arriba mencionado el presidente de la Federación de Estudiantes de esta casa de estudios, Javier Leturia expresa que, el informe oficial del gobierno sobre la ENU demuestra la intencionalidad de querer:

„(...)convertir la educación chilena en un instrumento de concientización política al servicio del marxismo“⁷²

lo que, según el mencionado dirigente, vulnera el Estatuto de Garantías Constitucionales.⁷³ Leturia apoya su argumentación diciendo que, el pacto constitucional establecía que la educación es una función primordial del Estado y que ésta será democrática, pluralista y no tendrá orientación oficial.

Para los detractores, la reforma educacional de la Unidad Popular, tenía un claro signo oficialista pues vulneraba los principios democráticos de libertad de enseñanza ya que como bien lo decía el proyecto, los jóvenes debían „prepararse para vivir en una sociedad socialista,. Los gremialistas se interrogaban al mismo tiempo, sobre qué pasaría con aquéllos que no suscribían esa ideología.

El manifiesto de la FEUC expresa que en verdad lo que el gobierno persigue es el reemplazo de la *educación* por un proceso de *adoctrinamiento*. En este proceso los niños irán cambiando su manera de „*hacer y de pensar*“. El marxismo, pasará a convertirse en la ideología del Estado y los maestros deberán adoptar en sus clases contenidos curriculares propios de esa ideología. En ese sentido, aseguran los opositores, los marxistas coincidirían con los fascista puesto que ambos, a partir de un concepto totalitario de gobierno, imponen medidas sin miramiento ni respeto por la pluralidad ni las minorías de ninguna especie.⁷⁴

Añaden también que la ENU es un peligroso intento por controlar las consciencias de los niños y que la propuesta del gobierno está hecha de una manera muy habilidosa porque las aspiraciones sociales que proponen despiertan un gran interés en la población. El lenguaje usado, dicen los detractores, no es altisonante ni agresivo. Hablan de *socialización, democratización; igualdad para todos; acceso a la ciencia, la cultura y a la tecnología.*

72 Federación de Estudiantes de la Universidad Católica(en adelante FEUC), ENU: El control de las consciencias, Ob.cit. pag. 13

73 Documento firmado por Salvador Allende mediante el cual se compromete ante la Democracia Cristiana chilena a respetar los pilares fundamentales del sistema político del país: educación, propiedad privada, Fuerzas Armadas, libertad religiosa, independencia de los tribunales de justicia etc. A cambio, los parlamentarios de la Democracia Cristiana votarían por S.Allende en la elección del Congreso para confirmarle como presidente de Chile. Ver: Carta Fundamental, Reforma Constitucional, Cámara de Diputados, Ley 17.398, 21.1. 1971, firmada por Salvador Allende en 1970, antes de asumir el mando de la nación.

74 FEUC, Ob. cit. pag. 20

Igualmente reiterativos resultan los conceptos: *planificación, participación, organización democrática* etc.

En contraposición a este cúmulo de aspiraciones, continúan diciendo los gremialistas de la Universidad Católica, se presenta el modelo educacional existente como *autoritario, burocrático* que no capacita laboralmente, que desprecia el trabajo, que es *antidemocrático, elitista* etc. Todo ello engarza con la misión de una *educación clasista* para reproducir una sociedad también clasista que promueva el capitalismo. La pareja de opuestos, observan los ideólogos de la Universidad Católica, está configurada por el esquema habitual: de un lado *pueblo, igualdad, aspiraciones, progreso*; del otro, *clases sociales, explotación, subdesarrollo, limitación, estancamiento*.⁷⁵

El modelo de la ENU, a juzgar por las apreciaciones legales que hacen los opositores es también inconstitucional pues propone:

„(...) un sistema nacional para la educación permanente en una sociedad de transición al socialismo.“⁷⁶

La Iglesia Católica por su parte, asumió una actitud de preocupación por lo que podría ocurrir con la educación en Chile e instó al gobierno a desistir del proyecto. Similar criterio asumieron las Fuerzas Armadas y los principales partidos políticos de oposición.

El posterior presidente de Chile, señor Patricio Aylwin hablando a nombre de su partido (PDC) por cadena de televisión el 4 de Abril de 1973 decía que:

„No estamos dispuestos a servir de comparsa para legitimar la imposición de un modelo de reforma que tal como se ha dado a conocer hasta ahora es precipitado, incompleto y manifiestamente destinado a servir de instrumento al objetivo político partidista de concientizar a los niños y jóvenes chilenos dentro del ideario del marxismo leninismo que inspira a los partidos gobernantes.“⁷⁷

Sobre la base de los antecedentes entregados, la propuesta reformista de la Unidad Popular según mi opinión, puso en tensión el centro nervioso de la sociedad civil más organizada y tradicionalista. Puestos en la disyuntiva de perder influencia en un sector que históricamente le había servido como „correa transmisora de valores,, (Núñez) y que también le había proporcionado ventajas políticas y económicas, en términos de la reproducción de una formación social estratificada, los estamentos opositores, es-

75 FEUC, Ob.cit.pp. 22,23

76 FEUC, , Ob. cit. pag. 35

77 Cit.en FEUC: ENU El control de las consciencias, Ob. cit. pag. 59

pecialmente la franja más conservadora, reaccionaron de acuerdo a sus opciones políticas planteamientos ideológicos o intereses económicos.

El intento de implementación de la ENU contó con un respaldo social significativo, especialmente entre los sectores populares y gremios de trabajadores y de docentes ; no obstante este proyecto careció de un consenso social mayoritario que pudiera haber facilitado su aprobación.

El contenido ideologizante de la ENU y los objetivos de *formación del hombre nuevo para la sociedad socialista* le restaron el consenso a una reforma educacional que era necesaria y que tuvo un mérito muy original: haber sido ampliamente discutida en las bases y en todas las instancias de la sociedad que tenían que ver con educación. Y justamente en el marco de esta discusión irrumpe un robusto movimiento contestatario, gestado en la Universidad Católica el que, en una sociedad marcadamente politizada, supo desentrañar las contradicciones del informe ENU, poniendo al descubierto, a la luz de una lectura crítica e interpretativa, ciertas evidencias políticas e ideológicas que la reforma dejaba entrever, y que por cierto despertaron la desconfianza en una franja importante de la población chilena y de su intelectualidad.

El ambiente político nacional extremadamente discursivo y caracterizado por una pérdida de la histórica capacidad de diálogo, fue escenario propicio para una confrontación que adquirió todos los matices, incluso el de la violencia, en un sórdido afán por imponer cada uno sus argumentos.

En la prensa y demás medios informativos de la época se habló de un „zarpazo a la consciencia de los niños“, de una „violación del Estado de derecho“, de una intención de querer convertir las escuelas en „granjas de trabajo“ con „comisarios políticos en vez de profesores“ etc.

Por otro lado se habló de „impedir la democratización de la educación“, de „usufructuar con la ignorancia de la gente“ o de „querer defender mezquinos privilegios educacionales.“ Considerando que no habían puntos de convergencia y que incluso el propio jefe de la Iglesia Católica, Cardenal Raúl Silva Henríquez se mostraba preocupado por esta reforma, el presidente Allende, mostrando una vocación democrática que desconcertó a sus adversarios manifestó al jefe de la Iglesia Católica, respondiendo a una carta que éste le enviara, su decisión de abandonar el proyecto:

„Señor Cardenal, si la iglesia opina así, yo considero totalmente desafortunado este proyecto de la ENU. Esto ha sido una torpeza y yo me comprometo a que será postergado y en definitiva no se promulgará si no tiene el acuerdo más amplio“.⁷⁸

Efectivamente el presidente Allende decidió no insistir en la idea de la ENU. La opinión de la iglesia al parecer fue para él decisiva. A ello se agregaba la solución de otros problemas mucho más acuciantes y de difícil tratamiento todo lo cual le impidió mantener abierto un debate nacional que solamente conducía a la separación de la ciudadanía. Pero más que eso, necesario es valorar la respuesta del presidente Allende al jefe de la Iglesia Católica: „no se promulgará si no tiene el acuerdo más amplio“ . En esta frase está reflejado todavía el espíritu de compromiso que será roto por los militares poco tiempo más tarde.

78 Cardenal Raúl Silva Henríquez, Memorias, pp. 194 -195 cit. en Monica Echeverría., Antihistoria..., Ob.cit. pag. 321

PARTE II

2 EL Régimen Militar y las diversas manifestaciones del quiebre del Compromiso Histórico en el marco educacional, sindical y en las instituciones de la sociedad civil

En la segunda parte de la investigación me he ocupado especialmente de clarificar el concepto quiebre que en otros términos puede interpretarse también como ruptura o término de una tradición pluralista que se había mantenido en la sociedad chilena y que era un componente importante en la cultura política del país.

Como ejemplos representativos de este quiebre que señalo he seleccionado algunas medidas y reformas impuestas por el régimen militar en el sector educacional a las cuales se agrega un breve capítulo que, por su trascendencia, tiene también un enorme significado en la configuración del quiebre del Compromiso Histórico: la Constitución de 1980.

En el marco de las medidas y reformas educacionales seleccionadas he considerado la prohibición del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación y en su reemplazo la creación de un Colegio de Profesores nominado por las autoridades de gobierno.

También he considerado la imposición sin consulta de un Estatuto de la Carrera Docente que había sido, en el transcurso de los últimos cincuenta años, una gran aspiración del magisterio chileno y que, por razones diversas, nunca había logrado concretizarse. Posterior a dichas medidas y en el mismo estilo, el régimen militar implementa una reforma universitaria que entre otras cosas reduce a doce las carreras académicas, deja a las pedagogías fuera de la universidad, desarticula casi en dos tercios la capacidad de matrícula de la Universidad de Chile, disminuye considerablemente el presupuesto para la educación superior y determina el criterio de autofinanciamiento lo que significa, para los sectores de la clase media y baja, grandes dificultades para mantenerse dentro del sistema. A ello se agrega el otorgamiento de licencias para crear universidades privadas las que, en pocos años proliferan en el país ofreciendo estudios superiores a aquellos que por sus bajas calificaciones o bajos puntajes en la Prueba de Aptitud Académica no pudieron ingresar a las universidades tradicionales.

Como último ejemplo representativo en esta parte del trabajo incorporo la reforma educacional que privatizó y municipalizó la educación pública provocando con ellos una ruptura definitiva entre el sector docentes y el régimen militar.

2.1 Algunas reflexiones sobre Compromiso, Continuidad y Quiebre en la sociedad chilena

Vamos a entender por quiebre la interrupción (a través de un cambio estructural o una acción violenta) de un proceso político y educacional que se había hecho continuo en la historia del país. Sin embargo, para poder entender mejor el concepto quiebre es preciso analizar primero la línea de continuidad institucional del país.

Al respecto debo decir que el país se había mantenido por cerca de 150 años con una cierta estabilidad política. Dicha estabilidad se había visto interrumpida en tres ocasiones por la efervescencia social: En 1830, en el así llamado por los historiadores, „periodo de anarquía“, en 1892 con la guerra civil entre conservadores y liberales; y hacia mediados de los años 20, cuando, producto de una gran inestabilidad gubernamental se suceden, en un periodo histórico relativamente breve (1923-33) diversos tipos de regímenes los cuales dan origen a experimentos políticos de variada índole. En este periodo se cambia la Constitución Política del Estado (1925) y se termina con la llamada „República Parlamentaria“.

Pese a los conflictos enumerados, la línea de continuidad hizo posible que se mantuvieran relativamente incólumes las instituciones fundadas ya en el siglo pasado. Los gobernantes respetaron determinadas formas de convivencia, planteamientos educacionales y formas de dirimir los conflictos sociales en los cuales la violencia quedaba excluida. Esto es justamente lo que ya he denominado *política de compromiso*.

La manera de lograr estos acuerdos se hacía, como bien lo expresara el profesor Raúl Atria, „a la chilena“, o sea „de a poquito“, para no forzar a los actores sociales en conflicto a confrontarse con situaciones extremas. Este ir „de a poquito“ era también un componente garante de la paz social en un esquema en el cual, según el mismo profesor Atria, regía una ley fundamental: participaba de las benevolencias del Estado solamente quienes se organizaban. De esta manera el Estado reglamentaba los niveles de participación y al mismo tiempo comprometía la adhesión de los civiles a una estructura que, aunque deficiente, tenía también el mérito, como institución, de asegurar una convivencia nacional

pacífica sobre la base del otorgamiento de ciertos derechos sociales y libertades públicas a la población.

Así resulta que casi en el transcurso de casi todo el siglo XX, hasta 1973, no se encuentra casi ningún gobierno que se hubiera hecho del poder por la fuerza, o que haya resultado exclusivamente de la decisión de mandos militares.

En el plano educacional, los cambios que los gobiernos implementaron en el presente siglo, apuntaron específicamente a tres objetivos: la ampliación del sistema a través de la ley de enseñanza primaria obligatoria, el fortalecimiento del Estado sobre el sistema educativo con el objeto de asegurar su gratuidad y la modernización de la educación por medio de reformas técnico pedagógicas que intentaban hacer de ella un proceso de humanización y liberación del hombre.

Los sectores de la clase media quienes ya en los primeros lustros del presente siglo lograron una gran presencia en la administración del Estado y junto con ello en la administración del sistema educacional, son quienes asumen la función conductora de este proceso. Este estamento, consciente de no poder ser individualmente clase dominante pero identificados con ésta, buscan puntos de convergencia con los obreros organizados de manera de dar mayor peso a sus reivindicaciones. Esta política de acercamiento le llevará, a mediados de los años 20 a desplazar a la vieja aristocracia de los mandos políticos gubernamentales de dirección; no obstante, el poder económico de las elites, así como su influencia en la supraestructura del Estado (Juridicidad, Fuerzas Armadas) quedaba asegurado del peligro de políticas estatistas.

En los años 60 se plantean, tanto en círculos gubernamentales como de la oposición, reformas estructurales que buscaban cambiar en parte el perfil de un sistema educacional el cual, a decir de muchos, ya no marchaba de acuerdo a los grandes cambios y adelantos del mundo, como tampoco a las necesidades de la población. Pese a las diferencias de ideas sobresale en todos los intentos la disponibilidad que tanto gobernantes como instituciones no gubernamentales, (y entre éstas especialmente los maestros) tuvieron para dialogar, estudiar y discutir las propuestas.

En cuál punto de la historia de Chile se visualiza entonces el quiebre?

En mi opinión, en el hecho concreto de que los militares, entronizados en el poder (1973) imponen una serie de reformas políticas, económica y educacionales que no corresponden

a la tradición de diálogo y coexistencia pacífica que había existido en el país hasta ese momento.

Para analizar las particularidades del Estado que nace de la Constitución de 1925 y que actúa como marco a la implementación del Compromiso Histórico, me apoyaré en la hipótesis de Raúl Atria.

Atria parte de la premisa de que:

„El centralismo del Estado se alimenta de un proceso profundo que recorre la fibra misma de la estructura social del país y que consiste en el disimulo del clasismo en las relaciones de las clases sociales en Chile“.⁷⁹

En efecto para sectores de las más variadas ideologías y credos, la diferencia social, no pasa a ser nada más que una cuestión fortuita, circunstancial, e incluso independiente de las personas. En este contexto, el Estado chileno que surge de la Constitución de 1925, se presenta en sus diversas facetas institucionales como una supraestructura neutral, que actúa contradictoriamente al margen de los intereses individuales de las personas pero al mismo tiempo como instancia protectora de los intereses comunitarios. Ayudan a la generación de la imagen recién descrita la existencia de Tribunales de Justicia a quienes la Constitución declara independientes del poder político y autónomos en la aplicación de sus resoluciones y la Iglesia Católica, que busca conciliar la armonía entre los ciudadanos, por sobre sus diferencias sociales.

En opinión de Atria:

„La acción del Estado especialmente, en el campo de la política educacional, ya desde mediados del siglo pasado, y luego, después de 1925 en materia de salud y de seguridad social, le confieren a éste un rol de gran importancia como disimulador de las relaciones de clase en la sociedad chilena permitiendo (...) la coexistencia de sectores sociales que se encuentran en la arena política democrática de una sociedad que está muy marcada por las diferencias de clase.“⁸⁰

Para Atria, los estratos sociales en el Chile del siglo XIX y XX están claramente delimitados, y no sólo eso, también lo están sus contradicciones y sus pugnas que en el transcurso de la historia van dando origen a grandes conflictos entre actores que defienden intereses diferentes. Según el autor la segmentación clasista tiene expresiones significativas en el lenguaje el cual pasa a convertirse en un recurso que ayuda aún más a disimular los conflictos y las diferencias sociales:

79 Raúl Atria, Reflexiones para pensar el Estado en Chile en Desafío del Estado en los años 90, CPU, Santiago., 1991, pag. 68

80 Raúl Atria, Reflexiones para..., Ob. cit. pag. 68

„(...) si no hubiera habido una influencia tan marcada del Estado, como articulador de las relaciones de clase, probablemente se hubiera hecho muy difícil, la convivencia social, desde las épocas más tempranas del desarrollo nacional.“⁸¹

El componente político pasa a ser, en la tesis del autor, la principal actividad encargada de reforzar las instituciones del Estado. En este esquema los individuos se organizan y participan políticamente en las decisiones del Estado y, al tiempo que lo fortalecen, provocan ciertas formas de movilidad e integración social.

Otra importante contribución del Estado centralizado, a juicio de Atria, es:

„(...) la consolidación del sistema social y político de Chile a partir de mediados del siglo pasado y muy acentuadamente a partir de la década de 1920 en adelante, al haber hecho posible la incorporación graduada de grupos sociales que van surgiendo a medida que se transforma la estructura productiva del país.“⁸²

Es claro que esta incorporación graduada dice el autor:

„(...) se hace a la chilena, es decir „de a poquito,, sin que haya precipitaciones“

El factor que permite lo recién mencionado es el Estado centralizado que actúa en el marco de un sistema político en el cual todos sus actores colaboran a la afirmación y construcción progresiva de este centralismo. Para la incorporación graduada, agrega Atria, rige una especie de regla de oro del sistema: „participa el que se organiza,, razón por la cual solamente los grupos organizados:

„(...) son capaces de entrar al reparto de los beneficios del sistema el cual a su vez está administrado por el Estado centralizado.“⁸³

Para Atria:

„La clave de este proceso radica en que, junto al Estado centralizado, con un importante aparato burocrático protagónico en la constitución y desarrollo de la sociedad chilena, se genera una estructura política policéntrica, protagonizada por los partidos políticos que en su conjunto conforman una estructura pública, no estatal, articulada con el Estado en el marco de un sistema político relativamente fluido en la conformación de sus alianzas, y que por ello, no excluye a ningún partido de las posibilidades de acceder al control de la gestión del Estado“.⁸⁴

Este último componente es, a mi parecer, uno de los factores estabilizadores de la democracia chilena puesto que, todas las corrientes políticas de cierta relevancia podían acceder a cargos en la administración del Estado e incluso todas, en diferentes periodos,

81 Raúl Atria, Reflexiones para..., Ob.cit. pag. 68

82 Raúl Atria, Reflexiones para..., Ob. cit. pag. 68

83 Raúl Atria, Reflexiones para..., Ob.cit. pag. 68

84 Raúl Atria, Reflexiones para..., Ob.cit. pag. 68

accedieron al gobierno para desde allí implementar sus propuestas en los diversos ámbitos de la vida nacional.

Desde luego, continúa Atria:

„La articulación de todos estos factores supone un manejo fino y complejo de los instrumentos y recursos de poder en el sistema político. El gran articulador en el caso chileno es el régimen político que se instaura a partir de los años 20.“⁸⁵

No obstante este sistema, afianzado en el buen funcionamiento de los partidos políticos tiene también su punto débil y es que:

„Cuando éstos entran en crisis (posiblemente hacia, finales de los años sesenta, ya todos los partidos, habían experimentado, sus propias crisis, como actores políticos), se inicia el proceso de desarticulación de la forma histórica que tomó el relacionamiento del Estado con la sociedad en Chile bajo el régimen democrático.“⁸⁶

Para el profesor Rafael Echeverría los rasgos distintivos del proceso político chileno en el presente siglo podrían resumirse en tres componentes básicos:

- La ausencia de un bloque social capaz de hegemonizar de manera estable y de acuerdo a sus intereses la conducción del proceso
- Un significativo nivel de concordancia de parte de las diferentes clases sociales en relación al modelo de desarrollo
- El establecimiento de determinadas normas para sancionar los conflictos de intereses entre las clases; normas que hacen del propio Estado el ámbito principal de resolución de los conflictos.“⁸⁷

De estos planteamientos acerca del carácter del Estado chileno, puedo concluir que, la particularidad del proceso chileno en la configuración del Compromiso Histórico estuvo determinada por la incorporación de todas las corrientes políticas representativas a las funciones de administración del Estado. En dicha incorporación queda demostrada la incapacidad de las fuerzas políticas de proyectarse individualmente como alternativa de gobierno. La coalición es el estilo más recurrido en las diferentes administraciones posteriores a la Constitución de 1925 para acceder al poder, lo que a su vez facilita enormemente la vigencia del Compromiso Histórico. Resultado de esta peculiaridad es la

85 Raúl Atria, Reflexiones para..., Ob. cit. pag. 68

86 Raúl Atria, Reflexiones para..., Ob. cit. pag. 69

87 Rafael Echeverría, Política educacional y transformación del sistema de educación en Chile a partir de 1973, Edit. revista educacional, Universidad Autónoma, México, Abril-Junio, 1982

aparición y fortaleciendo de un Estado que busca disimular los conflictos sociales al tiempo que se transforma en empresario, árbitro y benefactor en las relaciones capital - trabajo.⁸⁸

Coincidió con el profesor Atria en que esta modalidad funcionó con altibajos, hasta que los partidos que la sustentaban entraron en crisis. Hacia la década de los años sesenta, todos los partidos que actuaban en la política chilena enfrentaban no solamente serios problemas orgánicos de unidad sino también ideológicos y de identidad. Dichos conflictos eran por un lado el resultado de múltiples desentendimientos para enfrentar las pugnas sociales, y por otro la influencia en el país de conflictos ideológicos internacionales. A esto se agregaba la manera cómo cada partido evaluaba la incorporación de los nuevos agentes sociales que se incorporaban al debate con un discurso mucho más radicalizado.

Así es como se suceden en el corto periodo de 10 años divisiones y subdivisiones en todas las organizaciones políticas las que repercutieron en el debilitamiento de un Estado que era resultado, (según Atria, Echeverría, Núñez) del compromiso entre los agentes políticos y sociales en pugna.⁸⁹

Resultado de esta crisis es la consecuencial bancarrota del Estado democrático chileno el cual se vio cruzado por dos fuegos. Por un lado el conservadurismo político, desechando el carácter de este Estado que había hecho posible, con el beneplácito según ellos de la Democracia Cristiana (o sea, el centro político), el ascenso al gobierno de los grupos marxistas; y por otro, la izquierda marxista que desconfiaba de un Estado que a su entender era clasista y discriminatorio.

De esta manera entonces creo que la gran polémica al inicio de los años setenta no se centra solamente en la búsqueda de soluciones a los problemas naturales de desarrollo del país, sino también, en una discusión acerca del carácter y vigencia del Estado. En esta

88 El Estado es empresario porque está obligado a contratar a miles de empleados para integrarlos a su actividad productiva y de servicios. Es árbitro porque debe mediar entre intereses privados empresariales y sectores asalariados. Y es benefactor porque parte importante de su presupuesto nacional debe destinarlo principalmente a educación, salud, vivienda y otros servicios públicos con los que se beneficia la población.

89 En 1960 la Derecha se encuentra dividida en dos partidos Conservador y Liberal, en 1965 se produce una división en el PC a raíz de la purga internacional chino-soviética y a la fundación en Chile del Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR que desechaba las elecciones como vía de acceso al poder por parte de los trabajadores. En 1967 se divide el PS el cual expulsa a su secretario general junto a varios parlamentarios y el Partido queda trizado por una nueva división ideológica; en 1969 se divide el PDC dando origen a un movimiento de inspiración cristiano-marxista denominado Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) de destacada presencia en el ámbito universitario y de intelectuales. Poco después se vuelve a dividir dando origen al partido Izquierda Cristiana de similares características al MAPU. En 1970, a raíz de la elección presidencial el Partido Radical también queda dividido en a lo menos tres fracciones: Partido Radical, Partido de Izquierda Radical y Democracia Radical.

coyuntura los partidos políticos comienzan a levantar un discurso ideologizado que tensiona sobremanera su propia capacidad de diálogo.

La irrupción de las Fuerzas Armadas, ahora como agentes políticos protagónicos, cambia completamente el carácter de este Estado y rompe definitivamente con la cultura del diálogo.

Uno de los valores principales del Compromiso Histórico: la exclusión del uso de la violencia como forma de dirimir conflictos sociales encuentra su fin cuando los militares bombardean la casa de gobierno y al ocuparla, encuentran al presidente muerto. En ese mismo instante se abre en Chile un proceso de desentendimiento que culminará 17 años más tarde.

Prácticamente todas las corrientes de opinión, aun cuando mantienen serias diferencias en la interpretación de los hechos, coinciden en que el periodo 1973-1989, corresponde a uno de los más conflictivos en la historia de Chile en lo que va corrido del presente siglo.

En mi opinión ha existido una clara tendencia en muchos investigadores chilenos a analizar los fenómenos subjetivamente, de acuerdo a la posición política que tenían y a la actitud que se tuvo con los regímenes del presidente Salvador Allende y del general Augusto Pinochet.

También he podido observar que en la dirección de las instituciones de la supraestructura del Estado se manifiesta un evidente fraccionamiento. Sus personeros representativos hacia el periodo, están influidos y divididos por los hechos sociales y políticos que en el país ocurrían. Expresión de esta división institucional es por ejemplo la aparición de un movimiento dentro de la Iglesia Católica en el cual sacerdotes e intelectuales vinculados al clero tratan de acercar al pueblo cristiano con las ideas del socialismo científico⁹⁰; la actitud de los Tribunales de Justicia, representados por la Corte Suprema que tuvo serios roces con el gobierno de Allende en la interpretación de la ley y que reconoció presurosamente a la Junta Militar de Gobierno en el momento en que ésta rompía la constitucionalidad chilena; la actitud de las Fuerzas Armadas las que, aun cuando se mantuvieron en la primera fase del gobierno de Salvador Allende neutrales y apegadas a

90 El movimiento Cristianos para el Socialismo reunió a decenas de sacerdotes quienes realizaron múltiples encuentros, en forma de seminarios, simposios, foros etc. Publicaron además manifiestos y se ocuparon de realizar trabajo social en las poblaciones el cual contó con el apoyo entusiasta de jóvenes católicos vinculados al movimiento estudiantil y sindical de la época. En cierta medida este movimiento fue una expresión más politizada de la así llamada "Teología de la liberación".

la Constitución, en su interior se expresaron serias discrepancias con el gobierno de la Unidad Popular.⁹¹

Finalmente debo agregar que el Parlamento, el cual se encontraba bajo mayoría de los partidos Demócratacristiano y Nacional, ejerció una combativa oposición, poniendo en serias dificultades los proyectos de la Unidad Popular. Entre los años 1970-73 los ministros de Estado y el gobierno, estuvieron bajo el acoso del Parlamento el cual bloqueó incontables iniciativas legislativas y destituyó repetidamente a ministros por, según rezaban las acusaciones, extralimitarse en sus funciones o no ajustarse al Estado de Derecho. A través de esta práctica se entorpecía la función gubernamental y el presidente Allende encontraba cada vez mayores problemas para retomar el diálogo con la oposición y con una parte de sus propios seguidores quienes exigían „mano dura“ contra los opositores.⁹² Una suma de estos y otros factores, según mi parecer, fueron entrapando un diálogo⁹³ que alcanzó un punto culminante cuando la Cámara de Diputados aprueba, por mayoría, una resolución expresando que el gobierno „ha quebrantado la Constitución política del Estado.,“⁹⁴

91 Estas discrepancias que al parecer estuvieron relativamente encubiertas en las paredes de los cuarteles, quedarán al descubierto no solamente al momento del Putsch sino cuando el general Pinochet en posteriores declaraciones, ya con la investidura de jefe de Estado, dé cuenta en su libro "Memorias" sobre la acción conspirativa de oficiales desde el momento mismo en que Salvador Allende asume la presidencia del país. Detallada información al respecto en Carlos Prats: Memorias edit. Pehué, Ob. cit.

92 Ver Carlos Prats, Memorias Ob. cit. *Nota:* Como ha de saberse el ex comandante en jefe del ejército chileno participó como Ministro del Interior, de Defensa y llegó a ser vicepresidente de la república. En su condición de ministro y jefe del ejército tuvo que relacionarse con todo el espectro político del país. Su objetividad hacen de sus "Memorias" una interesante obra de consulta sobre el periodo 1970-73.

93 Al respecto ver Arturo Valenzuela, El quiebre de la democracia en Chile, Flacso, Santiago, 1989, pp. 219-280

94 Una apretada síntesis de este histórico acuerdo de la Cámara de Diputados en contra del gobierno del presidente Allende puede explicitarse en los siguientes puntos:

1. *Atropello de funciones del Parlamento*
2. *Sistemática campaña de desprestigio contra la Corte Suprema*
3. *Protección a delincuentes pertenecientes a partidos de gobierno mediante indultos o incumplimiento de órdenes de detención.*
4. *Violación de dictámenes de la Contraloría de la República*
5. *Presiones económicas para impedir la libertad de información*
6. *Violación del principio de autonomía universitaria al impedir la extensión de canales televisivos universitarios a todo el país*
7. *Violación del principio de reunión de ciudadanos que no son adictos al régimen mientras se permiten demostraciones de grupos a menudo armados para que éstos se apoderen de calles y caminos amedrentando a la población*
8. *Atentado contra la libertad de enseñanza al pretender imponer un modelo de escuela que persigue la concientización marxista.*
9. *Violación del derecho de propiedad privada al permitir o amparar más de 1. 500 ocupaciones ilegales de predios agrícolas así como industrias y centros comerciales para luego requisarlos e incorporarlos al área de propiedad estatal*
10. *Represión a los trabajadores por promover protestas contra el gobierno*
11. *Amparo de grupos sediciosos que actúan bajo el nombre de Comandos Comunales, Juntas de Abastecimientos y Precios, Consejos Campesinos, Comités de Vigilancia, etc. destinados todos ellos a crear un Poder Popular que contribuye poderosamente al quiebre del Estado de Derecho.*

Fuente: Cámara de Diputados, Resolución, sesión del 22 de Agosto de 1973

Este hecho en el lenguaje periodístico fue interpretado como la luz verde para que los militares intervinieran y derrocaran al gobierno de la Unidad Popular, hecho que efectivamente ocurrió 3 semanas más tarde.

Es en este periodo (1971-1973) en que el Compromiso Histórico existente en diversas esferas del país comienza a trizarse. La histórica tendencia a buscar consensos para implementar reformas sociales empieza a ser reemplazada por formas políticas autoritarias que buscan la sumisión del adversario. El socialismo es propuesto por una mayoría de partidarios del gobierno de Salvador Allende como un „camino irrevocable“ mientras que la defensa del Estado democrático se conjuga con una forma de resistencia civil contra el supuesto „totalitarismo“ de los gobernantes.

Las propuestas en torno a un nuevo tipo de educación hechas por el gobierno despiertan, como ya lo he dicho, enconadas reacciones en el movimiento gremial estudiantil, en las asociaciones de padres, en la Iglesia Católica y en las Fuerzas Armadas. Estas últimas como se supo, a través de una comisión de la más alta investidura le hacen presente al ministro de educación de la época Sr. Jorge Tapia, su decisión de no aceptar una reforma educacional que pusiera en peligro el Estado de Derecho y la democracia en Chile; Estos argumentos, ahora en boca de los jefes de las Fuerzas armadas, eran publicitados por una oposición política ya en franco camino de rebeldía.⁹⁵

Posteriormente, y resuelto el conflicto político por medio de las armas el Compromiso Histórico será definitivamente liquidado y reemplazado por un estilo autoritario sobre el cual me referiré ampliamente en los próximos capítulos.

2.2 Quiebre del Compromiso Histórico en el sector docente

El profesorado chileno constituía a comienzo de 1970, una de las organizaciones gremiales más relevantes en la sociedad civil. Factores que determinaban este hecho eran la gran cantidad de personas que laboraban en el sistema educativo,⁹⁶ la vasta experiencia en la lucha gremial y la no menos importante influencia cultural y en consecuencia también política que el magisterio irradiaba hacia la comunidad organizada. Todo ello convertía a

⁹⁵ Altos mandos de las Fuerzas Armadas se reunieron al margen de sus atribuciones legales con el Ministro de Educación en Abril de 1973. Esto demostraba que las Fuerzas Armadas ya no permanecieron neutrales en torno a las decisiones del gobierno. Ver Revista Ercilla, Santiago. 15. 04.1973 y Arturo Valenzuela: El quiebre de la Democracia en Chile; Santiago, 1989, pag. 239

⁹⁶ 125.500 docentes registra el censo de 1985. Fuente: Dirección de estadística y censo de Santiago

los maestros en un estamento social bastante requerido por los partidos políticos que competían en las luchas electorales.

Los profesores de enseñanza básica recibían hasta Septiembre de 1973, su formación en las Escuelas Normales desde donde egresaban con el título de Profesor de Enseñanza General Básica con una o dos asignaturas de especialización.

En los institutos pedagógicos de las universidades los profesores secundarios recibían una formación integral pedagógica con especialización en una e incluso dos asignaturas.

En la educación técnico profesional trabajaban por lo general maestros egresados de las universidades técnicas; otros de las Escuelas Normales con cursos de perfeccionamiento que acreditaban competencia en el área, o bien egresados de los propios establecimientos técnico profesionales.

Los profesores universitarios provenían de las universidades y optaban a cátedras o labores docentes por medio de concursos públicos, en los cuales como requisito se exigían estudios de postgrado, cursos de perfeccionamiento, magister, postgrado o doctorados en universidades chilenas o extranjeras.

En la docencia laboraban también maestros sin títulos quienes por lo general tenían estudios secundarios completos o estudios universitarios incompletos. Estos maestros constituían núcleos importantes en el campo y en las áreas marginales de las grandes ciudades donde usualmente los recién egresados de las Escuelas Normales no deseaban trabajar. De cualquier forma los maestros no titulados eran un contingente minoritario y con poca influencia en los gremios de docentes.⁹⁷

Desde el punto de vista de su incursión laboral los maestros se dividían en dos categorías:

- a) Empleados públicos que correspondía a la mayoría de los docentes que trabajaban en colegios estatales
- b) Empleados particulares que trabajaban en el sector privado

En este último sector existían dos tipos de establecimientos claramente diferenciados. Unos pertenecían a congregaciones religiosas o a particulares y estaban destinados al servicio

97 Ernesto Schiefelbein: Diagnóstico de la educación chilena en 1964-1974, pag. 90, cit. por Iván Núñez en Cambios en la situación del Magisterio, Edit. PIIE, Santiago, 1982, pag. 2

educacional de los sectores privilegiados de la sociedad como por ej. El Colegio Alemán, la Alianza Francesa, Bradfordschool, British High School, Compañía de María, Saint Georges, Nido de Aguilas, Sagrados Corazones, Verbo Divino, Colegio Suizo, Cambrigde College, Saint Gabriel etc.⁹⁸ por nombrar solamente algunos de los existentes en la región metropolitana de Santiago.

Un alto porcentaje de los licenciados de estos colegios ingresaban a las universidades pasando a convertirse, a la vuelta de unos años, en los nuevos profesionales responsables de dirigir la continuidad del sistema socioeconómico y político vigente, o en su defecto, aplicar los ajustes de cambio necesarios para su desarrollo.

Otras escuelas privadas pertenecían también a instituciones religiosas o bien eran administradas por asociaciones particulares. Incluso personas en forma individual podían fundar y dirigir un colegio privado. Estas escuelas recibían del Estado una subvención por alumno matriculado con lo cual se cancelaba a los profesores y se cubrían gastos de infraestructura.

Por lo general estas escuelas estaban desprovistas de personal docente adecuado debido a que las rentas de los maestros eran menores que en la enseñanza pública y sus derechos no quedaban suficientemente garantizados. A ello se agregaba una demora excesiva en el pago de los salarios que dependían de la subvención del Estado la cual llegaba, con no pocas tramitaciones burocráticas, una vez al año.

El monto de los sueldos se negociaba entre empleadores y maestros, considerándose como pauta general la antigüedad del maestro en la docencia y el nivel de remuneraciones que le correspondería si trabajara en la enseñanza pública.

Una diferencia cualitativa entre docentes fiscales y particulares era la estabilidad laboral que estos últimos no poseían.

Los profesores fiscales se regían por las normas del Estatuto administrativo el cual definía responsabilidades, deberes y derechos de los funcionarios educacionales. El profesor integrado al Estatuto Administrativo quedaba en *propiedad del cargo* lo cual le garantizaba estabilidad laboral, derechos sociales y posibilidades de ascenso a puestos directivos en las escuelas o en funciones propias de la burocracia administrativa escolar.

98 Ver Guía de ingresos a los colegios particulares, Edit. Santa Ana, Santiago, 1992

Los aumentos salariales de los maestros estaban determinados por la permanencia en el servicio. El método más usado en las últimas décadas fue el de conferir aumentos cada, dos, tres y cinco años de trabajo (bienios, trienios y quinquenios).

El reiterativo reconocimiento moral de los gobernantes acerca de la importancia de la función docente, nunca fue proporcional al monto de sus salarios. Los sueldos de los maestros fueron históricamente bajos.

El magisterio chileno luchó siempre por elevar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, pero esta lucha no siempre alcanzó los objetivos esperados. Sin embargo existían, a manera de compensación, garantías de carácter social como permisos con o sin goce de sueldos, más de tres meses de vacaciones pagadas al año, estabilidad laboral, derecho a organizarse, perfeccionamiento remunerado, acceso a la medicina, libertad de expresión etc. Todos estos factores eran como ya lo he mencionado las compensaciones que ayudaban a distensionar los conflictos provocados por los bajos salarios.

El mejoramiento de las condiciones económicas de los maestros no era para el Estado algo de fácil solución puesto que cualquier tipo de modificación salarial se constituía en un elemento desestabilizador en el equilibrio de la balanza de pagos del sector público; ello porque:

„(...)en una población económicamente activa que en 1971 era de 2.980.700 personas, el sector docente llegaba aproximadamente a los 90. 000 y representaba un 14, 8% de los trabajadores del sector terciario y el 20% de los empleados públicos.“⁹⁹

El descontento de los maestros apuntaba principalmente a la cuestión salarial debido a que la inestabilidad económica del país hacía que los sueldos, al poco tiempo de ser aumentados, perdieran su valor por efectos de la inflación y la consecuencial devaluación monetaria.

Al asumir los militares el mando del gobierno impulsan en la sociedad una política de guerra que encuentra sus fundamentos en la llamada *Doctrina de la Seguridad Nacional*, la cual expone como tesis central la „teoría del enemigo interno“.¹⁰⁰

99 Organización internacional de estadísticas: anuario de estadísticas de trabajo, Ginebra 1972, cit. por Iván Núñez en Cambios en la situación del Magisterio, Edit. PIIE, Santiago., pag.1

100 Según la *Doctrina de Seguridad Nacional*, el enemigo no estaría más allá de las fronteras sino inserto en la propia sociedad civil. El concepto tradicional de los militares basado en la seguridad de las fronteras se cambia por esta nueva estrategia. Dejo sí establecido el desconocimiento del autor acerca de documentación al respecto. Solo puedo mencionar la conferencia de E. Galaz(ex oficial chileno) en Julio de 1983 en la Fachhochschule de Frankfurt y el documento de Santa Fé que fue el resultado de un encuentro entre asesores militares norteamericanos capitaneados por el ex ministro de relaciones exteriores del presidente R. Reagan, Haig y representantes de las Fuerzas Armadas

Dicha doctrina propone no solamente trocar los conceptos ideológicos de las democracias liberales en la defensa nacional sino también propone un cambio substancial en el acopio del armamento militar existente. De esta forma, las grandes inversiones en defensa, se orientan a la compra de armamento liviano como carros de combates equipados y adaptados para su desplazamiento en las ciudades, instalación de cuarteles militares urbanos, mayor dotación tecnológica y de personal para los servicios policiales especializados en disturbios callejeros, aumento del personal experto en contrainteligencia, mejor utilización de los medios de comunicación de masas etc.

En el caso chileno; quiénes eran estos enemigos de la seguridad interna?

Según el general Augusto Pinochet ciertos grupos subversivos infiltrados en las cúpulas de los partidos políticos, en los gobiernos, en la iglesia, en el movimiento sindical y estudiantil y entre agrupaciones de intelectuales vinculados a la vida universitaria, a los gremios y a los partidos políticos populares. En opinión del general Pinochet estos grupos subversivos tenían la clara intención de:

„Alejar a nuestra Patria de los valores esenciales de su tradición cristiana, pretendiendo implantarnos el dominio de una ideología foránea antichilena, como es el marxismo leninismo. A ello obedeció el deseo de uniformar las consciencias hacia derroteros ajenos a nuestro ser nacional lo cual quedó de manifiesto en el proyecto de la llamada Escuela Nacional Unificada propiciada por el régimen depuesto y que, con razón la inmensa mayoría de los chilenos combatió y rechazó.“¹⁰¹

Dichos sectores, según los altos mandos de las Fuerzas Armadas, habrían estado socavando subterráneamente los cimientos de la convivencia nacional, promoviendo la lucha de clases, el caos, y la desobediencia civil.

El general Pinochet en el transcurso de los años reafirma con mucha insistencia esta tesis en casi todos sus discursos. En ellos establece una separación entre bases y cúpulas dirigentes. En la lógica de su discurso, la política se transforma rápidamente en politiquería, la disidencia en traición y la crítica a los proyectos y métodos del gobierno es presentada como una acción sospechosa y cobarde. Esto inhibe en los primeros años cualquier manifestación pública de desacuerdo.

Expresiones de esta política de ruptura son la expulsión de las escuelas de quienes hubieren participado activamente en los partidos de la Unidad Popular. El mecanismo

y gobiernos aliados. En esta reunión se habría diseñado la nueva política de seguridad a aplicar en A.L. El documento de difusión restringida no logró llegar a las manos del autor quien sólo conoce de su existencia.

¹⁰¹ Augusto Pinochet, mensaje presidencial a los educadores de Chile, Edit. Revista de educación N° 47, Mayo, 1974, pag. 2

usado es la no renovación de contratos;¹⁰² la prohibición del gremio de maestros;¹⁰³ la imposición de un Colegio de Profesores en reemplazo del sindicato de maestros;¹⁰⁴ el acomodo de programas de estudio y vida escolar a las políticas gobiernistas;¹⁰⁵ la imposición de un Estatuto docente sin consulta a los profesores;¹⁰⁶ el término del concepto de Estado Docente al traspasar las escuelas a las municipalidades y al sector privado;¹⁰⁷ la intervención militar y reestructuración de las universidades;¹⁰⁸ la destitución de las pedagogías del rango universitario;¹⁰⁹ etc.

„En el año 1973 con el golpe militar se neutralizan, se atomizan, se persiguen y se disuelven casi todas las organizaciones sindicales importantes que tenían peso y representatividad en la sociedad“.¹¹⁰

La ideología marxista de fuerte ascendencia en los partidos obreros, gremios de intelectuales y en el movimiento estudiantil fue definida como „cáncer social“ necesario de extirpar y alejar de la sociedad chilena.¹¹¹

En esta espiral de intolerancia, el propio jefe de la Iglesia Católica chilena de aquel tiempo Monseñor Raúl Silva Henríquez es víctima de los ataques del oficialismo. El obispo de la Iglesia Luterana en Chile, el alemán Helmut Frenz, es expulsado del país por participar en el Comité pro Paz, organización eucuménica que intentaba ayudar humanitariamente a las víctimas del nuevo régimen (1975).

El nacionalismo aparece como signo distintivo que predomina no solamente en el parámetro de los nuevos gobernantes sino también en la franja intelectual que tuvo activa presencia en la vida universitaria, especialmente en el llamado „Movimiento Gremial“.

En efecto muchos profesionales del ámbito académico no ocultaron sus simpatías con el nuevo régimen; incluso asumieron responsabilidades de dirección, justificaron el autoritarismo y fustigaron a aquellos colegas que no se sumaban en los primeros años al triunfalismo oficialista, o como se dijo en aquel tiempo, a la „patriótica tarea de reconstrucción nacional.“

102 Decretos leyes 6 y 22 de Septiembre de 1973

103 Decreto ley N° 82, 11, 12. 1973

104 Decreto ley 678, Octubre, 1974

105 Ver, Salomón Magendzo, El control autoritario expresado en las circulares del Ministerio de Educación, PIIE, Santiago, 1982

106 Decreto ley 2.327 que regula el Estatuto de la Carrera Docente, 1978

107 Decreto ley N° 3.063, artículo 38, 1979

108 Decretos con Fuerza de Ley N° 1, 2, 3, 4, y 5, dictados por el gobierno entre Diciembre y Febrero de 1980-81

109 DFL. N° 5, 5.2.1981

110 Osvaldo Verdugo, presidente del Colegio de Profesores democratizado, Entrevista 1992

111 Gustavo Leigh Guzmán, General de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta de Gobierno, discurso 11 de Septiembre 1973

Tampoco expresaron opiniones disidentes frente al cierre de varias escuelas universitarias en las cuales, a juicio de los nuevos gobernantes, se inducía a los jóvenes por el camino de la ideologización y de la ruptura con las tradiciones de la institucionalidad democrática del país. Escuelas como las de periodismo, sociología, filosofía entre otras, tuvieron que sufrir, bajo el subterfugio de la reorganización, varios semestres de clausura. Pese a ello, en los claustros académicos no se escucharon voces de protesta pública por la violación de la autonomía universitaria. Algo similar ocurrió con todas las Escuelas Normales las que fueron traspasadas a las universidades bajo el argumento de querer darles un rango superior: „de mayor profesionalidad y status.“¹¹²

El otorgamiento al Rector delegado en la Universidad de Chile de atribuciones especiales,¹¹³ la nominación de decanos en las diferentes facultades, la tendencia generalizada a calificar cualquier forma de disidencia como una actitud antipatriota y de complacencia con la ideología marxista, son los signos de un gobierno autoritario que no se muestra dispuesto a continuar el largo y paciente camino de compromisos establecido en la educación chilena.

Cuando los militares asumen el mando de la nación todo el personal de la administración pública quedó en calidad de interino¹¹⁴ eso significaba condicionar su permanencia en el servicio.

El proceso de renovación o prolongación temporal de contratos laborales es utilizado como mecanismo para marginar a los opositores del servicio y buscar al mismo tiempo lealtades en todos aquellos que observaban positivamente los hechos.

Las remuneraciones de los maestros son igualmente traspasadas de la estructura anteriormente mencionada a otra denominada Escala Unica de Remuneraciones dispuesta para todos los empleados públicos. En este nuevo ordenamiento los maestros pierden conquistas económicas y el profesor básico recién titulado es reubicado en el grado 28 de dicha Escala la que iba del grado 1 al 30. Las remuneraciones de los maestros vuelven a ser cercenadas por efectos de la congelación de salarios, la devaluación de la moneda y la pérdida de derechos denominados bienios, trienios y quinquenios.¹¹⁵

112Decreto ley 179, Diciembre, 1973

113Decreto ley 111, 8. 11. 1973

114Decreto Ley N° 6, 12.10.1973

115Ver Iván Núñez: Cambios en la situación del Magisterio, Ob. cit. pag. 16-17

Los principales cargos en el aparato educacional del país son ocupados por militares. Las universidades recibieron rectores delegados quienes asumían sus funciones de acuerdo a las reglamentaciones existentes. Sin embargo, las universidades disponían, según estas reglamentaciones, de consejos normativos y organismos colegiados que tenían a veces mucho más poder que el rector. Al reparar en este equívoco el gobierno militar dictó decretos-leyes especiales para modificar toda la estructura organizativa de las universidades. De esta manera en la Universidad de Chile se dictó un decreto mediante el cual el Consejo Normativo entregaba al rector delegado todas las atribuciones y funciones que la legislación de la Universidad y demás leyes y reglamentos le conferían. El rector quedaba, según este decreto, habilitado para despedir y contratar personal, utilizar los medios de comunicación de la universidad, expulsar alumnos, cerrar facultades, etc.¹¹⁶

Los liceos y escuelas básicas recibieron directores nombrados por el Ministerio de Educación y las principales direcciones educacionales fueron copadas por personal uniformado de diferente graduación. A juicio de Julio Valladares, dirigente nacional de los profesores:

„(...) el sector educacional fue el más estrictamente controlado y copado por las fuerzas militares.“¹¹⁷

Oswaldo Verdugo presidente del Colegio de Profesores democratizado, añade que:

„Hubo persecución ideológica, *limpieza*, que el régimen autoritario imprimió en los primeros años de represión contra aquellos dirigentes y organizaciones que tenían un gran arraigo sociocultural y que tenían influencia en el aparato del Estado, en el mundo político, en el Parlamento y en los propios gobiernos.“¹¹⁸

El Decreto ley Nr. 82 del 11 de Diciembre de 1973 suspende el pago de cotizaciones al sindicato de educadores y un año más tarde, se cancela la personalidad jurídica a todas las organizaciones de carácter gremial que pudieran existir en el profesorado chileno¹¹⁹.

Al mismo tiempo se margina a los profesores de ciertas formas de participación que existían en organismos tales como el Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, las Direcciones Provinciales de Educación etc.

116Decreto ley 111, 8.11.1973

117Julio Valladares, Entrevista, Enero 1992

118Oswaldo Verdugo, Entrevista, Febrero 1992

119Decreto ley N° 1.284, Octubre 1974

O sea, se cercenan todos los canales de participación a los cuales los gremios de maestros habían tenido acceso y que proyectaban el marco referencial en el cual el perfil del Compromiso Histórico en educación podía visualizarse. A ello se agregaba la censura de prensa, la proscripción de los partidos políticos, el cierre del Parlamento y las formas abiertas de terrorismo de Estado implementadas a través de aparatos represivos que actuaron con un gran margen de impunidad. Entre éstos destacan dos nombres: La Dirección de Inteligencia Nacional(DINA) y luego la Central Nacional de Inteligencia(CNI).

Todos estos factores, a mi juicio, van alterando la convivencia nacional en general y las instancias de expresión y participación del profesorado en particular.

La prensa, y con relevancia el periódico El Mercurio, otorgaron al régimen militar en los primeros años un considerable apoyo. Dentro de este ámbito el articulista Hugo Tagle Martínez, al referirse a la Declaración de Principios del régimen militar enfatiza que el gobierno respeta la concepción cristiana del hombre y de la sociedad, que el Estado está al servicio del hombre (y no al revés) y pone de relieve la importancia de la libertad educacional en una sociedad democrática. Agrega que la política estatista causó mucho daño a la economía y a la educación. Destaca también Tagle la falta de profesores, sus bajos salarios y la mala calidad de la enseñanza.¹²⁰

El 14 de Agosto 1974 el Mercurio editorializa sobre las nuevas orientaciones educacionales. Al respecto señala que:

„El modelo de Escuela Nacional Unificada ha sido substituida por el afianzamiento de los valores patrios. Ahora el Ministerio de Educación está cediendo paso a una nueva estructura, ágil y expedita que se apoya en el visionario proceso regionalizador“.¹²¹

La editorial elogia también el traspaso de las Escuelas Normales a las universidades, la elevación del nivel académico y el cualitativo mejoramiento de la educación. El nombramiento de los coordinadores provinciales con poderes resolutivos es señalado como „paso importante de desburocratización“.

En los primeros años, pese a las medidas impuestas, no se percibe un concepto relativamente coherente acerca de lo que pretenden realizar en educación.

Principalmente los cambios educacionales están restringidos a medidas de tipo burocrático que emanan del Ministerio de Educación o bien de los institutos armados.

¹²⁰El Mercurio,Santiago. 23.4.1974

Las serias contradicciones existentes en la formulación de políticas educacionales, así como la manera de enfrentar los problemas, hizo que las medidas tuvieran un carácter acentuadamente autoritario. Esto provocó resentimientos incluso en sectores que se habían sentido interpretados con las argumentaciones de la intervención militar el 11 de septiembre de 1973.

En Enero de 1976 El Mercurio en torno a una polémica universitaria informaba de la existencia de profesores renuentes a aceptar las políticas oficiales del gobierno y las directrices educacionales que provenían de éste. Dice el periódico en su página editorial que:

„Sería un error político que por acción u omisión esas jerarquías académicas naturales se sintieran divorciadas de la gran tarea nacional que impulsan las Fuerzas Armadas. A ellas(a las jerarquías académicas) no se les puede exigir acatamiento político a tal o cual medida sencillamente porque su vocación no es política, pero sí, hay derecho de esperar de ellas una colaboración armónica dentro de su propio campo si se ven comprendidas y respetadas.“¹²²

En un estilo periodístico que corresponde a la época, el periódico advierte sobre las trampas invisibles en la lucha contra el marxismo sentenciando que, la dureza en la lucha contra esta ideología puede provocar el efecto contrario, vale decir, solidaridad con el perseguido, lo cual puede desanimar a sus propios adversarios:

„Al comunismo puede servirle de muchas maneras. Una de las más sutiles es la de emplear armas tan excesivamente destructivas para combatirlo que la contundencia de éstas haga víctimas inocentes, desanime a los propios adversarios del comunismo e introduzca disensiones en ellos. Sería difícil hacer al comunismo un obsequio mejor que colocar a los sectores auténticamente universitarios en contra de los representantes de la política oficial.“¹²³

Planteamientos de esta naturaleza fueron despertando justificado temor entre los académicos al verse imposibilitados de ejercer su libertad de opinión. En esta controvertida manera de polarizar las corrientes de pensamiento que El Mercurio transcribe, quienes en determinados niveles de la supraestructura educacional no manifestaban afección al régimen corrían el riesgo de ser catalogados como antipatriotas. Este rasgo que va proyectándose en todos los ámbitos de la vida nacional deviene en serios conflictos con personeros de la Democracia Cristiana chilena (en receso) quienes, asumiendo un rol destacado en el movimiento opositor, se mantuvieron distante de las políticas impulsadas

121 El Mercurio, Santiago. 23.4.1974

122 El Mercurio, Santiago. 11.1.1976

123 El Mercurio, Santiago. 11.1.1976

por los partidos marxistas en Chile; pero aún así, fueron catalogados como colaboradores de éstos, o en la expresión vulgar: „tontos útiles del marxismo“.

A esta concepción de proselitismo se opusieron personalidades destacadas de la universidad, especialmente catedráticos vinculados a las corrientes del pensamiento cristiano, laico, y liberal, entre los que destacan Edgardo Boeninger, Juan Gómez Millas, Francisco Cumplido, Juan de Dios Vial, etc. para quienes esa manera de dirigir la universidad resultó, desde el punto de vista ético, inaceptable.

Notoriamente se percibe en el espíritu de los altos jefes militares un afán por acabar con formas de discusión política en todos los establecimientos educacionales. Cualquier indicio de protestas, críticas y existencia de doctrinas que en su opinión alteraran lo que ellos llamaban la *seguridad del país*, debió enfrentarse a los múltiples rostros de la represión que iban, desde la sanción verbal al funcionario, hasta el despido de su trabajo y en casos extremos detención, exilio e incluso asesinato a manos de los organismos de la seguridad nacional.¹²⁴

En este empeño los militares pasan a ser juez y parte del conflicto al establecer arbitrariamente los criterios de lo que en su parecer es o no es política.

„Con el pretexto de combatir la política con minúscula, se ha suprimido la política con mayúscula; lo que ha hecho el régimen autoritario ha sido aplastar toda discusión sobre las grandes orientaciones de las universidades, con ello no se ha logrado una despolitización de estas instituciones sino que se ha generado un monopolio político que ejercen los que tienen el poder en sus manos.“¹²⁵

manifestaba el ex Rector de la Universidad de Chile Edgardo Boeninger al cumplirse 10 años de gobierno militar.

Resalta también con notable evidencia la falta de información entre las autoridades que dirigen el proceso educativo. Medidas tan importantes como el cambio de ministro de educación son asumidas con extraordinaria ligereza, no se sabe si por las autoridades mismas o por los medios informativos adherentes al gobierno:

¹²⁴Entre estos organismos se cuentan, por nombrar sólo a los importantes la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, la CNI Central Nacional de Inteligencia y los aparatos de seguridad de Carabineros, de la Marina, de la Fuerza Aérea y de Investigaciones. A todos ellos se agregaban subgrupos en forma comandos conjuntos entre una y otra institución los cuales, necesario es decirlo, en ocasiones actuaron presionados individualmente por sus superiores, al margen de decisiones gubernamentales. Ver Informe de la comisión Rettig. Santiago, 1992

¹²⁵Edgardo Boeninger, Edit. CPU, N° 42, trimestre 4, 1984 pag. 20

„El nombramiento fue tan sorpresivo que ni siquiera el nuevo Ministro pudo decir nada a los periodistas que le acosaron hasta no informarse de lo que ocurría en educación.“¹²⁶

Asumiendo doblemente una difusa representación de Chile y el Estado, los militares intentan durante un largo periodo hacer coincidir en su discurso, la dicotomía Gobierno-Chile, cual si ambos representasen un mismo concepto. A menudo el Estado también se confunde con el gobierno y éste con el pueblo. Para los opositores resulta difícil en este periodo ante una población sobresaturada de propaganda oficialista, poder establecer los límites entre uno y otro concepto.

La gran protesta internacional contra el régimen militar que tuvo como máxima expresión la resolución de las Naciones Unidas condenando durante 17 años consecutivos al gobierno chileno por violación de los Derechos Humanos, fue interpretada en los medios de comunicación en Chile con escasas excepciones, como una „campana organizada contra Chile“.

El plebiscito de 1980 que decidió sobre la nueva Constitución política del Estado fue realizado sin las mínimas normas democráticas, o sea, sin oposición ni información; incluso más, el voto aprobatorio para la Constitución consistía en un Si, el cual fue identificado con Chile. La alternativa No fue conferida a una oposición que no pudo expresarse, ni controlar los cómputos, ni mucho menos informar o hacer propaganda en los medios de comunicación social.

El lenguaje de los militares chilenos, al igual que el de muchos otros gobiernos autoritarios de América Latina fue agresivo. Su objetivo fue crear estereotipos en una población que se encontraba sometida a la propaganda oficial.

En un acabado estudio semiológico la autora Giselle Munizaga descubre la manipulación lingüística del discurso de Pinochet y de sus propagandistas. Este discurso, a juicio de la autora, se convierte en una acción reiterativa en el tiempo y busca asentar en la sociedad civil y en la familia valores y conductas sociales. Así por ejemplo la autora expresa que, durante el periodo militar, se traza en Chile una linea divisoria entre buenos y malos chilenos.

En la categoría de buenos chilenos están naturalmente los partidarios del régimen, las Fuerzas Armadas, las mujeres en cuanto a madres esforzadas y sostén principal de la familia; la mayoría silenciosa que no se pronuncia ni participan pero que, para los efectos

¹²⁶El Cronista, Santiago, 4.12.1976

propagandísticos, son sumados a los adherentes del sistema; también están los jóvenes y niños quienes son el futuro del país. Los malos chilenos, en el reiterativo lenguaje de las autoridades son los opositores:

„Aquéllos que, habiendo nacido en el territorio nacional, de hecho y de derecho atentan contra los valores básicos y propios de la nacionalidad. Son los marxistas; éstos pertenecen a los seres intrínsecamente perversos y representan permanentemente una latente amenaza a la existencia moral y física de la patria. Sus medios son la violencia, la agresión, el terrorismo, el despojo, la rapiña, la perversión solapada, la infiltración, la manipulación, la penetración encubierta. Se trata de un enemigo siempre activo. Si busca penetrar lo hace „por todos los medios,,, si agrede lo hace „en la forma más intensa,,, si calumnia lo hace „sin trepidar.,, Posee además múltiples recursos materiales y humanos para su acción: comisiones internacionales, países satélites, gobiernos débiles, organismos de fachada, activistas, tontos útiles etc. Hacia ellos sólo cabe el combate, la erradicación del territorio y de la vida nacional.“¹²⁷

En este mismo contexto, pero desde otra perspectiva Ernesto Galaz, ex comandante de la Fuerza Aérea de Chile, tratando de escudriñar en las causas de la manera oprobiosa con que los militares chilenos trataron a sus opositores expresa que, en las escuelas militares y regimientos de Chile se habló insistentemente de varios tipos de enemigos. El peor de todos dice, era el marxista o izquierdista, el cual estaba dentro de la categoría de „enemigo indigno“ de las Fuerzas Armadas contra el cual cualquier atropello, violación, tortura o perversión física o moral estaba permitida.¹²⁸

Lo que sobre los „enemigos indignos“ se pudiera escribir o decir en el discurso, encontró su correlato en hechos materiales. Las comisiones de Derechos Humanos tanto de la OEA como de las Naciones Unidas y el informe de la comisión Rettig dan cuenta detallada al respecto. La puesta en vigencia de algunas libertades públicas, así como la liberación de presos políticos y la aceptación de los „pequeños espacios de diálogo y de democracia“ (O.Verdugo) que se abrieron en las escuelas, no fueron concesiones ofrecidas por un gobierno en plan de reconciliación sino el resultado de pacíficas negociaciones de instituciones eclesiásticas, algunos gremios, instituciones de derechos humanos y organismos internacionales con los representantes del régimen.

A la luz de los antecedentes expuestos puedo afirmar que el quiebre del Compromiso Histórico se expresa en variados ámbitos de la sociedad chilena. En lo político, encuentra su manifestación en el uso de la violencia para dirimir un conflicto entre los poderes del Estado lo cual estaba deslegitimado no sólo en la Constitución de 1925 sino también en la cultura política de la población. En lo ético y moral, en la discriminación de ideas, el

¹²⁷Giselle Munizaga: El discurso público de Pinochet, CESOC/CENECA, Buenos Aires, pag. 27

falseamiento de la verdad, el uso de la fuerza represiva y la implementación de métodos de tortura condenados por la población chilena, por la Iglesia Católica y por los organismos internacionales de Derechos Humanos. En lo educacional, en la imposición de una serie de reformas que fueron desde la proscripción del gremio de maestros, hasta la privatización y municipalización de la educación, quitándosele incluso al Estado chileno su rol protector que le había caracterizado en el transcurso del presente siglo.

Difícil resulta poder desligar un aspecto del otro porque los factores enumerados están, de una u otra forma, conectados entre sí y a mi parecer el quiebre en educación resulta más fácil de identificar si se conocen algunos de los antecedentes que he explicitados en las páginas anteriores.

2.3 Coerción Sindical y corporativismo gremial

El primer periodo del régimen militar (1973-75) está dedicado a la reorganización del sistema educativo en el cual se perfilan varias concepciones. Una de ellas es acentuar en las escuelas el sentido de chilenidad a través de la reactivación de algunos ritos nacionales: himnos, bandera y gestas históricas del pasado y del presente.

Se busca, por medio de circulares emanadas del Ministerio de Educación, destacar el rol patriótico que asumieron las Fuerzas Armadas al hacerse cargo de un país que estaba, en opinión de las nuevas autoridades, sumido en el caos, la ideologización y la confrontación. Para fortalecer esta argumentación los militares recurren a capítulos históricos del pasado e intentan comparar su misión con la del político decimonónico Diego Portales.¹²⁹ Orden es uno de los conceptos fundamentales del primer periodo con el cual los militares aspiran convencer a la población sobre lo necesario que habría sido su intervención. En este espíritu se revisan los planes y programas de estudio, cercenando en las universidades, institutos pedagógicos y escuelas secundarias algunas asignaturas que para las nuevas autoridades resultaban conflictivas.

Junto con lo anteriormente expresado se ejerce una fuerte represión contra los docentes opositores con el objeto de intimidarles o bien alejarles de sus cargos.

El Decreto ley Nr 1.284 (1974) quitó la personalidad jurídica al Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación con lo cual queda proscrita su actividad al tiempo que se

¹²⁸Ernesto Galaz, conferencia en la Fachhochschule, Frankfurt, Julio, 1983

¹²⁹Inspirador de la Constitución de 1833 que puso fin al periodo de anarquía en el Chile de la postindependencia.

confiscan todos sus bienes. Algunos de sus representantes son detenidos y enviados a cárceles o campos de concentración; otros son obligados a exilarse; en casos peores fueron ejecutados o hechos desaparecer (ver nota 153) También en el mismo año los militares crean, en reemplazo del sindicato, el Colegio de Profesores, el cual además de representar a los maestros le asignaban la misión de vigilar tanto la eficiencia como la ética profesional de quienes ejercen la carrera docente.

En opinión del régimen militar los maestros:

„(...) gozarán de una especial preocupación de parte de las nuevas autoridades. Se pondrá mayor atención a sus demandas económicas y atenderá a sus reivindicaciones profesionales en un diálogo franco, con objetivos elevados.“¹³⁰

Desde otra perspectiva los militares buscan despertar la autoestima de los maestros a través de discursos halagadores que caracterizan su función pedagógica como: „una de las más nobles“, agregando que los docentes han estado injustamente postergado en sus aspiraciones económicas y de ascenso social por la demagogia de los políticos que han gobernado al país.

En el documento denominado „Principios Educativos del Gobierno de Chile“ (1975), el régimen militar entrega una visión panorámica acerca de los grandes objetivos que desea lograr en educación. Debo decir que este documento es uno de los más significativos del régimen militar. A partir de él se van configurando los lineamientos que en los próximos años irán tomando cuerpo en la escolaridad chilena.

El documento presupone que el modelo educacional existente hasta 1973 tenía que adaptarse a las nuevas necesidades económicas y de modernidad del país. La educación, decían los militares, demandaba muchos recursos y formaba ciudadanos que, no contribuían a la consecución del gran ideal de la *unidad nacional*.

Según su punto de vista el país se encontraba en una crisis económica, dividido políticamente y con una fuerte ingerencia de los partidos marxistas en los asuntos del Estado, todo lo cual hacía peligrar, no sólo la convivencia nacional sino también el propio carácter de la sociedad occidental cristiana y su sistema democrático.¹³¹

¹³⁰La creación del Colegio de Profesores en reemplazo del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación es valorado por los militares como un gesto tendiente a elevar el status social y la dignidad de los maestros. Afirman también que los cambios educacionales que se pondrán en marcha requerirán de la participación de un cuerpo de educadores capacitados y de alto nivel profesional. En ese contexto debe entenderse también el traspaso de las Escuelas Normales a las universidades.

¹³¹ Ver, Principios educativos del gobierno de Chile, documento público, Santiago, 1975

El rol del Estado como institución mediadora en los conflictos sociales pierde de esta manera validez en las argumentaciones de los militares. Al Estado se le van reduciendo sus atribuciones y es así como en el periodo comprendido entre 1973 -89 se diluye el perfil que en el pasado le habían caracterizado como Estado protector especialmente en el ámbito de la salud, la educación y la vivienda.¹³²

Según el documento aludido el Estado existe para promover las condiciones necesarias al desarrollo integral de la persona humana y no para reemplazarle en su accionar. Son por lo tanto los miembros de la comunidad los encargados de desplegar su capacidad creativa para lograr el desarrollo integral del país. Ello implica que:

„Las acciones que pudieran ser realizadas por personas en forma individual, o en comunidad, no tendrían por qué ser asumidas por el Estado.“¹³³

A juicio de los militares, al Estado le corresponde cumplir las tareas que, por su carácter, envergadura o naturaleza, es imposible que sean llevadas a cabo por personas o grupos intermedios de la sociedad.

En el sector educacional le corresponde impulsar las iniciativas de las organizaciones privadas para que intervenga directa y progresivamente en la gestión educativa, bajo la dirección y apoyo del Ministerio de Educación.

La democracia, según expresa el documento, es entendida como:

„(...) la preeminencia absoluta en teoría y en el hecho de los valores de la persona humana, por sobre toda institución, organización, poder, autoridad y también sobre el Estado y la sociedad misma.“¹³⁴

La unidad nacional se proyecta en el documento citado como el gran objetivo del proyecto educacional de los militares. Este concepto encierra algunas ideas centrales entre las que sobresalen la acentuación de la identidad chilena, privilegiar lo nacional por sobre lo extranjero así como la recuperación de la identidad cultural del individuo por sobre las diferencias políticas, sociales y religiosas.

132El Estado protector es concebido justamente como resultado del Compromiso Histórico que se origina a finales de los años 20 y que actúa en dos direcciones: por un lado el Estado apoya al sector empresarial privado a través de créditos, maquinarias asesoramiento técnico etc. y por otro, crea un sistema de seguridad social y de participación electoral que se extiende a vastas capas de la población de medianos y bajos recursos. Como ya anteriormente ha quedado expresado, este acuerdo es el resultado de la pérdida de la hegemonía en el control del Estado de los sectores que habían dominado al país hasta siglo XIX y la aparición de un Centro político en la administración del Estado que busca conciliar los intereses tanto de la oligarquía como los de la clase media y baja a través de acuerdos políticos entre los partidos.

133Principios educacionales del gobierno de Chile, 1975

134Principios educacionales del gobierno de Chile, Ob. cit.

El modelo de democracia del régimen militar sitúa al ser humano como el centro de la actividad, por sobre el Estado y la sociedad misma.¹³⁵

En el mismo plano de las definiciones conceptuales la cuestión educacional resulta además de escueta, ambigua y poco clarificadora. A saber:

„El acto educativo es un proceso que nace y muere con el hombre.“¹³⁶

En el momento de asumir el mando de la nación, continúa el documento, los militares se vieron en la necesidad de sanear el sistema educativo. La primera medida en esta estrategia de saneamiento fue la de:

„(...) eliminar de los planteles educacionales a los agitadores marxistas infiltrados en todos los niveles de la enseñanza.“¹³⁷

Una segunda tarea fue la „descentralización administrativa“, medida que debía, en opinión de los técnicos del régimen, ayudar al proceso de modernización del sistema educativo.

Sobre los cambios a implementar, las nuevas autoridades expresaron que éstos se realizarían en :

„(...) consulta amplia, a todos los sectores relacionados con el fin educacional propuesto, de manera que sus intereses sean tomados en cuenta.“¹³⁸

Sin embargo ninguna de las grandes reformas implementadas por los militares, como lo demostraré más adelante, fueron consultadas en el magisterio ni en ninguna instancia que tuviera una mínima independencia de las estructuras gubernamentales.

Sobre el rol del Estado en la educación, el documento define una posición que provocaría incluso dentro de los propios adherentes al régimen álgidas polémicas:

„El Estado debe reconocer y apoyar la función educativa de la sociedad en su conjunto manteniendo sólo el control necesario para la salvaguardia de los intereses públicos.“¹³⁹

En esta aseveración me parece entender la frase „*la sociedad en su conjunto*“, como „*la iniciativa privada*“, En la nueva modalidad el Estado debe solamente velar por el control de los intereses públicos que, colateralmente inciden en el proceso educativo pero que no lo determinan.

135Principios educacionales del gobierno..., Ob. cit.

136Principios educacionales del gobierno..., Ob. cit.

137Principios educacionales del gobierno..., Ob. cit.

138Principios educacionales del gobierno..., Ob. cit.

139Principios educacionales del gobierno..., Ob. cit.

2.4 El Corporativismo Gremial en reemplazo del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (SUTE)

Los militares inician en la administración pública y especialmente en el sector educación un camino denominado por ellos de *limpieza*. Esto significó despido de profesores, destitución de funcionarios del Ministerio de Educación, así como de directores de escuelas y estudiantes que hubieren tenido algún nivel de participación o compromiso en actividades políticas dirigidas por partidarios del depuesto gobierno.

En el marco de una acción de copamiento rigurosa, los militares se hacen cargo de la administración educacional impulsando una serie de medidas entre las que se cuentan:

- Traspaso de las Escuelas Normales a las universidades
- Disolución de todas las expresiones gremiales del magisterio
- Nombramiento de nuevos directores regionales, provinciales y locales de educación así como nuevos directores en las escuelas básicas y secundarias.
- Designación de rectores delegados en las universidades
- Congelamiento de los salarios de los profesores etc.

Una de las medidas considerada como compensatoria a esta política de copamiento y degradación del magisterio es la creación, en 1974 del Colegio de Profesores al cual los militares le confieren una fisonomía acorde a las profesiones liberales.¹⁴⁰

Oficialmente ya no se habló más de gremios ni de sindicalizados sino de „*Colegio*„ y de „*miembros de la orden*“.

Para una parte del magisterio esta medida significó un importante reconocimiento a la función educativa y quisieron ver en ella el término de la llamada politiquería sindical. También el Colegio de Profesores fue entendido como un gesto de protección a la ética profesional y como una instancia vigilante encargada de impedir que personas ajenas a la docencia ejercieran funciones que no les competían:

¹⁴⁰Decreto 678, 1.10.1974

„Yo quisiera saber si se puede ejercer la medicina o la abogacía o la dentística sin poseer un título profesional. Creo que no; entonces por qué en educación no se va a aplicar una medida similar?. Por qué vamos a permitir que personas que no tienen su título se dediquen a la docencia?“¹⁴¹

Dentro de los objetivos mencionados, el Decreto de promulgación establece que el Colegio de Profesores debe propender a la dignificación del profesorado en todos los ámbitos de la función social. Promover el progreso, prestigio y prerrogativas de la profesión y velar porque sus miembros mantengan, en el desempeño de la función docente, una actitud de prescindencia política partidista como parte de su ética profesional. Además el decreto propone estimular la investigación y perfeccionamiento inherentes al ejercicio profesional de los colegiados, promover y organizar congresos nacionales e internacionales relacionados con materias de su profesión y prestar colaboración pedagógica a organizaciones nacionales e internacionales.¹⁴²

A partir de la existencia del Colegio de Profesores, los maestros tuvieron que inscribirse en éste para poder ejercer la profesión. Los bienes del SUTE fueron traspasados a la nueva institución y las primeras directivas fueron designadas no por elección de sus asociados sino por medio de un proceso de cooptación ejercido por las autoridades del Gobierno.¹⁴³

Para Julio Valladares, miembro del directorio nacional del Colegio de Profesores democratizado, las formas naturales de expresión pretendieron ser reemplazadas por una estructura institucional llamada Colegio de Profesores que fue, durante 12 años, una típica expresión de los corporativismos autoritarios en que las organizaciones sociales son instrumentalizadas y manejadas por el poder político. En este contexto, agrega el dirigente, uno de los logros principales del profesorado fue conseguir, aún en ese esquema, espacios de libertad los cuales más allá de la significancia pragmática permitían la recuperación de una confianza perdida, como gremios o como asociación. Agrega Valladares que la utilización de esos espacios era indiscutiblemente un triunfo moral del magisterio opositor:

„La lucha fue democratizar el Colegio por medio de elecciones libres; en ese sentido nos anticipamos a lo que fue la lucha de toda la sociedad chilena. Pensamos que en la medida en que la gente se expresara, votaría en contra del régimen autoritario. Después de 1986 cuando se democratiza el Colegio no hubo posibilidades de diálogo con el gobierno, hubo mucho debate y

¹⁴¹ Eduardo Gariazzo, presidente designado del Colegio de Profesores, Entrevista en La Tercera de la Hora, Santiago, 16.10.1980

¹⁴² Decreto 678, 1.10.1974

¹⁴³ La primera elección democrática se efectuó en Diciembre de 1985

discrepancia pública. Los dirigentes eran perseguidos, encarcelados, no eran recibidos. Esa fue la tónica principal de la relación con el gobierno militar.”¹⁴⁴

En lo planteado por el profesor Valladares destaca una idea central que juega un papel importante en la presente investigación y es su afirmación: „(...) *en ese sentido nos anticipamos a lo que fue la lucha de toda la sociedad chilena*“. Efectivamente, y así lo he planteado en el objetivo del presente trabajo, los profesores demandaron la democratización de su organización como paso previo a la democratización de la sociedad. Con seguridad muchos docentes de aquel periodo no lo perciben claramente, algunos por arrogancia y otros por frustración llegaron, como dijera el profesor Verdugo: „a creer que esto era eterno“.

La lucha entonces por democratizar al gremio más numeroso del país es entendida por varios dirigentes como la antesala de lo que fue 1988, el plebiscito y la derrota electoral de los militares.

Retomando la afirmación de Valladares, lo que se percibe es justamente la constatación de un hecho y es que, a partir del movimiento gremial de los profesores que se inicia con múltiples variantes ya a finales de los años 70 y que culmina en una primera fase (1985) con las elecciones libres en el Colegio, se va generando un vasto proceso democratizador, el cual tiene como actores relevantes al magisterio y al movimiento estudiantil. Unos y otros con diferentes matices coinciden en las demandas educacionales. Sus peticiones están centradas principalmente en la consecución de espacios libertarios, pluralidad en las aulas, participación en las discusiones sobre el nuevo carácter de la educación y mejoramiento en las condiciones materiales de estudio y de docencia.

El movimiento de los profesores de mediados de los años 80 presenta la característica de ser un componente movilizador de las aspiraciones de una clase media chilena que se había sentido ligada al gobierno pero que, como consecuencia de las contradictorias políticas económicas impulsadas por éste, vieron drásticamente disminuidas sus posibilidades de ascenso social.

En este contexto, el profesorado junto con sentirse esquilmado en sus demandas, se siente particularmente desengañado con un gobierno que pone en práctica una línea ambivalente en la solución de sus problemas.

¹⁴⁴Julio Valladares, Entrevista, 1992

En efecto en el transcurso de los primeros seis años de gobierno las medidas asumidas por los militares en el sector educacional resultan visiblemente contradictorias entre sí.

Pareciera ser que en la primera etapa el régimen busca una confirmación de parte de la sociedad civil para su proyecto de *reconstrucción nacional* utilizando el slogan de *unidad nacional*. En este entendido nadie mejor que los maestros podían facilitar el acercamiento entre población y gobernantes. De esta manera es posible constatar que la creación del Colegio de Profesores, el traspaso de las Escuelas Normales a las universidades y la dictación de un Estatuto de Carrera Docente son iniciativas tendientes a ganarse la adhesión del magisterio. No obstante casi paralelo a la imposición de estas medidas, se implementan otras que cumplen la función de invalidar las primeras. Esta línea de claro zigzag es posible visualizarla en los siguientes hechos:

La creación y posterior disolución del Colegio de Profesores para, en el marco de la nueva legislación laboral, dar paso a las asociaciones gremiales. El traspaso de las Escuelas Normales a las universidades para „elevant el nivel de la formación docente“, hecho que culmina dramáticamente con la eliminación de las pedagogías de las universidades. El discurso reiterativo de las autoridades educacionales y del propio jefe de Estado en orden a valorar la función docente como „una de las más nobles del ser humano“ y posteriormente aplicar medidas restrictivas en cuanto a perfeccionamiento, salarios, gremios y estabilidad laboral. La promulgación de una Carrera Docente que no alcanza a durar un año en funcionamiento y desaparece por efectos de la municipalización escolar es el corolario en un largo camino de desencuentros.

Todas estas medidas testimonian la conducta zigzagueante que he mencionado, la cual prevalece hasta 1985-86; año este último, en que se produce ya la ruptura definitiva al establecerse un *diálogo de sordos* entre dirigentes del Colegio de Profesores democratizado y el Gobierno. Ambos agentes, en mi opinión, terminaron acudiendo a las conversaciones más por presión social que por convencimiento de encontrar soluciones a los problemas.

En opinión de Valladares las medidas hasta la fecha impuestas (7 primeros años) van creando un estado de ánimo, de disconformidad que desembocará en las grandes movilizaciones del magisterio en el segundo lustro de los años 80. Y no sólo eso, también se convertirán en factores de movilización para otros estratos de la población que perciben el

desmantelamiento educacional y las desventajas que la alcaldización y privatización les significa.

A juicio de Valladares la cuestión educacional pasa a ser entonces un claro componente de ruptura; no solamente entre autoridades y magisterio sino entre autoridades y sociedad civil.

No lo percibe de la misma forma el ex ministro de educación del régimen militar Sr. Enrique Froemmel, quien afirma que la educación en Chile está muy lejos de ser un valor arraigado en la población, en el sentido, dice él, como lo es en los Estados Unidos.

En opinión del ex ministro, la política educacional del régimen militar no determinó conductas políticas en la población, sí en los sectores de docentes quienes se vieron afectados directamente por las reformas:

„(...) un sector social que puede ser todo lo importante que queramos pero, no creo que el gremio de profesores fuese el grupo que de alguna manera tendió a gravitar para que se produjera el cambio de régimen; creo que eso es una tesis a mi entender demasiado sofisticada. Yo lo lamento, y creo que es triste para un país que sea así, pero creo que en este país, todavía la educación a la gente no le importa.“¹⁴⁵

Sobre los orígenes del Colegio de Profesores preciso aclarar que, aun cuando el déficit de pluralidad y el verticalismo acentuado eran de difícil aceptación en las bases del magisterio, la puesta en vigencia del Colegio resultó ser una idea atractiva para muchos maestros quienes efectivamente creyeron en que se producirían cambios cualitativos en las relaciones entre el Estado y el sector docente. Incluso llegaron a pensar que su situación socioeconómica mejoraría ostensiblemente.

Los dirigentes nombrados asumen naturalmente el discurso del gobierno e instan a sus asociados a colaborar en la implementación de una política educacional acorde a los postulados nacionalistas al tiempo que, como directiva, se suman a muchas de las actividades oficiales implementadas por los militares en educación.

La directiva del Colegio de Profesores pone el acento en la obtención de conquistas parciales las que, para los efectos de la propaganda, alcanzaban destacada resonancia en los medios de comunicación del país: el hospital del maestro, los créditos especiales para la compra de vehículos o viajes al extranjero, el pago de cuotas mortuorias y otras medidas de bienestar social se inscriben a mi entender dentro de estas demandas, especialmente en el primer sexenio.

¹⁴⁵ Enrique Froemmel, Entrevista, Marzo, 1992

Por otra parte resulta también evidente observar que la actividad del Colegio de Profesores se realiza en un marco de adhesión desmesurada del consejo directivo a las políticas oficiales. Expresión de esto y a manera de reconocimiento por parte del gobierno a la función mediadora del Colegio Profesores es el nombramiento de la primera presidenta del Colegio, Silvia Peña, como subsecretaria de educación y posteriormente como miembro de la delegación diplomática en España. Un nivel superior de incondicionalidad se refleja en la actitud del posterior presidente del Colegio de Profesores Eduardo Gariazzo a quien la prestigiada periodista Raquel Correa del periódico El Mercurio, en entrevista con el dirigente le hace los siguientes reproches sobre su incondicionalidad al régimen:

„Aceptó la medida de traspasar las pedagogías a la universidad y estuvo también de acuerdo en que años mas tarde éstas perdieran su rango universitario. Apoyó la creación del Colegio de Profesores pero fue el primer dirigente (y único) que estuvo de acuerdo con la disolución de todos los colegios profesionales inclusive el de los maestros; fue un gran defensor de la Carrera Docente impuesta por el gobierno pero también defendió mas tarde la municipalización de la educación que dejaba sin valor la Carrera Docente.“¹⁴⁶

La disconformidad de los profesores disidentes se hizo sentir a corto plazo encontrando canales de expresión a través de declaraciones públicas dadas a conocer en escuelas y encuentros nacionales o provinciales convocados por el Colegio de Profesores.

En el segundo Congreso realizado en La Serena (1977) los maestros opositores logran que la asamblea de delegados al Congreso apruebe una solicitud en la que se pide al Ministerio de Educación la devolución de conquistas salariales. Este hecho siendo justo, es tipificado en ciertos medios de opinión pública como:

„(...) una peligrosa forma de regreso al reivindicacionismo del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación.“¹⁴⁷

A través de ciertas fuentes informativas de la Iglesia Católica algunos maestros hacen público su desacuerdo con las políticas educacionales que se están implementando. Los primeros gérmenes de un movimiento gremial contestatario están aún en una etapa de incubación y será la Iglesia Católica la institución que asumirá, en un determinado periodo, la función de proteger y estimular el desarrollo de este proceso.

146Raquel Correa, Entrevista a Eduardo Gariazzo, El Mercurio Santiago 18.10.1981 pag. D-7, cit.por Iván Núñez en Cambios en la situación del Magisterio, PIIE, Santiago, 1982, pag. 48

147El Mercurio, Santiago, 14.6.1977

La Comisión de Educación del Arzobispado de Santiago en la zona sur de la Capital y junto con ella la Agrupación Cultural Pedro Aguirre Cerda son ejemplos representativos de estas formas primarias de gremialismo alternativo al Colegio de Profesores:

„En el año 1979 surgieron comisiones de educación del Arzobispado en las cinco zonas de Santiago las que decidieron formar la Coordinadora Metropolitana de Educación (CME) que el 1 de Septiembre del mismo año realizó en el auditorium Miguel Prado la primera Asamblea Sindical del magisterio de Santiago.“¹⁴⁸

La escasa posibilidad de expresión que tuvieron los maestros opositores al régimen militar hacia el final de la década de los 70 es denunciada también por los obispos. En la conferencia episcopal de 1981 los prelados chilenos entregan, sobre la base de una serie de antecedentes reunidos, una opinión muy crítica respecto a los asuntos educacionales, llamando la atención tanto a las autoridades como a la opinión pública acerca de la manera cómo se estaban llevando adelante las reformas en los primeros siete años de gobierno.

El documento manifiesta la preocupación de los religiosos porque problemas acuciantes de la formación docente, en términos de profesionalización, perfeccionamiento, organización y libertad de expresión están siendo unilateralmente asumidos por las autoridades de gobierno sin consultar a quienes son los directamente afectados. Decían los obispos:

„Nos inquieta la situación extremadamente delicada ha que ha sido llevado el profesorado por la profundidad de los cambios educacionales y la drasticidad de los procedimientos empleados en su aplicación al punto que puede hablarse de una crisis integral de la profesión docente. (...)Preocupa que la formación de los educadores haya sido marginada de la lista de actividades exclusivas de las universidades donde tradicionalmente se prepararon los profesores del nivel medio y donde el propio gobierno reubicó a las Escuelas Normales como reflejo de la importancia y creciente complejidad de la tarea educativa. Los profesores en servicio sufren desde años, inseguridad laboral. Sin mecanismos claros y públicos de defensa de sus derechos funcionarios y con la constante amenaza de que sus rentas se regulen por el mercado, sufren ahora, además, la inseguridad en la permanencia de sus cargos atendido el actual proceso de municipalización (...). Sin organizaciones representativas y constreñidos a un rol meramente identificable con la mera instrucción, se sienten privados de toda participación en el estudio de las políticas educacionales que tan directamente les afectan y en que tienen probada competencia. Ven cerradas así, o muy disminuidas, sus posibilidades de aporte al estudio y aplicación de reales innovaciones educacionales que contribuyan al desarrollo del país.“¹⁴⁹

Las declaraciones de la iglesia son en parte corroboradas, naturalmente desde otra perspectiva, por el ex ministro de educacional del régimen militar Sr. Enrique Froemmel cuando en una reflexión retrospectiva, refiriéndose a las reformas educacionales expresa que:

148 Ramón I. Núñez Prieto: Las transformaciones educacionales bajo el régimen militar, Santiago, pag. 181.

149 Comité permanente Episcopado chileno, carta pastoral: Reforma educacional, Edit.revista Mensaje N° 300, Julio 1981, pag. 371

„Los gremios de maestros crearon una actitud negativa (hacia los cambios) y la razón es simple, porque esto se hizo precipitadamente y llevó a perjudicar a mucha gente. Por otra parte el hecho de que no se involucrara a los maestros en el proceso, también implicó que ellos no se sintieran solidarios. Sabe usted que lo peor que uno puede hacer cuando se trata de echar a andar algo es no involucrar a los que participan o los que van a ser afectados porque nunca van a ver eso como propio. Por lo tanto para los maestros es algo que se les estaba imponiendo desde afuera o de arriba y por lo tanto no les gustó. O sea, yo diría que si sacamos un promedio, los maestros estaban en contra.“¹⁵⁰

La particularidad en la opinión del ex ministro es que él reduce todo el conflicto a un asunto de no participación en las discusiones educacionales. Sin embargo el problema era mayor: no se trataba solamente de un problema de participación. El conflicto, como lo expresan los dirigentes Valladares, Verdugo y Pavez e incluso la misma Iglesia Católica, estaba centrado en el carácter de la educación que se estaba gestando y en los métodos impositivos usados por el gobierno que no dejaban espacios de discusión sobre determinaciones extraordinariamente importantes. Históricamente ha quedado demostrado que el magisterio chileno, aun habiendo participado activamente en la discusión de políticas educacionales asumió de todas maneras un rol independiente al de los gobiernos e incluso en ocasiones impulsó movimientos huelguísticos, pese a su presencia, en la mesa de las negociaciones.

De cualquier forma el ex ministro de educación debe reconocer que el gobierno no consideró la opinión de los maestros en las transformaciones educacionales que estaban en marcha. Aún más, la incondicionalidad del Colegio de Profesores hacia las políticas gobiernistas, lejos de ser un impedimento, permitía un diálogo que el régimen militar tampoco supo valorar.

Esa desacostumbrada verticalidad en educación es lo que va provocando una pérdida constante del prestigio y ascendencia que el proyecto militar pudo haber tenido en estos sectores.

El nuevo *Plan Laboral* implementado por el gobierno a comienzo de los años 80 el cual tenía como función reglamentar las relaciones

150E. Froemmel, Entrevista 1992

entre estamentos laborales, empresariales y gubernamentales, era el resultado de una política de liberalización y modernización que pretendía amortiguar las tensiones existentes entre los diferentes grupos sociales en pugna. Sin embargo acabó de paso con todos los colegios profesionales los cuales, valga la pena señalar, ya habían mostrado ciertos rasgos de descontento por la forma extremadamente autoritaria con que se estaba gobernando al país.

Con la argumentación de que los colegios profesionales eran „estructuras monopólicas y privilegiadas“ el régimen estableció a través del Decreto con Fuerza de Ley Nr. 3.261 la libertad de afiliación y la no exigencia de inscripción en los colegios para ejercer las profesiones. El mismo Decreto ordenó la conversión de los colegios en simples asociaciones gremiales las que podían constituirse con un número reducido de personas pudiendo formarse tantas como los asociados quisieran.¹⁵¹ Igualmente dispuso que los tribunales de justicia se encargaran de los procesos por faltas a la ética profesional que hasta entonces sustanciaban los mismos colegios. También eliminó los aranceles establecidos por estas instituciones para regular el pago de honorarios.¹⁵²

Este hecho abrió naturalmente nuevas fisuras en las relaciones del gobierno y los colegios profesionales. Estos últimos protestaron públicamente por la medida y al momento de establecer diálogos rechazaron cualquier negociación con otras autoridades que no fuera el propio Presidente de la República general Augusto Pinochet. No obstante el Colegio de Profesores encontró argumentos para aceptar la medida y estuvo dispuesto, independiente de los otros colegios profesionales, a reunirse con autoridades aunque fueran de menor rango. En este significativo hecho se demostraba una vez más la dependencia y el desacostumbrado grado de lealtad y subordinación de los dirigentes del Colegio de Profesores para con las autoridades gubernamentales.

Los colegios profesionales pese a sus protestas se vieron finalmente en la obligación de aceptar las nuevas reglas establecidas. La brecha entre profesionales liberales y el régimen militar se ahondaba considerablemente. La clase media que había hecho aportes significativos en la creación de las condiciones sociales que anteceden al golpe de Estado en 1973, sufría en 1981 una nueva afrenta en su columna institucional: todos los Colegios Profesionales a partir de 1981 quedaban convertidos en asociaciones gremiales. El Colegio

¹⁵¹ Decreto con Fuerza de Ley N° 3.261, 7.1.1981

¹⁵² Ramón I. Núñez Prieto: *La Transformaciones...*, Ob. cit. pag. 182

de Profesores no renunció a su nombre pero sí tuvo que hacerlo a una serie de prerrogativas que sería tedioso enumerar. Para los efectos oficiales tuvo que acotar la definición Asociación Gremial: o sea; *Colegio de Profesores A. G.*

En este periodo los maestros pertenecientes a los círculos disidentes y apelando a la nueva modalidad legal deciden formar una propia asociación gremial. Se origina de esta manera la Asociación Gremial de Educadores de Chile, AGECH, con personalidad jurídica y reconocida como instancia orgánica representativa del profesorado. Esta asociación asumirá un rol contestatario no solamente contra las políticas oficiales sino también contra el Colegio de Profesores a quien ve como dócil institución, carente de perfil gremial.

Las principales medidas educacionales que se implementan en este periodo (1973-80) y que despiertan justificados temores en el magisterio son la prohibición y represión de la actividad sindical,¹⁵³ el traspaso de las Escuelas Normales a las universidades,¹⁵⁴ la imposición de un Colegio de Profesores en reemplazo del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación,¹⁵⁵ el despido de maestros por razones políticas,¹⁵⁶ la imposición de un Estatuto Docente desventajoso para el magisterio,¹⁵⁷ el traspaso de las escuelas públicas al sector privado y municipal¹⁵⁸ y hacia el término de este periodo la entrega de colegios de la enseñanza técnico-profesional a instituciones privadas como a la Sociedad Nacional de Agricultura y la Sociedad de Fomento Fabril.¹⁵⁹

Todas estas medidas van cambiando radicalmente el perfil del Estado Docente que caracterizó durante el presente siglo al sistema educacional chileno y al mismo tiempo son las evidencias que me permiten asegurar la clara intencionalidad del régimen de poner fin a un Compromiso Histórico establecido en la sociedad chilena hacia mediados de los años 20, en el cual la clase media y el profesorado chileno habían jugado un rol preponderante.

153 En cuanto a prohibición El Decreto Ley 1.284 de 1974, canceló la personalidad jurídica al SUTE. En el marco de la represión varios dirigentes del Magisterio fueron muertos por el régimen; entre ellos podría señalar a Leonello Vincenti profesor universitario fusilado en Copiapó; al Director provincial de educación primaria de Osorno fusilado en esta misma ciudad; al profesor de música Jorge Peña fusilado en La Serena; al dirigente nacional del SUTE Juan Gianelli, desaparecido tras su detención y a Carlos Ibarra, dirigente estudiantil normalista muerto por efectos de la tortura en los días posteriores al golpe de Estado. A ello se suma una gran cantidad de maestros detenidos y encarcelados en campos de concentración. Algunos fueron expulsados del país, otros apartados de sus puestos de trabajo; los menos fueron reintegrados a sus funciones docentes.

154 Decreto Ley 179, 1973

155 Decreto Ley 678, 1974

156 El Decreto Ley 2.345, de 1978, apelando a la desburocratización y racionalización de la administración pública facultaba al ministro del interior para remover a cualquier funcionario público de su cargo. Bajo esta ley los maestros opositores sufrieron nuevamente los rigores de la represión y discriminación.

157 Decreto Ley 2.327, 1978

158 Decreto Ley 3063, 1979

159 Decreto Ley 3166, 1980

En la operacionalización de todas estas medidas, al Colegio de Profesores cooptado le corresponde jugar el poco decoroso papel de aceptación y justificación ante las bases y la opinión pública de estas y otras muchas medidas que el régimen militar implementó.

El Colegio de Profesores cooptado fue, en opinión de la mayoría de los maestros del Colegio de Profesores democratizado, una organización de carácter corporativista creada por el gobierno militar que pretendía ser la instancia representativa de los maestros en sus relaciones y negociaciones con el Estado.

Para los partidarios del gobierno en cambio, se trataba de una medida de reconocimiento a la función educadora que aspiraba a establecer mecanismos expeditos de comunicación entre ambos agentes. Prerrequisitos fundamentales de este entendimiento serían el apoliticismo y profesionalismo de sus cuadros directivos, así como el distanciamiento de la institución del debate político que otrora habría caracterizado al Magisterio chileno.

Para los disidentes, el Colegio de Profesores se inscribe dentro de las medidas supuestamente compensatorias implementadas por el gobierno, tendiente, por una parte, a dividir al movimiento gremial y por otra, a crear en el profesorado no adscrito a ideas políticas, la imagen de reconocimiento moral de las nuevas autoridades hacia la función docente.

La puesta en práctica del Colegio, en opinión de los opositores, no fue más que una audaz medida destinada a separar al profesorado de las aspiraciones de mejoramiento social y profesional que eran a menudo el componente central en las reivindicaciones del magisterio organizado.

Al margen de las dos apreciaciones mencionadas y que encontraban enconados defensores y detractores, lo concreto es que la institución Colegio de Profesores fue, en el periodo 1974-85, una organización impuesta. Sus directivos fueron designados por las autoridades gubernamentales rompiendo de esta manera una vieja tradición de autodeterminación en el magisterio.

Debido a estas razones muchos maestros vieron con escepticismo el accionar de los dirigentes nominados el que estuvo caracterizado por una actitud de lealtad exagerada al régimen. Esta actitud les llevó naturalmente a aislarse de las bases y a que éstas crearan instancias gremiales alternativas.

El paso previo a la imposición del Colegio de Profesores fue la disolución del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (SUTE), confiscando sus bienes y prohibiendo toda forma de sindicalismo docente en las escuelas.

El Colegio de Profesores, pretendió hacer abstracción de las relaciones laborales en términos de empleado-patrón así como de los problemas salariales y de las funciones que cada uno tenía en la estructura educativa. Tampoco defendió los intereses fundamentales del profesorado para no confrontarse con las autoridades.

Gran parte de su actividad representativa queda en el periodo, constreñida a tareas de conciliación y representación más que de confrontación y discusión con los empleadores.

Como ha quedado comprobado en diferentes experiencias de gobiernos autoritarios en el mundo, instituciones como el Colegio de Profesores chileno son, a juicio de la mayoría de los dirigentes entrevistados, la alternativa al sindicalismo libre, al cual algunos gobiernos subestiman por estar influidos de pensamientos políticos y distante, según ellos, de los intereses netamente profesionales y laborales de sus asociados.

En otros casos, gobiernos de diferente inspiración pero igualmente autoritarios, han pretendido ideologizar al extremo las organizaciones de trabajadores de manera de convertirlos en „dóciles apéndices de las políticas oficiales.“ (O.Verdugo,1992)

Otro de los objetivos principales de este tipo de organización es, en mi opinión, dirigir a sus asociados, actuar y decidir en su nombre. De esta manera se ejerce una de las tareas principales: transmitir ideología. Casi siempre estas instituciones corporativistas asumen funciones administradoras de beneficios materiales que ayudan a la legitimación del gobierno en las bases. Al mismo tiempo los gobernantes comprometen la lealtad de las elites direccionales que actúan como intermediarios en la operacionalización de las grandes estrategias educacionales.

El Colegio de Profesores en Chile (1974-1986) correspondió a un modelo añorado por un sector de docentes que se identificó durante muchas décadas con los sectores dominantes de la estructura social que ellos mismos ayudaban a reproducir y careció a mi juicio de un pensamiento social crítico, identificándose con una institucionalidad profesional que les era ajena: la de los colegios de profesiones liberales.

El origen de dicha franja magisterial puede rastrearse en las lejanas asociaciones mutuales de comienzos de siglo, las cuales se enfrentaron, con perseverante empeño al movimiento sindical docente, que en los años 20 adquiere significativa expresión en el magisterio

chileno. Esta falsa actitud de apoliticismo y de identificación con los estratos dominantes de la sociedad, es interpretada por algunos teóricos, como parte de un proceso de *inautenticidad* típica en las sociedades latinoamericanas por medio del cual, grupos sociales autoenajenan su identidad renunciando a lo que son, e identificándose con estratos sociales a los cuales no pertenecen. Esta especie de mutación social o de transculturación se expresa no solamente en los estamentos marginales de las sociedades latinoamericanas sino también en subestratos disconformes de la clase media que se identifica en gran medida con la clase dominante y ésta última con las elites gobernantes en las metrópolis extranjeras.¹⁶⁰

2.5 Imposición del Estatuto de la Carrera Docente

La creación del llamado Estatuto de la Carrera Docente en 1978 fue un nuevo cambio determinante en las relaciones profesores-gobierno.

Este Estatuto había sido durante muchos años una aspiración de vital importancia del Magisterio chileno y era entendido por los maestros como el cuerpo jurídico a través del cual el profesorado dejaba establecida sus relaciones con el Estado.

El Estatuto Docente definía funciones, deberes, derechos, salarios, ascensos, estabilidad laboral, perfeccionamiento, bienestar social; y en general toda una gama de temas que en el transcurso de los años habían sido siempre puntos de fricción entre el magisterio y las autoridades gubernamentales.

De esta manera el Estatuto era entendido como una herramienta de regulación entre el Estado y los educadores, pero al mismo tiempo era interpretado por estos últimos como un mecanismo de defensa de sus prerrogativas en las relaciones con su empleador.

El régimen militar empieza en el año 1975 a elaborar el proyecto de Estatuto Docente; sin embargo, y pese a las excelentes relaciones que existen entre gobernantes y Colegio de Profesores, estos últimos no serán llamados a participar en las decisiones. En entrevista de prensa el ministro de educación de la época Arturo Troncoso Daroch, respondiendo a la pregunta de si los profesores habían participado de las discusiones sobre el proyecto de Estatuto Docente, a lo menos en el capítulo referido a sus rentas, manifestó lacónicamente que no, que:

¹⁶⁰Al respecto véase Augusto Salazar Bondy: *Cultura de la dominación*, Lima, 1968

„Ninguno de ellos ha tomado parte en dicho estudio porque el documento debía prepararse en forma muy rápida durante los primeros días de Diciembre y porque los dirigentes a la fecha se encontraban viajando a través del país para dar a conocer el sistema de inscripción en el Colegio de Profesores.“¹⁶¹

Como es claro apreciar, el ministro expresa una argumentación que no admite mayores comentarios, especialmente si se entiende que el tema de las remuneraciones había sido desde siempre un factor inquietante en el magisterio. Cabría preguntarse entonces de si es posible, de no mediar una intención premeditada de no querer dialogar, que un decreto que decide los salarios de casi 90. 000 maestros haya sido elaborado „con prisa“ e incluso en el momento en que los representantes del Colegio se encontraban de viaje, y más aún con todo el profesorado ya prácticamente en vacaciones. (?)

La decisión definitiva de poner en funcionamiento el llamado Estatuto de Carrera Docente es anunciada 2 años más tarde por el propio general Augusto Pinochet.¹⁶²

El mandatario dice ver en la aplicación de esta medida „un acto de justicia con los profesores“ y que tendrá para el Estado un costo de 100 millones de dólares del presupuesto anual; ello implicará un mejoramiento sustancial en las rentas de los maestros, especialmente para aquellos de menores ingresos.

Por medio del Decreto ley Nr. 2.327 del 1 de Septiembre de 1978 el gobierno militar crea el Estatuto de la Carrera Docente el cual contempla dentro de sus considerandos la necesidad de hacer de la educación un instrumento eficiente de superación, progreso y modernidad. En este empeño, dice el Estatuto, los maestros juegan un papel relevante puesto que son los responsables de materializar este ideal en las escuelas.

También se consideran las aspiraciones de los maestros por conseguir instancias de perfeccionamiento que les permitan ascender dentro de una carrera funcionaria, lo que a la vez debía brindarle mejores condiciones de trabajo y remuneraciones acordes a la función, responsabilidad y antigüedad que tuvieran en el servicio.

La Junta Militar de Gobierno considera que la puesta en vigencia de esta ley significa una solución integral para los profesionales de la docencia y señala como objetivos tres muy importantes: a) estimular la eficiencia de la enseñanza en todos los niveles del sistema educativo; b) regular la carrera docente para darle oportunidad a los maestros de ascenso y

¹⁶¹ El Mercurio, Santiago. 27.12.1975

¹⁶² El Mercurio, Santiago. 22.3.1978

promoción dentro de la profesión; y c) promover la superación y eficiencia de los educadores mediante un sistema de remuneraciones acorde con sus méritos y antigüedad.

De esta manera se dejan abiertas las posibilidades para mejorar la calidad de la educación que se imparte y se estimula el ascenso de los maestros dentro de su profesión en base al ofrecimiento de cursos de perfeccionamiento.

En relación al aspecto económico se establecen aumentos salariales considerando antigüedad, méritos y responsabilidad en el servicio.

El Estatuto de la Carrera Docente confirma al Colegio de Profesores como instancia máxima del magisterio organizado y será este organismo quien represente a los maestros en las negociaciones con las autoridades.

Los profesores quedan clasificados según título, antigüedad y función dentro del sistema de enseñanza; vale decir: personal directivo, personal aula y docentes no titulados.

Cada escalafón en el Estatuto Docente es organizado en grados que buscan una equivalencia con la Escala Unica de Remuneraciones (artículo 23 del Estatuto) la cual opera para el resto del personal de la administración pública.

Se dan sin embargo algunas variantes como por ejemplo asignación de zona, antigüedad del maestro, aumentos salariales cada dos años; y un monto especial de reajuste para aquellos que posean el título profesional. Con esta última medida se pretendió estimular a los maestros (no titulados con más de 10 años de servicio) para que, a partir de un incentivo económico concreto, obtuvieran su título por medio de cursos especiales ya que en la situación en que se encontraban podían acceder solamente al 75% del sueldo de un profesor titulado en igualdad de funciones, antigüedad y horario.

A los maestros con 44 horas semanales y título, el Estatuto Docente les confiere una asignación del 100% de su sueldo base y un 50% para aquellos que cumplan 30 hrs. semanales. Objetivo de esta medida es estimularles para que sus labores pedagógicas las realicen en una sola escuela, evitando la proliferación de lo que se llamó folklóricamente el *profesor taxi*, aludiendo a los maestros que debían trabajar en tres, cuatro o cinco establecimientos en la semana debido a lo esmirrio de sus ingresos.

Sin embargo no todos los profesores podían postular a las 44 horas semanales. En primera línea estaban considerados los docentes en cargos directivos y luego, si las necesidades escolares lo requerían y las posibilidades económicas del ministerio lo permitían, podía acceder el resto del profesorado. No obstante, se logra comprobar, según los profesores de

AGECH, que económicamente tampoco resultó tan atractiva esta medida ya que los maestros con 30 horas de trabajo al postular a las 44 horas aumentaban solamente en un 25% sus remuneraciones y en cerca de un 50% sus horas de trabajo.¹⁶³

Punto controvertido en esta reestructuración es el concepto de jornada completa : las 44 horas semanales eran contabilizadas anteriormente como horas de 45 minutos y el régimen militar proponía que fueran cronológicas, es decir, de 60 minutos.¹⁶⁴

Otro punto de fricción que despierta incertidumbre en los maestros es que ya no se está en propiedad del cargo, como en la legislación anterior, sino solamente del grado. Qué significa esto?. Entre otras cosas que el maestro puede ser trasladado de escuela e incluso de ciudad en cualquier momento, considerándose una posible negativa a aceptar el traslado como antecedente que puede determinar sanciones, las que van desde una inhabilitación para su ascenso profesional hasta la exoneración del servicio. A ello se agregan las calificaciones que deben hacer los directores de escuelas, nombrados por el régimen militar, en términos de puntualidad, sentido de cooperación, orden, presentación personal y disciplina del maestro.

Sobre este tema me detengo un instante para agregar algunos antecedentes que permitan percibir de mejor forma el carácter autoritario que se ejerció no solamente con los educandos sino también con los educadores.

El Decreto Ley Nr. 2. 327 le entrega al director de escuela las herramientas para ejercer una política de control desmedido que influyó en la interrelación y convivencia entre maestros de un mismo establecimiento. El decreto aludido otorga al director de escuela la prerrogativa de destacar a los mejores maestros para promoverlos dentro de la Carrera Docente y señalar a quiénes, por su falta de aptitudes, no conviene que continúen en el servicio. En este contexto el decreto establece que la autoridad de la escuela (léase director) debía llevar un legajo de la actuación profesional del maestro la que se denominará hoja de

163 Asociación General de Educadores de Chile AGECH, Cuadro comparativo entre los documentos del Estatuto de la profesión docente propuesto al Magisterio por la AGECH y el documento del Ministerio de Educación impuesto como Carrera Docente en 1978, Fuente: Archivo Colegio de Profesores, AGECH, Documento mimeografiado, Santiago, 1983

164 Decreto ley N° 2. 327 de 1978 que regula el Estatuto de la Carrera Docente; ver AGECH cuadro comparativo..., Ob. cit.

vida. Por medio de esta medida el director de escuela evaluaba diversos aspectos del comportamiento profesional y personal del docente lo que ya he expresado recientemente. Concluía esta desacostumbrada manera de evaluar a los docentes con una clasificación en tres diferentes tipos de listas: Lista 1, muy buena; lista 2, meritoria; lista 3, condicional.¹⁶⁵

A muchos maestros, dice el profesor Schulack, no les fue fácil poder comprender las nuevas disposiciones administrativas. El profesorado acostumbrado a expresar libre y responsablemente sus opiniones debió someterse a un régimen estricto de obediencia y autocensura impuesto por „pequeños dictadores“ instalados en muchas escuelas a lo largo y ancho del país.

Preciso sí aclarar que ésta no fue la atmósfera que se vivió en cada escuela; destaco solamente la valoración general hecha por dirigentes del Colegio de Profesores democratizado en el sentido de que fue un estilo representativo que cayó en la tentación autoritaria, que por lo demás alguna tradición tenía ya en la historia de la pedagogía chilena:

„No hubo ninguna posibilidad de diálogo, de crítica, de acceso legítimo de los que disintíamos para utilizar nuestros bienes, nuestros recursos que eran de todos los profesores; o sea, existía una ceguera y una soberbia fuerte porque también estaba la tesis del autoritarismo: esto era eterno, esto era la perpetuación de un régimen ideológico determinado.“¹⁶⁶

Los ascensos en la Carrera Docente quedan reglamentados por el tiempo de permanencia en el grado el cual fluctúa entre tres y cuatro años. Uno de los requisitos importantes de los ascensos, eran los cursos de perfeccionamiento que el maestro había podido realizar y sobre lo cual también es necesario añadir que esta oferta estuvo restringida a lo menos por tres factores: uno carácter económico al tener los maestros que pagar por el perfeccionamiento, otro de carácter proselitista al privilegiarse el perfeccionamiento subvencionado a los profesores adherentes al régimen; y un tercero de valoración. En opinión del presidente del Colegio de Profesores democratizado Osvaldo Verdugo, el régimen autoritario desestimó la importancia del perfeccionamiento profesional:

„El perfeccionamiento quedó en los años 80 a los vaivenes del mercado. No hubo política de parte de las autoridades; existe un déficit tremendo y los profesores por sus bajas remuneraciones no podían competir en el mercado ocupacional para perfeccionarse. Siempre vimos al Centro de Perfeccionamiento desvinculado, desfinanciado, sin ninguna capacidad de realizar un perfeccionamiento masivo del profesorado.“¹⁶⁷

165 Decreto Ley 2.327, artículo 42, 43 y 47 del Estatuto de Carrera Docente

166 Osvaldo Verdugo, Entrevista, 1992

167 Osvaldo Verdugo, Entrevista, 1992

A diferencia de lo planteado por Verdugo la profesora Verónica Monsalve opina que:

„Hasta el año 1972 el perfeccionamiento era abierto y fluido. Posteriormente el Centro de Perfeccionamiento sufrió una contracción en su trabajo; (...) en el año 1976 el Colegio de Profesores comenzó a reaccionar con la directiva designada que tenía y a implementar cursos de perfeccionamiento. Después los mismos funcionarios del Centro de Perfeccionamiento, que no fueron todos nombrados por el gobierno militar, comenzaron a formar entre ellos institutos o pequeños grupos de supervisores formando una especie de cooperativas que impartían, cierto es, cursos de perfeccionamiento pero éstos tenían una utilidad económica para ese grupo. El curso era pagado. Recién el año 1987 yo pude recibir un curso de perfeccionamiento de 60 horas que propició la municipalidad gratis. Los demás cursos eran todos pagados.“¹⁶⁸

Para Jorge Pavez el perfeccionamiento del profesorado debía ser:

„(...) gratuito, masivo y de responsabilidad del Centro de Perfeccionamiento. Lo que se ofreció, y que no ha cambiado mayormente es algo que resulta de una política de mercado. El profesor no se está perfeccionando; con el perfeccionamiento se está haciendo negocio.“¹⁶⁹

Consecuencia de ello es que muchos maestros tuvieron que buscar formas de perfeccionamiento en el área privada con todas las limitantes que es posible imaginar: horario, costos, temas, etc. Este hecho, a mi juicio, fue otro componente que devino en una pérdida rápida de la adhesión de sectores del magisterio chileno hacia el régimen ya que los maestros que quisieron perfeccionarse tuvieron que costearse con sus ya disminuidos ingresos una actividad que en las décadas recién pasadas había sido un derecho profesional.

Los medios de comunicación social destacan hacia el periodo con rutinario optimismo, la armonización de intereses entre el Estado y las instituciones de la sociedad civil. Así es como la prensa va configurando, por medio de sus informativos, una predisposición para que la opinión pública y los maestros acepten la medida impuesta como algo que irá en beneficio de toda la comunidad escolar.

Auscultando la información periodística de aquél periodo pude observar opiniones de la prensa gobiernista que intentan proyectar un euforismo tendiente a convencer a la población y a los maestros de lo acertado que habría sido la medida adoptada. Sin embargo a la vuelta de unos meses comenzarán a manifestarse opiniones críticas, algunas de las cuales se originan dentro de las propias filas de los gobernantes.

¹⁶⁸ Verónica Monsalve, miembro del Directorio Nacional del Colegio de Profesores democratizado, directora de escuela, Entrevista, Diciembre, 1991

¹⁶⁹ Jorge Pavez, ex presidente de AGECH y miembro del directorio nacional del Colegio de Profesores elegido, Entrevista, 1992

El oficialista periódico El Cronista afirma que:

„La Carrera Docente es la más adecuada solución para mejorar nuestra educación.“¹⁷⁰

Por su parte en El Mercurio en una editorial del 30 de Abril de 1978 puede leerse que esta medida: „(...) viene a hacer justicia a una vieja y sentida aspiración del profesorado“.

Señala el principal periódico del país que, el gobierno ha dado muchos pasos tendientes a mejorar las condiciones de vida de los maestros y que el Estatuto Docente es uno de ellos. En tono conciliador El Mercurio agrega que:

„No es el caso ahondar ahora en lo anómalo que representó durante décadas un nivel de rentas exiguo.“¹⁷¹

Otro de los periódicos de gran presencia en la sociedad chilena, La Tercera de la Hora, afirma en Abril de 1978 que:

„Con la Carrera Docente suben los sueldos del profesorado.“¹⁷²

El 29 de Junio de 1978 en la pag. 11 comenta este mismo periódico con encomiable entusiasmo que: „Profesores aplauden ley de Carrera Docente„. Fundamenta el titular transcribiendo la opinión de la presidente (designada) del Colegio de Profesores Silvia Peña quien asegura que:

„Estamos totalmente de acuerdo con todos y cada uno de los proyectos incluidos en el nuevo texto ya que las sugerencias formuladas por la entidad que dirijo fueron respetadas al confeccionarse el cuerpo legal.“¹⁷³

Sin embargo El Mercurio en Agosto de 1978, ya menos eufórico, da a entender que el proyecto de Carrera Docente „merece dudas y objeciones„, no obstante, en forma ambigua no especifica quiénes plantean estas dudas. Deja entrever que no son maestros sino miembros de una de las comisiones legislativas que preside el jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta de Gobierno, general Gustavo Leigh. El militar dice haber acopiado dudas y objeciones en diferentes estamentos de la población las que hará llegar por escrito al Ministro de Educación.¹⁷⁴

La Revista Hoy, de tendencia opositora al régimen y en la cual encuentran a menudo espacio personeros de la Democracia Cristiana y de la Iglesia Católica chilena, da a

170El Cronista, Santiago, 2.4.1978 pag. 13

171El Mercurio, Santiago, 30.4.1978

172La Tercera, Santiago, 27.4.1978

173La Tercera, Santiago, 29.6.1978

174El Mercurio, Santiago, 6. 8. 1978

conocer las primeras discrepancias públicas acerca del Estatuto de la Carrera Docente. Eliodoro Cereceda, Rector del internado Barros Arana, uno de los colegios públicos más antiguos y prestigiados de Santiago señala que:

„Estoy desilusionado porque los montos no son suficientes para la subsistencia de un joven que empieza la carrera o un profesional que tenga que mantener un hogar o que haya trabajado 30 años entregando a la juventud lo mejor de su acervo cultural“.¹⁷⁵

El mismo profesor Cereceda, en entrevista al periódico Las Ultimas Noticias, explicita más aun su punto de vista diciendo que la Carrera Docente es una frustración porque no se establece el perfeccionamiento para los profesores:

„Cuándo podrá un profesor perfeccionarse si debe trabajar 44 horas cronológicas a la semana con niños y las condiciones salariales son malas?“¹⁷⁶

Para el Rector la falta de estímulo económico y la liquidación de las Escuelas Normales permite que a la docencia entren jóvenes que no tienen chances en otros estudios por el bajo puntaje obtenido en la Prueba de Aptitud Académica (requisito para el ingreso a las universidades) y en consecuencia carecen de una vocación pedagógica que les permita cumplir en buena forma su función educativa.¹⁷⁷

Para el profesor Luis Celis de la Universidad Católica, el Estatuto de la Carrera Docente le merece serias dudas ya que los nombramientos de cargos que anteriormente se hacían por medio de concurso público ahora se harán a través de la autoridad del lugar donde esté libre la plaza. Críticas de similar índole se manifestaron por la rigurosidad jerárquica del sistema impuesto y también por la falta de consulta a los afectados y por querer, a juicio del profesor Celis:

„mantener una educación barata con el tradicional sacrificio de los profesores.“¹⁷⁸

También se exteriorizan reclamaciones por las formas de calificación a que son sometidos los maestros por parte de los rectores de establecimientos educacionales así como por los arbitrarios traslados de profesores de una región a otra. Ello lleva a una parte del magisterio a considerar que con estas disposiciones se está poniendo en práctica una forma de represión inspirada en el *maCartismo* norteamericano de los años 50. Requerida al

175 Eleodoro Cereceda, Revista Hoy, N° 73, Santiago, 18.10.1978

176 Eleodoro Cereceda, Ultimas Noticias, Entrevista, Santiago, 29.12.1978 pag. 6

177 Corrobora esta afirmación un detallado estudio realizado por el investigador Víctor Nazar : El ingreso a la Universidad de Chile y a las carreras pedagógicas en el año 1978, Edit. Revista CPU N° 25, Santiago, 1980, pp. 135-172

178 Luis Celis, Entrevista, Revista Hoy, N° 73, Santiago, 18.10. 1978

respecto la presidente del Colegio de Profesores Silvia Peña para que clarificara la posición de la directiva del Colegio de Profesores manifestó lacónicamente a la revista Hoy que:

„No tenemos nada que decir sobre la Carrera Docente, ni sobre los traslados de algunos profesores por asuntos netamente del Ministerio de Educación.“¹⁷⁹

Las opiniones que los profesores de bases expresaron con respecto a la Carrera Docente fueron discrepantes.

En el III Congreso convocado por el Colegio de Profesores se expresan conceptos e interrogantes muy distantes a las omitidas por la prensa sobre la Carrera Docente. Incluso una de las críticas principales que en este congreso se plantea, sobrepasa el temario de discusión del evento y se adentra en la legitimidad del Colegio de Profesores como instancia representativa de los maestros.

Argumenta una fracción disidente que, el hecho de ser el Colegio de Profesores una estructura impuesta desde el gobierno, sin consulta a las bases y con un cuerpo directivo cooptado le quita a su directorio legitimidad e independencia. Agregan que no se ha respetado la elección democrática de la directiva como había sido la tradición del magisterio desde comienzos de siglo.¹⁸⁰

Por su parte la revista Mensaje, perteneciente a la congregación católica de los Jesuitas en Chile, publica una carta firmada por un grupo de educadores de Santiago los cuales expresan la incertidumbre del profesorado frente a los nuevos cambios puestos en marcha. El tenor de la carta alude temas como la falta de consulta a los maestros en la preparación del proyecto de Carrera Docente; la actitud de la directiva del Colegio de Profesores que se ha caracterizado mucho más por su servilismo al gobierno que por defender los derechos del magisterio, los discutidos aumentos salariales de los maestros establecidos en el Estatuto de la Carrera Docente y los criterios acerca del horario de clases el cual también fue aumentado.

Concluyen la carta los profesores apelando a la revista Mensaje para que ésta, en uno o varios artículos, aborde el tema de los docentes y promueva una discusión abierta al respecto.¹⁸¹

179Silvia Peña, Revista Hoy, N° 73, 18.10.1978

180El Mercurio, Santiago. 30.11.1978

181Revista Mensaje, Santiago, Noviembre, 1978

En el IV congreso del Colegio de Profesores en la ciudad de Iquique (1979) la Directiva gobiernista especifica, frente a la polémica de la pérdida del derecho a perfeccionamiento, que los profesores que deben trabajar 44 horas a la semana es, a nivel nacional, apenas un 25%, por lo tanto una gran cantidad de ellos tendrían tiempo y facilidades para el perfeccionamiento. Las bases interpelan esta afirmación diciendo que la negativa de trabajar 44 horas es plenamente justificada por cuanto el mejoramiento salarial es tan reducido que muchos maestros se han visto en la perentoria necesidad de buscar formas de mejoramiento económico en actividades extrapedagógicas; ello es lo que hace imposible el perfeccionamiento.

En este congreso aparece nuevamente en el trasfondo de la discusión, el tema de la legitimidad del Colegio de Profesores. Las actas del congreso dan cuenta de una representativa fracción de delegados que increpa a la directiva del Colegio por carecer hasta la fecha de perfil propio en las negociaciones con el gobierno y por no haber cumplido con la función de proteger los derechos naturales del profesorado. En su esfuerzo por armonizar las relaciones con las autoridades, dicen, han quedado desatendidas las peticiones de recuperar las conquistas salariales perdidas en los primeros 5 años de régimen autoritario, las cuales habían sido el resultado de muchos años de lucha y movilización.

En este congreso va adquiriendo forma una fracción opositora que empieza a salir lentamente de su anonimato expresando críticas en forma de preguntas, o bien manifestando opiniones disidentes en un tono mesurado y todavía algo conciliador. Esta tendencia aún no tiene expresión orgánica; tampoco muestra una fisonomía ideológica determinada. Principalmente les preocupa la situación socioeconómica del magisterio así como las condiciones laborales y profesionales que están implementando las autoridades.

Los maestros pertenecientes a esta corriente de opinión están buscando también en el plano nacional sus mecanismos de expresión. Han recurrido a la revista Mensaje de los Jesuitas. Algunos de sus voceros, especialmente del estamento de pensionados, han aparecido en la prensa manifestando las incongruencias del gobierno en política educacional. También a la fecha algunos medios de comunicación social empiezan a distanciarse del triunfalismo propagado por las autoridades educacionales de hace un año cuando se promulgó el Estatuto de la Carrera Docente. En la prensa que he analizado se trasluce ya un mayor

interés por difundir opiniones de sectores en desacuerdo con las medidas educacionales impuestas.

A través de estas opiniones se va articulando un pensamiento crítico que encuentra puntos de convergencia con otros estratos de la clase media, principalmente con aquéllos organizados en colegios profesionales los cuales repentinamente ven, por efecto de una nueva legislación laboral, cercenados sus derechos de organizarse en su estructura tradicional.¹⁸²

Las opiniones que con diversos matices y a través de variados canales comienzan a ser exteriorizadas por docentes en forma individual, o bien como miembros de comisiones de trabajo o asambleas consultivas, van configurando un programa que en rasgos generales va a ser la plataforma de lucha del magisterio en el segundo lustro de los años 80.

Estos puntos que ya se vislumbran con cierta nitidez los he resumido en :

- Falta de participación de los maestros en las decisiones que atañen a la educación y a su propia situación salarial y profesional
- Falta de democracia para elegir a sus representantes
- Excesiva jerarquización del sistema educativo
- Atribución desmedida a los directores de escuelas, a través de las calificaciones, lo cual acentúa el autoritarismo, opacando sensiblemente la cultura democrática de los maestros
- Reducción del poder adquisitivo de sus salarios

Frente a las llamadas calificaciones de los maestros el gobierno se vio en la necesidad de cancelar esta práctica en razón a la marcada protesta de los docentes. Incluso el mismo Colegio de Profesores hizo de intermediario para lograr que las calificaciones del año 1978 quedaran sin efecto debido a las múltiples irregularidades. Primeramente el gobierno habló de revisar los casos, incluso de aquellos en que no había apelación, pero en 1980 debido al masivo inconformismo y pruebas de irregularidades decidió levantar definitivamente la medida:

„El gobierno ha dispuesto dejar sin efecto para todos los alcances legales el proceso de calificación del profesorado correspondiente al año 1979.“¹⁸³

Para Verónica Monsalve, consejera nacional del Colegio de Profesores (elegida democráticamente), el Estatuto de la Carrera Docente:

¹⁸²De acuerdo a una disposición de la nueva Constitución se dictó el Decreto Ley N° 3. 621 el 7 de Febrero de 1981 que ordena la transformación de todos los Colegios Profesionales de Chile en simples asociaciones gremiales.

„Fue una maravilla de carrera. A nosotros se nos reconoció todo, además de los cursos de perfeccionamiento con sus puntajes, el profesor que hacía investigación, puntaje, los profesores que escribían sobre temas relacionados a la materia educacional, puntaje; y así ese colega iba adquiriendo grados en un escalafón establecido que iba paralelo y en forma conjunta con la antigüedad. Entonces el profesor combinaba las dos cosas e iba subiendo de grado y creando una generación de mayor status a través del grado y del mayor respaldo económico lo que venía a ser la retribución económica por todo ese quehacer. Desgraciadamente nos pasan al sistema municipal y se declara nulo Estatuto de la Carrera Docente (...); eso fue una pérdida irreparable para la imagen del gobierno militar.“¹⁸⁴

Oswaldo Verdugo en cambio opina que la Carrera Docente fue:

„(...) más que nada un acto publicitario del gobierno para *dignificar a los maestros*, sin participación de los maestros y como se sabe, al poco tiempo la Carrera quedó congelada por el conflicto al interior del gobierno entre los más blandos, los más duros y bueno, creo que ya tenían preparada la alcaldización, por lo tanto nació y murió una Carrera Docente en el año 1978.“¹⁸⁵

Hacia finales de los años 70 se han constituido ya en Chile las primeras organizaciones de maestros, independientes del Colegio de Profesores en las tres ciudades más importantes del país. En Santiago dicha orgánica se llamó *Coordinadora Metropolitana de Maestros* en Concepción, *Coordinadora de Maestros de la Octava Región* y en Valparaíso y Viña del Mar, *Club del Magisterio*.

De estas tres vertientes surge en 1981 la *Asociación Gremial de Educadores de Chile* (AGECH) la cual utiliza el marco legal que daba la nueva legislación laboral del gobierno para constituirse en Gremio. A la fundación de esta institución dice su ex presidente Jorge Pavez „asistieron 35 socios“.

En la AGECH participa un número de profesores que, comparado con los inscritos en el Colegio, resulta ser minoritario pero que para los efectos de plantear una política gremial contestataria al régimen encuentra resonancia en el magisterio chileno. Incluso muchos sectores inscritos en el Colegio de Profesores se sienten interpretados por la manera distinta de este gremio de enfrentarse al régimen.

La AGECH, según la información compilada por el autor en entrevistas con representantes de ese gremio (Traverso, Azula, Pavez, Montoya etc.) logra establecer a nivel nacional una

183 Ministerio de Educación, Declaración pública, 2. 2.1980, El Mercurio, Santiago. 3.2.1980

184 Verónica Monsalve, Entrevista, 1991

185 O. Verdugo, Entrevista, 1992. Debo aclarar que la decisión del gobierno de crear un Estatuto de Carrera Docente se enmarcó dentro de la política de compensación que ya anteriormente he mencionado. No obstante, hacia el periodo existen al interior del gobierno criterios muy diferentes para abordar la problemática educacional y de relaciones con el Magisterio. Esta diferenciación de criterio es también expresión de una lucha tendencial que dividió a los partidarios del gobierno entre intransigentes y negociadores lo que, en el lenguaje de la prensa se expresó con la adjetivización de duros y blandos a la cual hace alusión Oswaldo Verdugo.

estructura orgánica que es portadora ante autoridades, opinión pública y medios de comunicación de los intereses socioeconómicos y profesionales de los maestros.

La AGECH, y esto es importante también decirlo, aparece conformada especialmente por maestros provenientes de tres vertientes. Una es el sector que representa el sindicalismo histórico del magisterio en la cual aparecen algunos dirigentes vinculados a los partidos políticos marxistas. La segunda la constituyen jóvenes maestros egresados de las Escuelas Normales o de las universidades y que, al momento de la intervención militar, recién se iniciaban en las actividades docentes. La tercera está formada por maestros egresados de las universidades bajo el periodo militar cuya única experiencia había sido su paso por los institutos pedagógicos y haberse imbuido del espíritu crítico de una generación de educadores que veía el futuro con mucha incertidumbre.

Para el régimen militar la existencia de esta agrupación gremial resultó permanentemente incómoda. Aun cuando tuvo que aceptar su legalización e incluso dialogar con sus representantes, no pudo ocultar la adversión hacia sus integrantes y postulados. Las exoneraciones que, por coincidencia o no, afectaron mayoritariamente a socios de esta agrupación, así como las órdenes de arresto y persecución de sus dirigentes, son el fiel testimonio de una relación áspera en la cual primó por sobre todo „la desconfianza recíproca“ (E. Froemmel).

Pese a las limitaciones que a este gremio se le impuso, los sindicalistas de AGECH lograron establecer asociaciones en casi todo el país, llegando a contar hacia mediados de los años 80 con casi 9. 000 profesores afiliados en sus consejos locales en más de treinta ciudades del país.¹⁸⁶

Uno de los temas principales que ocupa el primer escenario creado por la Asociación Gremial de Educadores es la ley del Estatuto Docente que en forma ambigua siguió vigente

¹⁸⁶Alejandro Traverso, Conclusiones globales de la IV Conferencia Nacional de Evaluación y programación de la AGECH en Talagante, Archivo Colegio de Profesores, Febrero, Santiago, 1986 pp. 3-4.

aplicándose en diversas situaciones y con arbitrarias interpretaciones. En ocasiones en que no se recurría al Estatuto para el arreglo de problemas, resolvían los directores de escuelas o bien las autoridades del Ministerio de Educación o de las municipalidades haciendo el inevitable proceso administrativo complejo y de muy difícil comprensión para miles de maestros.

Esta Asociación, no sólo rechaza el mecanismo antidemocrático usado por el gobierno en la imposición de esta ley sino que además considera que un estudio detenido de ella, deja al trasluz la grave lesión de los intereses del profesorado.

En un detallado documento comparativo la AGECH expone los temas principales del Estatuto de Carrera Docente impuesto por el gobierno militar y lo que los maestros habían venido proponiendo desde hace ya varios años como proyecto de Estatuto, factible de implementar.

A esta problemática se suman los traslados, salarios, legitimidad de los gremios, verticalidad excesiva en las decisiones etc. Todos estos factores coadyuvaban a tensionar las relaciones gobierno-maestros en desmedro de la estabilidad social y laboral de estos últimos; pero también en perjuicio de la imagen política de los gobernantes quienes veían cada vez menos posibilidades de rescatar al sector laboral docente hacia el proyecto político nacionalista.

Los representantes del Colegio de Profesores, aun cuando no fueron consultados ni tampoco participaron en las discusiones en que se organizaron las nuevas planillas salariales de la época, aceptaron sin mayor resistencia el Estatuto de Carrera Docente: „fue una maravilla de carrera“ (Verónica Monsalve). Lo sorprendente es que en este estatuto de Carrera Docente el tema de las remuneraciones nunca estuvo considerado como uno de los puntos en los cuales el régimen pudiera hacer concesiones. La razón era muy simple: la gran cantidad de profesores que dependían del Estado implicaba que cualquier aumento, por mínimo que fuera, comprometía grandes sumas de inversión lo cual podía desequilibrar incluso la balanza de pagos de la nación.

Ni en la documentación investigada ni en las entrevistas realizadas por el autor del presente trabajo aparece una ruptura o una confrontación entre el Colegio de Profesores cooptado y las autoridades educacionales. A juicio del Profesor Verdugo:

„Era imposible pedirle a esa directiva una consecuencia en la defensa de los intereses del magisterio porque estaban políticamente comprometidos con el gobierno y eran dirigentes

porque el régimen lo quería. De manera que en cierto sentido había una consecuencia en la lealtad que los dirigentes brindaban hacia quienes eran sus jefes.”¹⁸⁷

Resumen y comentario

La puesta en práctica del Estatuto Docente a través del Decreto ley Nr.327 dejaba en 1978 a 90. 000 maestros encasillados bajo las disposiciones de esta ley.

Preciso señalar que este Estatuto había sido en el pasado, una de las principales aspiraciones del magisterio chileno. Desde los tiempos de la AGP (1928) los profesores habían venido planteando la materialización de esta medida que permitiría a los maestros establecer claras reglas con el Estado en cuanto a trabajo-salario, defensa de sus prerrogativas sociales y profesionales, ascenso reglamentado en la carrera funcionaria, despidos, contrataciones, rentas, presupuestos y naturalmente presencia de sus organizaciones en la configuración de las directrices educacionales del país.

Los argumentos que impidieron hasta antes de 1973 la implementación del Estatuto de la Carrera Docentes fueron variados. Uno de los principales era por cierto la gran diferencia de apreciaciones dentro de los profesores, muchos de los cuales proponían que la eventual acción legislativa se hiciera considerando intereses profesionales, económicos y políticos del magisterio. Otro sector apelaba solamente al aspecto profesional y económico. Con estas divergencias de fondo, la cuestión ideológica aparecía como un elemento adicional de discordia en un sector profesional con opiniones muy diferentes.

Lo concreto parecía ser que, aún cuando se daban determinadas expresiones de tolerancia en los aspectos principales de la educación, lo que hacía por cierto posible el Compromiso Histórico en otros ámbitos muy específicos atinentes a la reglamentación por la cual se registrarían decenas de miles de maestros, resultaba difícil encontrar consensos. No afirmo que existía oposición al respecto, simplemente digo que la gran variedad de estructuras e intereses grupales existentes al interior del magisterio hacían extremadamente difíciles los acuerdos al momento de proponer y discutir el Estatuto Docente con las autoridades pertinentes del periodo. Algo similar había ocurrido en el proceso unificador de los gremios de maestros por cuanto cada estamento deseaba mantener el suyo propio.

Por otro lado parecía ser que los partidos políticos difícilmente pudieron ponerse de acuerdo para resolver una situación que afectaba a tantos profesionales, que comprometía

¹⁸⁷Osvaldo Verdugo, Entrevista, 1992

grandes capitales y que se ocupaba de un tema estratégico para el país como lo era la educación.

En lo personal no descarto la posibilidad real de que haya existido una intención manifiesta de parte de la mayoría de las organizaciones políticas de no desear un acuerdo porque ello significaba, de hecho, el término de las influencias políticas en el sector docente. Ya I. Núñez lo menciona en uno de sus trabajos sobre el movimiento gremial de los maestros cuando afirma que el mejor camino para hacer carrera dentro del magisterio era ingresando al Partido Radical. No obstante habría que agregar también que ello, siendo correcto, no fue patrimonio exclusivo de los radicales. El clientelismo político fue una práctica de la cual se hizo uso y abuso en diferentes periodos y gobiernos y bajo diversas circunstancias. En determinadas regiones, localidades e incluso escuelas, los grupos políticos se hacían fuertes en función a prebendas ofrecidas por autoridades educacionales que militaban en partidos políticos, quienes, desde sus cargos influían, (en la medida en que la ley lo permitía), en nombramientos, horarios, traslados y actividades escolares del personal integrado a las funciones educativas. La aplicación de un Estatuto Docente entonces habría terminado con esa práctica, cierto es, amarrando a los profesores más al Estado, pero liberándolos de la influencia de los partidos políticos.

El régimen militar se propuso en su discurso público materializar la aspiración de muchos maestros pero cometiendo una grave falta: dejándoles inconsultos. Este estilo autoritario queda desde un comienzo registrado al discutirse la situación salarial del magisterio (1975). En ese año los economistas del Ministerio de Educación, dejando a la directiva del Colegio de Profesores sin posibilidad de opinar, acuerdan las remuneraciones de 90.000 maestros.

En opinión de la oposición, el Estatuto de la Carrera Docente impuesto por los militares, adolece de una serie de deficiencias entre las que se cuentan el discutido tema del horario escolar. Al respecto se decide una jornada tope de 44 horas cronológicas semanales que contrasta con las 36 horas pedagógicas establecidas en el reglamento anterior. Por otra parte, bajo esta nueva ley los profesores perdían la propiedad del cargo quedando solamente en propiedad de grado. Los directores de escuelas recibieron atribuciones desproporcionadas al exigírseles la polémica práctica de calificar a los maestros en las escuelas en función a pautas donde primaba criterios de orden, obediencia y disciplina todo

lo cual provocó comentarios muy adversos que obligaron al gobierno a deponer su actitud y retirar la medida.

Los miembros del Colegio de Profesores entrevistados aseguran unánimemente que el perfeccionamiento comenzó, bajo el régimen militar, a ser pagado por los propios usuarios lo que contrastaba con la tradición de gratuidad conocida anteriormente.

Sin embargo en el perfeccionamiento participan como monitores docentes de diferentes tendencias y opiniones (también opositores) los cuales, a juicio de la profesora Monsalve empezaron a ganar dinero con esta actividad.

El perfeccionamiento gratuito, establecido en el Estatuto Docente, a juicio de los dirigentes elegidos democráticamente, tendió a favorecer a quienes mantenían buenas relaciones con las autoridades. En este sentido los profesores opositores afirman que dicha actividad no fue ni masiva, ni gratuita, ni mucho menos democrática. No obstante la profesora Monsalve representando a la corriente más cercana al gobierno, cree ver en el Decreto ley 2.327 „una maravilla de carrera“ porque se comenzó a reconocer, por medio de la obtención de puntajes, todo lo que el profesor hacía: perfeccionamiento, investigación, preparación de informes educacionales, etc. Esto, en su opinión, se iba combinando con la antigüedad del maestro y así el maestro iba subiendo de grado y de status en la carrera funcionaria lo cual se armonizaba con una retribución económica adecuada.

Se destaca finalmente en el Estatuto de la Carrera Docente un marcado afán por mantener el control de la educación por medio de una subordinación autoritaria de parte de las autoridades sobre los maestros. Se permite poco espacio a opiniones disidentes lo cual, a juicio de la mayoría de los miembros del Colegio de Profesores democratizado, quebraba la tradición de pluralidad que se había institucionalizado en la educación chilena desde hacía ya casi medio siglo y que había estado presente como código de convivencia nacional desde finales del siglo XIX.

La prensa y algunos medios de comunicación si bien en un comienzo alaban el Decreto Ley 2.327, poniendo de relieve las ventajas del Estatuto Docente y lo que ello significa para los profesores, a poco andar, deben reconocer en sus informativos que personalidades importantes e influyentes (se refieren incluso a Gustavo Leigh miembro de la Junta de Gobierno) empiezan a cuestionar la aplicabilidad del Estatuto por contener éste muchas irregularidades. Para muchos maestros resultaba difícil entender que un Estatuto que supuestamente traería estabilidad laboral diera mayor seguridad al grado del funcionario y no

así al puesto de trabajo. De qué vale tener los mejores grados si en cualquier momento el maestro puede ser despedido al no tener propiedad del cargo, se preguntan algunos profesores con resignación.

Las críticas que se realizan contra la aplicación del Estatuto de la Carrera Docente son múltiples y provienen de todos los sectores. No sería correcto si afirmara que debido a estas críticas el reglamento quedó invalidado o fue retirado para su rediscusión. La verdad parece ser que la implementación de una nueva reforma, „la municipalización de la educación“ invalidó de facto el Decreto ley 2. 327.

Con la municipalización cambiaban „las reglas del juego,, (Pavez) y de todo el aparato educativo. Sin embargo es aventurado pensar que los militares premeditadamente impusieron el Estatuto sabiendo que después implementarían la municipalización. Los conflictos y luchas por el poder al interior de las Fuerzas Armadas y de la elites gobernantes en aquél periodo, ya se hacían notar. En el sector económico como educacional, dos áreas estratégicas en cualquier sistema, la pugna por el poder y por la imposición de criterios políticos e ideológicos tenían, sin duda, natural expresión y en no pocas ocasiones originaban drásticos cambios en la conducción de las medidas que se tomaban.

Lo que el gobierno ganaba con la aplicación del Estatuto Docente era tiempo (1 año) para preparar la principal reforma de su periodo. Lo que perdía era credibilidad en los estamentos indecisos, que habían querido ver en el Decreto ley 2.327, igual como lo dijera el general Pinochet al anunciar la medida „un acto de justicia para los profesores“.

2.6 El sistema universitario en el marco de la política de ruptura

Puede decirse que, con anterioridad a la reforma de 1981 el régimen militar no abrió mayormente el tema universitario a la opinión pública. Como muchas de las medidas implementadas durante los 17 años de gobierno, éstas eran dadas a conocer utilizando el factor sorpresa. Ello inmovilizaba en el primer tiempo a los afectados quienes, después de reponerse del impacto, recababan información, discutían medianamente el significado y contenido de los cambios y actuaban dispersos y tarde, cuando los cambios ya estaban en marcha.

Sobre la importancia de este tema en la presente investigación debo decir que aunque no está directamente ligado a la problemática gremial de los docentes, es otro antecedente de ruptura que retrata la intencionalidad del régimen de desarticular, no solamente los

gremios de maestros sino también toda la estructura educativa; desde la escuela básica hasta las universidades. En este aspecto veo la vinculación con el tema en estudio pues el acceso a la universidad, es la gran aspiración de la clase media chilena, y la reforma universitaria de los militares reduce dichas expectativas. A ello se agrega que en esta reforma, los estudios pedagógicos quedan fuera de las 12 carreras definidas por los militares como académicas, hecho que despierta fuertes críticas en el sector docente quienes consideran esta determinación una nueva afrenta a su dignidad profesional.

El sistema universitario, como veremos más adelante, es visto por los personeros del nuevo gobierno no solamente como una carga económica para el Estado sino también como un foro crítico y analítico en el cual se pretende opinar y discutir sobre todos los temas de la realidad nacional.

El Decreto con Fuerza de Ley Nr. 1 del 30 de Diciembre de 1980 publicado en el diario oficial el 3 de Enero de 1981 reestructura completamente el sistema universitario chileno.

Por medio de este Decreto se faculta exclusivamente a la universidad para conferir los grados académicos de Licenciado, Magister y Doctor. El mismo Decreto reglamenta que las universidades podrán otorgar solamente doce títulos profesionales en las carreras de Derecho, Arquitectura, Bioquímica, Medicina, Odontología, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Civil, Ingeniería Forestal, Ingeniería Comercial, Veterinaria, Sicología y Química Farmacéutica. Las pedagogías quedan marginadas de la universidad. Lo mismo sucede con carreras como Filosofía, Sociología, Periodismo, Bellas Artes, Idiomas etc.

Este cambio va a encontrar, en el movimiento universitario y en la población perteneciente a la clase media, tenaz resistencia. No obstante, debido a la situación que se vive en el país, este hecho no tendrá repercusiones inmediatas; pero a corto y mediano plazo, pasará a convertirse en un nuevo antecedente de ruptura entre el régimen militar y la clase media.

En la investigación acerca de las razones que llevaron al régimen militar a implementar esta reforma universitaria resalta, en círculos oficiales, la siguiente hipótesis: el sistema universitario chileno era utilizado por todas las organizaciones políticas para promover a sus cuadros dirigentes y había perdido por tanto su excelencia académica .

Como contrapartida a esta politización excesiva se va a desarrollar un movimiento gremialista nacido en la Universidad Católica, que funda su accionar en el distanciamiento de los partidos, atribuyéndose la defensa de la universidad como patrimonio cultural y científico del país y no como escenario de luchas políticas contingentes. Bajo el slogan „el

gremialismo une la política divide.“ este movimiento asumirá también posiciones nacionalistas, y se va a convertir en un nuevo agente social desde donde surgirán importantes líderes de la derecha chilena quienes posteriormente van a ocupar funciones políticas de dirección bajo el régimen militar. Los así llamados „Chicago Boys“¹⁸⁸ son, en este contexto una de las fracciones más influyentes del llamado gremialismo universitario que desarrolla, a fines de los años sesenta, puentes de contacto con la influyente Universidad de Chicago.

En este marco que intento describir los militares afirman, a modo de desacreditar el sistema universitario existente, que éste estaría todavía fuertemente imbuido de los preceptos de la reforma universitaria de 1967-68. El rol participativo y crítico de la universidad en el análisis de los grandes problemas sociales, políticos y culturales del país es entendida por las autoridades militares como una intromisión ajena a la función académica.

Un segundo elemento que sobresale en la argumentación de los militares es la pérdida de la excelencia académica. Manifiestan que en las universidades se había operado un cambio que substituía los criterios de calidad por los de cantidad lo cual significaba un daño enorme para el prestigio y rendimiento del sistema.

Una tercera razón se encuentra en el ámbito económico. Según los expertos y estadísticas consultadas, efectivamente las subvenciones a las universidades ocupaban un porcentaje demasiado elevado comparado a lo que recibían la educación media y básica del país. Más del 40% del dinero invertido en educación iba para el sistema universitario. Un sistema que, en opinión de los militares, era minoritario y que usufructuaba de recursos pertenecientes a todos los chilenos.

A través de spot publicitarios, los militares argumentan sobre la mala inversión que resulta para el país costear, con dineros públicos, los estudios de profesionales indolentes:

„Con el esfuerzo de todo el pueblo, el universitario llegaba al logro de sus aspiraciones y después: *si te he visto no me acuerdo*“.¹⁸⁹

rezaba uno de los spot más difundidos en la televisión chilena. Con ello aludían a profesionales que preferían, una vez terminados sus estudios, trabajar en el extranjero no retribuyendo al país lo que éste había invertido en ellos.

Dice el investigador Luis Scherz que:

¹⁸⁸ Término periodístico usado para definir a los asesores económicos del régimen militar egresados de la Universidad Católica, con postgrados o doctorados en la universidad de Chicago.

„La contrarreforma, traída en alas del gobierno militar, impone una universidad heterónoma y heterocéfala con normas y autoridades impuestas desde afuera. Estructura que es amarrada por la legislación de los inicios de la década del 80. En la red interna de relaciones sociales marcadamente jerárquicas y vigiladas, los profesores quedan circunscritos a tareas controladas y los alumnos,(...)huérfanos de sus organizaciones estamentales, ven rudamente frenados sus afanes críticos y gremiales.“¹⁹⁰

El entonces ministro de educación Alfredo Prieto en 1981 al ser interpelado como máxima autoridad educacional del país acerca de las razones de su exacerbada crítica al sistema universitario en el cual incluso él, y otros „excelentes profesionales“(la cita es de la periodista) del régimen militar se habían formado declara que:

„(...)el resultado de esos profesionales excelentes fue únicamente, haber aprendido, y muy bien, lo que no debe ser una universidad.“¹⁹¹

La declaración de principios de la Ley Universitaria impuesta por el régimen autoritario pretende excluir expresamente toda forma de adoctrinamiento ideológico-político con el fin de que:

„(...) nadie intente subordinar ni instrumentalizar la institución universitaria ni su tarea académica a la particular opción política ideológica o contingente de cada cual.“¹⁹²

En el contenido central de la reforma universitaria de 1981, los militares buscan restablecer las estructuras formativas superiores y el carácter del sistema universitario que habían sido, según su criterio, claramente trastocados por la reforma gestada bajo el gobierno demócratacristiano en 1967.

Al respecto preciso aclarar algunas peculiaridades principales del movimiento reformista de 1967 y lo que aquél proceso significó en la vida universitaria de Chile. Ello porque me parece que, a partir de la comprensión de ese hecho, puede interpretarse mejor la contrarreforma 14 años más tarde.

La universidad como institución formativa había sido durante la segunda mitad del siglo XX, punto de convergencia social entre la clase media y sectores cada vez más numerosos provenientes de las clases populares del país. Estos últimos a partir de los años sesenta, en el marco de la democratización educacional propuesta por los partidos de la izquierda

189Revista Hoy N° 199, 13.5.1981 pag. 70

190Luis Scherz, El cogobierno universitario en: Formas de gobierno de educación superior, nuevas perspectivas, Edit. FLACSO, Santiago, 1990, pag. 218 (Luis Scherz, Dr. en Filosofía y Educación de la Univ. de Münster, ex Profesor de la Universidad Católica de Valparaíso)

191Revista Cosas, N° 109, Santiago, 4.12.1980, pp. 12-14

192Declaración Ministerio del Interior sobre „Nueva Ley Universitaria“ en Consejo de Rectores, cit. por Guillermo Briones en: Las universidades chilenas en el modelo neoliberal 1973-81, PIIE, Santiago, 1981, pag. 7

política y el Partido Demócratacristiano, se estaban incorporando en forma paulatina pero constante al sistema de educación superior.

Desde el punto de vista del origen social de los usuarios, podía hablarse de una universidad socialmente integrada al proyecto de Compromiso Histórico que había estado vigente en Chile. Este hecho, unido a la dinámica socio- política del país iba generando al interior de las universidades chilenas corrientes de opinión que, en ocasiones, repercutían incluso en el escenario de la política nacional.

Los jóvenes de la clase media que accedían a las universidades, se incorporaban no solamente a un quéhacer académico sino también político.

Los estudiantes, a través de sus gremios, participaban creativamente en innumerables iniciativas como proyectos impulsados por los gobiernos para combatir la pobreza, los problemas de salud, de vivienda o el analfabetismo. En otras ocasiones, cuando los estudiantes sintieron que sus derechos no eran respetados por la autoridad, generaron grandes movimientos juveniles los que, en no pocas ocasiones, lograron torcer o anular resoluciones consideradas por ellos como injustas.

La reforma universitaria iniciada en 1967 que crea Consejos Normativos y elige a los rectores en votación secreta y ponderada por toda la comunidad universitaria, es expresión, según sus precursores, de un movimiento democratizador que aspira a la consecución de una universidad libre, crítica, participativa y sensible a los problemas sociales.

Sin embargo, este proceso integrativo se ve interrumpido por las reformas emprendidas por el régimen autoritario y muy particularmente por sus medidas educacionales que culminan en la reforma universitaria de 1981.

Este cambio, junto con acabar con una serie de tradiciones y con una cierta cultura académica que no corresponde en el presente trabajo describir, abre nuevos escenarios confrontacionales entre los actores sociales del país.

A partir del año 1982 esta pugna se irá acentuando por efecto de las reforma universitaria que elevará considerablemente las barreras de ingreso así como los pagos de aranceles por concepto de matrículas y cuotas mensuales. La drástica reducción de carreras con rango universitario implica la „elitización de las universidades“ (Echeverría, Lehmann, Núñez, Desermeux, Scherz, Schiefelbein). A dichas carreras acceden de preferencia, no los jóvenes egresados del liceo municipalizado, sino los egresados de colegios particulares pertenecientes a los estratos acomodados de la sociedad . Aclaro sin embargo que esta

afirmación no puede ser entendida como algo absoluto; es una tendencia clara; fácil de comprobar, pero que no significa que alumnos provenientes de colegios municipalizados o públicos, especialmente de aquellos liceos con tradición en el país, no ingresaran a alguna de estas carreras. Mi afirmación es que, en el sistema educacional chileno que se configura bajo el régimen militar se privilegia el acceso a las universidades de los jóvenes provenientes de los colegios privados de elite, en desmedro de los de la educación pública o municipalizada.

Los indicadores anteriormente señalados confirman la tesis de que, en el sistema universitario chileno estaban integrados, hasta mediados y finales de los años 70, mayoritariamente los estratos de la clase media y baja, quienes cohabitaban naturalmente con los grupos provenientes de las elites acomodadas del país. Importa también aclarar que dentro de las universidades chilenas se expresa un microsistema selectivo que respondía a exigencias de carácter socio-económico y que se nucleaba en torno a ciertas carreras liberales las que, además de gozar de un prestigio social, mantenían una tradición familiar. Entre ellas mencionaría a derecho, medicina, economía e ingeniería. El ingreso a estas facultades suponía además de altos puntajes un nivel de costos de estudio que no siempre los estudiantes provenientes de la clase media y mucho menos los de clase baja, estaban en condiciones de afrontar.

En la selectividad de las carreras, la ascendencia social pasaba a jugar un rol mucho más preponderante que en el simple proceso de admisión. Los estudiantes secundarios que provienen de los colegios particulares de elite, recibían la mejor preparación para enfrentar las pruebas de selección las que en Chile son requisito ineludible para ingresar a cualquier universidad y obtenían en consecuencia los más altos puntajes. Ésto les permitía acceder, con relativa facilidad, a las carreras anteriormente mencionadas.

La comisión coordinadora del proceso de admisión de alumnos a las universidades chilenas comprueba que, en términos de selección, son los hijos de altos ejecutivos de empresas y profesores universitarios quienes obtienen los puntajes más altos que habilitan el ingreso a las universidades, privilegiando a la vez sus prerrogativas de matrícula en determinadas facultades.¹⁹³

Según los investigadores Schiefelbein y Andraca:

193 Guillermo Briones, *Las universidades chilenas en el modelo neoliberal 1973-81*, Edit. PIIE, Santiago, 1981, pag. 45,

„Un 55,7% de los jóvenes cuyo origen social se encuentra en las familias con altos ingresos obtuvieron los más altos puntajes en las universidades, mientras que sólo un 16,4% de los alumnos cuyos padres tenían educación primaria y menos, obtuvieron ese privilegio(...) de los ingresados a las universidades un 55% provenía de colegios privados y apenas un 25% de colegios fiscales.“¹⁹⁴

Los cambios introducidos por el régimen militar en las universidades en 1981 tuvieron como uno de sus fundamentos la discutida y populista argumentación cuya esencia se trasluce en el siguiente párrafo:

„La denominada educación universitaria gratuita (...) significó que durante muchos años la formación de los profesionales fuera costeadada por el Estado, con los fondos de todos los chilenos. Esto se tradujo en que sectores de bajos ingresos, cuyos hijos generalmente no ingresaban a las universidades, le costeaban su educación en ésta a sectores de más altos ingresos.“¹⁹⁵

Los estudios de pedagogía a partir de esa fecha son absorbidos por institutos profesionales y/o academias superiores de ciencias pedagógicas creadas para dar cobertura a los futuros maestros. Sin embargo algunas universidades, como la Católica de Santiago y la Técnica del Estado, continuaron impartiendo estas carreras. No lo hizo así la Universidad de Chile que cerró su Facultad de Educación destinando a miles de estudiantes a la incertidumbre; o en el mejor de los casos, a los institutos ya señalados.

Sin embargo existieron también otras argumentaciones, de mayor o igual significación que las señaladas que indujeron, a mi juicio, al gobierno militar a reestructurar el sistema universitario. Una de ellas fue la subestimación con que personalidades gubernamentales valoraban el sistema universitario vigente hasta 1973.

Para el general Pinochet la universidad era una institución que había perdido su valor al haber sido „infiltrada por elementos subversivos.“¹⁹⁶ . Para el ex-Rector de la Universidad de Chile, Alejandro Medina:

„Eso de que la universidad es el pensamiento crítico de una nación corresponde a una concepción marxista“¹⁹⁷

mientras que el ex Ministro de Educación Alfredo Prieto aseguraba en una entrevista que lo único positivo de su paso por la universidad fue:

„(...)haber aprendido, y muy bien, lo que no debe ser una universidad.“¹⁹⁸

194E. Schiefelbein-Andraca, El Mercurio, Santiago. 12.08.1978 pag. C1

195Ministerio del Interior, Argumentos sobre nueva ley de financiamiento universitario en Consejo de Rectores; nueva legislación universitaria; cit. por Guillermo Briones, en las universidades chilenas,pag. 12

196Mensaje presidencial a los educadores revista de educación N° 47, Mayo, 1974, pag. 2

197Alejandro Medina Rector delegado de la U de Chile, El Mercurio, Santiago, 12.7.1981, sección D pag. 3, cit. por Guillermo Briones en: Las universidades chilenas en el modelo neoliberal 1973-81, PIIE, Santiago 1981, pag. 7

En efecto, para las nuevas autoridades el funcionamiento de las universidades habría sufrido un completo desquiciamiento producto de la reforma implementada en los años 1967-73. Esta reforma es definida por los militares como una acción política concertada que habría llevado demagogia e ineficiencia a las universidades. Para los expertos educacionales del régimen militar:

„La enseñanza superior anterior al año 1973 consistía en un esquema cerrado y virtualmente monopólico de ocho universidades substancialmente todas financiadas por el Estado, y que se distribuyen entre ellas un cuantioso aporte estatal. Se explica que, en semejantes condiciones, el surgimiento de cualquier nueva universidad haya sido y sea mirado como una amenaza para el aporte que el Estado brinda a todas las existentes. El sistema tiende entonces a cerrarse sobre sí mismo e implica una realidad discriminatoria ya que margina completamente de los recursos estatales para la educación superior a otros particulares que pudieran aspirar a incorporarse a él, constriñéndose así, de modo injustificado, la vigencia práctica de la libertad de enseñanza.“¹⁹⁹

Para el oficialismo el modelo de universidad existente no correspondía a los desafíos de la modernidad por ser ésta centralizada y estar sesgada por la politización; además resultaba extremadamente cara para el Estado. La universidad debía entonces ser reformada y orientada tras los parámetros del proyecto socioeconómico en marcha.

Entendido así, el movimiento estudiantil universitario sumado a algunos académicos inquietos también por sus propias perspectivas, comienza a nuclearse mayoritariamente en organizaciones gremiales y políticas de claro signo oposicional y pone en marcha un plan de movilización estudiantil que pondrá al gobierno en duros aprietos.

El oficialismo responde por su parte con suspensión de clases, adelanto de feriados escolares, expulsión de líderes estudiantiles de las universidades, exoneración de académicos etc. Tal como muchos artículos de prensa de la época atestiguan, las autoridades

198 Alfredo Prieto, Revista Cosas, N° 109, Santiago, 4.12.1980 pp. 12-14

199 Ministerio del Interior 1981, Cit. por Andrés Sanfuentes en Desarrollo de las universidades privadas en Chile (1981-88), CPU, N° 58, Santiago, 1988, pag. 86

subestimaron y denigraron las expresiones opositoras que en el ámbito educacional ocurrían. Es este espíritu poco democrático y carente de *excelencia académica* el que se refleja en un pasaje de la entrevista que concediera el Sr. Alfredo Prieto, a la sazón ministro de educación, a la revista Cosas. Sus respuestas son además ilustrativas para entender el tono intolerante con que se gobernó en educación:

Periodista: „Usted como ministro de educación, no está muy preocupado con todo lo que está sucediendo en la universidad ahora?“

Ministro: „Yo creo que sucede mucho menos que en otras épocas. Desde luego hay que señalar que hay elementos que tienen como objetivo instrumentalizar la universidad para fines extra-universitarios, son los grupos políticos que tratan de destruir el cuerpo universitario; los universitarios que crean problemas son sólo un grupo de agitadores políticos; son una especie de cáncer que en todas partes del mundo, en mayor o en menor grado, tratan de destruir la universidad, tratan de politizarla como era antes en Chile.“

Periodista: „Hay personas que se sorprenden cuando los ministros hacen críticas tan severas a la universidad politizada de antes; y se sorprenden porque profesionales tan capaces como usted mismo vienen de esa universidad. “

Ministro: „Es que tenemos la experiencia de lo que se vivía en aquella época, también tenemos la experiencia de los defectos de la universidad del pasado. “

Periodista: „Pero honestamente no cree usted que el haberse formado en una universidad abierta fue muy bueno para usted y para todos esos profesionales ? .“

Ministro: „Yo creo que el resultado de esos profesionales excelentes vino, únicamente, de haber aprendido, y muy bien, lo que no debe ser una universidad.“

Periodista: „Mucha gente piensa que esta especie de fanatismo antipolítico imperante no es más que otra forma de hacer política. Qué piensa usted? “

Ministro: „ Lo que yo creo es que la política como tal debe tener un determinado objetivo y para eso hay instituciones a quienes corresponden esos objetivos.“

Periodista: „Los partidos políticos. verdad? “

Ministro: „Claro, lógicamente.“

Periodista: „ Pero ahora no hay .“

Ministro: „Es que el país no está viviendo un periodo de lucha política; más adelante se establecerá la lucha política, pero en un momento distinto y de acuerdo a lo que sean las instituciones que se creen para ello. Por ello es que la Nueva Constitución establece muy claramente lo que corresponde a los partidos políticos, que corresponde sólo a ellos y no a otras instituciones. Mire es como si un club de fútbol se convirtiera en partido político.“

Periodista: „Claro que la universidad es un poco diferente a un club de fútbol. Pensando que ella es sede del pensamiento libre, el debate político suele ser mas frecuente dentro de la universidad que dentro de un club de fútbol. Qué cree usted ? .“

Ministro: „Pero si yo le dije que nadie ha prohibido los libros, ni el pensamiento ni nada. Si lo que se dice es que, no corresponde hacer adoctrinamiento dentro de la universidad.“

Periodista: „Y ocuparse de la realidad nacional, debatirla, criticarla o aplaudirla,. le corresponde? “

Ministro: „Dentro de lo que es la extensión universitaria puede existir la preocupación para determinar problemas nacionales, siempre que sean aquellos problemas que, por su naturaleza, sea la universidad quien podría plantearse como forma de pensamiento.“

Periodista: „Se consultaron en la elaboración de la nueva ley general de universidades a los académicos que discrepan con el gobierno ? “

Ministro: „No; hay que señalar lo siguiente: las pautas fueron dadas por la Directiva presidencial y sobre la base de esas pautas se trabajó. Esas pautas fueron dadas por el Presidente de la República conforme a lo que el Presidente y sus asesores consideraron conveniente para el país y para la Universidad .“²⁰⁰

Como es fácil observar las opiniones del ministro son contradictorias y lejanas de cualquier forma de compromiso. De manera insistente pretende desvalorizar el concepto política generando un estereotipo que busca denigrar su significado. Las derivaciones: politiqueros, politicastros, proselitismo político, señores políticos, agitadores políticos etc. son expresiones diarias en el lenguaje de las autoridades:

(...) „no se permitirá la politiquería en las universidades“

„El proselitismo político no tiene espacio“

(...) „los universitarios que crean problemas son sólo un grupo de agitadores políticos“

(...) „los agitadores políticos son una especie de cáncer“.²⁰¹

Por otro lado el movimiento sindical, aunque disperso y confundido por los reiterados intentos del régimen de levantar organizaciones sindicales paralelas, y por efectos también

200 Alfredo Prieto, Revista Cosas, N° 109, Santiago, 4.12.1980, pp. 12-14

201 Alfredo Prieto, Revista Cosas, Ob. cit. Al respecto puede consultarse un interesante estudio de Giselle Munizaga y Carlos Ochsenius: El discurso público de Pinochet, Ob.cit.

de la coerción ejercida por las autoridades, responde frente a los despidos, bajos salarios e intimidación en sus gremios con huelgas parciales, declaraciones públicas y discretas movilizaciones tendientes, más que a torcerle la mano al gobierno, a llamar la atención de la opinión pública por lo que en el país estaba ocurriendo.²⁰²

Estos últimos antecedentes que a primera vista parecieran estar distante del tema central del presente estudio reflejan sin embargo un hecho muy importante y es, como ya lo he mencionado, el estilo intolerante del gobierno lo que va provocando actitudes de resistencia en la población.

Para opositores del nivel académico de Juan Gómez Millas, profesor de filosofía, ex Rector y ex Ministro de Educación del gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, la reestructuración universitaria tal como la concibe el gobierno:

„No es aceptable porque no es justo ni eficaz entregar las universidades a las transacciones de un mercado que se prejuzga libre, pero está sujeto a formas veladas de control.“²⁰³

Y no solamente sujeta a formas veladas de control sino también al arbitrio del Ministerio de Educación en cuanto a que el nuevo reglamento universitario permite que:

„Por Decreto supremo del Ministerio de Educación se podrá cancelar la personalidad jurídica a una universidad si no cumple con sus fines o si se realizan actividades contrarias a las leyes del orden público, a las buenas costumbres, a la moral y a la seguridad nacional.“²⁰⁴

La consabida libertad educacional o libertad universitaria queda también entrampada y sujeta a los vaivenes interpretativos de las autoridades del gobierno.

En la práctica se visualiza que el acceso a la estructura educativa en sus niveles medio y superiores queda, bajo el régimen militar, sujeto a los factores económicos lo que va determinando una fuerte contracción en las posibilidades de ascenso social no sólo de los sectores económicamente más desfavorecidos sino también de la clase media.

202Solamente, y a manera de información, quisiera señalar que el gobierno autorizó, a través del Decreto 2.345 los despidos de la administración pública sin sumario previo, el Decreto 2.346 disolvió las Federaciones Campesinas Ranquil, La Unión Obrera Campesina, La Federación Metalúrgica, La Federación Textil, La Federación Minera, y el Sindicato de Obreros de la Construcción. Posterior a la prohibición se allanaron las sedes sindicales de las organizaciones nombradas y se procedió a confiscar sus bienes. Junto con estas medidas el gobierno obliga en las empresas a elegir directivas gremiales en las cuales ningún trabajador que se le reconociera alguna participación política en los últimos 10 años podría ser elegido. En este mismo espíritu se prohíbe el derecho a huelga y se adoptan una serie de medidas punitivas que sería largo enumerar.

203J. Gómez Millas, Revista Solidaridad, Arzobispado de Santiago, N° 108 Enero 1981

204Decreto con Fuerza de Ley N° 1, Artículo 27, Santiago, 30.12.1980

La escuela secundaria pasa a constituirse en una forma de privilegio y la enseñanza superior pareciera quedar reservada no solamente para los más capaces sino para los que además disponen de recursos económicos para acceder a ella:

„Alcanzar la educación media y en especial la superior constituye una excepción para la juventud.“²⁰⁵

Se manifiesta en consecuencia una restricción progresiva de los estudiantes provenientes de los estratos populares a la universidad. Paralela a esta disminución se va plasmando una presencia mayor de aquellos pertenecientes a las familias acomodadas que, como ya lo he dicho, constituyeron en el año 1981 casi un tercio del estudiantado en las doce carreras seleccionadas por el gobierno con rango académico. Esta observación conlleva a la constatación del hecho siguiente: proporcionalmente ambos sectores, los favorecidos y desfavorecidos por la reforma, representan dentro del estudiantado universitario irrealidades. En un caso por exceso de presencia y en otro por ausencia, su representación no corresponde a la incidencia que ambos grupos tienen en la sociedad civil. Este fenómeno denominado en Chile *falta de equidad* es considerado por el Colegio de Profesores(democratizado) como un regreso a la estructura elitista de las universidades y es entendido a la vez como una contrapartida al proceso democratizador, iniciado en los años sesenta, y que a algunos llevó al también falso concepto de querer masificar las universidades.

Desde el punto de vista del régimen militar la única explicación podría encontrarse en la fuerte influencia que el sector económico tenía sobre educación. Así pueden entenderse mejor las palabras que dijera el profesor Cumplido al afirmar que la ley general de universidades: „es de gente extraña a la universidad.“

En la reestructuración impuesta por las nuevas autoridades queda también comprobado que, a las carreras reconocidas como universitarias, acceden principalmente los jóvenes provenientes de la clase media (alta) y naturalmente los jóvenes provenientes de familias acomodadas. Mucho menos espacio encuentran aquellos estudiantes de hogares humildes quienes se ven en serias dificultades para pagar los aranceles que la nueva ley establece. La única solución que vislumbran es la postulación a los préstamos universitario en forma de becas que se pusieron a disposición y que solucionaron en parte el problema.

205 A. Pinochet, Directiva presidencial sobre educación, Santiago, 1979

En síntesis, la reforma universitaria evidencia que, en el nuevo modelo de educación superior se expresa claramente un proceso de elitización de las universidades el cual se irá acentuando en el transcurso de los próximos años. Por otra parte ésta otorga al Ministerio de Educación atribuciones coercitivas desacostumbradas como por ejemplo juzgar y sancionar conductas morales, políticas y académicas de individuos e instituciones. Tanto el ex Rector de la Universidad Católica don Fernando Castillo como el sociólogo Manuel Garretón coinciden en que:

„Es necesario una instancia académica y de reflexión frente a la cual no haya un control político del ejecutivo (...); la tarea hoy día es por las condiciones que permitan una universidad verdaderamente libre, donde una autonomía no sea sólo una concesión que en cualquier momento se puede quitar“²⁰⁶

La reforma universitaria, como podrá suponerse, resultó ser un nuevo agravio al magisterio chileno. En ella no hay ni siquiera un atisbo de reconocimiento a la función docente en la cual el general Pinochet había comprometido en el discurso Directiva Presidencial sobre Educación en Marzo de 1979, su „voluntad de gobernante en la tarea de enaltecer al profesorado.“ Paradojalmente lejos de enaltecerlo lo rebajó, marginándolo incluso de las universidades. El deseado „arreglo a la difícil situación económica y profesional de los docentes“ no logra percibirse en la reforma universitaria de 1981.

Para la iglesia las reformas educacionales resultaron ser contraproducentes y atentatorias contra la unidad nacional. Prácticamente no se conoce en Chile ningún documento de las autoridades eclesíásticas en el cual manifiesten concordancia o alguna forma de apoyo a los cambios educacionales que están ocurriendo.

La privatización, la falta de libertades gremiales para los profesores, la reforma universitaria e incluso la desacostumbrada concepción cristiana de educación de los militares, son criticadas por el episcopado chileno a través de documentos y declaraciones de sus pastores.

Desde el punto de vista de los presupuestos destinados a este rubro la investigadora Carla Lehmann dice que, en el periodo comprendido entre 1981 y 1989:

206Revista Solidaridad, Arzobispado de Santiago, N° 108, Enero 1981

„ (...) los recursos designados por el Estado a la educación superior han disminuido, en términos reales, en un 46,54% y el aporte fiscal directo o indirecto por alumno se deteriora en este periodo en forma sostenida desde \$306. 000 en 1981 a \$154. 000 en 1989 en moneda promedio 1986.“²⁰⁷

La capacidad restrictiva de la reforma universitaria, hizo posible, según Andrés Sanfuentes (Financiamiento Educ. Sup. Colec. Foro de la Educ. Superior Santiago Nov. 1990,

pag. 139) que de un cupo en la Universidad de Chile de 20.922 estudiantes en 1973, éste se redujera a 12.622 en 1976 y continuara descendiendo en 1981 hasta 10.681 significando una variación porcentual de 48,9 %.

Muchos de los alumnos eliminados de las Universidades de Chile y Técnica se integraron a institutos superiores de formación. Así ocurrió por ejemplo con los estudiantes de pedagogía quienes son absorbidos por una Academia Superior de Ciencias Pedagógicas (creada especialmente para estudiantes marginados de la universidad) cuyo Rector es nominado por el Presidente de la República y que se financia por medio de donaciones, trabajos de investigación, aportes del Ministerio de Educación y naturalmente a través del pago de aranceles de sus usuarios.²⁰⁸

En gran parte de los documentos referidos a las transformaciones sociopolíticas en Chile, elaborados por la franja oficialista se percibe un persistente afán por vincular las ideas reformistas, sindicalistas y/o políticas que se oponen a sus postulados a una conspiración extranjera fantasmagorizada en el marxismo internacional el cual sería quien en verdad dirige dichos movimientos.

La reforma universitaria de 1967 habría sido en este esquema un caso típico de intervención exterior. Tal como el ex Director del Departamento de Educación y Estudios de la Universidad Técnica de Santiago, Ingeniero Oscar Garrido señala: la inspiración de la reforma de 1967-68 no habría sido propia del movimiento estudiantil universitario chileno sino provenía de las protestas estudiantiles de Alemania y Francia de 1966, desde donde los estudiantes chilenos recogieron:

„(...) las conductas contestatarias y avasallantes de los líderes de aquellos movimientos.“²⁰⁹

207Carla Lehmann: Financiamiento de la educación superior: antecedentes y desafíos, Colección foro de la educación superior, Santiago, 1990, pag. 10

208Decreto con Fuerza de Ley N° 27, Artículo 27, letras a) c) d) e), 1.06.1981

209Oscar Garrido, Formas de Gobierno en la Educación superior: Nuevas perspectivas, FLACSO, Santiago, 1990, pag. 235

En el fondo la reforma universitaria de 1981 es, a mi juicio, la respuesta al proceso de reforma educacional iniciado en 1965 que pretendió incorporar al máximo de personas al sistema educativo, que se acopló con matices y contradicciones con la reforma universitaria iniciada en 1967 y que culminó, desde el punto de vista de la cobertura escolar con el índice histórico más alto alcanzado en el país: el 97% de los niños entre 6 y 14 años integrados al sistema educativo.

Cierto es que también implicó una radicalización política del movimiento estudiantil y de los estamentos docentes, pero ello, en mi opinión, correspondía antes que nada a situaciones históricas que el país y el mundo vivían más que a un afán predeterminado de los partidos de querer politizar la vida educacional. Sin embargo estos componentes fueron también utilizados como argumentos por lo militares para intervenir las universidades por medio de rectores delegados, quienes manejaron sin contrapeso y debe agregar también sin la añorada *excelencia académica* el quéhacer de la educación superior por un largo periodo.

La estructura universitaria vigente hasta los años 80 no se adaptaba bajo ningún punto de vista a los proyectos educacionales del régimen autoritario. En su intento por modernizar el sistema, regresaron a la estructura antigua; no, a la que ellos habían recibido en 1973, sino a una estructura universitaria elitista, la que por decirlo de algún modo, se encontraba desde el punto de vista de su jerarquía y selectividad en el siglo XIX y desde el punto de vista de su inserción en la ciencia y la tecnología en el siglo XXI.

2.7 La Constitución de 1980

El hecho político más relevante en este periodo (1980) es, sin duda alguna en el país, la imposición de una Constitución política que reemplazaba a la de 1925 y que, como muchos de sus críticos afirmaron, se trató de una Constitución „hecha a la medida de los militares“ (Genaro Arriagada) la cual les permitía, bajo una apariencia legal, mantenerse por tiempo prolongado en el gobierno.²¹⁰

²¹⁰El plebiscito de 1988 justamente fue para consultar a la ciudadanía sobre una reforma constitucional que permitiera que el general Pinochet reelegido por un periodo adicional después que hubiera terminado el mandato establecido en la Constitución de 1980 y que caducaba en 1989. A ello la ciudadanía, esta vez más organizada e informada, dijo mayoritariamente: No!

Aun cuando los acontecimientos posteriores no permitieron que este hecho ocurriera, la Constitución de 1980 merece algunas reflexiones puesto que ella va a ser el marco referencial por el cual se guiarán los destinos de la sociedad hasta la actualidad.

La idea de la nueva Constitución era una aspiración acuñada no sólo por la jerarquía militar sino también por los agentes políticos conservadores quienes otorgaban un claro respaldo a la gestión de un régimen el cual además de protagonismo político, les había proporcionado dividendos económicos.

La Constitución de 1925 en la cual se establecía implícitamente el Compromiso Histórico resultaba ser para estos agentes paradójicamente, demasiado antigua y a la vez demasiado liberal. Esto último porque permitía la configuración de partidos políticos de diferente signo ideológico, los que actuaban en la sociedad civil asumiendo funciones de gobierno e incluso algunos, poniendo en riesgo la vigencia misma del Estado. La experiencia de la Unidad Popular era, en el discurso de los inspiradores del cambio constitucional, el ejemplo más cercano que comprobaba esta tesis y ante lo cual la sociedad debía protegerse. La nueva Constitución establece entonces qué agrupaciones políticas son democráticas y cuáles no deben ser aceptadas en la estructuración de la ley de partidos políticos que podrán asumir responsabilidades en la conducción del futuro gobierno y del futuro Estado. La pregunta que por cierto inmediatamente el lector se plantea es, quién es, y cómo se definen los criterios para establecer lo que es democrático o antidemocrático en una sociedad como la chilena.

En la particular visión de los inspiradores de la constitución, organizaciones democráticas son aquellas que aceptan los principios del Estado de Derecho, consignados en la Constitución y que, a través de sus acciones no pongan en riesgo la estabilidad de los poderes emanados del Estado, ni mucho menos a éste.

Todos aquellos que sobrepasen este ámbito, se sitúan en el marco de agrupaciones no democráticas cuya calificación quedará en manos de un Tribunal Constitucional.

„Son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional.“²¹¹

En la nueva Constitución de los militares, tanto al Presidente de la República como al Parlamento se le restan importantes atribuciones.

211 Constitución Política del Estado, Capítulo III de los derechos políticos y constitucionales, inciso 15, Santiago, 1980

El sistema político chileno presenta la rara peculiaridad de no ser ni parlamentario ni plenamente presidencial. El Presidente de la República no tiene ya las atribuciones militares que la Constitución de 1925 le había otorgado. A saber, la Constitución de 1925 ponía claramente al presidente de la república como generalísimo de las Fuerzas Armadas. En la Constitución de 1980 su influencia está bloqueada por los altos mandos militares. Ante ellos no puede imponerse, aun cuando tuviese una clara mayoría del electorado. El cambio de los comandantes en jefe, cuestión clave en cualquier gobierno democrático, es asunto que atañe, en la nueva Constitución, al alto mando de las Fuerzas Armadas y no al presidente.²¹²

En gran medida las instituciones de la civilidad no son más las garantes plenas del sistema democrático chileno sino las Fuerzas Armadas las que, a través de diversas instancias de influencia, mantienen un férreo control sobre el Estado.

En este contexto los militares han pasado a jugar un rol cualitativamente mucho más importante y protagónico que el que la Constitución de 1925 les otorgaba.

Para cerrar el paso a cualquier tentación reformista, el régimen militar establece en la Constitución de 1980 la presencia de un cuerpo de 9 senadores nominados. Cuatro de ellos pertenecen a las Fuerzas Armadas, dos a la Corte Suprema, uno a la Universidad, uno es ex Ministro de Estado y uno es ex Contralor de la República.²¹³

Un Tribunal Constitucional dirime los conflictos fundamentales entre los poderes del Estado o bien interpreta o resuelve situaciones conflictivas que requieran su mediación. Integrantes de este Tribunal son tres miembros de la Corte Suprema, institución esta última que, a lo largo de los 17 años de gobierno militar mantuvo relaciones de colaboración con el régimen. Se agregan a esta comisión dos abogados designados por el Consejo de Seguridad Nacional (instancia donde los militares son mayoría), un abogado designado por el Presidente de la República y otro abogado designado por mayoría en el senado.

212 La posterior permanencia del general Pinochet en su puesto de comandante en jefe del ejército, pese a la crítica de un sector mayoritario de la población y del nuevo gobierno democrático, solamente se entiende en el marco de esta nueva Constitución. Lo mismo ocurre con el Director de la policía chilena Rodolfo Stange quien pese a haber estado comprometido, según la investigación judicial, como encubridor en el crimen de tres opositores, entre ellos el secretario general de Atech, Manuel Guerrero, y pese a que el Presidente de la República don Eduardo Frei le quitó su confianza y pidió su renuncia (1994), permaneció en el cargo apoyado por los altos mandos de la Fuerza Armada y naturalmente por la Constitución de 1980.

213 Al respecto debe aclararse que, a partir de 1989 todos los senadores designados fueron nombrados por el régimen militar, sin ningún tipo de concesión a la oposición, que en las elecciones ha resultado ser amplia mayoría. Estos senadores a quienes se le da también el calificativo de "Senadores Profesionales" o "Senadores constitucionales" son garantes, en alianza con los senadores elegidos por los partidos de la Derecha, para que ninguna reforma constitucional trascendental pueda imponerse en el senado. A esta fracción podría sumarse como senador vitalicio, si lo quisiera, el general Pinochet una vez que abandone sus funciones como comandante en jefe del ejército.

Una tercera instancia de poder que surge de la Constitución de 1980 es el Consejo de Seguridad Nacional. Este Consejo lo preside el Presidente de la República y participan en él, el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Senado y los cuatro comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. La clara mayoría del sector militar con el muy probable concurso del presidente de la Corte Suprema se hace nuevamente evidente en esta estructura de gran importancia en la vida interna del país.²¹⁴

Como los sectores que determinaron el carácter de la Constitución se suponen minoría, establecieron un sistema electoral destinado a asegurar su presencia en ambas cámaras parlamentarias. De esta manera se da la paradoja que, restablecida la democracia en Chile y elegida las dos cámaras del Parlamento en 1989, la oposición al régimen militar que obtuvo alrededor del 56% de los votos emitidos, tuvo en el Parlamento una presencia muy inferior a este porcentaje. No así, los sectores de derecha los que, pese a su franca minoría, alcanzan en el Parlamento una representación de más del 40% de los diputados y en la cámara alta, con el concurso de los senadores designados, llegan a casi el 50% de las representaciones. De esta manera una reforma constitucional que precise los dos tercios del senado para su aprobación, difícilmente podrá llegar a buen término si no cuenta con el apoyo de una de las fracciones que adhirieron al régimen militar (Renovación Nacional o Unión Democrática Independiente).

La ley electoral y de partidos políticos estipula una serie de restricciones. Existe un sistema de elección binomial que obliga a los partidos a hacer coaliciones. A través de estas coaliciones los partidos mayoritarios se imponen sobre los pequeños quitándoles a éstos toda chance de tener una expresión en el Parlamento como minoría.

En las negociaciones electorales los partidos que participan de la coalición deben recibir, de acuerdo a su votación o encuestas publicitadas, una cantidad de cupos parlamentarios que corresponda aproximadamente a la fuerza electoral que dicen representar. Por otro lado se establece el raro sistema de elegir por circunscripciones (Wahlbezirk) igual número de parlamentarios; esto lleva al absurdo que, regiones con 200. 000 habitantes elijan la misma cantidad de parlamentarios que otras con 80. 000.

Las cuotas de poder restadas al Presidente de la República y al Parlamento han sido traspasadas, en la nueva Constitución a unas Fuerzas Armadas con excesiva autonomía las

²¹⁴Ver Constitución Política del Estado: Acerca de senadores designados: Cap. V, artículo 45; acerca del Tribunal Constitucional Cap. VII artículo 81; acerca de la inamovilidad de los altos mandos de las Fuerzas Armadas Cap. X,

cuales determinan nombramientos, confirman o piden la renuncia a sus altos mandos sin que el Presidente de la República pueda intervenir. Al mismo tiempo ejercen un control en el Consejo de Seguridad Nacional y en el Tribunal Constitucional, hecho que ninguna otra democracia del mundo lo permite.

Para los efectos políticos, los senadores designados dan la fuerza suficiente al sector más identificado con el régimen militar para establecer un quorum necesario que impida cambios fundamentales en la Constitución. Cualquiera modificación trascendental deberá ser el resultado de complicadas negociaciones entre los actores políticos que se enfrentan.

Esta Constitución que he intentado representar a través de algunos ejemplos y que genera muchos conflictos entre los actores políticos del actual sistema, fue aprobada en un cuestionado plebiscito realizado en septiembre de 1980 en el cual la oposición no tuvo prácticamente ninguna posibilidad de expresarse. Todo el proceso fue controlado por el gobierno a través de las municipalidades y el Ministerio del Interior.

A la ciudadanía, todavía temerosa y desinformada se le conminó, bajo diversos tipos de aprensiones, a ir a los locales de votación y cumplir con el requisito. Los resultados no fueron ninguna sorpresa; la propuesta de los militares resultó vencedora por un margen de votación favorable, cercano al 70 %.

Para quienes aún tenían dudas acerca de la intencionalidad de los militares esta Constitución dejó las cosas mucho más claras. La clase media perdía el rol protagónico asumido en 1925, el Estado debía renunciar a su influencia en ámbitos como la educación y la salud; los partidos políticos quedaban sometidos a formas de control en las cuales los militares tenían activa presencia, el presidente de la república perdía varias prerrogativas establecidas en la Constitución de 1925, entre otras la de poder destituir o cambiar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas; y las minorías políticas (no confundir con los pequeños grupos políticos) veían artificialmente amplificada su fuerza parlamentaria por medio de una complicada ley electoral que reproducía en el Parlamento una presencia que no correspondía a la realidad electoral.

Con la imposición de esta Constitución, como dijera el político demócratacristiano Genaro Arriagada „hecha a la medida de los militares“ se ha institucionalizado un modelo autoritario que ha construido en Dictadura sus mecanismos de defensa para protegerse en tiempos de democracia.

2.8 La municipalización y privatización de la educación y el término del Estado Docente

El presente capítulo está referido a la reforma educacional del régimen militar que municipalizó y privatizó todo el sistema educativo chileno. A mi juicio esta reforma es uno de los nudos principales del conflicto que va cambiando la relación entre autoridades y profesores, y si se puede decir más específicamente, entre autoridades y clase media.

Si bien es cierto en un comienzo se habló de un proceso paulatino y optativo, en poco tiempo cientos de escuelas y liceos fueron traspasados a las municipalidades. Pese a las protestas de los profesores, el régimen militar impuso esta medida con lo cual prácticamente se consolida el quiebre del Compromiso Histórico en educación. Los maestros, con la municipalización del sistema educativo, ya no se vieron solamente envueltos en la polémica de defensa de la estructura del Estado Docente, de sus salarios, su formación profesional y el derecho a discernir, sino que tuvieron que bajar el nivel de sus demandas y movilizarse por lo más elemental: defender sus puestos de trabajos.

Esta determinación va a constituirse en una especie de detonante que le significará al gobierno muchas incomodidades en el desmejorado diálogo con los maestros. La desarticulación y represión del SUTE, la imposición de un Colegio de Profesores cooptado, además de un Estatuto Docente inconsulto y de una reforma universitaria excluyente, son algunas de las medidas que han ido preparando el camino para la ruptura definitiva con los maestros y con los sectores de la clase media chilena.

La municipalización de la educación se inició en 1979. En el mes de Marzo se firmó el Decreto y se implementó entre los años 1979-81. Posteriormente el proceso se detuvo 5 años y continuó en 1986, o sea, después de 6 años de haberse iniciado, experimentado y evaluado sus efectos.

En opinión de los diferentes gremios de maestros el sistema educacional chileno adolecía de una deficiencia fundamental: la concentración burocrática de su administración.

La expansión educacional iniciada en los años treinta y posteriormente en los sesenta, había generado una estructura administrativa muy difícil de dirigir. Todo aquello que tuviese relación con nombramientos, traslados, sueldos, ampliaciones, programas escolares, material didáctico, perfeccionamiento, actividades de extensión, pensiones, etc., dependía de la dirección central en Santiago; precisamente del Ministerio de Educación el cual, hacia finales de los años setenta, tenía bajo su responsabilidad aproximadamente 150.

000 funcionarios entre docentes, personal administrativo y personal de servicios y que, según el censo de profesores en 1985, alcanzaba sólo en el sector docente, la suma de 125.548 maestros en ejercicio de los cuales el 6, 6% trabajaba en la educación prebásica, el 63, 6% en la básica y el 29, 8% en la media.²¹⁵ Cualquier resolución, por insignificante que fuera, debía contar con la anuencia de alguno de los departamentos del Ministerio de Educación en Santiago. Esta carga excesiva de personal y de funciones fue convirtiendo a este Ministerio en una estructura compleja y anacrónica contra el cual se habían estrellado ya los planes de modernidad impulsados por los últimos tres gobiernos democráticamente elegidos. Incluso el mismo régimen militar, tenía serias dificultades para traspasar las barreras burocráticas que se erigían. En este entendido la descompresión administrativa pasó a ser una necesidad que nadie puso en duda en el ámbito educacional.

Los gremios expresaron en múltiples ocasiones su deseo de descentralizar el sistema educativo, pero ello no era fácil porque debía legislarse y en consecuencia debían tomarse acuerdos políticos que implicaban discutir los nuevos lineamientos estructurales que se le asignaría al Ministerio de Educación. Para los militares fue distinto por la sencilla razón de que ellos no subscribían el diálogo como modalidad de trabajo.

Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno militar fue la regionalización del país. Chile quedó dividido en 13 regiones y una región metropolitana, Santiago, con cerca del 40% de la población total del país.

A partir de ese proceso se pretenden resolver los problemas de un desarrollo nacional desequilibrado, el cual había estado basado en un centralismo que, frente al crecimiento de la población, resultaba cada vez más ineficiente. La llamada regionalización tuvo como

²¹⁵Jacqueline Gysiling, Cristián Cox, la diferenciación institucional de la formación de profesores: elementos para el análisis, Edit. CIDE, Santiago, 1990, pag. 5

objetivo descongestionar las funciones administrativas de las antiguas provincias las que, al igual que en educación, dependían excesivamente de la burocracia metropolitana.

Bajo esta perspectiva el gobierno procede a la transferencia de funciones administrativas de órganos centrales a unidades regionales las que pasan a ser responsables de la implementación y ejecución de ellas, aunque con una cierta supervisión de organismos centrales asentados en la Capital.

También se descentraliza la oferta educacional mediante organismos especializados autónomos integrados a la estructura administrativa regional. Estas instancias asumen la función de planificar el quehacer educativo en base a la realidad geográfica y sociocultural de cada zona. A este objetivo el gobierno agrega otro: la adaptación de los planes educacionales regionales al plan estratégico de los militares que no es otro que la descentralización económica y administrativa de los servicios públicos.

La regionalización del país en mi opinión será la antesala de la municipalización educacional, la que a su vez resulta ser el nudo principal del conflicto entre gobierno y gremios de docentes. En efecto, a partir de esta reforma, es como se van a ir definiendo las relaciones entre ambos actores sociales y lo que determinará la ruptura definitiva del régimen con los sectores de la clase media chilena. No obstante, este hecho, siendo uno de los más importantes, no puede entenderse como la causal primaria del conflicto. Otros antecedentes ya habían creado las bases de una desconfianza recíproca. El gobierno acusaba incansablemente a los grupos opositores organizados en gremios, de fomentar la animosidad contra el régimen, buscar su caída y actuar en concordancia con los partidos políticos que estando en receso se mantenían activos en la oposición.

Por su parte los maestros disidentes denunciaban la pérdida de derechos económicos, la falta de garantías laborales y la inusual imposición de una institución que representaba a los maestros con dirigentes nominados. Todo ello constituía una afrenta a la tradición democrática del magisterio. Se sumaba ahora un cambio fundamental: el Estado Docente desaparecía, la educación pública se privatizaba o municipalizaba y pasaba a ser un asunto comunal que debía financiarse a través de cuatro canales:

- Impuestos municipales a los habitantes de la comuna
- Aranceles pagados por los usuarios (en el caso de los privados)
- Aportes provenientes de los sectores empresariales privados existentes en la comuna

- Subvenciones restringidas otorgadas por el Estado en caso de necesidad, para ambos tipos de escuelas

Las consecuencias de la municipalización afectarán directamente la problemática social y económica de los educadores, darán impulso al movimiento sindical contestatario, hará perder credibilidad al Colegio de Profesores y será un detonante político que estará muy presente en el movimiento opositor que alcanza un punto culminante en Julio de 1983.

En 1979 el jefe del gobierno, Augusto Pinochet informaba al país sobre las nuevas medidas educacionales que se iban a implementar. En su discurso el mandatario identificaba el sistema educacional anterior a 1973 como un *cúmulo de anarquía* caracterizado por una anacrónica intervención del Estado en escuelas sin equipamiento, ni textos, ni materiales adecuados. En este contexto Chile quedaba a la zaga en comparación a otros países latinoamericanos. A ello se sumaba, según A. Pinochet, la falta de objetivos educacionales, la politiquería en las escuelas y universidades y la desmoralización profesional y económica de los maestros.

En el discurso de 1979, A. Pinochet seguía hablando de lo importante que era hacer justicia a los profesores y prometía mejoramientos económicos y profesionales a este sector „injustamente postergado por los gobiernos“. En este contexto el mandatario valoraba la creación del Colegio de Profesores y la implementación de un Estatuto de Carrera Docente como actos de justicia con el magisterio.

En la Directiva presidencial se habla de fortalecer los servicios provinciales de educación, adoptando medidas relacionadas con el mejoramiento escolar. Se entrega infraestructura, se construyen nuevos edificios y se reparten textos escolares. Junto con estas medidas se anuncia otra muy importante: el estímulo económico del Estado para aquellos privados que quieran hacerse cargo o tomar responsabilidades en educación. Dos razones importantes a mi juicio impulsan al gobierno a adoptar esta última medida. Una es desentenderse de escuelas e integrarlas al sector privado ya que, junto con ahorrar personal, ahorra también recursos económicos. Incluso el propio ministro de educación Sr. Horacio Aránguiz ha señalado que: „entre el 8% y el 10% por ciento de los recursos fiscales destinados a subvencionar al sector privado y municipalizado se pueden desviar a otros fines“.²¹⁶ La

²¹⁶AGECH, cuenta anual 1984-85 a sus asociados, Santiago Julio, 1985).

segunda razón es la defensa del principio de libertad de enseñanza. Ésta quedaría perfectamente garantizada al no establecer el gobierno limitantes a ninguna institución o persona privada que desee hacer su aporte al sistema educativo.

Sin embargo esta última oferta no resulta del todo convincente puesto que, de todos modos, el Estado, a través del Ministerio de Educación, seguirá siendo la instancia superior encargada de determinar los programas de estudios, distribuir los recursos, velar por el cumplimiento de los preceptos legales y en definitiva controlar el proceso educativo.

„El hecho de que el Estado con el fin de disminuir el déficit educacional fomente la enseñanza particular no significa que postergue su propia obligación de educar ni que renuncie a su función normativa y fiscalizadora.“²¹⁷

En la directiva presidencial sobre educación de marzo de 1979 el Gobierno militar insiste en una postura ideológica de adhesión al humanismo cristiano, no obstante dicha adhesión debía ser entendida

„(...) en el marco de la declaración de principios de la Junta Militar de Gobierno.“²¹⁸

Dicha actitud resultaba ser incluso impropia para el espíritu pluralista de los católicos chilenos. A la jerarquía eclesiástica le preocupaba el modo autoritario de los gobernantes, el afán excluyente y sectario en las decisiones, el uso de la violencia para combatir opositores y la notoria colaboración de los gobernantes con los grupos pudientes de la sociedad. En este contexto tanto las directrices educacionales como la implementación de las reformas educativas encontraban en el clero a un activo disidente.²¹⁹

Los objetivos de la educación básica, según el documento de Marzo de 1979, eran alcanzar un apego y reconocimiento del niño a las disposiciones legales, acentuar conductas disciplinarias y de obediencia, aprender a leer y a escribir, dominar las 4 operaciones aritméticas e incentivar conductas valorativas hacia la nacionalidad chilena. En síntesis:

„ (...) formar buenos trabajadores, buenos ciudadanos, buenos patriotas.“²²⁰

En el mismo documento se dice que, tanto la enseñanza media como universitaria „deben ser entendidas como privilegios“ y que, en el caso de la las universidades:

„ (...) la ley definirá títulos, grados, carreras y estudios que tienen carácter universitario.“²²¹

217Gonzalo Vial, Ministro de Educación, Revista Qué pasa? N° 112, Santiago. 8.3.1978 pag. 8

218Directiva Presidencial de Educación, Marzo 1979

219Ver Comité permanente del Episcopado chileno, Carta Pastoral, Reforma Educacional, Revista Mensaje N° 300, Julio, 1981

220Directiva Presidencial sobre educación, Marzo 1979

En este contexto varias carreras, entre otras las pedagogías van a quedar fuera de la universidad lo que abrirá una gran polémica entre opositores, especialmente del magisterio, el sector estudiantil pedagógico y el gobierno.

Para el Colegio de Profesores sin embargo no había razón de alarmarse; incluso su presidente Eduardo Gariazzo llegará a decir en el momento en que las pedagogías son marginadas de la universidad que la medida es correcta porque se habían convertido en algo así como las parientes pobres de la universidad

Agregaba el documento Directiva Presidencial sobre Educación refiriéndose al movimiento estudiantil que que:

„La ley establecerá un recurso sumario urgente para que la fuerza pública reabra y proteja el normal funcionamiento de las universidades.“²²²

Acto seguido la Directiva Presidencial enfocaba un tema completamente diferente y en estilo conciliador enaltecía el rol de los educadores. Decía el general Pinochet en el documento, refiriéndose a los maestros:

„Bien conozco su difícil situación material y ella es muy dolorosa para mi. El gobierno está decidido a mejorarla paulatinamente (...). Por ahora puedo anunciar un nuevo estudio de remuneraciones para cumplir a fines del presente año, (...) personalmente comprometo mi voluntad de gobernante en la tarea de enaltecer al profesorado y darle el nivel de vida y estima social que le corresponde y merece.“²²³

En este contexto de estímulos morales el general ofrecía la creación del premio nacional de educación, becas de perfeccionamiento en el extranjero, becas de perfeccionamiento en universidades chilenas, creación de la Casa del Profesor en cada ciudad, facilidades para el turismo, integración de profesores en delegaciones a congresos de enseñanza y cultura y como agregados culturales en representaciones diplomáticas. Fuera de ello el general Pinochet ofrecía la realización de un congreso nacional de educación en 1982 donde se analizaría con los profesores la marcha de los acontecimientos educacionales del país y los grandes proyectos a implementar en la década de los ochenta. Meses más tarde, el Decreto con Fuerza de Ley Nr. 3.063 de Diciembre de 1979, sorprendía al país y a miles de educadores. Por medio de él se ponía en funcionamiento la nueva estructura educacional: se traspasaban los establecimientos educacionales públicos a las municipalidades. A través

221 Directiva Presidencial sobre educación, Marzo 1979

222 Directiva presidencial, Ob. cit. 1979

223 Directiva presidencial, Ob. cit. 1979

de esta medida los profesores perdían los derechos establecidos en el Estatuto Docente y se incorporaban a las municipalidades como empleados particulares con las disposiciones laborales establecidas en el nuevo código del trabajo. El profesor, Jorge Pavez señala, al observar retrospectivamente los hechos que, al momento de municipalizar la educación:

„(...) empezaron a cambiar las reglas del juego entre empleadores y trabajadores de la educación.“²²⁴

La municipalización en opinión de los expertos del Ministerio de Educación debía cumplir varios objetivos. Uno de ellos era el traspaso de funciones administrativas y curriculares a las municipalidades; o sea, desburocratización. Un segundo objetivo era la reducción del presupuesto estatal destinado a educación el cual a juicio de los economistas del régimen, era desmesurado. Un tercer objetivo debía ser la vinculación más estrecha entre padres, maestros y autoridades educacionales, algo que con otras palabras se llamó *educación personificada*. Esta trilogía pretendía crear puentes de contacto periódico entre estos agentes educativos a objeto de enfrentar coordinadamente las dificultades y los desafíos que se presentasen en la comunidad escolar.

Finalmente, a través de la municipalización, se lograría el gran objetivo de la educación personificada, Esto significa una labor pedagógica en cursos no tan numerosos, con profesores a jornada completa, incentivados en la preocupación del rendimiento y progreso no sólo del colectivo sino también del alumno en forma individual.²²⁵

En la fundamentación del Estatuto de la Carrera Docente, apenas un año antes, nada se dijo de los cambios que se estaban preparando y que irían a cambiar estructuralmente todo el sistema de enseñanza en Chile. Nada se dijo sobre la municipalización ni sobre la privatización creciente de la educación en sus diversos niveles. Posiblemente el mismo general Pinochet no estaba tan convencido de la necesidad de este cambio y a mi juicio, tuvo que cambiar de idea a consecuencia de la presión de sus asesores económicos. O bien, conscientes del cambio que venía por delante y que encontraba precedentes en la privatización de la educación técnico profesional,²²⁶ ocultaron la medida a objeto de ganar tiempo, no provocar a los maestros e imponer la medida por sorpresa, a fin de año, cuando todos se preparaban a salir de vacaciones (similar táctica se había utilizado cuando se impuso el

224 J. Pavez, Entrevista 1992

225 Ver Sergio Fernández, ministro del interior; sobre traspaso de servicios públicos a las municipalidades, Revista de Educación N° 81, Santiago, Agosto-Sept. 1980, pag. 74

Estatutode Carrera Docente). Lo concreto es que, de todos los planes trazados en la Directiva Presidencial sobre educación, casi ninguno vio su materialización y paradójicamente uno que no estaba anunciado empezó a cumplirse a cabalidad: la municipalización. El congreso educacional prometido para 1982 tampoco se realizó; tal vez porque ya no había nada o muy poco que discutir.

Para los militares, la municipalización debía cumplir una función descentralizadora de todo el proceso educativo el cual se encontraba, a decir de algunos, entrampado en un círculo vicioso: no se modernizaba porque era muy pesada la carga burocrática y viceversa. Esto llevaba a la conclusión de que el Ministerio de Educación era incapaz de poner en funcionamiento cualquier reforma modernizadora que quisiese implementarse. Se sumaba a ello, como ya lo he dicho, la carga económica de considerables proporciones para el Estado por cuanto de este ministerio dependían los sueldos de más de 120. 000 funcionarios docentes y cerca de 20. 000 empleados administrativos y personal de servicios. A estos gastos se agregaba la mantención de infraestructura: bibliotecas, laboratorios, construcción de establecimientos, ampliación y remodelación de aulas, mantención eléctrica y sanitaria, material didáctico, vehículos etc. Todo ello encarecía aún más el presupuesto educacional.

A la idea de descentralización se sumaban otras corrientes de opinión las que, aún no estando de acuerdo con la manera cómo esta reforma se iba a implementar, coincidían en el principio de que era necesario hacerlo.

Tanto los educadores que representaron en el movimiento gremial al Partido Demócrata Cristiano como los adherentes del depuesto gobierno de la Unidad Popular concordaban en la necesidad de esta medida. El problema se generaba, como bien apunta el ex ministro del régimen militar, Enrique Froemmel, en que dichos representantes tenían problemas con la legitimidad del régimen militar:

„Creo que el problema más serio entre las relaciones de los gremios de maestros y el gobierno fue que nunca existió una relación clara, de confianza. Yo diría que las relaciones se caracterizaron fundamentalmente por un fuerte antagonismo, o sea íbamos a la mesa de negociaciones, sabiendo siempre que la otra parte estaba tratando de buscar las segundas intenciones que había en lo que yo decía y yo en la que ellos decían.“²²⁷

226La mayoría de estas escuelas fueron traspasadas a instituciones privadas como la Sociedad de Fomento Fabril y el Servicio Nacional de Agricultura.

227Enrique Froemmel, Entrevista 1992

En el marco de estas problematizadas relaciones con las organizaciones de docentes el ex ministro establece, según creo, dos periodos completamente antagónicos en los cuales el rol del Colegio de Profesores estuvo marcado por un maximalismo que entorpeció el entendimiento entre autoridades y maestros:

„Una primera etapa en que el gremio era tremendamente proclive al gobierno y una segunda (a partir de la democratización del Colegio de Profesores en 1985) en la cual el gremio era tremendamente contestatario. Nunca se dio un intermedio a mi gusto. O había un grupo que estaba absolutamente comprometido con el gobierno o había un grupo que era absolutamente antagonista. Por lo tanto la posibilidad de una crítica constructiva con los maestros, no existía, porque ya fuese, se apoyaba todo o rechazaba todo.“²²⁸

De estas apreciaciones puede deducirse que las relaciones gremio-gobierno desembocaron, casi siempre, en un diálogo de sordos el cual estuvo, como lo señala el ex ministro, caracterizado por los opuestos de sumisión u obsecuencia.

Jorge Pavez, consejero nacional del Colegio de Profesores, expresa que para la fracción sindicalista activa en el magisterio fue muy difícil oponerse a la municipalización.

Aun cuando algunos dirigentes gremiales tenían claro los que se estaba preparando, la mayoría del profesorado no lo percibía. Veía este fenómeno como una medida modernizadora. A ello se agregaba, según el dirigente, que los maestros se veían de pronto con mucho dinero pagado por los años de servicio y trabajando en el mismo establecimiento educacional. O sea, modernidad, desburocratización, puesto de trabajo y un pequeño capital a mano; en esas condiciones resultaba complejo, según Pavez, convencer a los maestros que lo que estaba ocurriendo es que se estaban cambiando las reglas del juego y que ya nadie garantizaría la estabilidad funcionaria porque los profesores tenían que acogerse a la ley laboral vigente para el sector privado y en ese esquema el profesor podía ser despedido (como así ocurrió) en cualquier momento, sin previo aviso y sin posibilidades de apelación.²²⁹

Para Julio Valladares, consejero nacional del Colegio de Profesores democratizado:

„La municipalización era incompatible con un régimen autoritario. La descentralización es un principio sustancial de un régimen democrático porque es transferencia de poder, transferencia de decisión hacia la sociedad civil. La municipalización solamente era posible bajo un régimen democrático, sin esa premisa lo que se hacía era que el gobierno creaba un mecanismo más eficaz de control sobre los profesores y sobre todo el sistema escolar. Por eso nos opusimos porque fue una falsa municipalización, una falsa descentralización. Nosotros la llamamos "alcaldización".

²²⁸ Enrique Froemmel, Entrevista, 1992

²²⁹ Jorge Pavez, Entrevista, 1992

La municipalización supone participación y lo que se hacía era transferir poder a los alcaldes que por lo demás eran nominados por el señor Pinochet.²³⁰

Por su parte la consejera nacional del Colegio de Profesores (democratizado) Verónica Monsalve afirma que:

„Los maestros no fueron debidamente informados de lo que estaba ocurriendo. El gobierno inició el proceso de municipalización en provincias a objeto de no inquietar a los maestros en Santiago, quienes, con un criterio de neutralidad y apatía, resolvieron por no hacer huelgas ni protestas porque ello lo veían todavía muy distante. Sin embargo, cuando el proceso se trasladó a Santiago y los profesores no sabían lo qué iba a ocurrir con ellos, el pánico cundió con rapidez.(...) Sí, esa fue una falla garrafal que hasta este momento duele (...).Vino la municipalización, impuesta, eso tenemos que decirlo claramente, y entonces empezamos a funcionar en cada unidad educativa de acuerdo a lo que nos venía llegando. A mi también me produjo un rechazo la municipalización; rechazo que no prosperó con la fuerza gremial como debía haber sido; por qué?; porque a su vez esto se sesgó políticamente, es decir todo se polarizó. El profesorado se repartió entre partidarios o no partidarios de la municipalización en razón a si, eran o no, partidarios del gobierno.“²³¹

En opinión de la profesora Monsalve, los docentes no tuvieron la capacidad de actuar como cuerpo para defender sus intereses gremiales. Primó, en su opinión, la rivalidad política y por ello, para el gobierno fue relativamente fácil imponerse con la municipalización. Posiblemente, dice:

„(...) igual se hubiesen impuesto, pero si hubieran encontrado a un movimiento docente unificado dispuesto a defender sus intereses las condiciones en que se hubieran realizado los cambios habrían sido muy diferentes, los profesores habría podido conseguir mucho más.“²³²

El presidente del Colegio de Profesores Osvaldo Verdugo frente a este acontecimiento expresa otra versión. El afirma que cuando la directiva democrática pudo tomar la dirección del Colegio de Profesores (1986), la municipalización ya se había impuesto en un alto porcentaje de escuelas del país por lo tanto los hechos ya estaban consumados. Verdugo, refiriéndose al concepto mismo aclara que lo que en Chile ocurrió no fue en realidad una municipalización sino una alcaldización de la educación.

El proceso de alcaldización dice el presidente de los maestros no tenía legitimidad sin participación de los actores y los militares en su opinión confundieron conceptos:

„(...) confundieron alcaldización con municipalización, libertad de enseñanza con privatización(...). La municipalización existe sólo en un Estado democrático,jamás en un régimen autoritario. No había legitimidad por falta de participación de los actores. Existe una renuncia a un Estado Docente lo que también es muy discutible, y entonces se produce un crecimiento inorgánico de empresarios en la educación con recursos de los chilenos, por lo tanto

230Julio Valladares, Entrevista, 1992

231 Verónica Monsalve, Entrevista, 1992

232 Verónica Monsalve, Entrevista, 1992

también es contradictorio. Hubo una protección con recursos públicos al sector privado y éste no hace aportes propios para incentivar la calidad de la educación.²³³

A través de las expresiones del profesor Verdugo puede evidenciarse el escepticismo de la organización de maestros en la intencionalidad reformista del régimen. Este escepticismo, que el ex ministro Froemmel define eufemísticamente como *falta de confianza*, es un componente que caracterizará las relaciones Gremio -Gobierno a partir de 1986 hasta finales del periodo en 1989.

A juzgar por las opiniones del presidente del Gremio, el régimen militar mantiene una intransigente conducta desestimativa del rol docente en la búsqueda de soluciones o propuestas educacionales. La municipalización, para el dirigente, no es tal, pues no se cumplen dos premisas fundamentales: primero, imposibilidad de municipalizar bajo un régimen autoritario que no permite la libre elección de los alcaldes, máximas autoridades de las comunas en la estructura política chilena; y segundo, resulta en su opinión, imposible municipalizar un sistema educacional, sin considerar la opinión de quienes son actores principales en el ámbito que se quiere reformar. En opinión de Verdugo miles de maestros se sintieron postergados por la autoridad y percibieron que se rompía con una cultura dialogante que se había expresado durante varias décadas en la relaciones magisterio-gobierno.

En la apreciación de Verdugo subyace de manera evidente, la confirmación de las palabras del ministro Froemmel: la falta de confianza recíproca. La confianza que para el ex ministro había sido vulnerada por la carga ideológica que tenían los representantes del Colegio de Profesores Democratizado.

Al respecto aclaro que la opinión del ex ministro resulta carente de objetividad. La ex autoridad ve la carga ideológica solamente en el adversario, vale decir entre los representantes del gremio, pero no entre los que perfilan el modelo educativo desde los ministerios de Educación y Economía. Sabida fue la carga ideológica que le imprimía el régimen a las intervenciones de los diferentes ministros de educación en sus discursos públicos y entrevistas, como también el afán obsesivo de llegar hasta las escuelas básicas con toda la simbología militar. Algunos ejemplos de lo que afirmo son la rigidez en el uso de uniformes escolares, los diarios murales en las escuelas, las brigadas de tránsito, la participación obligatoria de colegios marchando en ceremonias públicas alusivas a hechos

233 Osvaldo Verdugo, Entrevista, 1991

históricos las que, por coincidencia o no, casi siempre tenían que ver con gestas militares. También deben contarse dentro de este afán ideologizante los actos matinales de los días lunes en todas las escuelas del país con izamiento de bandera e interpretación de la canción nacional a cuyo texto tradicional incorporaron una discutida estrofa de alabanza a las Fuerzas Armadas: „vuestros nombres valientes soldados, que habéis sido de Chile el sostén/ nuestros pechos los llevan grabados /lo sabrán nuestros hijos también“.

En este mismo esquema de ideologización en las escuelas, se estimuló la creación de diarios murales en los cuales los alumnos debían escribir composiciones, recortar artículos de periódicos, resaltar las glorias militares del pasado y a modo de noticias, las acciones actuales del régimen militar.

Con ello se buscó ideologizar en forma nítida a los educandos; que no hayan tenido el éxito que el gobierno esperaba es algo ya diferente, pero me parece que el intento fue notorio.

Otra de las reflexiones importantes de destacar del ministro Froemmel es su reconocimiento a la imposibilidad de establecer un diálogo constructivo con los maestros. En su opinión los gremios fueron condecendientes en extremo con el régimen, o bien asistieron a las negociaciones más por formalidad que por convencimiento de que los problemas pudieran ser resueltos; ello porque los maestros opositores habían perdido la credibilidad en las autoridades.

A juicio de muchos dirigentes de los profesores, dice el ex ministro Froemmel „el gobierno carecía de legitimidad y, a juicio de las autoridades gubernamentales, los dirigentes de los profesores estaban introduciendo la política y la animosidad contra el gobierno en las escuelas. En ese plano todo diálogo quedaba bloqueado por la intolerancia y la descalificación recíproca“.²³⁴

La división en dos periodos que el Sr. Froemmel hace de las relaciones Gremio-Gobierno, siendo muy interesante, me parece parcial en lo referido a la actitud de los maestros opositores. Ciertamente es que hay tres tendencias gremiales o asociaciones de diferente orientación durante el periodo militar, pero también es cierto que una contó con el apoyo

234 Enrique Froemmel, Entrevista, Marzo, 1992

institucional del régimen durante 12 años y las otras existieron en forma marginal, bajo un clima de permanente acoso y hostilidad laboral.²³⁵

Según Pedro Schulack, consejero nacional del Colegio de Profesores (democratizado) la municipalización fue vista como una desventaja para los maestros por quedar éstos sometidos a los caprichos de los alcaldes los cuales, todos, sin excepción, habían sido designados por un gobierno surgido de un golpe militar; en consecuencia no eran autoridades democráticas.

Para el profesor Schulack es imposible poder implementar una correcta política educacional al margen de los maestros, y peor aún, contra su voluntad.

La municipalización, planteó como una de sus argumentaciones principales, dice el dirigente, mejorar la calidad de la educación, pero con el correr del tiempo se comprobó de que no fue así; al revés de lo dicho:

„La calidad de la enseñanza decreció considerablemente, el mejoramiento socioeconómico de los maestros se fue postergando y perjudicando de manera que no se dignificó al trabajador de la educación; por el contrario se le perjudicó, marcando una ruptura en el concepto de la unidad nacional. También atenta contra el principio de los derechos humanos y entre éstos, el derecho al trabajo digno, el derecho a la vivienda, el derecho a asociarse y a la libertad de opinión. En el proceso de municipalización se establece un control absolutamente policial y perverso contra los trabajadores de la educación.“²³⁶

El dirigente Jorge Pavez, fundador de la Asociación Gremial de Educadores (AGECH), señala que el proceso de municipalización se hizo sin la anuencia de los maestros y sin preguntarles si estaban o no de acuerdo con la medida.

La AGECH, según Pavez, dio una lucha importante, oponiéndose a la medida, pero desgraciadamente dice el dirigente, el periodo por el cual el país pasaba era muy difícil. Era el momento del *Boom* económico (1979-80) y la consciencia de los maestros era muy diferente:

„Cuando los profesores iban a ser traspasados se les dijo que no iban a perder la estabilidad laboral. El profesor, al ser traspasado a la enseñanza municipal, recibe una cantidad de dinero por los años que había estado trabajando en la enseñanza fiscal se ve con dinero y se ve además trabajando en el mismo establecimiento. No logra percibir lo que nosotros le advertíamos anticipadamente y era que aquí estaban cambiando las reglas del juego y que nadie garantizaba su trabajo pues quedábamos sujetos a la ley 2. 200 de la legislación laboral que permitía que cualquier profesor pudiera ser despedido simplemente por un aviso y sin ninguna especificación de

²³⁵Incluso el presidente Osvaldo Verdugo fue despedido de su trabajo y enviado a la cárcel en varias ocasiones; el secretario de la Asociación Gremial de educadores de Chile, Prof. Manuel Guerrero fue asesinado por un escuadrón vinculado a la policía chilena. Igualmente detenido y golpeado en reiteradas ocasiones estuvo el profesor Jorge Pavez primer presidente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile y despedido de su establecimiento educacional el profesor y miembro de la directiva de la AGECH Fernando Azula.

²³⁶Pedro Schulack, Secretario General del Colegio de Profesores, Entrevista, Noviembre 1991

causa. Eso implicó que en los años siguientes salieran despedidos del servicio miles de maestros
 “²³⁷

2.9 La prensa y los cambios educacionales

Complementariamente, y a objeto de dar mayor representatividad a las opiniones entregadas, he investigado también sobre la manera cómo algunos medios de comunicación escritos, informaron bajo el régimen militar sobre los asuntos educacionales. De preferencia he seleccionado información del periódico El Mercurio por ser quien, a mi juicio, mejor interpreta los intereses de la clase media chilena. Con notable interés El Mercurio se ocupa sobre temas educacionales, asumiendo a veces controvertidas posiciones de defensa y crítica en torno a las reformas implementadas.

Un mérito digno de destacar en El Mercurio es la constante preocupación por analizar los acontecimientos educacionales del país e incluso tener en su redacción a expertos quienes con frecuencia participaban en el debate político-educacional.

Un segundo elemento, digno también de reconocer, es el espacio que encontraron en sus páginas representantes de los movimientos opositores al régimen. Algunos de sus dirigentes fueron entrevistados, se dieron a conocer sus plataformas reivindicativas y cuando hubo debate en el sector educacional, pese a que se privilegiaron espacios para los representantes del gobierno, las tendencias opositoras pudieron, aunque con limitaciones, expresar sus opiniones en El Mercurio. Estos dos factores que menciono contrastan con un tipo de prensa que aceptó y publicitó las reformas solamente como forma de adulación a los gobernantes, y otra, que más bien se limitó a informar sobre los hechos sin asumir ni tematizar posiciones.²³⁸

En el mes de Mayo de 1979, El Mercurio dedica su página editorial para referirse a las transformaciones educacionales en marcha. El periódico recoge opiniones del Ministerio de Educación referidas al Decreto 816 el cual elimina muchas exigencias burocráticas que dificultaban la acción de la enseñanza particular. Tema principal del comentario es la necesidad de desburocratizar la educación.

La idea sobresaliente en el artículo es que la educación pública es burocrática e ineficiente. De ello se desprende una necesaria reformulación. En este proceso renovador deben

²³⁷Jorge Pavez, Entrevista, Santiago. Febrero, 1992

²³⁸Ver María Grossi, La educación chilena en la prensa de 1980, 1983, 1985, Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE), Santiago, 1985

acentuarse la preocupación por la enseñanza privada, la cual es valorada como símbolo de libertad educacional y eficiencia.

El concepto clave que encuentran los defensores de esta medida es *desburocratizar*, vocablo que empieza a aparecer con insistencia en todos los documentos oficiales alusivos al tema. Esta idea logra por cierto concitar la atención de los más variados segmentos del magisterio chileno puesto que todos, incluso la Democracia Cristiana y la izquierda allendista de una u otra forma y en diferentes periodos, siempre habían expresado argumentadas críticas contra el centralismo burocrático e ineficiencia del sistema. Este centralismo implicaba una lentitud exagerada en la solución de problemas administrativos, pedagógicos y de modernización.

Los partidarios de los dos últimos gobiernos elegidos, la Democracia Cristiana y la Unidad Popular, aun cuando su intencionalidad era muy diferente, habían propuesto similares formas de reestructuración con argumentos que poco se distanciaban de los entregados por los militares en 1979.

El periódico trasluce, a través del lenguaje utilizado en esta página editorial, su plena concordancia con las medidas en marcha. En un estilo informativo que transmite optimismo y seguridad El Mercurio saluda la propuesta desburocratizadora y privatizadora del régimen con expresiones como:

„Se trata de una valiosa iniciativa“.

„Con acierto el titular de dicha Cartera..““

„La sola enumeración de estas medidas da una idea del claro ritmo expedito que piensa imprimirse en materia educacional“

„Cabe esperar que los beneficiados en el sector educativo valoren su contenido y alcance.“ etc.²³⁹

Pero en Agosto del mismo año 1979, El Mercurio, en sus páginas interiores dedica un desacostumbrado espacio a la polémica educacional reproduciendo opiniones de destacadas personalidades universitarias. Este material se diferencia de otros anteriores porque en él aparecen, como pocas veces, opiniones divergentes a la oficial.²⁴⁰

²³⁹El Mercurio, Santiago. 13.05.1979 pag. A3

²⁴⁰Necesario es acotar que en gran parte del material de prensa que revisé sobre temas educacionales y gremiales, las fuentes informativas eran el Colegio de Profesores (designado) el cual representaba una línea marcadamente oficialista, el Ministerio de Educación u otras autoridades gubernamentales. Las opiniones de la disidencia si bien es

Aún siendo el periódico chileno que con mayor seriedad informativa daba cuenta del acontecer nacional e internacional, El Mercurio, en la política interna, se caracterizó por una complacencia generosa hacia el régimen, pese a que en ocasiones otorgó tribuna, como ya lo dije, a la oposición y a figuras disidentes del gobierno. No obstante preciso aclarar que el espacio otorgado a quienes plantearan críticas estructurales al gobierno fue reducido y apuntó mas bien a mantener una imagen de pluralidad y neutralidad que el periódico históricamente ante la sociedad chilena se había empeñado en defender. En el periodo que media entre septiembre 1973 y 1983 quien criticara la legitimidad del régimen corría el riesgo de ser encasillado dentro de los opositores marxistas y ser blanco de una campaña de la cual difícilmente podía salirse incólume.

Pese a todo y en un marco de restricciones y arbitrariedades, el profesor de Derecho Francisco Cumplido, fustiga al gobierno militar desde las páginas del Mercurio cuando afirma que:

„Las universidades en Chile y Latinoamérica son un lugar estratégico de desarrollo social y que en el sexenio(1973-1979), la acción del gobierno militar frente a ellas ha tenido presente ese carácter; las universidades fueron un objetivo militar y consecuente con este criterio el gobierno militar las intervino designando rectores delegados que por cierto resultaron ser ajenos a ellas“²⁴¹

Uno de los puntos centrales de la crítica del profesor Cumplido son los ingresos irregulares a las universidades a través de concesiones arbitrarias hechas a jóvenes simpatizantes del gobierno militar.

El catedrático expresaba que:

„Se conserva el ingreso sometido al sistema, pero se han denunciado ingresos extra-sistema a través de matrículas de gracia o por convenios entre las universidades y diferentes instituciones. Esto no es una regla general pero hay casos en que subsiste.“²⁴²

El profesor Cumplido critica con severidad los criterios selectivos en el desmantelamiento de las matrículas en determinadas áreas de la educación superior señalando que:

„De especial preocupación es la reducción el área de Ciencias Sociales, un 48, 9% en casi todas las universidades.“²⁴³

cierto en ocasiones fueron publicitadas por los medios de comunicación, jamás correspondieron a la incidencia que ésta tenía en la sociedad civil.

241 Ver F. Cumplido, El Mercurio, Santiago.27.08.1979, pag. C-3

242 El ingreso a las universidades chilenas está reglamentado por dos requisitos: a), el promedio de las calificaciones obtenidas en los tres últimos años de la enseñanza media y b), el puntaje obtenido en la prueba de aptitud académica sumado a otra de conocimientos específicos.

243 F.Cumplido, El Mercurio, Santiago.27.08.1979

El gobierno, en opinión del jurista, unificó criterios en cuanto a educación superior de acuerdo a los fines establecidos por la Junta Militar de Gobierno en razón a estrategias económicas. Igualmente denuncia las facultades especiales que tienen los rectores delegados a quienes se les permite renovar personal académico, administrativo y expulsar a alumnos. Agrega Cumplido que toda esta constelación de hechos irregulares y ajenos a la tradición académica le hacen pensar que se está frente a una *universidad vigilada*, dirigida por gente extraña a ella²⁴⁴.

La crítica formulada por el profesor Cumplido es una de las pocas que encuentra espacio en el Mercurio de aquella época. El periódico muestra indicios de querer comenzar a abrir las compuertas para una discusión que va a tomar con el tiempo las más variadas dimensiones. A la sazón el régimen ha experimentado una grave crisis de administración, se producen confrontaciones en altos mandos de la oficialidad. Sin embargo la fracción que lidera Augusto Pinochet logra desplazar de las Fuerzas Armadas y del gobierno a algunos de sus adversarios, asumiendo el general Pinochet todos los poderes de representación y quebrando al mismo tiempo el principio de rotación previamente acordado entre los jefes de los institutos armados.

En este complejo proceso entre concentración de poder versus aperturismo, son invitados a opinar en el periódico personalidades que asumieron roles de conducción política en el primer sexenio del régimen militar y que, en el proceso de contracción del anillo gobernante se automarginaron o bien fueron obligados a renunciar a sus funciones.

Las opiniones por ej. del Profesor Cumplido al Mercurio fueron posibles porque son parte de un movimiento crítico en ascenso, que buscaba salir del anonimato y que empezaba a ver con aprensión los desbordes de un autoritarismo desmedido que quizás ellos mismos no se habían imaginado, o no lo habían previsto.

244 F.Cumplido, El Mercurio, Santiago. 27.08.1979

Algunos de las postergaciones y atropellos que denunciaba el profesor Cumplido son perfectamente identificables: Así por ejemplo se lee en El Mercurio del 25 de Mayo de 1980 que, a través del Decreto Ley Nr. 3.357 el Ministro de Educación queda facultado para que: „destine a cualquier lugar del país a profesores fiscales sin sujeción a las normas sobre Carrera Docente“.

En la polémica educacional se integran, hacia 1980, nuevas opiniones disidentes que provienen incluso de estamentos académicos vinculados al régimen los cuales han empezado a observar con preocupación los excesos de autoridades universitarias y educacionales en su afán por aislar y castigar el pensamiento crítico académico.

En este contexto que señalo el profesor Juan de Dios Vial (Rector de la Universidad Católica) frente a la expulsión del filósofo Juan Gómez Millas de la Universidad Austral de Valdivia, reacciona con acusatorias interrogantes en una carta aparecida también en el El Mercurio en la cual leemos:

„Si hombres como Juan Gómez Millas²⁴⁵ no pueden manifestar públicamente el menor pensamiento que se halle en desacuerdo con el Rector, qué pueden esperar tantos otros profesores universitarios que no tienen su categoría intelectual y su prestigio?. Ellos podían sentirse tranquilos mientras no realizasen proselitismo político ni participaran en actividades que la ley prohíbe; y ahora qué? "(...) Qué clase de profesores son los que quiere la dirección de la universidad Austral? Cómo no se entiende que de esa manera se rebaja la dignidad del profesor, se destruye todo ascendiente que él pueda tener sobre sus alumnos, se socava la base moral de la universidad y se frustra toda su misión como obra educadora.“²⁴⁶

El Mercurio sin embargo todavía está lejos de asumir una postura crítica con respecto a las medidas educacionales que están inquietando no solamente a los profesores opositores al régimen militar sino también, como en el caso de Vial, a los propios adherentes del gobierno.

Un ejemplo de la manera distorsionada con que se informó lo constituye una información aparecida en 1980, a raíz de la visita a Chile del Rector de la Pontificia Universidad Católica de Perú, profesor José Tola. El periódico junto con dar cuenta de la visita del académico afirma, en un vistoso titular, que habrían:

„Problemas similares en Universidades de Perú y Chile.“²⁴⁷

245 Juan Gómez Millas: historiador, filósofo, inspirador de la reforma educacional de 1928, fundador de la Facultad de filosofía y educación de la Universidad de Chile, entre 1953 y 1963 Rector de esta misma Universidad y una de las personalidades académicas más relevantes de la intelectualidad chilena en el presente siglo. Una gran parte de su esfuerzo lo dedicó a conciliar las tesis del humanismo cristiano con las del laicismo. Al respecto ver la interesante obra de la Corporación de Promoción Universitaria : Juan Gómez Millas el legado de un humanista, Santiago, 1989

246 El Mercurio, Santiago. 01.4.1980

247 José Tola, El Mercurio, Santiago. Abril, 1980

Sin embargo el tenor de las declaraciones del profesor José Tola distan mucho de esta similitud. De sus opiniones publicadas por el periódico, he extraído algunas que demuestran cuán diferentes son, en 1980, los sistemas universitarios de ambos países y cómo el periódico le imprime a las universidades chilenas característica que en verdad no tienen. El sistema universitario chileno en 1980 se encuentra intervenido por medio de Rectores delegados nominados por el gobierno. Los estudiantes aminorados y desorganizados no juegan ningún papel en las elecciones de las autoridades y el sistema universitario, dicen los gobernantes, debe, al igual que otros servicios: autofinanciarse. A todo ello se agrega el intervencionismo del Estado a través de informantes dispuestos en casi todas las universidades para intimidar al pensamiento crítico académico.

Pero veamos lo que el Rector Tola plantea en entrevista con El Mercurio sobre la universidad Pontificia del Perú.

El financiamiento de la Universidad proviene del Estado en un 60%, el 40 % restante se obtiene de las donaciones, aportes de los estudiantes y rentas propias de la Universidad.

Pese al aporte económico del Estado se mantiene el principio de autonomía. Nunca ha habido, dice el Rector, nada que pueda calificarse como ingerencia del Estado y/o autoridades gubernamentales en la vida universitaria.

Los derechos que pagan los alumnos están en relación directa con su situación socioeconómica. Ello es necesario puesto que, de no aplicarse, las universidades tendrían exclusivamente alumnos provenientes de familias con ingresos altos, cosa que nadie quiere.²⁴⁸

La universidad se rige por un reglamento universitario dictado en los años sesenta, según el cual el Rector se elige cada 4 ó 5 años democráticamente por toda la comunidad universitaria.

Afirma finalmente el Rector que la presencia estudiantil no ha sido perjudicial siendo, en determinadas circunstancias sociales y políticas muy útil este contacto.

En la elección de las autoridades existe participación estudiantil y del personal administrativo y de servicios. Los estudiantes participan en el Consejo ejecutivo de la

²⁴⁸Al respecto, el presidente del Banco Central de Chile y uno de los defensores del modelo neoliberal Alvaro Barahona afirmaba en la revista Ercilla que "para extirpar la política de las universidades chilenas, los alumnos debían pagar caro por sus estudios" de esta manera concluía "valorará realmente su paso por la universidad sin distraerse en actividades políticas", Revista Ercilla N° 2.347, Santiago, 23.07. 1980

Universidad donde el personal de servicios y administrativo tiene una representación mas bien simbólica.²⁴⁹

De esta manera se manipulaba a la opinión pública por medio de falsas similitudes: nada de lo que decía el profesor Tola era visible en las intervenidas universidades chilenas.

Por si hubieran dudas respecto de la manipulación de la prensa el oficialista periódico La Nación, refiriéndose a la municipalización de la educación, deja las cosas aún más claras cuando destaca en grandes titulares el 18 de Junio de 1980 que: „el traspaso de colegios a municipios, es un proceso paulatino y optativo“. Esta afirmación, como quedará comprobado más adelante, estuvo muy distante de lo que fue la realidad ya que en poco más de 2 años, la inmensa mayoría de los colegios estatales fueron traspasados a las municipalidades; vale decir, fue un proceso acelerado que no tuvo nada de paulatino ni menos de optativo ya que los maestros, tal como lo destacan adherentes y opositores al régimen, ni siquiera fueron consultados.

Solamente en el área de Santiago se traspasaron en el primer semestre de 1981, 229 establecimientos educacionales estatales a las municipalidades con 7. 179 funcionarios y 160. 706 alumnos. Al 1 de Abril de 1982 se habían traspasado en todo el país 5. 724 establecimientos educacionales con 72. 531 funcionarios y aproximadamente dos millones de alumnos en más de 250 comunas del territorio nacional. Esta cifra corresponde al 84% de la educación fiscal.²⁵⁰ De esta manera puedo concluir que los calificativos de „paulatino“ y „optativo“, no correspondieron a la realidad de las escuelas y liceos fiscales municipalizados.

La directiva del Colegio de Profesores reaccionó, en razón a su dependencia con las autoridades militares, con una actitud subordinada que „apoyaba todo“ (E. Froemmel) lo cual le hace perder credibilidad ante un profesorado que se siente „postergado y privado de sus derechos“ (F. Cumplido) y que debe asumir obligadamente la condición de actores pasivos en el nuevo proceso de transformaciones educacionales que se inaugura con la Directiva Presidencial sobre educación en Marzo de 1979.

En 1979-80 la discusión educacional, como es posible imaginar, estuvo centrada en el traspaso de las escuelas a las municipalidades. Los medios de comunicación dan cuenta en forma fluida de este hecho. Las principales argumentaciones que esgrimen las autoridades

249 El Mercurio, Santiago, 23.04 . 1980

250 Ramón I. Núñez: Las transformaciones..., Ob.cit, pag. 132

se dejan resumir en los siguientes titulares y subtitulares de la prensa: desburocratización del sistema, mayor libertad de enseñanza, reducción del gasto fiscal, mejoramiento salarial de los docentes, elevación de la calidad de la enseñanza, educación personificada, etc.

El Mercurio destaca las benevolencias del nuevo sistema de municipalización poniendo como ejemplo la Municipalidad de Las Condes que inicia un plan piloto „sin temores“, esperando con ello:

„(...) disipar las dudas de los que aún se aferran a la política estatista.“²⁵¹

Las características particulares de esta comuna, cuya municipalidad dispone de óptimos recursos, debido a que en ella vive una inmensa mayoría de personas con altos ingresos no es considerada por el periódico. Los capitales que esta municipalidad dispone para los asuntos educacionales son muy superiores a los de las comunas donde vive gente de escasos recursos y que por lo tanto pagan bajos impuestos a las municipalidades. Lo dice su propio alcalde :

„Aquí vive la gente que de alguna manera mueve al país como empresarios, profesionales, gente que influye en los medios de comunicación, ministros; eso hace que sea una comuna importante. Y lo segundo, es que Las Condes por su mayor desarrollo económico, de alguna manera se anticipa a los problemas que después se van a producir en el resto del país. Aquí estamos tratando de solucionar los problema que Chile va a vivir en diez años.“²⁵²

El Colegio de Profesores, el Ministerio de Educación a través de sus diversos Departamentos y el Gobierno Militar son las principales fuentes consultadas por los medios de comunicación para estructurar la información que la prensa transmite. Una de las características del régimen militar, en cuanto al uso de los medios informativos, fue la uniformidad con que se dieron a conocer noticias y la escasa explicación, en el caso de la educación, que se ofreció a los usuarios o personas afectadas con las reformas en marcha.

Titulares que permiten forjarse una idea al respecto señalan que :

„El ministro presidió traspaso de Liceo“

(El Mercurio 16-10-1980)

„El ministro Prieto habló de municipalización“

(La Tercera 23-10- 1980)

251 El Mercurio, Santiago, 6.08.1980

252 Joaquín Lavín, Alcalde de Las Condes, Revista Hoy, N° 836, 2/8.08.1993, pag. 18

„Selección de comunas en traspaso de escuelas“

(El Mercurio 23-10-1980)

„Municipios estudian traspaso de colegios“

(El Mercurio 28-10-1980)

„Proceso educacional permitirá generar igualdad de opciones“

(La Nación 6 -11-1980)

„476 nuevos colegios serán subvencionados en 1981“

(La Segunda 13-11-1980)²⁵³

„Todos los establecimientos fiscales deberán pasar a las municipalidades“

(La Segunda 25-11-1980)²⁵⁴

Las informaciones posteriores dan cuenta de hechos ya consumados. Lo que se planteó como algo "*optativo*" en el periódico oficial del gobierno, La Nación, 18 de Octubre de 1980 pag. 13a, pasó a ser, apenas un mes más tarde, un imperativo:

„182 escuelas de la VII Región (sur del país) traspasadas a las municipalidades“

(La Nación, Santaigo, 26-11- 1980)

„Municipio de Las Condes pidió el traspaso de 19 colegios“

(La Segunda, Santiago, 5 -12-1980)

„En la V Región 87 escuelas y liceos pasan a manos de las municipalidades“

(La Nación, Santiago, 16-12-1980)

La Nación, a finales de 1980, bajo el título "Beneficios del Traspaso Educacional", deja muy claramente establecida la inserción del maestro en la nueva estructura:

²⁵³ Estas subvenciones se refieren por cierto a colegios que serán municipalizados y que anteriormente estaban financiados por el Estado. La información se enmarca dentro de un usual estilo propagandístico de los gobernantes. A saber, el monto de estas subvenciones resulta ser muy inferior a los recursos destinados normalmente por el Estado en la estructura anterior a estas mismas escuelas.

²⁵⁴ Aunque sensacionalista, este titular expresa realmente lo que muchas personas en Chile temían: el término de la educación pública y del concepto del Estado Docente.

„Un aspecto interesante es que los profesores traspasados a las municipalidades no continúan en la Carrera Docente por ser ésta propia de los profesores fiscales, por lo tanto no hay grados y los ascensos se regirán por las disposiciones que dicten los municipios los que, para estos efectos, deberán establecer un reglamento interno que contemple condiciones objetivas; los docentes superiores seguirán como tales con las mismas atribuciones y obligaciones (...); los profesores, al ser traspasados a las municipalidades, pasan a tener la calidad de trabajadores del sector privado, por lo tanto dejan de pertenecer a la Escala Unica de Remuneraciones para el sector público.“²⁵⁵

En resumen varios de los beneficios obtenidos en el Estatuto Docente con cuya promulgación en 1978 el gobierno militar concitó cierta esperanza entre los maestros, quedaron sin efecto. Éstos al ser traspasados a la estructura municipal pasaron, como apunta el citado artículo, a la categoría de „trabajadores del sector privado“; en consecuencia debieron someterse a las reglas del mercado existente para esta área.

El Alcalde como máxima autoridad comunal podía bajo esta nueva modalidad hacer contrataciones, formular despidos, determinar salarios, horas de trabajo, activar el sistema de calificaciones a los docentes en las escuelas y en definitiva ser el protagonista principal de la problemática socio educacional y laboral en su comuna.

Una de las preguntas importantes que los docentes opositores al sistema se plantean se refiere al grado de competencia que tenía el Alcalde para confrontarse con el tema educacional. Se dijo que éste tendría que rodearse de asesores; pero aún así, ello no bastaba si la principal autoridad comunal no tenía un concepto medianamente claro de lo que debía ser la función pedagógica. Desde otra perspectiva, aseguran los opositores:

„(...)se acentúa el drama de las comunas pobres, aquéllas que tienen escasos recursos donde no se podrá invertir en mejoramiento de aulas, instalación de laboratorios, espacios deportivos o contratación de profesores.“²⁵⁶

En muchas de estas comunas no existe ni un comercio floreciente como tampoco zonas de desarrollo industrial, agrícola, ni mucho menos habitantes con altos ingresos, razón por la cual tienen que acogerse a una subvención compensatoria del Estado para poder articular el sistema educativo en sus comunas. Dicha subvención quedó determinada por la cantidad de alumnos matriculados y que asisten a clases. De este modo, partiendo de un criterio

255 La Nación 10.12.1980

256 Jorge Pavez, Entrevista, 1992

economicista, las municipalidades (y también los privados) contratan a profesores dispuestos a trabajar con el máximo de alumnos para poder acceder a mayores subvenciones, lo cual implica una baja notable en la calidad de la educación que se imparte.

Para el régimen militar la medida de municipalización es algo que va de la mano de la política económica. El Estado no se abstrae de sus responsabilidades pero son los privados los llamados a intervenir de manera mucho más activa en el proceso educativo.

Los nuevos cambios educacionales suponen, en la visión de las autoridades, ahorro para el Estado ; para los usuarios beneficio y para los privados negocio. Por cierto este último vocablo resulta tal vez inapropiado para referirse a un tema tan sensible como el educacional; sin embargo, en el Chile de 1980 y en la particular visión macroeconómica de los economistas del régimen, el negocio pasa a ser la palanca principal a través de la cual se mueve toda la estructura social de un país.

Como forma de ejemplificar esta trilogía, en la que el negocio educativo es descrito sin ningún tipo de inhibición, transcribo a continuación expresiones del ex ministro de educación del régimen militar señor Alfredo Prieto, concedida a la periodista Elizabeth Subercaseux de la revista Cosas.

Periodista: „Por qué razón podía interesarse un particular en dirigir un colegio pagado por el Estado? “

Ministro „Porque es un buen negocio “

Periodista:“ De qué manera es un buen negocio? “

Ministro: „Porque le pagamos por alumno; le permite a ese particular contratar profesores, mantener el establecimiento y dejarle encima utilidad. “

Periodista: „Qué sucede si un particular a cargo de un colegio trata de ahorrar el máximo de ese dinero en desmedro de la calidad de la educación? “

Ministro: „Eso puede suceder, pero si pasa, va a existir al lado, otro particular que ofrecerá una educación de mejor nivel y el padre simplemente sacará a su hijo del colegio y lo matriculará en el otro. “²⁵⁷

Claras son las respuestas del ministro. La simple solución de cambiar al niño de escuela no considera en absoluto los graves problemas sociopedagógicos que ello puede originar en la

257 Alfredo Prieto, Revista Cosas, N° 109, Santiago, 4.12.1980

personalidad del educando. Los problemas económicos de una familia repercutirían de igual forma en la estabilidad escolar del niño; o sea, una crisis económica familiar tendría como consecuencia inmediata el cambio de colegio: de uno bueno a otro mediano, o de uno mediano a otro malo según la dimensión de la crisis y el status de la familia. En este esquema tampoco me parece claro el nivel de concordancia que podría generarse por efectos de estilos educacionales y económicos comunes de parte de los sostenedores de colegios privados o subvencionados. Quién asegura que los aranceles no serán manipulados por sostenedores de establecimientos educacionales quienes en muchos casos, (como fue denunciado por la prensa) no se caracterizaron por la transparencia en las tramitaciones de las subvenciones conferidas por el Estado? ²⁵⁸

El gobierno por medio del ministro de educación insiste en formular, equivocadamente a mi juicio, criterios de homogeneidad entre la estructura privada y la municipalizada. Al respecto me permito hacer la siguiente observación: la educación privada a diferencia de la municipalizada mantiene en Chile tradición y en muchos casos ha estado regida por dos tipos de instituciones que gozan de gran prestigio en la población. Una es la Iglesia Católica y la otra son las asociaciones privadas pertenecientes a colonias de extranjeros residentes en Chile quienes, en muchas ocasiones, se han organizado en torno a la existencia de un establecimiento educativo los cuales en algunas ciudades importantes del país se encuentran en número nada reducido.

La municipalización, aun cuando en ciertos periodos de la historia de Chile existió, ha mantenido un carácter de estructura experimental la cual despierta muchas interrogantes por la gran cuota de poder que se traspasa a las municipalidades las que, además de ser en el periodo militar estructuras no democráticas, tampoco tienen la experiencia educativa que posee el Estado ni las instituciones privadas recientemente mencionadas.

Resumen

Con la municipalización se terminó con el Estatuto de la Carrera Docente que tenía apenas más de un año de vigencia y el cual había sido saludado por el sector oficialista como la materialización de una vieja aspiración del profesorado chileno.

Con las nuevas disposiciones legales puestas en práctica para dirigir el proceso municipalizador, los maestros terminaban por perder prácticamente todo. La propiedad del

²⁵⁸ El Mercurio, Santiago. 7.08.1985

cargo ya la habían perdido con el Estatuto de la Carrera Docente. Ahora ingresaban al sistema educacional municipalizado sin antigüedad y sus salarios serían el resultado de negociaciones individuales entre el maestro y las autoridades comunales. Para los efectos de despidos, éstos podían realizarse sin previo aviso y sin que el maestro pudiera apelar a instancias superiores del Ministerio de Educación o judiciales. Es cierto que los maestros se sienten afectados (Gaete), porque están pasando de un régimen de estabilidad laboral relativa, establecido en el DFL 338, a otro que da menos estabilidad, Decreto 2. 200.

Los docentes pasaron a conformar un sector laboral que dependían en última instancia del alcalde o del particular que hubiera contratado sus servicios. A este cúmulo de incertidumbres se agregaba otro de carácter profesional y era que, en razón a las nuevas disposiciones educacionales de 1979, las pedagogías habían sido marginadas de la universidad. Los maestros que habían querido ver en el traspaso de las Escuelas Normales a la universidad, un gesto de reconocimiento de parte de las autoridades para con la función docente, poca comprensión encontraron para dicha medida. No así el obstinado presidente del Colegio de Profesores E. Gariazzo quien justificó la medida diciendo que era correcta porque las pedagogías "se habían convertido en las parientes pobres de la universidad". Para muchos profesores en cambio fue una nueva afrenta, un nuevo desaire hacia los sectores a quienes el gobernante apenas unos meses antes rendía pleitesía, comprometiendo en Marzo de 1979 su:

„(...) voluntad de gobernante en la tarea de enaltecer al profesorado y darle el nivel de vida que le corresponde y merece.“²⁵⁹

En la estrategia de municipalización, el régimen militar despidió a los profesores de las escuelas públicas, cancelándoles un subsidio correspondiente a la antigüedad en el servicio y escalafón en que se encontraban. Igualmente influyó ante los alcaldes para que los maestros continuasen, en su mayoría, trabajando en los mismos establecimientos educacionales. En la segunda parte de este proceso, mediados de los años 80, el ministro de educación Sergio Gaete afirmaba convincente:

„Todos los profesores, sin excepción, que actualmente están en establecimientos fiscales van a ser contratados en los municipios (...) aunque exista una sobredotación.(..)Los alcaldes no se van a desprender de un elemento positivo colaborador y bueno.“²⁶⁰

259A. Pinochet, Directrices presidenciales sobre educación, Marzo, 1979

260Sergio Gaete, El Mercurio, Santiago, 8.6.1986

Muchos maestros se vieron de súbito con una gran cantidad de dinero a disposición, producto del pago por los años de servicio y se vieron también trabajando en la misma escuela. Al parecer no se percataban de lo que estaba sucediendo y era que: "las reglas del juego estaban cambiando" (Pavez) y ya nadie podía garantizar el puesto de trabajo de los maestros puesto que con la ley laboral Nr. 2. 200 podían ser despedidos en cualquier momento como efectivamente sucedió con miles de maestros especialmente a partir de 1986.

Al comienzo del proceso municipalizador el régimen militar habló del traspaso de escuelas como un proceso paulatino y optativo que tendría un carácter experimental. Sin embargo dicho proceso, como ha quedado demostrado, se fue convirtiendo en algo aceleradamente impuesto.

Por medio del Decreto con Fuerza de Ley Nr. 3. 063 de 1979 se faculta el traspaso de casi todas las escuelas pública a las municipalidades.

Tanto la opinión de las autoridades como de la prensa coincidieron en señalar esta medida como una avance importante de progreso y modernidad que ponía a Chile nuevamente en la vanguardia educacional del continente y que al mismo tiempo buscaba incorporar a todos los niños en edad escolar a lo beneficios del sistema.

Para los dirigentes de la oposición que actuaban bajo al alero de instituciones de iglesia y en la ilegalidad, fue muy difícil oponerse a la municipalización porque la propaganda del régimen junto con ser masiva, estaba saturada de conceptos clichés como: *modernidad, trabajo asegurado, desburocratización, aliciente económico para todo el magisterio* etc. En esas condiciones resultaba difícil, según Pavez, convencer a los maestros de las nefastas consecuencias que ello, a corto y mediano plazo acarrearía.

Otros dirigentes de la oposición expresan su desconfianza por cuanto la municipalización significaba „transferencia de poder“ (Valladares) y eso, era una tarea que solamente un régimen democrático podía cumplir. A juicio de J. Valladares lo que el gobierno hacía era entregar poder de decisión a los alcaldes designados lo que traía como consecuencia mayor control en las escuelas y mayor dependencia de los maestros de las autoridades escolares y comunales. En ese sentido se obligaba a los maestros a relacionarse con „pequeños dictadores“ (Schulak) que existían en las escuelas y en las municipalidades, los cuales arbitrariamente juzgaban a los profesores, imponían las reglas de contrato, definían sueldos y

determinaban quienes podían permanecer en sus puestos de trabajo y quienes, a su juicio, resultaban incompetentes en las funciones pedagógicas.

Tanto la consejera del Colegio de Profesores democratizado, Verónica Monsalve como el ex ministro de educación señor Enrique Froemmel, coinciden en que fue un error del gobierno no haber informado ni consultado a los maestros sobre la reforma que pretendía imponerse. Eso resultó, a la larga contraproducente, porque los profesores no se sintieron jamás integrados a ese proceso renovador.

Desde otro punto de vista, la discusión se sesgó políticamente dice la profesora Monsalve, porque cada profesor terminó aprobando o rechazando la municipalización en función a la opinión que cada uno tenía del gobierno. Resultó ser entonces que la lucha del magisterio por detener el proceso y obligar a discutir, quedó entrampada, de lo cual el régimen se sirvió para continuar sin tropiezos la reforma.

Para Verdugo era inconcebible una municipalización en la cual se violaban principios elementales como la elección democrática de los alcaldes y la participación de los maestros en las cuestiones inherentes a los nuevos criterios educacionales que se iban a poner en práctica.

La prensa, muestra una actitud condescendiente frente a los cambios educacionales. A través de sus artículos, noticias y comentarios busca, no solamente informar de los hechos que ocurren, sino que naturalmente ayuda a formar opinión sobre lo necesario que habría sido para el país, la implementación de la municipalización en marcha.

Sin embargo, la discutida reforma, obliga a otros agentes sociales e instituciones también a manifestarse. Así lo hace la conferencia episcopal de la Iglesia Católica. En un documento público de Julio de 1981 los obispos plantean serias críticas a la forma cómo se están llevando a cabo las reformas y especialmente critican la manera cómo a los maestros se les está despojando de todos sus derechos de participación, de organización y de estabilidad en su trabajo. A esta crítica se suma también el destacado jurista Francisco Cumplido (ministro de justicia en el gobierno del presidente Patricio Aylwin, (1989-93) quien levanta varias interrogantes referidas a los cambios educacionales que están ocurriendo en el país, especialmente en las universidades donde se está incorporando a estudiantes por medio de matriculas de gracia, otorgadas por autoridades del régimen y se están desmantelando gran parte de las áreas humanistas las cuales, según el académico, han quedado reducidas casi en un 48 % en todas las universidades del país. Acota Cumplido que el modelo

educacional en marcha, lejos de responder a las necesidades culturales del país, está adaptado a las estrategias de un modelo económico impuesto por el régimen militar, el cual se apoya en un sistema caracterizado por el intervencionismo y el control excesivo sobre las instituciones de la sociedad civil.

Entretanto la municipalización continúa su marcha en los años 1980-1981 y las autoridades muestran escasa comprensión para quienes desistan de ella. Se comprueba que son las municipalidades que disponen de mayores recursos las que manifiestan mayor conformidad con la medida.

En opinión de los dirigentes opositores del magisterio, las municipalidades carentes de recursos y apartadas de los grandes centros urbanos, serán las que tendrán mayores problemas. Ello porque con sus esmirrios presupuestos tendrán muchas dificultades para mantener infraestructura y pagar salarios al personal docente.

Cierto es que un Fondo Común Municipal debe centralizar los ingresos para educación provenientes del Ministerio de Educación y de los impuestos comunales, convirtiéndose en el soporte económico de las escuelas en esta nueva modalidad. Pero dicha práctica, aunque se cumpla, va generando otro tipo de dificultad y es que los cursos en las comunas pobres, por falta de fiscalización y control de las autoridades y padres respectivamente, sumado a la incompetencia de los alcaldes, comienzan a funcionar con una sobrecantidad de alumnos para acceder a mayor subvención. Igual cosa hacen muchos de los sostenedores privados quienes aspiran, en corto tiempo, obtener dividendos de rentabilidad sacrificando los salarios de los maestros y rebajando el nivel de la educación.

Un resultado nefasto es que las comunas pobres solamente están en condiciones de ofrecer una educación de mala calidad por cuanto sus cursos son numerosos, con maestros sobreexigidos y material didáctico precario.

En otro vértice del problema se descubre, a poco andar que, empresarios educacionales inescrupulosos falsifican listados de alumnos en las escuelas con el objeto de obtener mayores subvenciones. La situación adquiere en la prensa dimensiones de escándalo lo cual obliga al régimen a formar una comisión especial encargada de inspeccionar escuelas en las cuales se detectaron fraudes que ascendieron a cerca de un millón dólares.²⁶¹

El ex ministro de educación señor Alfredo Prieto, con menos aprensiones, afirma que el nuevo sistema educativo basado en el estímulo a la enseñanza privada es pese a todo "un

buen negocio para quienes quieran invertir en este ámbito" (Revista Cosas Nr.109, 4.02. 1980)

No obstante para los maestros significa inseguridad laboral, supeditación a autoridades comunales, desarticulación de asociaciones culturales y gremiales propias del magisterio y un recargo de sus funciones docentes al tener que permanecer más horas de trabajo en las escuelas y quedar sujetos a un control bastante riguroso de parte de los directores de ellas.

Al asumir la nueva directiva del Colegio de Profesores democratizado (1986) la municipalización ya prácticamente se había consumado. La actitud que este gremio asumió frente a los despidos, la persecución en las escuelas, la congelación de salarios y la dignificación del magisterio es una síntesis radiográfica del conflicto entre clase media, simbolizada en este caso por el sector docente y el régimen militar. A partir del primer trienio de los años 80, el divorcio entre ambos agentes se acentúa con mayor rigor. Los grupos de la clase media desengañados con el proyecto de reconstrucción nacional y desengañados también con un sistema económico de libre mercado que les despoja de muchas de sus conquistas sociales y laborales, se desplazan hacia movimientos de claro signo opositor entre los que sobresalen la Asamblea de la Civilidad, el Movimiento Democrático Popular o la Concertación por la Democracia.

Hacia el término del periodo militar prácticamente más del 90% de los colegios públicos habían sido transferidos a las municipalidades, sin embargo el mejoramiento de la educación en sus acápites de desburocratización, ampliación de la cobertura escolar, modernidad y educación personificada no lograban aún insertarse en el complejo sistema educativo chileno.

Un componente substancial en la evaluación del proceso privatizador y municipalizador fue el factor económico. La medida para evaluar los resultados de la municipalización, en mi opinión, fue diseñada por los economistas y no por los pedagogos. El presupuesto para educación efectivamente disminuyó, pero el alto precio político que los militares debieron pagar por esta reducción se expresó en gran medida en el plebiscito nacional de 1988 y en las posteriores derrotas electorales del pinochetismo.

Parte III

3 La controversia respecto del quiebre del Compromiso Histórico en educación y la valoración que actores relevantes hacen de él

3.1 Colegio de Profesores

Justificaciones para reestructurar todo el sistema educativo chileno no faltaron. Muchas de las reformas iniciadas por el gobierno castrense habían sido también aspiraciones de los gremios de educadores y de los gobiernos civiles. Podría afirmar que la necesidad de realizar transformaciones educacionales estaba apoyada por un amplio espectro de la población y con mayor razón por aquellos sectores vinculados directamente al proceso educativo: gremios de maestros, iglesia, Estado, organizaciones políticas, instituciones de investigación educacional etc.

Entre varios de estos agentes educativos he recabado información para representar con el máximo de objetividad la posición que cada uno de ellos tuvo respecto del Compromiso Histórico. He constatado que hubo una valoración de este Compromiso, que el tema educativo fue una preocupación de la población y que los gobiernos por más distintos que fueren, trataron de diseñar su política educacional en concordancia con los maestros y con todos aquellos que algo tenían que decir sobre educación. De estos sectores he elegido algunas opiniones las cuales tienen la doble particularidad de provenir de personeros e instituciones responsables y al mismo tiempo ser diferentes entre sí.

Para los maestros pertenecientes al SUTE el régimen militar provocó un desmantelamiento completo del sistema educacional, atropellando los derechos sociales, económicos, gremiales y profesionales que el magisterio había logrado a lo largo de su historia.

Dice la profesora Livia Videla, ex secretaria general del SUTE que :

"Las autoridades militares transgreden por primera vez en casi 50 años, los niveles mínimos de tolerancia que se habían dado entre gobiernos y gremios. En este contexto se prohíbe la existencia del sindicato, se confiscan sus bienes, se expulsa a cientos de sus dirigentes de las escuelas; otros son encarcelados, enviados al exilio, y en casos trágicos asesinados o hechos desaparecer."²⁶²

Los maestros, que a decir de las autoridades militares:

²⁶²Livia Videla, ex secretaria general del SUTE, Entrevista 1993

„(...) gozarán de especial preocupación y se pondrá atención a sus demandas económicas.“²⁶³

denuncian, en el año 1989, en una carta pública dirigida al presidente Patricio Aylwin, la situación por la cual había atravesado el magisterio chileno y el sistema nacional de educación bajo el régimen militar.

Señalan por intermedio del Colegio de Profesores (democratizado) que:

„Nunca en la historia de Chile se había creado un hecho de tal magnitud y de tan graves consecuencias para el magisterio y la educación nacional.“²⁶⁴

La actitud del régimen militar de expulsar de las escuelas a miles de maestros habría sido la muestra más evidente de su interés por dismantelar todo el aparato educativo existente para ponerlo al servicio de las políticas económicas libremercantilistas.²⁶⁵

Los docentes denuncian que, en vez de la „especial preocupación“ prometida a partir de 1973 en casi todos los discursos oficiales, los maestros:

„(...) han debido recorrer un largo camino de vejámenes e injusticias. Todas las conquistas del magisterio fueron barridas“²⁶⁶

Dice O. Verdugo que la „atención a las demandas económicas de los maestros“ como señalara A. Pinochet en el documento educacional de 1975, jamás se materializó, y que lo otorgado, no correspondió a las expectativas económicas que los docentes deseaban. Peor aún, antiguas conquistas como aumentos salariales cada dos, tres y cinco años fueron, en el marco de la política de ajustes económicos, eliminadas.

Igual situación ocurrió con el derecho a perfeccionamiento profesional que bajo el régimen militar se convirtió, según denuncian los maestros, en una actividad lucrativa a la cual tenían acceso solamente aquellos profesores que podían costearse por si mismo los cursos que el mercado educacional ofrecía. Afirma el documento que la política educacional del gobierno militar se orientó hacia un quiebre total con las tradiciones del sistema educativo que se había mantenido en Chile desde casi los inicios del presente siglo.

263 Ver, A. Pinochet, Principios educacionales del Gobierno de Chile, Ob. cit. pag. 7, 1975

264 Carta a Patricio Aylwin, nuevo presidente de Chile: Diagnóstico de un drama nacional, Colegio de Profesores, Directiva Nacional, Santiago, 1989

265 Las cifras exactas de los exonerados son de difícil reconocimiento. Por un lado el régimen militar habla de 10.000 maestros y el Colegio de Profesores de más de 15.000. Ambas cifras están también problematizadas por el hecho de que algunos maestros exonerados han sido reintegrados al servicio y otros, por malas condiciones de trabajo, lo han abandonado voluntariamente.

266 Carta a Patricio Aylwin, Ob. cit.

Los maestros interpretan la transferencia de la educación pública al sector privado como una imposición ideológica, funcional al sistema económico de libre mercado. La proliferación de establecimientos escolares privados y subvencionados que han existido en muchos casos al libre albedrío de sus sostenedores, lejos de favorecer, ha dañado enormemente todo el sistema educativo. La reducción de planes y programas de estudio para disminuir los costos de la oferta educativa se tradujo en una considerable pérdida en la calidad de la enseñanza. Ello despertó enconadas críticas de parte de los maestros quienes, en repetidas ocasiones tuvieron que recurrir a toda la capacidad movilizadora que les era posible para poder defender sus puestos de trabajo. De esta manera se fue menoscabando, según el documento, la dignidad misma de los maestros debido a que éstos tuvieron que entrar en una dinámica de defensa de sus derechos más elementales como el derecho al trabajo, despreocupando la cuestión netamente profesional o gremial.

Acerca de lo manifestado por los militares de que los cambios se harán:

„(...)en consulta amplia a todos los sectores relacionados con el fin (educacional) propuesto, de manera que sus intereses sean tomados en cuenta“²⁶⁷

denuncia el Colegio de Profesores democratizado que:

„Nunca los maestros tuvieron que ejercer sus derechos en condiciones de tanta humillación ya que, desprotegidos por una legislación laboral adversa, tuvieron que estar sometidos a los criterios dogmáticos y autoritarios de los directores de escuelas y dueños de establecimientos educacionales quienes fomentaron el caciquismo y la delación como prácticas que dañaron considerablemente la convivencia entre el profesorado“²⁶⁸

Igualmente señala el Colegio de Profesores democratizado que los preceptos enunciados para posibilitar la libertad de enseñanza, fueron considerablemente mal utilizados ya que en vez de la anunciada libertad, los maestros y la comunidad escolar toda, sufrieron el control excesivo de funcionarios gubernamentales quienes con criterio sectario trataron de impedir cualquier forma de disidencia en las aulas.

La posibilidad del ciudadano de elegir la escuela donde enviar a sus hijos quedó restringida, en opinión del Colegio de Profesores, a los vaivenes del mercado. Agregan que nunca como en este periodo, se manifiesta más claramente la diferencia entre escuelas para ricos y escuelas para pobres.

²⁶⁷Ver A. Pinochet, Principios educacionales del Gobierno militar, Ob. cit. pag. 7, 1975

²⁶⁸Carta a Patricio Aylwin, Ob. cit.

Los maestros denuncian con indignación cómo personas carentes de toda formación pedagógica, asumían la responsabilidad directiva de uno o varios establecimientos educacionales en los cuales se matriculaban cientos de niños y se contrataba a decenas de maestros. El ex ministro de educación del régimen militar Sr. Enrique Froemmel dice haber conocido casos extremos de liberalidad en que personas analfabetas eran dueñas de establecimientos educacionales.²⁶⁹

El concepto de democracia, definido por los militares como:

„(...) la preeminencia absoluta en la teoría y en el hecho de los valores de la persona humana, por sobre toda institución, organización, poder autoridad y también sobre el Estado y la sociedad misma, “²⁷⁰

en la práctica pasa a ser una declaración retórica, la cual confrontada a la realidad de los años posteriores discurre en franca demagogia. En efecto, denuncian los profesores, las municipalidades dirigidas todas, sin excepción, por alcaldes designados por el régimen militar, son quienes determinan forma de organización escolar, fijan criterios para la contratación de profesores, deciden sobre remuneraciones, no admiten asociaciones gremiales y en general dirigen las escuelas con estricto criterio autoritario, sin consulta a los maestros y menos a los padres de los educandos.

El alcalde, con exagerados poderes, pasa a convertirse en amo y señor de lo que ocurre en las escuelas de su comuna.

La llamada preeminencia absoluta en la teoría y en el hecho de los valores de la persona humana, dice el documento, es permutada en la práctica por la preeminencia de la municipalidad y de sus alcaldes. Ni los usuarios, ni los encargados de materializar el proceso educativo son considerados en el momento de abordar las decisiones.

Concluyen finalmente los profesores que el régimen militar violó en el sector educacional también los derechos humanos puesto que vulneró el derecho al trabajo, (establecido en la Constitución) de miles de docentes, comprometiendo con ello la integridad y seguridad familiar de los chilenos.

3.2 Gonzalo Vial Correa y Enrique Froemmel, ex-ministros de educación del régimen militar

²⁶⁹Enrique Froemmel, Entrevista 1992

²⁷⁰Principios educacionales del gobierno de Chile, Ob. cit. pag. 3

He considerado importante incluir en este resumen descriptivo sobre los planteamientos relacionados con el Compromiso Histórico a los profesores Gonzalo Vial y Enrique Froemmel por cuanto representan, desde el punto de vista intelectual, a sectores sociales que tuvieron una relación privilegiada con las estructuras educativas cupulares: bajo el régimen militar, ambos asumieron las más altas funciones en la dirección del Ministerio de Educación.

Sus reflexiones revisten interés porque en ellas hay un reconocimiento implícito a las políticas de compromiso que se gestaron en el transcurso del presente siglo entre los diferentes actores sociales que participaban en las decisiones del país.

Aún expresando una valoración positiva de lo que fue esa cultura del diálogo, el profesor Vial al ser requerido para apoyar el proyecto rupturista de los militares, opta por asumir funciones representativas de gran importancia, desdiciendo con ello el espíritu democrático que parecieran transmitir sus palabras.

En las concepciones de Enrique Froemmel se traslucen con claridad dos aspectos fundamentales interesantes de destacar. El primero, es la equivocada concepción del ministro de pensar que la educación en Chile no constituía un valor social y que por esa causa las transformaciones educacionales de los militares no habrían tenido la repercusión que el autor de la presente tesis pretende darle. El segundo, es la forma transparente cómo el ex ministro de educación analiza el rol de los gremios de maestros en sus relaciones con el gobierno; relaciones que según él estaban entorpecidas de antemano por la recíproca pérdida de la confianza.

a) Para Gonzalo Vial el conflicto educacional entre la Iglesia y el Estado que problematizó las relaciones de ambas instituciones en el siglo pasado se resolvió a favor de este último. El Estado es quien pasa a asumir el control mayoritario de la actividad educacional e incluso obliga a la iglesia a renunciar a su sistema de enseñanza para someterse a los principios rectores emanados del Ministerio de Educación; requisito según la ley, para poder participar de la repartición de los recursos fiscales. Sin embargo, dice el profesor Vial, no será el Estado quien realmente asuma plenamente las funciones educacionales sino que, por medio de una ley aprobada en 1879, es la elite perteneciente al laicismo de la educación quien arrebató al gobierno el control de la enseñanza. Esta institución laica se llamó Consejo de Instrucción Pública y sus integrantes provenían mayoritariamente del ámbito universitario.

La apreciación de Vial sobre este grupo es ambivalente. Dice que: „se puede decir mucho: bueno y malo“ pero que, a su juicio, queda claro que durante 50 años se mantuvo en Chile:

„(...) una línea educacional que demostró ser beneficiosa en una sociedad supuestamente pluralista.“²⁷¹

Destaca Gonzalo Vial los esfuerzos de los diferentes gobiernos por masificar la educación, lo que implica que, entre los años 1850 y 1920 la matrícula escolar hubiere aumentado de 30. 000 a 350. 000. Dicho salto fue solamente posible gracias a la gran inversión financiera de parte del Estado quien duplicó sus recursos para educación entre 1900 y 1910, y después nuevamente entre 1910 y 1920.

Digno de señalar como aporte positivo también, es la incorporación de la mujer a la educación secundaria (1901-10) lo que con posterioridad determinará un ascenso considerable femenino hacia las universidades. Este esfuerzo del Estado, a juicio del profesor Vial, tuvo también su correlato en la enseñanza privada religiosa y también en los estamentos laicos acomodados quienes se vieron obligados a aumentar su participación en el proceso educativo para no ser absorbidos por la educación pública.

Señala el ex ministro que la revolución educacional entre 1879 y 1927 es la que permite que Chile se convierta en un „país de clases medias“,²⁷² y que gracias a ello, las agudas diferencias sociales que tenían expresión en la población, no desembocaron en revoluciones, sino que se fueron enmarcando en un contexto evolutivo de reformas sociales. Citando al jesuita Fernando Vives, Gonzalo Vial afirma que el religioso consideraba que Chile era el país que mejores condiciones reunía, hacia los años 20, para impulsar una revolución social de corte comunista: pauperización de la población, dependencia económica del país, cesantía, robustas organizaciones gremiales y políticas etc. Sin embargo en vez de eso, dice Vial:

„(...) el país halló un equilibrio, político, centrista, mesocrático, cuyo eje era la enseñanza masiva de "tinte" laico.“²⁷³

Las críticas que Vial hace al sistema educacional son a mi juicio similares a las opiniones que los gremios de maestros han expresado en distintos periodos de la historia de Chile. Manifiesta que el sistema educacional chileno se caracterizó por ser improductivo, por

²⁷¹ Gonzalo Vial, Conferencia en la Fundación Adolfo Ibáñez, Valparaíso, s/f,

²⁷² Gonzalo Vial, Conferencia, Ob. cit. pag. 11

formar literatos, abogados, burócratas etc, pero no formaba agricultores, empresarios o comerciantes. La falsa concepción de imitar a los sistemas educativos europeos fue, a juicio de Vial, un error grave del cual pocos gobernantes chilenos pudieron escapar.

También critica, y en esto coincide también con los gremios, la mala remuneración de los maestros que repercutía en bajo rendimiento y desmotivación del docente para cumplir sus funciones escolares. Este hecho habría sido especialmente gravitante en el profesorado básico de lo cual, según Vial, se sirvieron los „*ácratas comunistas*“ para hacer de la enseñanza un arma revolucionaria.

El Estado docente dio origen según Vial a sectarismos, presiones partidistas y fomentó el arreglo burocrático entre colegas de la misma logia o igual partido. Esta crisis hace que a mediados del siglo XX el sistema educacional chileno se tambaleara. Por otra parte G. Vial critica el hecho de que importantes recursos económicos de la enseñanza básica y media fueran traspasados a la enseñanza superior, la cual, en su opinión, tiene un carácter elitista. En este contexto Vial coincide con los planteamientos del episcopado y también con los de I. Núñez (por señalar dos concepciones claramente distintas); solamente las consecuencias que se sacan son muy diferentes. Mientras el Episcopado e I. Núñez proponen medidas democratizadoras en la educación superior de manera que no solamente los „privilegiados de la fortuna tengan acceso a ella“ (Episcopado) el régimen militar apunta a la desmantelación del sistema con la populista idea del autofinanciamiento.

„La denominada educación universitaria gratuita que algunos defienden todavía demagógicamente significó que durante muchos años la formación de los profesionales fuera costeadada por el Estado, con los fondos de todos los chilenos. Esto se tradujo en que sectores de bajos ingresos cuyos hijos generalmente no ingresaban a las universidades, le costeaban su educación a los sectores de más altos ingresos.“²⁷⁴

Sobre la reforma educacional del presidente Frei en los años sesenta, dice Vial que sería injusto negar el esfuerzo y progreso que significó esta reforma y los ingentes recursos aplicados a ella. Se amplió según él la cobertura escolar, se mejoró la infraestructura de las escuelas en todo el país, se rescató a los niños de sus lugares de trabajo para enviarlos a estudiar y se intentó mejorar las condiciones laborales de los maestros. Respecto a lo que él llama *revolución universitaria* (1967) ésta habría abierto las puertas a amplios sectores sociales a un falso proceso democratizador que implicó, cierto es dice Vial, el término del

273 Gonzalo Vial, Conferencia, Ob. cit. pag. 12

carácter elitista de las universidades pero por otro lado implicó la „caída brutal en la calidad de la educación“ que se ofrecía en todos los niveles. La mágica fórmula de „*cantidad y calidad*“ no pudo expresarse en este proceso.²⁷⁵

A partir del gobierno de la Unidad Popular, dice el ex ministro Vial, se agrega un nuevo componente: el caos en la administración, organización, métodos, objetivos y contenidos de la educación. Pero eso no es todo. El mal mayor, durante la Unidad Popular fue que las aulas, gremios y universidades se convirtieron en centros de actividad política lo que hizo perder, en su opinión, la ética cristiana y cientista de la educación. A su juicio el desafío principal con el cual se han confrontado los educadores y gobernantes en Chile ha sido el *cómo hacer una educación masiva pero también de calidad*, ecuación que hasta la fecha no logra ser resuelta.

La tarea para los militares entonces, concluye Gonzalo Vial, no es reducir la educación sino mejorarla. Si se cumplen los planes habrá en Chile una sociedad muy distinta de la actual pero que conservará los valores básicos de la identidad chilena. Si se fracasa, sentencia, asomará la revolución social:

„(...) la misma que no vieron nuestros antepasados, porque hicieron a tiempo la callada pero eficaz revolución educacional.“²⁷⁶

b) El también ex ministro de educación del régimen militar Enrique Froemmel tiene otras concepciones.

La tesis del quiebre del Compromiso Histórico y las posteriores consecuencias en el comportamiento político de los sectores de la clase media es para él una tesis „*sofisticada*“. O sea, la presente tesis es sofisticada. Ello según Froemmel porque la educación nunca ha sido un valor importante en la sociedad chilena. A su juicio no tiene la importancia como en los Estados Unidos, por lo tanto el conflicto educacional bajo el régimen militar habría estado determinado más por la carga ideológica de los actores que se confrontaban en la arena política que por los cambios impulsados por el gobierno.

Uno de los errores importantes del régimen, dice Froemmel, fue la de haber posibilitado la creación de un organismo gremial como lo fue el Colegio de Profesores nominado,

274Declaración del Ministro del Interior sobre la nueva legislación universitaria en „Consejo de Rectores-1981“, pag 106; Citado por Guillermo Briones en „Las universidades chilenas en el modelo de economía neo-liberal 1973-81“, PIIIE, Santiago, 1981, pag. 12

275Gonzalo Vial, Conferencia, Ob. cit. pag. 17

276Gonzalo Vial, Conferencia, Ob. cit. pag. 19

absolutamente dependiente del gobierno e incapaz de oponerse y de hacer propuestas propias. Este gremio, que todo lo aceptaba, creó condiciones propicias para que se desarrollaran otros movimientos alternativos los cuales se opusieron, a juicio de la ex autoridad, a todas las iniciativas del gobierno. De esta manera el diálogo durante el periodo quedó entrampado por los factores de obediencia y obsecuencia lo cual no benefició a nadie.

En opinión de Froemmel, los gremios de maestros, teniendo razón en algunos de sus planteamientos y temores por los cambios que estaban ocurriendo, estuvieron sesgados por posiciones políticas y sus dirigentes carecieron de autonomía para establecer relaciones independientes con el gobierno. Pensar que la educación podría haber determinado conductas políticas en los sectores de la clase media y en el resto de la sociedad civil sería, para el ex ministro, equivocado. Ello porque para él, la educación en Chile no está dentro de las prioridades de la población. Es cierto, dice, que las políticas gobiernistas despertaron animosidades en el profesorado pero para el resto de la población, los cambios le fueron indiferentes.

El congelamiento en el diálogo entre profesores y autoridades se dio, según Froemmel, porque existía desconfianza recíproca. Una de las razones de esta desconfianza estaba en el hecho de que, el gobierno impuso una serie de medidas sin tomar el parecer a los maestros y éstos estaban enfrentándose al gobierno políticamente porque, para ellos, el gobierno carecía de legitimidad.

3.3 La Iglesia Católica Chilena

La disputa por el control de la educación entre el Estado y la iglesia, tal como dice el profesor Gonzalo Vial, „queda derimida a finales del siglo pasado a favor del Estado“²⁷⁷ pero no es éste quien asume el control educacional sino los grupos laicos vinculados a la masonería los que a su vez, participaban políticamente en los partidos Liberal y Radical.²⁷⁸ Los liberales, no sin reticencias, aceptaban algunos cambios educacionales y los radicales veían en la acción educativa el único mecanismo de movilidad social que les podía permitir fortalecerse en el Estado y desarrollar su influencia en la clase media.

²⁷⁷Gonzalo Vial, Conferencia, Ob. Cit. pag. 19

²⁷⁸Importante es hacer la observación que el profesor Vial como ministro de educación dedicó grandes esfuerzos en debilitar y perseguir a la masonería en la estructura educacional, hecho que le costó su salida como ministro por decisión personal de Augusto Pinochet.

Los investigadores C. Cox y J. Gysling en su obra „La formación del profesorado en Chile 1842-1987 “, afirman que en este mismo periodo, el conflicto Iglesia Estado, estuvo referido específicamente al problema del control de la educación media y universitaria y a las subvenciones, exámenes y certificaciones.

La disputa por las subvenciones se resolvió a favor de la Iglesia pero el Estado asumió la tuición sobre exámenes y certificaciones controlando de esta forma el currículo escolar. Así, dicen los autores aludidos, la subvención estatal aseguró la continuidad del sistema de enseñanza católica pero igual, en adelante, éste estuvo controlado legalmente por el Estado.

Es también en este periodo cuando se consolida el sistema nacional de enseñanza pública. Por un lado se origina una estructura educacional dirigida a la clase popular representada en la enseñanza primaria y Normal, y otra dirigida a la:

„(...)emergente clase media y a los grupos laicos o liberales de la clase dominante constituida por clases preparatorias de los liceos, los mismos liceos y la Universidad. “²⁷⁹

A juicio de algunos autores (R. Atria, L. Vitale, I. Núñez, H. Ramírez Necochea, etc.) la crisis económica de los años 20, la profunda inestabilidad gubernamental del país y el cambio de la Constitución política del Estado, son componentes consubstanciales al término del periodo oligárquico en Chile el cual coincide con el ascenso de los sectores de la clase media como nuevos actores sociales del país :

„La nueva Constitución, cualquiera que sea el rumbo de Chile en el futuro, ha de figurar como el más importante documento en el presente siglo de la historia del país. Señala el fin de un viejo régimen y el comienzo de una nueva era. Chile no ha de volver al sistema patriarcal que permitía a un pequeño grupo de poderosos terratenientes gobernar al país como si fuera una gran hacienda. El inquilino y el peón campesino han gustado el fruto de la libertad y no han de renunciar a él; una clase media desconocida en los días pretéritos y excluida del sistema de hacienda, afirma ahora su voluntad de dejar oír su voz en los negocios del Estado. “²⁸⁰

Luis Vitale afirma en su libro „Interpretación marxista de la historia de Chile“, que si bien es cierto en Chile se termina en la década de los años veinte con una estructura socioeconómica de carácter oligárquico e irrumpen nuevos actores como la clase media en las luchas sociales, siguen siendo la burguesía industrial y la oligarquía terrateniente, quienes mantienen la hegemonía política en el país. La primera, desquiciada por la crisis económica mundial estuvo dispuesta a vender sus bienes (mineros) al mejor postor, los

²⁷⁹Cox y Gaysiling, La formación del profesorado en Chile 1842-1987, Edit. CIDE, Santiago, 1988, pag. 51

²⁸⁰George Mc Bride, Chile su tierra y su gente, reedición de la obra aparecida en 1936, Santiago pp. 157-158

que, en su mayoría resultaron ser extranjeros. La segunda, tuvo que hacer concesiones políticas y aceptar cambios constitucionales que le significaron tener que cohabitar con otros estratos en la administración del Estado.

La iglesia debe entonces compartir funciones de enseñanza con un Estado que comienza a invertir grandes sumas de dinero para articular en el país un sistema educacional público. Pero lejos de competir con este Estado benefactor, la Iglesia Católica asume un rol de colaboración, renunciando a su esquema clásico de impartir enseñanza particular y se somete a los planes y programas de estudio del Estado. No obstante la asignatura „religión y moral“ se sigue impartiendo en los colegios pero fue el Estado quien debió confirmar o controlar los diplomas y certificaciones. Al clero le molesta ciertamente esta separación pero la acepta, según Marciano Barrios (La Iglesia en Chile) „en actitud de obediencia y en pro de la paz y la reconciliación“

„La iglesia no se separa del Estado y permanecerá pronta a servirlo; a atender el bien del pueblo y seguirá preocupada de atender las necesidades espirituales y religiosas de quienes lo soliciten especialmente en los momentos de angustia cuando todos suelen recurrir a ella en busca de auxilio.“²⁸¹

Largo y lato sería volver sobre conceptos históricos ya mencionados que nos apartan un tanto del tema. Baste sin embargo decir que la iglesia, como institución, ha hecho aportes significativos en la configuración del modelo educacional chileno. La separación de 1925 lejos de ahondar la ruptura como algunos temieron, abrió un camino diferente de entendimiento y colaboración.

Al momento de producirse la gran polémica bajo el régimen de Salvador Allende sobre la reforma educacional que se anunciaba, las escuelas o institutos patrocinados por la iglesia no se restaron a la discusión; por el contrario participaron de ella asumiendo posiciones que defendieron con argumentada consecuencia.

En esta confrontación la Universidad Católica por ejemplo fue uno de los bastiones importantes en la configuración de la estrategia que se opuso a la Escuela Nacional Unificada.

Producido el *impasse* entre partidarios y detractores de la reforma (1973), la Iglesia Católica, después de haber escuchado y meditado sobre los diferentes planteamientos de las

²⁸¹ Pastoral colectiva de los obispos de Chile sobre la separación de la iglesia y el Estado, 18-Septiembre-1925, Cit. en La Iglesia Chilena y los cambios sociopolíticos, María Huerta, Luis Pacheco, Santiago. 1988, pag. 161

partes en conflicto envió, por medio de su Cardenal Raúl Silva Henríquez una misiva al presidente Allende(ver Fußnote 78.) en la cual definía su pensamiento como institución. En ese documento la iglesia chilena recomendaba al gobierno de Allende desistir de su proyecto educacional. Creía que ello fomentaría más aún las odiosidades existentes entre los chilenos. Veía la implementación de la ENU como una señal peligrosa de intolerancia, de estatismo exagerado y apelaba al „buen criterio de los gobernantes“ para meditar la propuesta. De esta manera y en razón a la autoridad moral que le daba el haber sido críticos también del proyecto educacional de la Unidad Popular que los adherentes del régimen militar con tanto encono rechazaron en el gobierno anterior, el Episcopado chileno, por medio de una carta pastoral, fija su posición con respecto a las reestructuraciones implementadas por el régimen del general Pinochet.

El documento de la iglesia señala con mucha claridad que, en su opinión, el grado de libertad y participación que en el proceso de cambios se permite, está siendo regulado por la ideología del actual gobierno. Para reforzar esta apreciación la iglesia se apoya en una cita del documento denominado „Directiva presidencial sobre Educación“ del año 1979 en el cual el general Pinochet afirmaba que:

„Todo sistema educacional será guiado por el humanismo cristiano que se expresa en la declaración de principios de la Junta Militar de Gobierno y en los objetivos nacionales.“²⁸²

Los obispos lamentan que: „el respeto a la libertad religiosa, de pensamiento y técnico pedagógica“ sean considerados sólo en el: „estricto marco de la declaración de principios del gobierno de Chile y del objetivo nacional.“²⁸³

Como puede observarse en el trasfondo de estas opiniones, los obispos dan a entender que los planteamientos del régimen militar distan mucho de interpretar lo que ha sido la vocación tolerante de la educación y de los educadores chilenos.

Con preocupación los religiosos expresan su extrañeza por tanto cambio producido en educación y tan restringida consulta a las personas que directa e indirectamente tienen que ver con esta importante labor.

También el documento critica la prohibición hecha a los docentes para que estos se organicen en gremios y lo improcedente que resulta que se haya creado un Colegio de Profesores carente de toda estructura democrática para que represente los intereses del

²⁸²Directiva presidencial sobre educación nacional, cit.en Carta del Comité Permanente del Episcopado chileno, la reforma educacional, Santiago, Revista Mensaje N° 300 pag. 366, Julio 1981

magisterio, sin que sus asociados ni siquiera tengan la posibilidad de manifestar su opinión.

En esta crítica es posible entender la preocupación que la Iglesia Católica siente al constatar la pérdida del derecho a la libertad de asociación, consagrado en la Constitución política del Estado, hasta la fecha todavía vigente.

De igual forma expresa su desacuerdo por la entrega de escuelas técnico -profesionales a manos de instituciones privadas, como el traspaso de las escuelas públicas a la municipalidades lo que en opinión del Episcopado (y también del Colegio de Profesores democratizado) estaría demostrando el claro afán del gobierno militar por privatizar el sistema nacional de enseñanza.²⁸⁴

En cuanto a definiciones doctrinales el Episcopado puntualiza que la educación debe servir principalmente al hombre, debe tener un fin humanizador. Entiende que sirviendo al hombre sirve también a la sociedad. La educación, dicen, debe tender a la: „construcción de una sociedad justa y fraterna“, y el hombre :

„(...)debe ser considerado en sus diversas, potencialidades, en su individualidad, en su compromiso social y en su condición de Ser histórico.“²⁸⁵

El olvido u omisión de algunas de estas potencialidades es, a juicio de la iglesia: mutilar su identidad, distorsionar su realidad e imponerle un autorechazo a ser mejor.

La iglesia rechaza en el mencionado documento todas las visiones incompletas del hombre:

„(...) las deterministas que niegan la libertad y su esencial igualdad, los positivistas o cientistas que prescinden de su dimensión espiritual y los utilitaristas que reducen el sentido de la existencia al goce del bienestar, al afán de lucro o de poder“.²⁸⁶

Como es posible observar, los postulados educacionales de la iglesia chilena difieren bastante de los preceptos educativos del régimen militar. Este último le da a la educación un valor meramente existencial: „El acto educativo es un proceso que nace y muere con el hombre“ (Principios educacionales del gobierno de Chile) es una definición que no recoge el concepto de hombre como ser social, como parte de un conjunto de elementos que conforman una identidad, un *Ser histórico* como diría la iglesia o una cultura nacional.

283Directiva presidencial, cit. en Carta del Comité Permanente del Episcopado, Ob. cit. pag. 366

284Carta del Comité Permanente del Episcopado chileno, la reforma educacional, Santiago, Revista Mensaje N° 300 pag.368

285Carta del Comité Permanente del Episcopado chileno, la reforma., Ob.cit. pag. 368

286Carta del Comité Permanente del Episcopado chileno, la reforma., Ob. cit. pag. 368

En la reflexión sobre estos criterios pueden encontrarse, a mi parecer, las discrepancias de fondo entre la iglesia y el régimen militar. Cuáles son éstas ?. Un régimen que niega la libertad de opinión, que separa de sus funciones a individuos solamente por el hecho de tener ideas diferentes, que prohíbe sus gremios, que estimula la creación de micro-sistemas educacionales en base a criterios economicistas, violando el principio de la „esencial igualdad“, mal podría definirse como gobierno „inspirado en los valores del humanismo cristiano“. Así surgen clanes económicos en condiciones de comprar no sólo establecimientos educacionales básicos y secundarios sino incluso universidades.

Estas personas o clanes económicos venden educación como una forma de mercancía que eufemísticamente se le da el nombre de *valor de uso*. La educación que en periodos anteriores estuvo considerado como un derecho de los ciudadanos, debe ajustarse bajo el régimen militar, a los principios elementales de una sociedad de libre mercado en la cual la rentabilidad pasa a ser un factor determinante que define la cantidad y la calidad de la educación que se ofrece.

Sin duda en este esquema las familias de bajos y medianos ingresos no tienen ninguna chance de participar en esta oferta educativa en la cual el afán de lucro que denuncia la iglesia es otro de los componentes visibles en la estrategia de los economistas neoliberales que actúan como asesores del régimen. Es visible observar en la concepción educacional de los militares un distanciamiento notorio del planteamiento cristiano explicitado en el documento de los obispos, así como de la percepción laica-sindicalista resumida en los planteamientos del Colegio de Profesores democratizado.

El objetivo humanizante de la educación debe realizarse, según la posición de la iglesia, con el pleno respeto a los atributos inherentes a la persona humana, hecho que el Colegio de Profesores, en su carta al presidente de la república en 1989, denunciaba al señalar :

„(...)el menoscabo de la dignidad personal de los maestros al quedar expuestos a despidos arbitrarios.“²⁸⁷

En su propuesta sobre las líneas directrices que deben regir a la educación, el Episcopado, según pude apreciar, enfatiza conceptos que bien pueden interpretarse como cercanos a los consensos generales que llevaron a la consecución del Compromiso Histórico y que empezaron a gestarse a finales de los años 20, con los ideales reformistas de la AGP y que

287Carta pública del Colegio de Profesores al nuevo presidente de Chile Patricio Aylwin, Santiago, 1989

encuentra una continuidad en los gobiernos radicales de 1938 a 1952, en la reforma del presidente Frei y en los preceptos democratizadores de la Unidad Popular.

Punto importantes de esta coincidencia es que todos los actores anteriormente mencionados reivindican el derecho que cada individuo tiene de recibir una educación acorde a la cultura y tradiciones del país.

Precisan también los obispos que el hombre, por medio de la educación, debe ser humanizado siendo aquello sólo posible en el marco de un consenso nacional que estimule una forma educacional que acentúe valores como el conocimiento y la libertad. Por medio de estos valores, en opinión de la iglesia:

„(...) el hombre humaniza su mundo, produce cultura, transforma la sociedad y construye la historia.“²⁸⁸

El concepto de *educación privada* queda definido, no sobre la base de la desarticulación de la enseñanza pública, sino entendiendo que, si los padres han dado vida a sus niños, ellos deben tener también la posibilidad de elegir su escuela; pero agregan los religiosos que „debe ser el Estado quien distribuya las subvenciones públicas“ de manera que los padres puedan efectivamente tener el derecho a elegir.

La posición de restringir el carácter subsidiario que debe tener el Estado respecto de la educación no se trasluce en el pensamiento del Episcopado. Por el contrario dicen que :

“ El Estado debe promover varias formas de educación, tutelar los derechos y obligaciones de los padres y de quienes intervienen en la educación y colaborar con ellos; completar la obra educacional según el principio de educación subsidiaria.“²⁸⁹

y añaden que:

„La educación no puede ser discriminatoria ni clasista. Tenderá el Estado por medio de mecanismos apropiados a que no se produzcan diferencias irritantes entre sectores sociales, según sus diversas posibilidades de acceder a una buena educación. Sobre todo en la educación superior, ha de atenderse a las cualidades y capacidades del postulante, evitando que sólo los beneficiados de la fortuna tengan acceso a ella.“²⁹⁰

Finalmente el documento episcopal asume la defensa del rol protagónico que históricamente los maestros han tenido en la elaboración de políticas educacionales al afirmar que:

288Carta del Comité Permanente del Episcopado chileno: la reforma.,Ob. cit. pag. 369

289Carta del Comité Permanente del Episcopado chileno: la reforma.,Ob. cit. pag. 369

290Carta del Comité Permanente del Episcopado chileno:la reforma..., Ob.cit. pag. 369

„Ningún cambio, ni reforma educacional puede llevarse adelante sin la colaboración de los maestros. El respeto al quehacer docente, la seguridad laboral y una adecuada remuneración, son factores que la iglesia valora y entiende como esenciales de todo proceso educativo.“²⁹¹

3.4 El Partido Radical

Tal vez la incorporación de los planteamientos fundamentales, acerca del Compromiso Histórico, del Partido Radical chileno pudiera resultar un hecho reiterativo. Sin embargo dos razones me llevan a incorporarlo a esta escueta representación.

La primera de ellas es su histórica participación, a lo largo del siglo XX, en la elaboración de propuestas y reformas educacionales que fueron implementadas por los diferentes gobiernos democráticamente elegidos.

Lo segundo, como ya en alguna ocasión lo he mencionado, es que prácticamente en todas las organizaciones gremiales de los maestros, los radicales han tenido activa presencia en los consejos directivos gremiales, destacándose su rol como intermediarios en las negociaciones entre el profesorado y el Estado.

Sobre el Partido mismo puede decirse que nace en 1863 en las familias relativamente acomodadas del norte de Chile vinculadas a la actividad comercial y minera. Se desarrolla en Santiago hacia finales del siglo XIX, especialmente en los estratos sociales de la clase media. Muchos de sus integrantes están vinculados a las logias masónicas quienes a su vez tienen connotada influencia en la administración del aparato educacional. Al mismo tiempo el Partido Radical concita simpatía entre las asociaciones de profesionales liberales y de empleados públicos, pertenecientes a la burocracia estatal.

En lo político comprometen su perfil en la reforma constitucional que separa los intereses de la Iglesia y el Estado (1925) abogando por una educación laica, gratuita y libre.

Sus principios están inspirados en los ideales de la lucha independentista de Estados Unidos (1777) y en la revolución francesa (1789) desde donde recogen y hacen suyos los ideales de libertad, igualdad y fraternidad.²⁹²

²⁹¹ Carta del Comité Permanente del Episcopado chileno la reforma., Ob. cit. pag. 369

²⁹² También en el transcurso del presente siglo adhiere a la Internacional Social Demócrata y participa en gobiernos de coalición tanto con la Derecha como con la Izquierda.

Podría afirmar también que es una organización que ha tenido muchas dificultades de crecimiento y problemas de sobrevivencia. La peculiaridad de este Partido de desdoblarse en diferentes tendencias, le ha provocado en el presente siglo muchos adversarios tanto en el espectro político de derecha como en la izquierda chilena.

La década de los años setenta presenta a un radicalismo ya completamente desplazado de su rol conductor de los sectores de la clase media y muy disminuido por efectos de las purgas internas y la represión del régimen militar.

En la actualidad muchos de sus militantes se han integrado a otras orgánicas políticas que tienen mayor vigencia en el país. Entre sus simpatizantes y socios se encuentra maestros de escuelas, empleados públicos e intelectuales librepensadores

Por medio de la masonería²⁹³ se vincula el Partido Radical con sectores sociales de la clase alta y a través de gremios y asociaciones de empleados públicos encuentra su vinculación con los estamentos obreros. Confirma esta afirmación la gravitante presencia que los radicales han tenido en la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y en los gremios de maestros desde comienzos de siglo .

Las relaciones con la Iglesia Católica fueron en periodos conflictivas, especialmente porque ésta ve en el radicalismo a una organización política distanciada del espíritu religioso y muy mezclada con la masonería, con la cual la Iglesia llegó a tener enconadas disputas.

El Partido Radical no se plantea la destrucción del Estado sino la realización de reformas sociales por medio de procesos evolutivos para alcanzar una sociedad de justicia, libertad y modernidad.

Su aporte a la educación ha sido valorado y requerido por gobiernos de diferentes ideologías. Muchas de las leyes educacionales existentes en la actualidad fueron iniciativas surgidas de los círculos radicales y originariamente de la masonería. Una de ellas es la ley Nr 3.654 (1920) de enseñanza primaria obligatoria y gratuita.

El investigador Iván Núñez afirma que:

293 La primera logia masónica se funda en Chile en 1862 en Valparaíso. Durante el siglo XIX alcanzaron un crecimiento importante, especialmente en determinadas esferas sociales vinculadas a la educación y a las Fuerzas Armadas. En este periodo estuvieron muy cercanas al partido Liberal y hacia el cambio de siglo encontraron en el Partido Radical un brazo político a través del cual implementaron innumerables iniciativas en el país. En el presente siglo lograron gran influencia en los círculos políticos. 6 presidentes de la República fueron miembros de la masonería: Arturo Alessandri, Carlos Ibáñez, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla y Salvador Allende. Fuentes: a) Revista Análisis: La masonería en Chile, Documento especial, 8 -14. Agosto. 1988, Santiago, pp 40, 41, 42; b) Historia de la masonería chilena 1862-1962 Conferencia de Orlando Peña en el Aula Magna de la Universidad de Valparaíso, Imprenta Barros Arana, Valparaíso 26.5. 1962.

„El Partido Radical es el grupo más sólido y ampliamente asentado entre los profesores lo que podría explicarse por su influencia en el aparato del Estado"(...)Estaba integrado por diversos sectores de clase y grupos y era capaz de desdoblarse en varios niveles y aplicar estrategias a veces encontradas.“²⁹⁴

En la estrategia educativa de finales del siglo pasado y comienzos del actual que el profesor Vial señala como „revolución educacional“ me parece ver uno de los primeros gérmenes exitosos del radicalismo. Es importante destacar ésto porque coincide, como bien lo han dicho varios investigadores, (G. Vial, I. Núñez, P. Chaparro, L.Vitale, R. Atria) con la aparición de la clase media chilena como estamento social autónomo.

La sucesión de gobiernos radicales entre 1938-52 demostró que ellos, políticamente defendieron el carácter del Estado existente, respetaron la independencia de los tribunales de justicia, del sistema educacional, la propiedad privada y la economía de libre mercado.

Sin duda que esta actitud llevó también al Partido Radical a formas diversas de oportunismo ya que, en el afán de mantener continuidad y presencia en la administración del país buscaron alianzas con diferentes organizaciones políticas, incluso antagónicas entre ellas. Debido a ello se generaron una serie de conflictos en la administración del Estado lo cual vino aparejado de un crecido desprestigio del radicalismo en la población.

Los puntos de vista fundamentales que sostuvieron los radicales para afirmar que el régimen militar no solamente se apartaba de una tradición histórica de búsqueda de consensos en las grandes decisiones educacionales del país, sino que incluso más, rompía con el Estado Docente y el pluralismo académico se resumen en el documento „Diagnóstico de la realidad educacional“, emitido por la Dirección del Partido Radical en 1988.

En el documento los radicales plantean primeramente que algunas de las reformas materializadas por el régimen militar fueron pensadas „no para mejorar la educación sino para compatibilizar la estructura educativa a las políticas económicas del gobierno“.

Critican la gran proliferación de universidades privadas en desmedro de un sistema académico de excelencia y la desarticulación de la Universidad de Chile, que no solamente se ha visto privada de su autonomía administrativa, sino también se le redujo gran parte de su presupuesto, razón por la cual tuvo que disminuir ostensiblemente su oferta de estudio y su plantel académico.

294Iván Núñez, Las organizaciones del Magisterio y el Estado de compromiso, PIIE, Santiago, 1982, pag. 25

El documento critica al gobierno militar por el grave daño infringido al magisterio chileno al propiciar su desintegración y perseguir a sus dirigentes. Ello habría „contrastado bastante con la actitud inicial de los militares“ quienes habían ofrecido, dicen los radicales, hacer justicia a un sector de profesionales „largamente postergados por los gobiernos civiles“. En esta última apreciación se deja traslucir a mi parecer una cierta disposición conciliadora que asume el Partido Radical en los primeros años de gobierno, cuando la Junta Militar se muestra muy interesada en alcanzar una legitimidad en la ciudadanía que nadie mejor que los profesores podía facilitarle. Podría reconocerse también en esta escueta frase una de las estrategias ambiguas (Iván Núñez) que sectores del radicalismo tuvieron al momento de asumir los militares al poder.

La privatización y municipalización de la enseñanza, a juicio del Partido Radical, ha creado un clima de caos institucional que se expresa en la existencia de diferentes tipos de escuelas; algunas privadas, otras municipalizadas, otras subvencionadas de acuerdo a la cantidad de alumnos etc. A ello se agrega un sistema jurídico diferenciado para profesores que trabajan en diferentes niveles. Esta situación ha llevado a una complejización extrema del proceso educativo lo que se traduce en la existencia de microsistemas de enseñanza de muy variada y dudosa calidad.

Dicen los radicales en su carta que:

„El propósito del régimen militar se ha orientado, por una parte hacia la destrucción de las bases institucionales de la educación nacional, y por otra se ha dirigido hacia la atomización del principal agente educativo, el maestro, provocándole su indefección jurídica y arrancándole todas sus conquistas laborales. Con ello, el sistema educacional construido eficientemente hace un siglo ha sido virtualmente destruido.“²⁹⁵

Agregan los radicales que los militares han activado un proceso de comercialización educacional, que ha significado que la educación consagrada en la Constitución política como un derecho, se esté convirtiendo en un privilegio de los que tienen mejor situación económica. En este punto coinciden plenamente con el episcopado cuando éste expresa que:

„La educación no puede ser ni discriminatoria ni clasista.(...) Sobre todo en la educación superior ha de atenderse a las cualidades y capacidades del postulante evitando que sólo los beneficiados de la fortuna tengan acceso a ella.“²⁹⁶

295Partido Radical: Diagnóstico de la realidad educacional bajo el régimen militar, Santiago, documento fotocopiado, s/f

296Carta del Episcopado de Santiago, la refoma ... Ob. cit. Julio 1981 pag. 369

Concluyen los radicales reivindicando el Estado Docente que plantea que la educación debe ser atención preferente del Estado para lo cual a éste le corresponde cautelar y garantizar el derecho de los chilenos, cualquiera sea su condición social, política y económica a recibir:

„(...) una educación gratuita (...) libre, justa democrática, laica y solidaria.”²⁹⁷

3.5 El Proyecto Interdisciplinario de Investigaciones Educativas (PIIE)

El trabajo del PIIE que he seleccionado para representar el punto de vista que estos investigadores tienen sobre el Compromiso Histórico lo he tomado de una obra llamada "Las Transformaciones Educativas Bajo el Régimen Militar". En ella catorce investigadores de esta institución hacen un estudio acabado de las medidas educativas emprendidas por el régimen, aclarando en uno de sus capítulos importantes conceptos relacionados con el objeto del presente estudio.

Su director, Iván Núñez, al ser preguntado por el autor en 1988 sobre material informativo relacionado con las políticas educativas de la Junta Militar presidida por Augusto Pinochet, señaló esta investigación como, „lo más completo y acabado que hasta la fecha se ha escrito en Chile“.

Según la obra, Chile sufrió hacia finales de la década de los años 20 una seria contracción en el desarrollo normal del sistema educativo, lo cual fue producto de la recesión económica mundial.

En esta encrucijada los sectores empresariales no se encontraban en condiciones de asumir un rol directriz en el proceso de crecimiento industrial de la nación, razón por la cual es el Estado quien debe asumir esa función.

Logrado el consenso entre diferentes estamentos políticos lo que es definido por los investigadores como, „contrato social implícito“,²⁹⁸ el Estado chileno asume la difícil tarea de poner en movimiento una estrategia de desarrollo económico de largo alcance.

Significaba esto el término de las pugnas sociales?.

Pienso que no. La nueva coyuntura abría posibilidades de entendimiento y creaba un efecto amortiguador tanto en las tensiones como en las demandas de la población.

²⁹⁷Partido Radical: Diagnóstico de la realidad educacional, Ob. cit.

²⁹⁸ Ramón I. Núñez: Las transformaciones..., Ob.cit, pag. 42

La originalidad del consenso, a juicio de los investigadores habría estado en el establecimiento de nuevos mecanismos para regular y distensionar los grandes problemas nacionales²⁹⁹

Las reivindicaciones de la población hacia el Estado son planteadas a través de gremios y partidos, cumpliendo el Estado la doble función de juez y parte en los conflictos, especialmente en el ámbito de la salud, trabajo, educación y vivienda.

De esta manera, apuntan los investigadores, amplios estratos sociales se van incorporando a formas de participación lo que también implicó una disputa política por el control del aparato estatal.

En este esquema la educación juega un rol fundamental porque ella es valorada como mecanismo de movilidad social. La enseñanza gratuita obligatoria es una de las aspiraciones más sentidas de los trabajadores por la cual se movilizan ya desde finales del siglo XIX. En los años 30, la incorporación al sistema educativo formal de las personas entre 0-24 años alcanzaba a un 22, 7% y en 1973 esta cobertura había aumentado a un 54,5 %.³⁰⁰

En la enseñanza básica se había logrado en los años setenta, según los investigadores, que la totalidad de la población entre 6 y 14 años estuviese integrada al sistema nacional de educación.

No obstante, agregan, la masiva integración no estaba exenta de deficiencias. Una de las principales era el carácter jerarquizante del sistema educativo que rendía culto a los colegios privados y elitistas y a determinadas carreras liberales de prestigio social en las universidades.

Una franja social encontraba claros privilegios en el modelo vigente, mientras que una parte numerosa de la población, debía resignarse con el acceso a las aulas en los escalafones inferiores con posibilidades muy restringidas de ascenso social.

En este esquema educacional, a juicio de los investigadores, las carreras técnico-profesionales no gozaban de prestigio y quienes egresaban de esas escuelas tampoco gozaban de estímulos económicos adecuados en el mercado laboral.

299Parte de estos mecanismos son: a)expansion electoral de la población, b)nivel de acatamiento y respeto de la ciudadanía del sistema jurídico, c) pluralismo político(libertad de credos e ideas), d) promulgación de leyes sociales que beneficiaban a las grandes mayorías de la población: salud, trabajo, educación y vivienda. De ninguna manera el autor expresa que esas leyes se cumplieron cabalmente;no obstante sirvieron siempre como base en el inicio y transcurso de las negociaciones entre los gremios, partidos y asociaciones de la sociedad civil y los representantes del Estado.

Más catastrófica era la situación de los egresados del liceo que no ingresaban a las universidades. En la mayoría de los casos se incorporaban al mundo laboral como mano de obra barata no calificada. También se integraban a funciones de servicios menores y en muchos casos terminaban como cesantes vitalicios con oficios ocasionales lo que les marginaba de cualquier forma de participación real en la sociedad.

Los grupos pertenecientes a la clase media encontraban en aquél sistema educacional buenas posibilidades de desarrollo aun cuando la competencia con los estratos altos de la sociedad era desigual. Por medio de partidos representativos, primero el Radical y luego el Demócratacristiano, levantó proyectos que terminaron arrastrando a otros segmentos sociales tras una línea programática propia.³⁰¹

A juicio de los investigadores del PIIE, la ampliación de la cobertura escolar en la segunda mitad del siglo XX, desencadenó un activo proceso social el cual vino acompañado de múltiples exigencias transformadoras: igualdad de opciones para ascender en el escalafón social, democratización de las instituciones, mayor integración de las agrupaciones de la sociedad civil en las grandes decisiones nacionales, etc.

Al mismo tiempo corrientes política proliferan en la población con discursos de claro signo reformista. Expresión de este inconformismo, que a juicio de los investigadores encontraba eco en las propias instituciones del Estado, es la reforma educacional en la enseñanza básica y media de 1965, la reforma universitaria de 1967-68, y una marcada rivalidad por el control del Estado.

Sin embargo, afirman los investigadores del PIIE, el país, al tiempo que va democratizándose en cuanto a la participación social y política, va distanciándose del espíritu dialoguista que había actuado como garante en la estabilidad institucional. Los grupos de la clase media van perdiendo su tradicional rol como intermediarios al ser desplazados por propuestas de cambios mucho más estructurales, impulsadas por los nuevos actores que se incorporan a partir de los años sesenta en la arena política. Dichas propuestas comprometen incluso el carácter mismo del Estado chileno.

300 Núñez Prieto, Ramón Iván: Las transformaciones., Ob.cit, pag. 43

301 De 1938 a 1952, hay en Chile gobiernos presididos por radicales; de 1952 a 1958 gobierno de un militar elegido con participación de fracciones de Izquierda y un vasto movimiento feminista; de 1958 a 1964 gobierno Conservador con participación del Partido Radical, de 1964 a 1970 gobierno de la Democracia Cristiana, que reemplaza al Partido Radical en el liderazgo de la clase media; de 1970 a 1973, gobierno de Izquierda con participación del Partido Radical.

Como contrapartida se polariza, en el otro extremo, una tendencia conservadora dispuesta a renunciar a sus tradiciones democráticas para defender un status que a ellos les situaba en la cúspide de la pirámide social.

Las Fuerzas Armadas pasan a incorporarse como nuevos actores para detener la efervescencia social y restablecer el orden institucional puesto en peligro, según la derecha por el gobierno de Allende. Argumento fundamental para la intervención militar a la cual se une una parte del PDC y otros partidos de signo mesocrático, es el acuerdo de la Cámara de Diputados (22 de Agosto 1973) mediante el cual se deslegitima al gobierno del presidente Salvador Allende y se abren las compuertas para una sublevación militar que no tardará en actuar.

Parte IV

4 Elecciones en el Colegio de Profesores: triunfo de la oposición y movilización social

Iniciada la década de los años 80, el Estado chileno ha definido el perfil de su formación social. Dicho perfil en lo económico está determinado por un modo de producción capitalista basado en la libre empresa. En este sistema confluyen los intereses de una clase históricamente vinculada al poder (burguesía nacional), así como de empresas extranjeras que han invertido fuertes sumas de capitales especialmente en el ámbito industrial-minero, como también en la electrotécnica, insumos, química, textiles, agro, pesca etc. A este esquema se agrega una participación reducida de empresas estatales las cuales, por efectos del proceso privatizador de la economía, han ido perdiendo influencia en la configuración del perfil macroeconómico del país. Permanecen en manos del Estado con alguna influencia la Corporación de Fomento, la Corporación del Cobre, la Empresa del Petróleo, la Compañía de Ferrocarriles y otras empresas menores.

La industrialización es observada como fenómeno de progreso social. Ello supone, a juicio de los gobernantes, fuentes de trabajo, mayores recursos tanto para el Estado como para el sector privado y como consecuencia, un mejoramiento en las condiciones de vida de la población. Este hecho se daría a través de la materialización de la discutible teoría y vulgar expresión del *chorreo* que consiste en que la acumulación de riquezas y recursos en manos de los grupos económicos dirigentes privados, resolvería por sí misma las necesidades económicas del resto de la población. Las organizaciones gremiales se encuentran aún dispersas, el nivel de empobrecimiento empieza en los estratos de la clase media a expandirse con relativa celeridad. Las autoridades han mantenido la ofensiva y han aplicado, con similar rigidez, reformas administrativas, educacionales, económicas y políticas en el país. Los profesores opositores, pese a algunos intentos esporádicos y fraccionados por oponerse al régimen, no logran todavía articular un movimiento que pueda proyectarse como una real alternativa al corporativismo docente del Colegio de Profesores cooptado. Existe dispersión gremial y se vive un ambiente de frustración entre los educadores. Sus reivindicaciones económicas han quedado completamente subordinadas a los intereses

económicos del régimen y la mayoría de las escuelas están en manos del sector privado o de las municipalidades.

Esta situación de comienzo de los años 80 contrasta con la vida cultural e institucional que los maestros tuvieron hasta el advenimiento del régimen militar. En efecto, los gobiernos democráticos no solamente encontraron en los profesores a interlocutores dinámicos que colaboraban en las funciones educativas del país y de los propios gobiernos, sino que también, hasta 1973 la sociedad civil tuvo como representantes en diferentes instancias a profesores, quienes a menudo cumplían funciones de nexo entre el Estado y la sociedad civil. No obstante, hubo también fricciones entre docentes y gobiernos, algunas de las cuales culminaron en huelgas, demostraciones y enfrentamientos públicos.

Bajo el régimen militar muy pocas de las conquistas sociales y profesionales del magisterio se mantuvieron y la situación para los maestros fue muy distinta a la manera cómo lo habían planteado en el discurso las nuevas autoridades. En primer lugar, sólo el hecho de prohibir la existencia de sus gremios, rompía la tradición de tolerancia y respetabilidad entre el Estado, (en este caso representado por los militares) y los profesores representados en el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación.

En segundo lugar la imposición de un Colegio de Profesores con dirigentes nominados desde el Ministerio de Educación vulneraba las mejores tradiciones de entendimiento entre gobernantes y asociaciones gremiales de docentes.

Pero pese a estas irregularidades es posible deducir, a través de la lectura de las argumentaciones del gobierno, la intencionalidad de éste por tender puentes de contacto con el profesorado.

La pugna política de los años 70 tenía a los maestros divididos entre partidarios y adversarios del régimen de Salvador Allende. También existía una situación real de disconformidad por los bajos salarios y deficientes condiciones de trabajo que los profesores tenían: la cobertura escolar había crecido en este periodo a sus niveles máximos pero el intrincado problema de lograr la permanencia de los niños dentro del sistema aún estaba en vías de solución. Por otro lado la infraestructura en las escuelas se deterioraba y los planes reformistas heredados del periodo anterior quedaban trancos por falta de monitores y material didáctico. En resumen se percibía un cierto desorden educacional el cual era consecuencia de la crisis política y económica que se vivía en el país, a la que se sumaba la burocracia administrativa en educación y la utilización del campo educacional como esce-

nario para dirimir conflictos políticos. Estos tres componentes daban el marco referencial a los militares al momento de tomar el poder y asumir el control de la enseñanza.

4.1 Antecedentes generales

En el presente capítulo está planteado un tema de singular importancia referido al conflicto gremial que obligó al sector oficialista del Colegio de Profesores, designado por el gobierno, a realizar elecciones democráticas para elegir su cuerpo directivo.

En esta confrontación, más allá de los programas referidos a temas profesionales y de reivindicaciones económicas que cada una de las partes en disputa proponen a las bases, está en juego, principalmente el nivel de apoyo que las autoridades militares y el Colegio de Profesores tienen en el sector docente, después de 12 años de experiencia gubernamental.

En este periodo han sucedido a nivel nacional acontecimientos económicos y políticos que le han cambiado, tanto a la sociedad chilena como a las instituciones su perfil.

En lo económico se ha logrado consolidar en el país un sistema que algunos llaman *neoliberalismo económico*. Éste ha permitido a los sectores empresariales privados, dar un gran impulso en términos de crecimiento, modernidad y rentabilidad en sus operaciones comerciales.

Muchas empresas extranjeras, debido a las buenas ofertas tributarias en la década de los 80, realizan grandes inversiones lo que naturalmente genera el flujo de grandes capitales los que deben ser administrados por el Estado. Este hecho, pese a que provoca una reactivación de la economía en el país, es fuertemente criticado por los opositores quienes afirman que se habría hipotecado a grandes consorcios internacionales una gran parte de los recursos naturales del país, provocando un grave daño no solamente a la soberanía económica de Chile sino incluso a sus recursos ecológicos los cuales estarían seriamente dañados por la explotación indiscriminada de sus bosques y costas.

Como antecedente agregaría también que este crecimiento económico del sector privado estuvo favorecido de manera importante por las disposiciones legales que hicieron posible que créditos bancarios fueran en permanente ayuda de los inversionistas privados quienes, pese a defender con marcada insistencia la economía de libre mercado, igual recurrieron al Estado cuando los negocios no dieron los dividendos esperados; o bien, como ocurrió en

varios casos, cuando los costos de la quiebra de algunas empresas tuvieron que ser asumidos en el extranjero con capitales del Banco del Estado.³⁰²

Por otra parte la legislación laboral dejó a los gremios en situación muy desmejorada para negociar con los empresarios formas de reajuste salarial y derechos sociales. El derecho a huelga aunque existió, especialmente a partir de 1980, se vio limitado por la permanente amenaza de despido que sufrieron los trabajadores.

Una última observación que quisiera hacer al respecto es que, como resultado de esta política, se produjo realmente un crecimiento económico en Chile (y no desarrollo como algunos sectores pretendieron afirmar) del cual se beneficiaron grandes y medianos empresarios vinculados a la producción industrial y agrícola, así como aquéllos vinculados a la banca y al capital financiero. Los sectores sociales de la clase media y baja se vieron perjudicados no solamente por el congelamiento y reducción de sus salarios sino también por la pérdida de muchos de sus derechos sociales, sindicales y profesionales .

Hacia el término del periodo se hablaba en círculos oficiales e incluso a nivel internacional de un *milagro económico* que habría logrado mantener la inflación, incentivar la inversión y el ahorro interno, competir con productos de calidad en el mercado internacional, mantenerse al día en los pagos de la deuda externa, desarrollar el agro y fomentar la inversión de capitales extranjeros.

No obstante la otra cara de este crecimiento dejaba a cerca de un 40% de sus ciudadanos viviendo en una situación de pobreza y a una clase media bastante perjudicada en sus aspiraciones de mejoramiento económico y mantención de sus garantías sociales .

El espacio de tiempo que abarca el presente capítulo se sitúa principalmente en el primer lustro de los años ochenta. En este periodo el sector educacional está marcado por la reforma municipalizadora de la educación, hecho que desde el punto de vista de su implementación puede ser valorado como un triunfo del régimen, pero que en términos políticos abrió nuevos espacios confrontacionales en las ya entorpecidas relaciones entre sector docente y gobernantes.

³⁰²Al respecto se produjo una polémica de grandes dimensiones en el Parlamento chileno en 1995 cuando los empresarios que usufructuaron de dichos créditos estatales opusieron resistencia a su devolución. Los titulares de la prensa chilena durante el segundo trienio de 1995 dan cuenta detallada al respecto sobre el tema que eufemísticamente se llamó "renegociación de la deuda subordinada".

Hacia finales de este periodo se produce la democratización del Colegio de Profesores vía elecciones, lo cual abrirá las compuertas a un movimiento social de incalculables dimensiones. En esta elección, en la cual participan más de 90. 000 profesores, ya se vislumbra una imagen desmejorada del régimen militar. La esmirria votación obtenida por la lista que representaba la corriente oficialista en el gremio es interpretada por círculos opositores como un significativo rechazo no solamente a los cambios implementados en educación en doce años de gestión, sino también a la administración del régimen en las distintas esferas políticas y económicas del país.

El material de consulta utilizado en este importante capítulo tiene a los menos tres vertientes principales. Por una parte la prensa que dedicó un significativo espacio a la información educativa y gremial en el periodo preelectoral. Una segunda fuente la constituye la documentación escrita en forma de manifiestos, octavillas o programas difundidos por las tendencias políticas que se enfrentaban en el magisterio; y una tercera las entrevistas personales realizadas a quienes fueron actores principales de esta contienda: autoridades educacionales y dirigentes gremiales.

Personalidades como Sergio Gaete, Enrique Froemmel y Alfredo Prieto, todos ex ministros de educación durante el periodo de aplicación de las reformas, dan a conocer planteamientos en los cuales se resumen con nitidez directrices educacionales del régimen. De igual forma resultan ilustrativas las opiniones de los dirigentes gremiales O. Verdugo, P. Schulack, J. Pavez, V. Monsalve y J. Valladares. Todos desde una óptica diferente, analizan los cambios ocurridos en educación y el tratamiento que las autoridades dan a las demandas del sector docente organizado.

Debo hacer presente también que en este capítulo pretendo demostrar uno de los aspectos centrales de la tesis en estudio: la pérdida de apoyo del régimen militar en los sectores de la clase media tomando como sector representativo de éste, al profesorado chileno.

4.2 Antecedentes coyunturales

Las elecciones de 1985 ponen al descubierto no solamente el desgaste político³⁰³ que ha experimentado el régimen militar sino también su aislamiento. Este desgaste se expresa en la necesidad de improvisar políticas de defensa del sistema autoritario. Algunos como

³⁰³ Preciso aclarar que cuando me refiero al desgaste político, estoy hablando de la incapacidad del régimen para detener, a través de un discurso creíble, un proceso democratizador gestado en la sociedad civil que actuará contra sus postulados y su particular visión para entender la democracia.

Waldemar Cortés aferrados a argumentos como el *profesionalismo* y el *apoliticismo gremial*³⁰⁴ otros, como Eduardo Gariazzo y Silvia Peña, reactivando el fantasma del totalitarismo marxista; los menos, apelando a las necesidades de modernidad.

Los militares en sus 10 primeros años de gobierno (hasta 1983) pudieron imponerse a todas las formas de oposición que tanto los sindicatos como los partidos políticos en la clandestinidad, organizaciones sociales y la Iglesia Católica promovían.

Sin embargo el año 1983 marca un hito importante: las primeras manifestaciones organizadas de desobediencia civil comienzan a actuar públicamente y en forma coordinada. Éstas a través de sus movilizaciones desafían a un poder militar que se había caracterizado por establecer métodos de represión selectivo y por el amedrentamiento psicológico a la población a través de formas de torturas y asesinato de opositores lo que hoy, en la actualidad, es visto por algunos como „*violaciones de los derechos humanos*“ y por otros como, „*excesos*“ cometidos en el empeño de pacificar al país.

Este estilo de gobierno resultaban completamente ajeno al espíritu cívico de una sociedad que había sabido dilucidar sus grandes conflictos sobre la base de acuerdos y de compromisos políticos. Entendido de esta manera, la lucha electoral en el magisterio chileno pasaba a convertirse en un acontecimiento nacional que acaparó la atención de los actores políticos y sociales del país.

Para un sector del magisterio, representado por todas las fracciones políticas presentes en el SUTE, la directiva del Colegio de Profesores nominado no era más que una fracción minoritaria que había usurpado la representación del gremio y que moralmente estaba deslegitimada. Para otro sector, especialmente los autodenominados apolíticos y gremialistas como también los que militaban en los partidos de la derecha chilena, esta directiva constituía una instancia legítima de profesionalidad y apoliticismo la cual mediaba con relativa eficiencia entre los intereses profesionales y materiales del sector docente y las autoridades. Fuera de ello, para esta franja de maestros era muy importante la prescindencia partidaria del gremio lo cual le daba a sus dirigentes mayor autoridad para dialogar con las bases.

No está demás aclarar que, aun cuando algunos profesores quisieron ver una cierta independencia en los representantes del Colegio, éstos últimos nunca ocultaron su

³⁰⁴Waldemar Cortés es uno de los dirigentes gremiales significativos del gremialismo docente al cual el autor de este trabajo no pudo Entrevistar pero existe suficiente documentación en forma de declaraciones públicas y Entrevistas

adhesión al régimen. La proyección de una imagen de independencia o apoliticismo puede ser catalogada como un efecto meramente publicitario que se inscribe en el marco de una pretendida neutralidad que quiso asumir el régimen militar desde sus inicios. Ello le permitió atraer a muchas personas saturadas de los conflictos políticos que en el país, a la fecha de la intervención militar, se expresaban con agudeza.

El régimen del general Pinochet carecía de argumentos para negar las elecciones. La normalización del país, la pacificación social y la despolitización de las instituciones del Estado habían sido señaladas durante varios años por los círculos oficiales como progresos importantes logrados por el gobierno durante su gestión. A ello se agregaba la manera peyorativa como éste enfrentó a los opositores caracterizándoles de *grupúsculos*, *agitadores*, *políticos despechados* etc. Este lenguaje directo, y en ocasiones soez, le infundía a los gobernantes una cierta imagen de superioridad que a menudo era alabada por la prensa y confirmada con socarronería por parte de las altas autoridades : „aquí no se mueve señores ni la hoja de un árbol sin que yo no lo sepa“ fue una de las tantas frases del general Pinochet que demuestra un espíritu autoritario y poco conciliador del gobernante. De qué temer entonces ?

Para los opositores resultaba difícil polemizar públicamente con los autoridades pues éstas se empeñaron en reproducir en la sociedad chilena comportamientos propios de los cuarteles donde la crítica o las formas de disidencia no tienen espacio.

El dirigente de los profesores Osvaldo Verdugo, señaló al autor de este trabajo que en las escuelas reinaba en aquél tiempo la intolerancia puesto que muchos adherentes del régimen pensaban que „èsto era eterno“. Había en los gobernantes, decía Verdugo, conductas de intimidación, despidos, y un espíritu triunfalista al mantener a sus opositores minimizados, dispersos, marginados y con pocos recursos para emprender acciones que pudieran poner en peligro la estabilidad del sistema.

La oposición sin embargo, lejos de dejarse aminorar, agregaba el dirigente „crea y propone espacios confrontacionales“. De esta manera los maestros opositores acentuaron su estrategia en la estructura administrativa del gremio, vale decir, en el Colegio de Profesores y desafiaron al oficialismo, (a través de los canales de expresión que tenían a disposición) a dar prueba de su vocación democrática y medirse en elecciones generales, libres e informadas.

del dirigente en las cuales expresa el pensamiento que señalo.

Después de un primer intento fallido de la Directiva oficial por legitimar una elección sin garantías para todos los sectores (1984) y a la cual concurrió apenas un tercio del profesorado, el presidente del Colegio, don Eduardo Gariazzo, posiblemente en consulta con las autoridades gubernamentales de la época, decide llamar a elecciones libres(1985) e informadas.

Esta lucha electoral en el magisterio, como el lector podrá darse cuenta, fue seguida con gran atención por todos los sectores gremiales, políticos y gubernamentales del país, pues constituía la primera vez, después de 12 años, que un estamento tan numeroso y representativo de la sociedad, especialmente de la clase media, era llamado a expresarse en un acto eleccionario que, para bien o para mal, estaba sesgado políticamente por quienes eran partidarios o detractores del régimen.

De esta manera podría hablarse, guardando el sentido de las proporciones, de una especie de pre-plebiscito el cual arrojaría resultados que irán a determinar para el próximo tiempo las estrategias políticas de los actores en conflicto.

Dejo también establecido que este proceso eleccionario solamente fue posible concretizar por la gran movilización social que realizaron los profesores exigiendo la democratización de su gremio, como también por la gran oposición a las políticas educacionales expresadas por la Iglesia Católica. Ambos factores a mi parecer fueron determinantes en la decisión del régimen de aceptar el reto.

Estas elecciones no pueden ser en ningún caso interpretadas como el resultado de una reflexión unilateral del gobierno en el sentido de ir provocando la transición democrática de la sociedad civil a través de comicios de esta naturaleza. Por cierto las autoridades gubernamentales no tenían dentro de sus planes de modernización la realización de elecciones de este tipo; por el contrario cuando fueron interpelados por los plazos, a menudo se respondió con una frase cliché expresada por el general Pinochet:

„Este gobierno, señores, no tiene plazos sino metas.“³⁰⁵

Sin embargo las reiteradas protestas estudiantiles dificultan sobremanera el normal

305 Ver A. Pinochet, *Patria y Democracia*, resumen de citas, Santiago, 1983

funcionamiento de las universidades y el régimen se ve en la obligación de adelantar los feriados escolares para distensionar la situación. El periódico El Mercurio sugiere que son los grupos estudiantiles vinculados a los partidos políticos quienes impiden el normal desenvolvimiento académico. Al mismo tiempo el periódico cuestiona „la efectividad de la medida gubernamental pues implícitamente le da a la protesta estudiantil el nivel protagónico que desea“.³⁰⁶

Ante la crisis progresiva que va expresándose en todos los ámbitos de la educación, el Ministro Secretario General de Gobierno Sr. Francisco Cuadra denuncia:

„(...) una acción concertada de la Democracia Cristiana y el marxismo internacional contra el gobierno para lo cual se han valido de sectores sociales que con inocencia han creído en sus postulados: profesores, estudiantes, iglesia, intelectuales“.³⁰⁷

La acción concertada a la cual hace alusión el ministro está referida a dos ámbitos: el estudiantil y al docente. En el primero se evidencia una polarización que hizo posible que prácticamente todas las federaciones universitarias del país que a la fecha (1984-85) sumaban 18, a cuya lista también se agregaba la Universidad Católica de Santiago, estuvieran bajo el influjo político de los estudiantes pertenecientes a las corrientes de pensamiento cristiano y marxista.³⁰⁸ El segundo tiene que ver con el movimiento gremial

306El Mercurio,Santiago.7. 8.1985

307El Mercurio, Santiago. 29.11.1985

308Federaciones estudiantiles (y número de alumnos matriculados en las universidades) cuyas directivas elegidas en elección, mayoritariamente adherían a los postulados de la oposición.

Universidad de Tarapacá	4.204 estudiantes
Universidad Arturo Prat	1.943 "
Universidad de Antofagasta	3.645 "
Universidad del Norte	2.976 "
Universidad de Atacama	1.680 "
Universidad de La Serena	4.462 "
Universidad Católica de Valparaíso	6.976 "
Universidad de Valparaíso	2.919 "
Universidad de Playa Ancha	2.952 "
Univ.Técnica F.Santa María	4.856 "
Universidad de Chile	17.792 "
Universidad Católica	10.243 "
Universidad de Santiago	12.861 "
Universidad de Talca	4.034 "
Universidad de Concepción	10.648 "
Universidad del Bío Bío	3.092 "
Universidad de la Frontera	4.532 "
Universidad Austral	5.864 "

Total 105. 679 estudiantes

Fuente: J. Ale y Oliva: Estudio de la composición del movimiento estudiantil en el subsistema de universidades e institutos profesionales según agrupación política,1984-85, s/n, Santiago, 1985

de los profesores que se prepara para dar la gran batalla electoral por democratizar el Colegio y en el cual confluyen fuerzas similares a las del estudiantado.³⁰⁹

Sobre las declaraciones del ministro Cuadra me detengo un instante para hacer una escueta reflexión. Durante gran parte del periodo autoritario en Chile tanto los militares así como sus personeros civiles (Cuadra por ej.) recurren a menudo a determinados clichés lingüísticos para referirse a las acciones realizadas por sus detractores o bien para descalificarlos. Las expresiones: *acción concertada*, *malos chilenos*, *tontos útiles*, es posible encontrarlas en reiterados documentos oficiales. También es posible encontrar la perseverante tendencia de considerar a grupos gremiales, profesionales e incluso a la iglesia como estamentos menoscabado, incapaces de pensar y de protegerse por si mismo de la manipulación de las organizaciones políticas que pretenden, según criterio del oficialismo, instrumentalizarlos.³¹⁰

El ministro Secretario General de Gobierno, expresa que los políticos „se han valido de sectores que con inocencia han creído en sus postulados“ y a continuación nombra a los profesores, a la iglesia, a los estudiantes y a los intelectuales. Esta mezcla de paternalismo y demagogia despertó en las supuestas víctimas de los partidos, más que adhesión, rechazo a un discurso que se hacía ya demasiado repetitivo.

A juzgar por las expresiones de Cuadra, el gobierno parecía no querer percibir que la población chilena, especialmente los estratos populares y la clase media estaban no sólo descontentas sino a las puertas de una movilización social que tendrá en los próximos años catastróficas consecuencias para la estabilidad de un régimen que buscaba perpetuarse hasta 1998.

Otro ejemplo de esta intolerancia que intento describir se encuentra en declaraciones del ex Ministro de Educación de la época Sr. Sergio Gaete cuando propone como solución a la efervescencia socioeducacional que se vive, una serie de sanciones represivas tanto económicas como administrativas (léase despidos y suspensiones) contra estudiantes y maestros.³¹¹

309 Aclaro que los partidarios de la AGECH que correspondían al sector más radicalizado del sindicalismo docente presentaron lista propia, obteniendo una significativa votación del 15,69% sobre un universo electoral de más de 90.000 profesores.

310 Ver G. Munizaga: Ob. cit.

311 Ver al respecto Ricardo Hevia, Carlos Beca, los despidos de profesores y la crisis de la educación chilena, Revista Mensaje, N° 358, Mayo, Santiago, 1987, pp. 145 -149. Este trabajo no se refiere específicamente a los profesores despedidos por participar en movilizaciones sociales sino a los despidos por razones económicas. No obstante es necesario aclarar que los maestros que participaban en actividades gremiales u opositoras al régimen, estuvieron casi

Hacia finales de 1985 queda al descubierto, tal como había venido siendo denunciado por la oposición y sectores de la prensa, una gran cantidad de irregularidades en el cobro de subvenciones. La forma de financiamiento está siendo determinada por el número de alumnos inscritos y que asisten regularmente a clases. Para ello, el registro de asistencia pasa a ser un factor esencial. Matemáticamente visto, un curso de 20 alumnos genera la mitad de la subvención que otro de 40. La tentación de los cursos numerosos resulta atractiva para los nuevos administradores y dueños de escuelas. Esta situación conduce al absurdo de que, pese al normal crecimiento en las tasas de escolaridad, no se contratan nuevos profesores; peor aún, disminuyen personal para ahorrar gastos en sueldos. Así, en el modelo educacional puesto en práctica. Se comprueba en muchos casos que la cuota máxima de 45 alumnos establecida por las autoridades para el funcionamiento de un curso se convierte, en repetidas ocasiones, en requisito necesario para muchos dueños de escuelas. De esta manera Chile llega a la cifra récord de ser uno de los países de América Latina con mayor concentración de alumnos por nivel; mayor incluso que en los países del Caribe los cuales, calificados como países de pocos ingresos por la UNESCO, muestran estadísticas que señalan un promedio de 30 alumnos por curso³¹². Este hecho naturalmente tendrá como consecuencia una notable disminución en la calidad de la educación que se ofrece en los colegios municipalizados y privados dependientes de las subvenciones.

El aspecto socioeconómico de los maestros, lejos de mejorar, experimenta en este periodo serias contracciones al tener que trabajar por salarios establecidos por un empleador en negociación individual, con cursos numerosos y en escuelas en donde hasta la compra de material didáctico se incluye en la estrategia ahorrativa de los sostenedores.

La investigadora Carmen Luz Latorre dice que, en un encuesta realizada por el Ministerio de Educación se comprueba un gran desequilibrio en la remuneraciones de los docentes según las comunas y según el tipo de sostenedor. De 8. 477 unidades educativas investigadas se detectó que los particulares subvencionados gastan un 67,2% en remuneraciones vs. 95,4% de las corporaciones municipales. O sea los privados ahorran una diferencia cercana

siempre, según testimonio de casi todos los dirigentes del Colegio de Profesores Entrevistados, encabezando las listas de exonerados.

312 Bruce Fuller, Is Primary School Quality Eroding in the Third World?; Comparative Education Review, Vol, 30, N° 4, November 1986 cit. en Cuadernos de Educación N° 163, Santiago, Abril, 1987, pag. 47

al 30% en salarios en comparación con los municipales, lo cual naturalmente va en desmedro de los ingresos de los profesores que laboran en este sector.³¹³

Esta manera de entender la libertad de enseñanza implicó que personas o asociaciones ajenas al rubro educacional, invirtieran dinero en el arriendo de edificios, contrataran profesores y vendieran educación cual si se tratara de un producto más del mercado. El contrasentido de tan liberal medida fue que hubo adulteración de listados para recibir subvenciones. Varios dueños de escuelas tuvieron que reponer dineros mal habidos al Estado, otros tuvieron incluso que cerrar sus establecimientos.³¹⁴

El periodo en el cual se realizan las elecciones en el Colegio de Profesores está marcado por una situación de gran efervescencia social la cual alcanzaba un precedente en el paro nacional del 2 y 3 de Julio de 1983. A partir de esa fecha se inicia un proceso de reagrupamiento en la oposición de sectores políticos y gremiales quienes, pese a sus diferencias, coinciden en la necesidad del cambio en la administración del gobierno. Éste se encuentra, si pudiera así decirse, bajo al fuego cruzado de críticos insertos en su propia franja de adherentes, de la oposición política, así como de los gremios cuyas directivas, en su mayoría reconocen también filiación en los partidos de la oposición. Se suman a esta situación dos componentes externos que significaron para el régimen de Santiago una pesada carga. Uno fue el aislamiento político reflejado en las permanentes acusaciones de organismos internacionales por violación de los derechos humanos y civiles. Otro, la deteriorada imagen del régimen chileno en Norteamérica donde los Tribunales de Justicia mantuvieron abierto por más de 10 años la investigación del crimen (Septiembre 1976) cometido en Washington contra Orlando Letelier y Ronny Moffit en el cual estaban implicados oficiales chilenos, entre otros Manuel Contreras jefe de la policía secreta del régimen militar, hoy en la cárcel³¹⁵ y Armando Fernández Larios capitán del Ejército

313 Carmen Luz Latorre. Municipalización de la educación: Una mirada desde los administradores del sistema, PIIIE, Santiago, 1991 pag. 73-74

314 Mayor información al respecto se encuentra en los periódicos de los meses de Mayo y Junio de 1985; por ej. en La Nación, Santiago. 18.5.1985; 29.5.1985
La Segunda, Santiago. 29.05.1985
El Mercurio, Santiago. 12.06.1985

315 Como se supo las pistas condujeron la investigación hasta Chile, específicamente hasta la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) desde donde salió la orden para eliminar al ex ministro de relaciones exteriores y ex embajador de Chile en Estados Unidos, Orlando Letelier. En el atentado, que también causó la muerte de la ciudadana norteamericana y secretaria de Letelier, Ronny Moffit, habían participado agentes chilenos y el ciudadano norteamericano Michael Townley (hoy en la cárcel). Su inspirador el Coronel Manuel Contreras era a la sazón Director de la DINA. Detallada información se encuentra en el libro escrito por el fiscal norteamericano del proceso Eugene M. Propper (quien tuvo casi tres años la investigación a su cargo) y Taylor Branch „Labyrinth“, (New York 1982) en español „Laberinto“, Traducción Camilo Marks, Santiago, 1984

quien años más tarde se entregó a la justicia norteamericana por temor a sufrir represalias en Chile de quienes habían sido sus superiores e instigadores del bullado caso.

La Asociación Gremial de Educadores de Chile, AGECH, es recibida en Enero de 1985 por el nuevo ministro de educación Horacio Aránguiz a quien los profesores le hacen entrega de un conciso petitorio cuyos puntos centrales se dejan resumir en: a) un reajuste salarial del magisterio, b) el término a los despidos y c) el rechazo a la municipalización de la educación.

El diálogo, es abruptamente quebrado por el asesinato el 30 de Marzo del secretario general de este gremio, profesor Manuel Guerrero, junto a los opositores Roberto Parada abogado de la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica chilena y Santiago Nattino, pintor. Este hecho provoca gran consternación en el país, no solamente por la muerte de estos tres opositores, sino por las muestras de tormento a que fueron sometidos y la forma brutal de su asesinato: degüello con arma blanca.

Pese a los reiterados intentos del gobierno por desligarse de tan deleznable hecho de sangre y ordenar las investigaciones pertinentes, varias de las pruebas concluyen en que, si bien la decisión de asesinar a estos tres opositores no provino de círculos oficiales del gobierno, sus autores se encuentran en los mandos intermedios de instituciones armadas los que, como en el transcurso de la investigación pudo comprobarse, habían comenzado a actuar al margen de decisiones oficiales y en ocasiones cegados por infaustas purgas de poder entre aparatos de seguridad de una u otra rama de las Fuerzas Armadas.

Este crimen, aclarado en parte varios años después, trajo como consecuencia la renuncia del general César Mendoza, Director de Carabineros y miembro de la Junta Militar de Gobierno. La confesión de algunos uniformados había llevado la pista hasta los servicios de seguridad de carabineros. No queda claro en la investigación realizada hasta la fecha si de esta institución surgió la orden de ejecución de los tres opositores. Pero lo que sí logra establecerse es la participación de policías en el crimen y el conocimiento previo de autoridades superiores del hecho, quienes guardaron silencio en el transcurso de la investigación.

El 2 de Abril de 1985 La AGECH decretaba duelo nacional en el magisterio. Meses después, el entorpecido diálogo, era retomado por el nuevo ministro de educación Sergio Gaete a quien se le presentaron nuevamente las inquietudes y necesidades del magisterio.

Actor político relevante en este proceso es el Partido Demócratacristiano quien busca mediar una solución con los grupos políticos de la izquierda y ciertos sectores de la derecha tradicional, especialmente aquellos ya desencantados con el perfil que había ido adquiriendo el gobierno militar.

El lema de su propuesta se plasma en una consigna que tal como su nombre lo dice *Acuerdo Nacional* busca activar espacios de convergencia que permitan desestabilizar al régimen de manera que éste se vea obligado a negociar y llame, en un plazo determinado, a elecciones libres.

Los demócratacristianos descartan toda forma de resistencia armada que pueda llevar al país hacia una espiral de violencia de dimensiones incalculables. En este sentido entran en conflicto con sus aliados del Movimiento Democrático Popular los cuales, pese a distanciarse de la lucha armada, mantienen una actitud tolerante hacia los grupos más radicalizados de la izquierda entre los que sobresalen el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el disminuido Movimiento de Izquierda Revolucionaria(MIR) quienes subscriben la tesis de la *rebelión popular*.

El gobierno por su parte ha impuesto durante casi todo el año 1985 el Estado de Sitio como respuesta a una sucesión de hechos violentos, demostraciones callejeras, paros estudiantiles, huelgas laborales y atentados realizados por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que a la fecha se encuentra actuando con relativo éxito operacional.³¹⁶

De los grupos políticos significativos es el Partido Comunista quien subscribe esta forma de rebelión pero al mismo tiempo continúa participando en las acciones de movilización social impulsadas por el conjunto de la oposición.

La ambivalencia del PC al apoyar una táctica de sublevación y otra de negociación va a significarle un aislamiento de parte del conglomerado opositor liderizado por la Democracia Cristiana que reconoce en el *Acuerdo Nacional*, la única vía posible de confrontación con la Dictadura.

La permanente negativa de la Democracia Cristiana a integrar un frente opositor con el PC y la ambigüedad de éste para clarificar su posición frente a la violencia devendrá en una

³¹⁶El FPMR cuenta con apoyo logístico del extranjero y mantienen cuadros militares que actúan de preferencia en los grandes centros urbanos del país desarrollando variadas formas de resistencia y propaganda armada. Sus acciones se dirigen contra instalaciones estatales, bancos, radios, reductos militares y a través de sus voceros llaman al pueblo a integrarse a un movimiento de "rebelión popular" que debería poner fin al régimen.

crisis estructural de los comunistas chilenos. Los objetivos tácticos discrepantes en un partido autodefinido como monolítico, implicará que una gran parte de sus militantes, especialmente los provenientes de la vertiente intelectual, se dispersen en proyectos políticos diferentes.³¹⁷

Frente a la intensificación de las huelgas estudiantiles las autoridades militares deciden adelantar los feriados escolares, mostrando de esta manera una actitud de debilidad la cual es fuertemente criticada tanto por opositores como por sus propios partidarios.³¹⁸

Al convocar el movimiento estudiantil de la Universidad Católica de Santiago a elecciones para elegir su cuerpo directivo los resultados son para el régimen, desalentadores. La lista gremialista, después de muchos años de dominio en esta casa de estudios superiores, es derrotada por una coalición de estudiantes opositores. Algo similar sucede en la Universidad de Chile donde incluso los estudiantes adscritos a las corrientes de pensamiento marxista derrotan en las elecciones estudiantiles al oficialismo e incluso a la Democracia Cristiana la que, en su afán como ya anteriormente lo he mencionado de distanciarse de las corrientes opositoras más radicalizadas, había presentado lista separada. La actitud del gobierno, especialmente de su Ministro de Educación Sergio Gaete es confrontacional. En escuetas declaraciones públicas descalifica a las directivas de las federaciones estudiantiles de las dos principales universidades del país afirmando que las opiniones de sus dirigentes:

„(...) son impertinentes y carecen de legitimidad.“³¹⁹

Por su parte la AGECH dice que, el proceso de descentralización está dando prioridad al control político de las escuelas, soslayando la solución de los problemas burocráticos reales existentes en las comunidades escolares. Igualmente la AGECH denuncia la grave corrupción financiera que se expresa, según este gremio, en la adulteración de listados de matrículas y de asistencia en las escuelas para aumentar las subvenciones estatales.³²⁰

317 Algunos militantes del PC se incorporaron en el transcurso y final de la crisis al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Otros, se incorporan al Partido Socialista y al Partido Por la Democracia (PPD). Hacia finales de los años ochenta algunos militantes forman el Partido Democrático de Izquierda (PDI). Una cantidad considerable de militantes no se incorporó a ninguna de las orgánicas señaladas prefiriendo mantenerse al margen de la lucha política contingente. La bancarrota del PC queda demostrada en las elecciones del 1993 en las que el mencionado Partido, unido a diversas fracciones escindidas de los partidos de izquierda apenas se acerca al 5% del electorado, cifra que por cierto contrasta con el porcentaje electoral acumulado entre los años 1967-1971-1973 en que los comunistas obtuvieron en Chile el 14, 8%, 16,9% y 16,2% respectivamente de las preferencias.

Fuente: Estadísticas electorales, Dirección del Registro Electoral

318 El Mercurio, Santiago, 7.9.1985

319 La Tercera, Santiago, 8.8.1985

320 El Mercurio, Santiago, 29.10. 1985

En lo político, tanto los sectores integrados al denominado *Acuerdo Nacional*, liderizado por la Democracia Cristiana, como el *Movimiento Democrático Popular (MDP)*, donde se nucleaban los partidos que habían apoyado al régimen de S. Allende, deciden establecer un compromiso de movilización social que culmina con una gigantesca demostración en 1985 a la cual, según cálculos estimativos de la prensa y de asistentes, habrían asistido más de un millón de personas. Ese hecho, único desde que los militares habían asumido el poder, puede ser considerado también como un hito que rompe con el temor al régimen y con el prejuicio de que la anarquía y el desorden corrían siempre por cuenta de los opositores.

Durante 1985 los obreros portuarios y los trabajadores de la locomoción colectiva realizan paros de protesta contra la política laboral del régimen y en Noviembre, durante los días 4 y 5 se registra un paro nacional llamado por diversa organizaciones gremiales y estudiantiles. Dicho movimiento aunque no tuvo el éxito esperado por sus organizadores, abría una nueva brecha en la confrontación gobernantes-sociedad civil.

La Iglesia Católica en periodos endurece su posición contra el gobierno aun cuando trata siempre de mantener el diálogo lo que en ocasiones pareciera resultarle muy difícil. Ello en virtud al encono con que personeros del oficialismo y adherentes del régimen atacan resoluciones y documentos pastorales, especialmente los provenientes de la Vicaría de la Solidaridad, institución que, como se sabe, jugó un papel preponderante en la defensa de los derechos humanos. El asesinato del abogado de esta Vicaría Roberto Parada, puso en tensión nuevamente las complejas relaciones entre iglesia y gobierno.

4.3 El revés electoral del corporativismo

La elección en el Colegio de Profesores se realiza en un marco social problematizado por el claro desencuentro entre gobernantes, instituciones de la sociedad civil, iglesia y gobernados.

En círculos opositores se habla de una cierto estado de descomposición moral que está afectando a la sociedad en su conjunto. Fundamentan su apreciación en la carencia de organismos fiscalizadores de los bienes públicos, un excesivo control de los medios de comunicación y formas variadas de amedrentamiento en los puestos de trabajo. Como consecuencia de la política económica de libre mercado, añaden los críticos³²¹ está en marcha una subcultura del dinero y de ciertas formas de lujo y de poder que en Chile, aun habiendo existido en el pasado, no se habían proyectado como valores morales ni como símbolos de progreso del *Chile way of life*.

La directiva oficialista del Colegio de Profesores presionada por un creciente descontento en las bases, había decidido en 1984 realizar elecciones para renovar el directorio a nivel nacional. Con este efecto se llamó a los maestros a las urnas; sin embargo, debido a un estilo sectario y excluyente de la mesa directiva que no ofrecía garantías a todos los sectores, la disidencia hizo un llamado a abstenerse al no existir garantías democráticas de participación para todos. Pese a ello la directiva realizó las elecciones demostrando una esmirria capacidad de convocatoria ya que más del 67% de los profesores no se presentaron a votar.³²²

Por su parte, la oposición al directorio, mantiene dos criterios diferentes para enfrentar las tareas gremiales.

La Democracia Cristiana y el Partido Radical son de la opinión de rescatar el Colegio para la mayoría de los profesores. Ambas agrupaciones políticas desean convertir esta institución en una instancia realmente representativa y democrática. Ven en el Colegio de Profesores a un gremio al cual:

„(...) hay que liberarlo de la situación de cautiverio en que está.“³²³

321 Uno de los principales fue Patricio Aylwin ex Presidente de Chile (1989-93) quien pese a haber mantenido posiciones políticas bastante divergentes con el régimen de Salvador Allende y a quien muchos de los seguidores del depuesto gobierno señalan como uno de los inspiradores intelectuales del golpe de Estado en 1973, manifestó en repetidas ocasiones su distanciamiento del modelo económico neoliberal señalando que aunque económicamente puede ser una solución para Chile dicho modelo es de un nivel de crueldad que no se compadece con los valores del cristianismo y que a él le cuesta mucho aceptar.

322 En clara actitud de reconocimiento a su traspás electoral el presidente del Colegio Eduardo Gariazzo acotó lacónicamente: "no estamos ni tristes ni contentos respetamos la decisión" (Últimas Noticias, Santiago. 2-06-1984)

323 Julio Valladares, Revista Hoy, semana del 9 al 15. Santiago, 05.1984

Por otro lado los sectores agrupados en la izquierda sindical, (AGECH), no pretenden hacer revivir un organismo el cual, según ellos, solamente ha sido instrumento cómplice del gobierno que no ha hecho ningún esfuerzo por defender los intereses de los maestros ni por desarrollar la educación chilena. Su opción es mantener la AGECH u otra organización que se enmarque dentro de lo que ha sido el sindicalismo histórico; ésta debe surgir de la unidad y cultura democrática de todos los estamentos del gremio.³²⁴

Como respuesta a la frustrada elección legitimadora, agrupaciones de profesores de diferentes lugares, pidieron públicamente la renuncia del directorio del Colegio de Profesores; éste respondió proponiendo nuevas elecciones generales libres e informadas ofreciendo esta vez garantías a todos los sectores que tuvieran expresión en el magisterio e invitó a los grupos más representativos a participar en la organización de ellas. La cuenta regresiva para el directorio gobiernista comenzaba.

Luego de innumerables problemas orgánicos y de inscripción, a los cuales se agrega la tensa situación creada con el asesinato del Secretario General de AGECH profesor Manuel Guerrero, se realizan, en Diciembre de 1985 las elecciones.

Observadores políticos, instituciones, prensa y naturalmente el gobierno, siguen con detenida atención este hecho. En los próximos dos años (1988), según la Constitución de 1980, el pueblo chileno sería llamado a elecciones presidenciales, las cuales podrían ser postergadas en caso que un plebiscito previo posibilitara la permanencia del general Pinochet en el gobierno hasta 1998. Si el pueblo decía NO, el gobierno debía llamar a elecciones tal como lo establecía la Constitución de 1980. La elección de los maestros pasó a constituirse de esta manera en una especie de barómetro político de la realidad nacional. En este marco, la elección quedó polarizada en términos de apoyo o rechazo a una u otra lista en función de la actitud que el maestro tenía con respecto al gobierno.

El programa que cada lista propuso a las bases quedó reducido a un segundo plano. Unos levantaron la consigna de la *dignificación del gremio* y otros de la *democratización*. Algunos titulares de la prensa en los días previos a la elección sirven como radiografía del acontecimiento que describo:

„Lista D planteó su plan“

Ultimas Noticias 13/12/1985

324AGECH, Revista Hoy, semana del 9 - 15.5, Santiago, 1984

Osvaldo Verdugo: „Vamos a democratizar el Colegio de Profesores“

Ultimas Noticias 15/12/1985

„Profesores denuncian irregularidades en el asunto electoral“

La Cuarta 18/12/1985

„93. 000 docentes podrán participar en elecciones“

El Mercurio /21/12/1985

Lista C „Exigimos que el proceso electoral sea correcto“

La Tercera 22/12/1985

„Oficialismo teme a elecciones limpias“

Revista Cauce Nr. 55, 23/12/1985

„Lista A : Nuestro objetivo es la dignificación profesional“

El Mercurio 24/12/1985

„Profesores sacan punta al lápiz para votar“

Las Ultimas Noticias 25/12/1985

En las elecciones del Colegio de Profesores se confrontaban en primera instancia dos fracciones: los defensores del modelo propuesto por las autoridades militares, lo cual implicaba no solamente adhesión a los cambios educacionales sino también a una manera distinta de gobernar al país y los opositores que pedían cambio del directorio del Colegio y democratización del país.

El discurso de la fracción oficialista estuvo centrado en el respeto a la función profesional, la valoración del maestro como actor relevante en el esquema de modernidad propuesto por los militares. Igualmente sobresale en este discurso la necesidad de prescindir de los grupos

políticos que históricamente habían influido y en ocasiones determinado la actividad del magisterio.³²⁵

Los representantes de la lista A proponían un trabajo más cercano con las autoridades educacionales, colaborando en las grandes tareas nacionales en las cuales los maestros tendrían mucho que decir y aportar.

A la sombra de esta fracción se perfila en la elección de profesores, la lista B, denominada de „Independientes“ en la cual mayoritariamente confluyen maestros que en un inicio apoyaron ciertas reformas del régimen militar pero que posteriormente, decepcionados por las políticas educacionales de éste, le quitaron su apoyo. Pese a sus diferencias con el gobierno y con la dirección del Colegio de Profesores dichos sectores tampoco están dispuestos a integrarse a un proyecto opositor; mas bien permanecen como observadores a la espera del desarrollo de los acontecimientos.

El grupo mayoritario, contestatario al régimen y a la dirección oficialista del Colegio está representado en la lista C por adherentes del Partido Demócratacristiano, del Partido Radical y de algunas fracciones del Partido Socialista.³²⁶

El programa de esta coalición es confrontacional con el oficialismo. Se manifiestan contra la falta de democracia en el Colegio de Profesores, contra la privatización de la educación y contra el gobierno al cual acusan de ser el principal responsable de la crisis por la cual atraviesa la educación, el magisterio chileno y el país en su conjunto.

La palabra *democratización* aunque en situaciones determinadas aparece como un concepto vacío y manipulado por los bandos en conflicto, en estas elecciones adquiere poder y un significado múltiple. Me atrevería a afirmar que uno de los éxitos de la oposición fue el no permitir que el concepto democratización identificara a los gobernantes quienes con poco éxito trataron también de incorporarlo a sus discursos. Al respecto no debe olvidarse que la intervención militar en 1973 había sido justificado, ante la opinión

³²⁵Esta forma de apoliticismo puede rastrearse históricamente en lo que fueron las asociaciones magisteriales de comienzos de siglo las que, de tiempo en tiempo aparecían en la actividad gremial, especialmente en momentos de crisis gubernamentales o de dispersión del profesorado. Sin embargo, pese a un perseverante afán por declarar su apoliticismo, esta fracción estuvo notoriamente influida por valores de los partidos de la Derecha, especialmente de aquéllos que hasta antes del golpe militar actuaban en diversas instituciones de la sociedad civil con el nombre de Partido Nacional y Democracia Radical. En muy raras ocasiones se dio una forma de apoliticismo influido por valores socialistas o anarquistas dentro del gremio y cuando así lo fue, a partir de 1925, dichas corrientes se integraron al movimiento gremial desde donde defendieron sus posiciones, contribuyendo a la vez al fortalecimiento del sindicalismo docente.

³²⁶Sobre esta última organización hay que decir que a la fecha se encuentra distante de sus preceptos marxistas y de su política de avanzar sin transar que le caracterizó en la época de Salvador Allende. Su fisonomía, a la vuelta de unos

pública, como una medida extrema para salvaguardar el sistema democrático chileno quebrantado por una coalición de partidos de inspiración totalitaria.

Una cuarta fuerza (Lista D) estuvo representada en esta elección por los adherentes a los partidos de izquierda (comunista y una fracción más ortodoxa del Partido Socialista) quienes habían tenido notoria participación en el movimiento gremial de la AGECH. Estos sectores al no encontrar consenso con las agrupaciones también opositivas, liderizadas por la Democracia Cristiana, decidieron levantar una lista propia.

Su discurso, como ya lo he expresado anteriormente, era más confrontacional y aspiraba a la desaparición del Colegio de Profesores para dar paso a una forma de sindicalismo histórico.

Finalmente y aunque parezca de perogrullo, es necesario decir que los candidatos de la oposición, pese a las garantías que se les ofrecieron para participar en un proceso eleccionario amplio e informado igual tuvieron múltiples problemas para hacerse oír en las escuelas, reunirse con los profesores o bien disponer de los mismos recursos que tenía el Directorio oficial para hacer su campaña:

„Nosotros hicimos la campaña por la democratización en la marginalidad, en la periferia, sin medios que eran patrimonio de todos los profesores, sin ninguna influencia, sin poder ocupar los locales que nos pertenecían a todos. Prácticamente desde afuera, tratando de influir por dentro. Nuestra labor de penetración fue, más que en la estructura del Colegio, en las bases por medio de jornadas, seminarios, asambleas, muchas veces en locales secretos o bien en locales vinculados a la iglesia, a sindicatos o en casas de profesores con todas las características de un régimen que no daba garantías para que los profesores se expresaran libremente.“³²⁷

En las dos primeras semanas de Enero de 1986 el Colegio de Profesores da a conocer a través del Mercurio los siguientes resultados:

Lista A representante del oficialismo	17,17 %
Lista B representante de los independientes	11,47 %
Lista C representante de la oposición (centro)	46,87 %
Lista D representante de la oposición (AGECH)	15,69 % ³²⁸

El triunfo de los profesores opositores se convirtió en un suceso político en Chile. Los maestros realizaron una intensa campaña en todo el país para democratizar su gremio y lo lograban con un triunfo electoral que no tenía apelación. Pero no sólo eso; en el trasfondo

años, es de un socialismo renovado el cual resultaba para sus dirigentes complejo de explicitar pero que rendía buenos dividendos en una sociedad asfixiada por las descalificaciones.

327 Osvaldo Verdugo, Entrevista, 1992

328 Cómputos oficiales entregados a la Prensa, Archivo Colegio de Profesores, Enero 1986

de esta contienda estaba en juego la principal tarea de la oposición: la vuelta a la democracia. Con el Colegio de Profesores adscrito ahora a los postulados de la oposición, lo que en términos políticos significaba adhesión a la democratización del país, al gobierno no le cabe otra alternativa que reconocer a este gremio y tratar de culminar los cambios educacionales que estaban en marcha sobre la base de hechos consumados.

Si alguna vez existieron ciertas formas de diálogo entre el obsecuente Colegio de Profesores y el régimen militar, con la nueva directiva estas formas de diálogo quedaban definitivamente liquidadas. El diálogo existió sólo como mera formalidad porque, como apunta el ex ministro E. Froemmel:

„Ni las autoridades educacionales daban crédito a lo planteado por los nuevos dirigentes del magisterio ni éstos estaban en condiciones de legitimar la política educacional del gobierno.“³²⁹

Dicha opinión expresada por la máxima autoridad educacional del régimen militar no hace sino confirmar mi tesis de ruptura la cual se expresa, según Froemmel, en la falta de diálogo, en una desconfianza recíproca; dicho con sus palabras en „una confianza vulnerada“.

Para el profesor Osvaldo Verdugo nuevo presidente del gremio las relaciones con el gobierno estuvieron estancadas. Para él, los años ochenta en educación es una „*década perdida*“. Argumenta que los militares desintegraron y bajaron el nivel del sistema nacional de enseñanza y que los profesores, desde el punto de vista de sus conquistas laborales: „perdieron casi todo“.

Signo de este periodo, agrega el nuevo presidente de los profesores, es la inestabilidad laboral y las bajas remuneraciones. Pese a ello el nivel de exigencias del nuevo Colegio de Profesores fue modesto porque a su juicio el régimen era todavía fuerte:

„Nos conformamos solamente con tener, bajo la Dictadura, voz, presencia, participación, conducción. La exigencia máxima fue que se reconociera la misión específica del profesor como sector laboral profesional con una importante misión de tener que formar a los niños y jóvenes del país.“³³⁰

Apunta Verdugo que gran parte de su lucha gremial se les fue en eso y que obviamente nunca lo lograron porque los postulados de los docentes, en su opinión, eran contradictorios con el proyecto ideológico del régimen:

329 Enrique Froemmel, Entrevista, 1992

330 O. Verdugo, Entrevista, 1992.

„Los docentes fueron contrarios a la perpetuación del régimen militar porque veían en él, el peligro de la atomización de la educación, lo que a su vez era la condición para imponer todas las políticas autoritarias que al gobierno se le hubiera ocurrido implementar y de las cuales ya habían varias muestras.“³³¹

Sobre las formas cómo el profesorado se enfrentó a este aparato bajo el periodo militar, enfatiza Verdugo que:

„Jamás, planteamos la vía violenta. Siempre dijimos que la vía violenta era un camino de legitimación de la Dictadura, que en el camino de la guerra, en el camino de la violencia el que ganaba era Pinochet.“³³²

En opinión de Verdugo el Colegio de Profesores a partir de 1986 define su lucha como un accionar profundamente ligado a la lucha por la democracia e inserto en la problemática de todo el país. En su opinión el régimen militar buscaba la legitimación por la vía violenta; así se entiende la represión, el diálogo sin respuestas, la provocación a través del encarcelamiento y el despido de las escuelas de los maestros que participaran en acciones públicas de protesta contra el régimen. El tono sarcástico del ex ministro de educación Sergio Gaete confirman las palabras de Verdugo:

„(...) Deseo expresar a los señores profesores en actividad que nada me causaría mayor dolor que arriesgaran su estabilidad laboral(...)interviniendo en manifestaciones y actos que desvían nuestra acción de las tareas propias del ministerio docente: la educación.“³³³

Los cambios del régimen autoritario carecen, en opinión del nuevo presidente del Colegio, de legitimidad porque fueron impuestos. Posiblemente algunos eran necesarios pero el hecho de haberse implementados sin consulta a quienes estaban directamente afectados por la medida creó, a juicio del dirigente, desconfianza.

El ex Ministro de Educación del régimen militar Sr. Enrique Froemmel coincide con Verdugo cuando afirma, refiriéndose a las reformas impuestas y a la actitud negativa de los gremios que:

„El hecho de haberse hecho precipitadamente y no involucrar a los maestros en el proceso también implicó que ellos no se sintieran solidarios. Sabe usted que lo peor que uno puede hacer cuando trata de echar a andar algo, es no involucrar a los que participan o a los que van a ser afectados, porque nunca van a ver eso como propio.“³³⁴

331 O. Verdugo, Entrevista, 1992

332 O. Verdugo, Entrevista, 1992

333 Sergio Gaete, discurso inaugural del año escolar 1987, El Mercurio, Santiago, 3.3.1987

334 E. Froemmel, Entrevista, 1992. En el uso del vocablo "precipitado" el ex ministro evita decir "autoritariamente". En verdad él usa un eufemismo para referirse a la manera cómo las reformas fueron impuestas. Si nos guiamos por el léxico español el adjetivo "precipitado" significa en su primera acepción "atropellado, atronado, alocado, inconsiderado". Así entendido, creo que ninguna de estas acepciones corresponde a los hechos. Las reformas fueron consideradas, pensadas y racionalizadas en base a planes económicos y estrategias educacionales específicas.

Frente al tema relacionado con el tipo de escuela que los maestros proponían como modelo alternativo al del régimen militar el profesor Verdugo señala que su gremio, consciente de la situación en que se encontraba, proponía la „escuela participativa“, esto significaba:

„(...) usar el espacio escolar, el aula, para practicar la participación (..) e ir creando una minidemocratización en la misma escuela, en el miniespacio, con los 45 alumnos en el aula, donde se podía hacer algo para luchar y resistir la prepotencia autoritaria de los que estaban controlando la educación.“³³⁵

Esta escuela, continúa Verdugo:

„(...) la veíamos como un espacio de encuentro, para ir siendo solidarios, para ir rompiendo los miedos y logrando grados de identidad. Esta escuela que nosotros proponíamos era la antítesis del modelo autoritario impuesto en Chile y en otros países del mundo, especialmente en la Europa del Este donde muchos de estos regímenes "modernos" intentan perpetuarse e imponer su proyecto ideológico a través de la educación, creo que eso pasó en Chile, en Europa Oriental; y es un fenómeno muy interesante de analizar en el mundo entero. Más allá de la cultura específica, la influencia de las religiones, las filosofías, etc. Yo diría que siempre hay un elemento común en los regímenes autoritarios: primero sospechan de la educación y segundo, como hay sospecha, hay persecución, represión, atomización. Después intentan, a través de esos mismos actores temerosos, disminuidos, utilizarlos funcionariamente para perpetuarse en el poder“.³³⁶

El profesor Verdugo afirma que frente a la negación del diálogo, a la falta de respuesta a las peticiones y al uso de la represión contra los profesores, se empieza a repetir un ciclo dramático que desmoraliza e inhibe la creatividad de los maestros. Ellos, como dirección del gremio, tuvieron que buscar formas de salida a esa situación. Una de esas salidas, en opinión del presidente de los maestros, fue la ligazón entre la lucha sectorial del magisterio y la recuperación de la democracia:

„Sin partidos políticos, sin prensa, sin Parlamento, cómo dar horizonte a la lucha de los chilenos, cómo hacer entender a la población que el tema de los pobres, de los jóvenes, de la educación, de los trabajadores, no tiene solución si no restauráramos la democracia. Y una democracia sin apellidos, una democracia pluralista que en los años sesenta y setenta muchos la calificaron de formal, burguesa pero esa democracia era el mejor sistema que teníamos para resolver civilizadamente nuestros problemas.“³³⁷

La lucha por la democracia pasó a convertirse en la columna vertebral en las aspiraciones del profesorado, especialmente en el segundo lustro de los años 80 cuando el Colegio de Profesores logra democratizarse y unificarse internamente.

Dos son las reivindicaciones principales de los maestros en esta época. Una es la estabilidad laboral al ver que el gobierno, invocando razones económicas y excesos de

335 Osvaldo Verdugo, Entrevista, 1992

336 Osvaldo Verdugo, Entrevista, 1992

337 Osvaldo Verdugo, Entrevista, 1992

profesores inicia en sus tres últimos años de gobierno, a través de las municipalidades y de los colegios que aún controla, una campaña de despidos que afectará a varios miles de maestros.³³⁸

La segunda reivindicación del magisterio es política. Se trata de provocar cambios en la administración del país. La consigna „*una educación democrática para un país democrático*“, más que una frase, es un llamado a la consciencia de los maestros para comprometer su participación y adherir al bloque político que en el país busca terminar con el régimen militar.

Las reivindicaciones economicistas han pasado a segundo plano. Si el Colegio de Profesores que adhería al régimen militar no pudo o no fue capaz de defenderlas, menos lo podrá un gremio que aparece identificado con la oposición con miles de maestros despedidos y otros miles que temen por su puesto de trabajo.

La democratización del país se presenta, ante muchos dirigentes del Colegio de Profesores, como la única salida que puede contribuir a la solución de los grandes problemas nacionales en los cuales la educación y el magisterio debieran estar considerados. El claro triunfo electoral de los opositores en Diciembre de 1985 devuelve confianza y eleva la moral a un gremio ya bastante castigado, despertando a la vez expectativas de triunfo en las próximas confrontaciones con el gobierno.

Verónica Monsalve, dirigente nacional del Colegio de Profesores y Directora de escuela, percibe los cambios educacionales bajo el régimen militar también desde una perspectiva crítica, aun cuando sus interpretaciones distan bastante de las opiniones de Verdugo, Pavez, Schulack o Valladares.

Ella reconoce haber trabajado, no solamente bajo el régimen militar sino siempre, sobre la base de hechos consumados. La existencia de planes y programas de estudio así como de estructuras preestablecidas dejaban, a juicio de la consejera nacional, espacio solamente para la generación de modalidades de trabajo en las cuales se ponía a prueba la creatividad propia del profesor. Los militares, dice, hicieron un trabajo de cambio en las estructuras, en las asignaturas, en cuanto a objetivos pedagógicos en las escuelas de acuerdo a su realidad específica; no obstante:

338Ver Decreto ley 2. 345 del 20.10.1978 que busca desburocratizar y racionalizar la administración pública y el Decreto ley 2.200 por medio del cual cualquier profesor podía ser despedido sin previo aviso y sin que necesariamente mediara algún conflicto entre las partes.

„Había una gran amplitud, nos dejaban que nosotros formuláramos nuestros planes y programas de estudios internos del establecimiento. Por eso cuando hablan de que en los colegios se actuaba de una manera autoritaria, en realidad no era así. Si los colegios no rendían más, era por que a lo mejor no les gustaba hacer más pero no porque alguien les entrabara y les dijera: *"ustedes no pueden hacer esto"*“.³³⁹

La profesora Monsalve considera que las medidas restrictivas se produjeron en parte porque en los encuentros pedagógicos para discutir temas educativos se terminaba casi siempre criticando al sistema nacional de enseñanza. Entonces los profesores al reunirse en eventos diversos comenzaron a generar una suerte de activismo político en lugar de generar situaciones de tipo educacional. El Colegio de Profesores (democratizado) en su opinión:

„(...) ha jugado un rol pasivo, no ha proyectado un liderazgo educacional en cuanto a estudios, propuestas y ha estado mas bien sesgado por la confrontación política.“³⁴⁰

El ex ministro de educación Sergio Gaete dice tener comprensión por los maestros y asegura que es legítimo que ellos demuestren preocupación con lo que va a suceder con su situación laboral. Gaete reconoce en 1986 que los cambios que están ocurriendo en educación, afectan en muchos aspectos la situación socio-laboral de los docentes. Ellos, dice, se sienten afectados porque están pasando de un régimen de estabilidad laboral relativa (DFL 338 del Estatuto administrativo) a otro (Decreto 2. 200) que da menos estabilidad. Sin embargo decía el ex ministro, los maestros no tendrían nada que temer por cuanto:

„(...) todos los profesores, sin excepción, que actualmente están en establecimientos fiscales van a ser contratados en los municipios (...) aunque exista una sobredotación. Los profesores nada tendrán que temer de los alcaldes porque éstos no se van a desprender de un elemento positivo, colaborador y bueno.“³⁴¹

Las declaraciones del ex ministro, resultarán a la vuelta de un tiempo polémicas. En nombre del gobierno militar Gaete tuvo que hacer frente a una verdadera ola de despidos que provocaron enconadas protestas en todos los sectores del magisterio chileno y también en la opinión pública.

La reducción de personal fue argumentada por el mismo ministro como una medida necesaria porque según él, era una injusticia que la sobredotación de profesores fuera financiada con el presupuesto de la nación:

339 Verónica Monsalve, Entrevista, Diciembre 1991

340 Verónica Monsalve, Entrevista, Diciembre 1991

341 Sergio Gaete, El Mercurio, Santiago. 8.6.1986

„Se hace necesario, aunque sea doloroso para los afectados, resolver un problema que incumbe a toda la sociedad y que son los impuestos de todos los que deben sustentar las remuneraciones de los profesores excedentes.“³⁴²

El proceso de municipalización hacia 1986 se había cumplido en la mayoría de los establecimientos fiscales. A decir de los gremios (AGECH y Colegio de Profesores) como de las propias autoridades, solamente cerca del 15 % de las escuelas fiscales estaban en ese periodo todavía bajo el control del Ministerio de Educación. La decisión del gobierno de someter también a estas escuelas al proceso de municipalización reabrió nuevamente el debate.

Desde que se había iniciado el proceso habían transcurrido más de 5 años. A juzgar de algunos, era tiempo suficiente para hacer un análisis evaluativo antes de insistir con la medida. Ambas organizaciones gremiales que a la sazón aun se encontraban en orgánicas separadas, deciden sondear la opinión de los maestros y realizan una elección en Santiago y otra a nivel nacional para recoger la opinión de todo el magisterio frente a la municipalización. El periódico La Tercera de la Hora, da cuenta de los resultados en la región de Santiago donde de un total de 7.314, maestros consultados, 7.154 se pronunciaron contra la municipalización.³⁴³

Al mes siguiente El Colegio de Profesores realiza una elección similar a nivel nacional y el resultado causa sorpresa porque más del 90% de los maestros dicen estar disconformes con el proceso de transferencia educacional.

Las claras muestras de rechazo por la privatización y municipalización de la educación, encuentran eco incluso en El Mercurio. Pese a que en la presentación de la noticia recurre a un estilo argumentativo descalificador cuando habla de „la ideologización de las directivas gremiales“, o bien del „carácter estatista de ciertos grupos políticos“. El periódico advierte sobre las múltiples dificultades que se presentan en la implementación de esta medida. Para El Mercurio dichas dificultades tienen su origen en asuntos presupuestarios, administrativos y de una cierta corrupción en la manipulación de los libros de asistencia escolar por parte de algunos dueños de colegios con el fin de incrementar sus montos de subvención.

Al inicio del segundo lustro de los años ochenta, El Mercurio pareciera disponer de mayor receptibilidad para recoger opiniones disidentes, al tiempo que asume una actitud

342 Sergio Gaete, Revista Mensaje, Mayo, 1987, pag. 147

343 La Tercera de la Hora, Santiago, 27.04.1986

levemente crítica hacia los gobernantes. Esta actitud crítica la observo no solamente en la difusión de informaciones que anteriormente no encontraban espacio, sino también en el contenido de artículos que corresponden a la línea editorial del periódico. No obstante, preciso aclarar que la prensa chilena dedica bastante espacio en sus páginas para informar de los éxitos educacionales obtenidos durante el proceso de municipalización. Personeros del Ministerio de Educación son los encargados de confirmar las informaciones. Igualmente lo hacen las municipalidades y naturalmente las autoridades de gobierno.

En los primeros meses de 1986 se observa un esfuerzo extraordinario de la prensa gobiernista por convencer a la opinión pública de lo correcto que habrían sido las medidas tomadas. Se publican entrevistas a alcaldes y funcionarios del Ministerio de Educación. Algunos protagonistas de experiencias positivas aparecen en sus páginas como fervorosos defensores del nuevo modelo.

El profesorado organizado poco figura en la información y cuando es interrogado, entrega opiniones escépticas que traslucen un matiz de frustración por el casi ningún poder de decisión que en ese momento disponen. A los maestros se les responde, al momento de plantear interrogantes, con afirmaciones que en no pocas ocasiones despiertan interrogantes mayores. Un tema como la preocupación de los profesores por la orientación política e ideológica que contiene la municipalización es respondido por el ministro de educación de la época, Sergio Gaete con la aseveración de que:

„(...) el gobierno está por encima de influjos políticos.“³⁴⁴

En un marco de gran agitación social caracterizado por la desconfianza y por la falta de diálogo entre gremios opositores y gobernantes son detenidos en el año 1986 miles de estudiantes por realizar protestas callejeras contra las reformas que se están implementando. Solamente en una demostración del mes de Mayo la policía da cuenta de 482 estudiantes detenidos, resultando uno de ellos muerto a consecuencia de la violencia extrema con que actúan los servicios policiales de orden público.

También el recientemente elegido presidente del Colegio de Profesores Osvaldo Verdugo es arrestado después de presentarse en el Ministerio de Educación para entregar una carta de protesta al ministro. En la misiva el presidente de los maestros daba a conocer el

344 S. Gaete, Ultimas Noticias, Santiago, 31.05.1986

resultado del plebiscito anteriormente mencionado y la preocupación de su gremio respecto de las medidas que se estaban implementando.

Lejos de colaborar con la pacificación de los ánimos, intercediendo por la libertad del dirigente gremial, el ministro Gaete usa la prensa para atacar duramente a los opositores especialmente a los estudiantes por participar en actividades que según él no le competen:

„Los estudiantes no son interlocutores válidos porque no tienen capacidad de discernir.“³⁴⁵

llega a expresar, al ser interrogado por la prensa sobre los sucesos estudiantiles de los últimos días. Expresiones de este tipo, lejos de aplacar los ánimos van deteriorando más aun las problematizadas relaciones movimiento estudiantil-gobierno.

En el mes de Junio de 1986 se observa en la prensa un cúmulo de información alusiva a los asuntos educacionales. La municipalización sigue siendo el principal tema que atrae la atención de todos los actores del proceso educativo. Argumentos y contra-argumentos aparecieron en los titulares o en las páginas editoriales de la mayoría de los periódicos investigados.

El Ministerio de Educación pese a la protesta nacional, no demuestra mayor intranquilidad ni intenciones de querer negociar algunos puntos de las reformas.

Las principales críticas expresadas por los maestros, respecto de la municipalización, puedo sintetizarlas en los siguientes puntos: a) desestabilidad en el cargo; b) disminución del poder real de los salarios; c) ostensible pérdida en la calidad de la oferta educativa por efecto de cursos numerosos; d) acentuada burocratización en las municipalidades las que, para poder administrar el sistema, necesitan contratar personal, formar comisiones muchas de las cuales por no tener experiencia técnico- pedagógica en el área, entorpecen, burocratizan y encarecen incluso más un proceso educativo que se había propuesto lograr justamente lo contrario. A todo esto se sumaba el autoritarismo exagerado en las escuelas producto de la adscripción de los alcaldes al gobierno militar .

Comentario

Las consecuencias de este proceso de agitación que ocurre en el país y del cual la educación y el movimiento gremial de los profesores no pueden substraerse, se dejan percibir en una serie de convulsiones sociales que implicarán, aun cuando algunos

345 S. Gaete, Ultimas Noticias, Santiago, 3.06.1986 pag. 5

representantes gubernamentales de la época les cueste reconocer, la pérdida de la estabilidad del régimen, así como la pérdida de su capacidad de conducción política en los sectores de la clase media. Gremios y asociaciones profesionales, se encuentran integrados a los movimientos de oposición que reclaman por un retorno al sistema democrático. Muestras representativas de esta situación descontrolada que describo son el adelanto de las vacaciones a los estudiantes para evitar protestas callejeras, la derrota de la lista gobiernista en las elecciones estudiantiles universitarias, la debilidad en el control sobre los aparatos de seguridad que actúan al interior de las FF.AA y que se traduce entre muchos ejemplos, en el crimen aleroso contra tres opositores lo que, lejos de favorecer al régimen, lo deja con una imagen muy disminuída ante la opinión pública y con relaciones muy deterioradas con la iglesia y el profesorado.

Por su parte la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) hacen una severa acusación al régimen por persistir en su política de violación de los derechos humanos y de falta de garantías institucionales para los opositores.

En el plano nacional, se desarrollan movimientos huelguísticos de los trabajadores portuarios, de los choferes de la locomoción colectiva; reiteradas movilizaciones de las mujeres, especialmente de las asociaciones de madres y familiares de presos políticos, un paro nacional (en Noviembre) de 48 horas y una gigantesca demostración de más de un millón de personas en Santiago.

Pero sin duda el hecho político más relevante del periodo, lo constituye la elección del Directorio del Colegio de Profesores. Este acontecimiento tendrá importantes consecuencias no solamente para los maestros sino incluso en la configuración de la alianza política que dará perfil al nuevo gobierno de la nación.

Los resultados fueron desalentadores para el gobierno. La lista A, que representaba al oficialista Colegio de Profesores apenas se empinó por un 18% de los votos emitidos, mientras que la oposición, sumando los porcentajes de sus dos fracciones, superaba el 63% de las preferencias en un universo electoral de más de 90. 000 maestros.

Las consecuencias que se desprenden de este hecho se dejan interpretar, en mi opinión, de la siguiente manera.

Queda demostrado que, en una elección democrática, en la cual participa sin aprensiones mayores la sociedad civil, en este caso representativa de los sectores de la clase media, el

régimen militar podía ser derrotado. Como consecuencia de los primero se expresan en la población matices de recuperación de una confianza perdida la que, con el correr de los próximos años se irá transformando en acciones movilizadoras contra el régimen e irá poniendo a éste en duros aprietos para imponer la añorada *paz social*.

Hacia el periodo todavía los sectores opositores tienen dificultades para establecer un frente común contra el oficialismo, razón por la cual en la elección del Colegio de Profesores presentan listas separadas, aun cuando posteriormente se unirán en un sólo gremio.

Para los militares esta elección es un claro indicador de los esfuerzos que tendrán que hacer si quieren mantener un apoyo ciudadano que dé a su régimen una relativa estabilidad en el tiempo constitucional que le resta (3 años).

La nueva estrategia del gobierno se inscribe dentro de un esquema populista que mostrará a un general transformado en candidato, dialogante, dirigiéndose al país en tono paternal y conciliador. No obstante, para ganar esa batalla electoral del SI o del NO a la reforma constitucional, el gobierno estaba ya demasiado corroído y la oposición en un franco camino de recuperación. Quedaba sin embargo una vía: el fraude electoral. Pero el Chile de 1987 ya no era el de 1980 cuando por medio de un dubioso plebiscito se impone la Constitución Política del Estado.

En los años inmediatamente posteriores a la derrota electoral sufrida en el magisterio chileno el gobierno militar no implementa cambios novedosos en su política educacional. El proceso de municipalización y de despidos de profesores continúa, pese a la fuerte oposición del nuevo Colegio de Profesores y de la AGECH, la cual como ya dije se va a integrar al Colegio democratizado para de este modo fortalecer la unidad de los maestros y dar mayor fuerza a las movilizaciones que se desarrollarán a futuro.

Podía esto significar que el Compromiso Histórico en educación carecía en verdad de relevancia como para que se desarticulase un sistema sin que se crearan instancias que lo reemplazaran y sin que ello provocara un quiebre en las relaciones del sector docente y las autoridades educacionales?

Mi tesis es que el quiebre se produjo. Las instancias que pretendieron ocupar el espacio que históricamente había tenido este Compromiso carecieron de independencia, creatividad y poder suficiente como para llegar a convertirse en una fuerza que equilibrase con los representantes del Estado los intereses establecidos en él. El Colegio de Profesores

careció de representatividad e independencia por cuanto era una institución impuesta, con representantes cooptados por el gobierno. La AGECH tuvo independencia pero su representatividad estaba limitada por el autoritarismo que dificultaba su accionar. Las bases del magisterio y el Colegio de Profesores democratizado se mantuvieron bajo un estado coercitivo permanente que se traducía en despidos, traslados y formas diferentes de sanciones de las cuales ya he dado cuenta en el transcurso de esta investigación. En esta constelación la única posibilidad era trabajar la estrategia de los consensos. Sin embargo ésta tampoco era fácil de conseguir porque, pese a la concordancia que existía en el profesorado opositor por terminar con el régimen militar, los maestros mantenían entre sí opiniones bastante divergentes y en muchos casos la influencia de los partidos políticos conspiraba también contra la unidad gremial.

A partir de la segunda mitad del año 1986, puede observarse un cambio en el accionar del gobierno. Dicho cambio se hace más perceptible después del atentado que casi costó la vida al general Pinochet y en el que perecieron 5 miembros de su escolta personal. Este hecho demuestra la vulnerabilidad del régimen cuyo máximo exponente, el general Pinochet, pese a todas las medidas de seguridad que se tomaban, estaba expuesto a desaparecer en cualquier atentado poniendo al país al borde de una guerra civil.

Esta reflexión escuetamente expresada habría llevado al cuerpo de generales a presionar al gobierno para que se buscasen formas de entendimiento con sectores de la oposición de manera de evitar la polarización excesiva a la cual estaba llegando la sociedad chilena.

Significaba esto que el uso de la violencia pasaba a ser un elemento eficaz, amedrentador del régimen?. Pienso que no. Mas bien era un hecho que marcaba una etapa culminante en un proceso de confrontación que estaba llevando al país al borde de la división irreconciliable. En esta situación de ruptura, el proyecto de los militares podía, por la fuerza, seguirse imponiendo durante un tiempo determinado, pero los asesores e ideólogos de los uniformados percibían que la caída del régimen era sólo cuestión de tiempo. Para esta elite el proyecto económico necesitaba, para poder desarrollarse y consolidarse, de una relativa paz social; y eso en Chile ya no existía. La estrategia de dividir a la oposición encuentra en círculos de gobierno bastante aceptación. Este plan consiste en ayudar a crear nudos de conflictos entre la llamada oposición democrática (democratacristianos, radicales, grupos liberales, socialistas renovados etc.) y la oposición maximalista representada por el Partido Comunista, una fracción de los socialistas y algunos grupos armados de menor

importancia, como el FPMR autores del atentado a Pinochet. Sin embargo dicho plan tampoco dio los resultados esperados porque la unidad contra el régimen resultó ser más fuerte que las diferencias ideológicas que separaban a los opositores entre sí. Los tres últimos grupos mencionados y que corresponden a la oposición más rupturista, fueron en mi opinión los que tomaron la iniciativa en la actividad movilizadora callejera contra el gobierno y en consecuencia fueron los que potencialmente estaban en condiciones de imponer sus tácticas y estilo de protesta a un gran sector de la población, especialmente juvenil. Éstos logran acumular tal poder de movilización que llegaron a definir aquel año 1986 como el *año decisivo*, dando a entender que sería el año en que el régimen militar tendría que, como producto de la presión social y desobediencia civil, abandonar el gobierno.

Pero los militares, informados de lo que en el campo de la oposición ocurría, han percibido las claras diferencias políticas existentes en el seno de estos actores y buscan en consecuencia acentuarlas, otorgando ciertos privilegios en forma de libertades al sector de la oposición que muestra mayor disponibilidad de establecer un diálogo con ellos.

En el marco de esta estrategia política los militares integran a varios civiles al gabinete. El bloque político, llamémosle de centro es invitado a dialogar otorgándosele un moderado espacio en los medios de comunicación social y otras garantías menores.

El papel relevante en la franja opositora lo juega el Partido Demócrata Cristiano quien, pese a la represión sufrida durante los años de Dictadura, ve como única opción de cambio, alcanzar ciertos acuerdos con los militares para facilitar, dentro de la Constitución de 1980, una transición hacia un sistema político en el cual, como primera medida, las autoridades gubernamentales se generen democráticamente.

Esta tesis considerada por algunos como excéntrica, derrotista y de difícil viabilidad, terminó por imponerse en el seno de la oposición y resultó ser la única que posibilitó una salida política pacífica que puso término al régimen autoritario, previa superación de las desavenencias con los estamentos de la oposición vinculada a los partidos marxistas con quienes la Democracia Cristiana a través de sus aliados socialistas y radicales estableció puentes de contacto para lograr, primero la derrota de Pinochet en el plebiscito y luego de su continuador Hernán Büchi en las elecciones presidenciales de Marzo de 1989.

Parte V

Conclusiones generales

En el presente trabajo he investigado acerca de los factores que determinaron el quiebre del Compromiso Histórico en el ámbito educacional en Chile y las consecuencias que dicho quiebre trajo en la desestabilización del régimen militar al perder el apoyo de los sectores de la clase media y dentro de éstos principalmente del magisterio organizado.

Primeramente debo señalar, al llegar al final de esta investigación, que el régimen militar en Chile aparece en el marco de una situación de excepción la cual está facilitada paradójicamente por el alto grado de politización de la sociedad chilena pero al mismo tiempo por la pérdida de la capacidad de diálogo entre los actores que se enfrentan en la arena política.

Como lo he señalado en el transcurso de mi investigación, Chile fue un país que se caracterizó tempranamente por una tradición dialoguista; Esto sirvió de base para que, en un conflictivo periodo de crisis institucional se aprobara una Constitución (1925) en la cual los consensos jugaron un papel importante. En esta Constitución, tanto los grupos emergentes de la clase media, así como la burguesía agrario-industrial y los trabajadores organizados quedan debidamente representados. El Estado no cambia radicalmente su perfil pero quienes lo administran pasarán a jugar un rol significativo dentro de este compromiso.

Los maestros, hacia la época organizados en un gremio con carácter sindical (AGP), se incorporan con gran voluntad a este proceso y actúan como intermediarios entre los grupos conservadores y liberales en decadencia y los nuevos actores sociales emergentes: la clase media y los obreros organizados. Esta forma de compromiso duró aproximadamente 50 años en Chile y permitió, entre otras cosas, la democratización del país, el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil así como el mejoramiento en las condiciones materiales de vida de la población. A todo ello se agregaba la educación gratuita y una serie de derechos cívicos entre los que sobresalen la libertad de opinión, ampliación del derecho a voto y la libertad de asociación. El periodo que media entre 1925 y 1973 está fuertemente influido de los preceptos y comportamientos culturales de la clase media. A partir de 1950 se fortalecen en la sociedad los partidos políticos de orientación marxista, los cuales junto a la aparición del Partido Demócratacristiano van desplazando al Partido Radical del protagonismo en la administración del Estado.

Hacia los años 60 los partidos socialista y comunista se encuentran unidos en una coalición y mantienen una fuerte influencia en el movimiento sindical obrero y de profesores. Este último, durante dicho periodo crece, se desarrolla y participa activamente de las negociaciones sobre cambios educacionales. Aunque obtiene del Estado una serie de garantías sociales, se mantiene en el profesorado un endémico disconformismo por los bajos salarios que percibían. En este proceso de unificación y crecimiento que menciono el gremio se vio fuertemente tironeado por los partidos políticos produciéndose una notoria politización dentro de sus filas, especialmente en los estamentos directivos altos e intermedios.

La creación del Sute a comienzo de los años 70 y la adscripción de una gran parte del gremio a los postulados de la Unida Popular, crea fricciones al interior del magisterio y se producen ásperas discusiones entre sus miembros por la implementación de una reforma educacional la que, a decir de los opositores, pretendía cambiar la forma y los contenidos de la educación chilena. El tipo de escuela propuesto por los reformistas encontraba serios desertores no solamente dentro del magisterio sino también dentro del resto de la sociedad civil. Preciso decir que la población chilena, producto de los cambios sociales y económicos operados en el país se encontraba bastante polarizada, razón por la cual la polémica educacional quedó en parte sesgada por la fricción entre partidarios y oponentes del gobierno de Salvador Allende. El presidente Allende al constatar que el proyecto de reforma educacional no lograba reunir los consensos necesarios en la sociedad civil, decidió retirarlo a la espera de mejores condiciones de diálogo con la otra parte de la población.

En el año 1973 este ya entorpecido diálogo se rompe. Las Fuerzas Armadas irrumpen al poder para resolver la crisis pero no sólo se encargaron de destituir al presidente supuestamente inconstitucional sino que además prescindieron de toda constitucionalidad para hacerlo. Los militares dismantelan prácticamente toda la estructura educativa existente hasta la época. El gremio de maestros, SUTE, es disuelto y comienza a operar una fuerte censura en todos los mandos de la administración pública. Muchos de los opositores al nuevo régimen deben abandonar su servicio en escuelas y universidades y otros incluso son encarcelados o bien obligados a salir del país.

Por medio de una serie de medidas de carácter coercitivas y económicas el régimen militar impone sus proyectos educacionales en un plazo de 7 años pero por ello debe pagar un

precio muy alto. Una gran parte del magisterio y un sector representativo de la clase media abandonan la postura neutral o de adhesión que tenían hacia el régimen y se van nucleando en un movimiento opositor contestatario que va a tener intrincadas consecuencias en la capacidad de gobernabilidad del régimen. En este proceso más de confrontación que de negociación surgen diferentes instancias gremiales de los maestros entre las que destacan una coordinación del magisterio, un club del magisterio, una asociación gremial de educadores y finalmente, a través de la presión gremial de los maestros opositores logran éstos últimos, arrebatar, en elecciones libres, la conducción del Colegio de Profesores.

Finalmente debo decir que el gremio de maestros no derrotó ni fue el sector determinante en la salida del régimen militar como algunas personas han pretendido concluir de mi tesis. Lo que sí afirmo es que la elección del Colegio de Profesores abrió las compuertas de una movilización social que ni el régimen, ni los mismos maestros se habían imaginado. El profesorado chileno con gran influencia cultural en la sociedad y víctima al mismo tiempo de una política oficialista de subvaloración y desprecio, terminó por desafiar al régimen militar enfrentándolo y derrotándolo primero en elecciones gremiales a los representantes del régimen y luego mostrando una vía de escape al resto de un país país atrapado y disminuido por el autoritarismo.

Abreviaciones

AGECH: Asociación Gremial de Educadores de Chile
AGP: Asociación General de Profesores
CIDE: Centro de Investigación y desarrollo de la Educación
CPU: Corporación de Promoción Universitaria
CUT: Central Unica de Trabajadores
DINA: Dirección de Inteligencia Nacional
EDIT. Editado
ENU: Escuela Nacional Unificada
FEDECH: Federación de Educadores de Chile
FOCH: Federación Obrera de Chile
FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
PIIE : Proyecto Interdisciplinario de Investigacioens Educativas
SANTIAGO: Santiago
SONAP : Sociedad Nacional de Profesores
SUTE: Sindicato único de Trabajadores de la Educación
UP: Unidad Popular
UPCH: Unión de Profesores de Chile

Bibliografía

Ahumada, Eugenio; Atria, Rodrigo; Egaña, Javier; Góngora, Augusto, Quesney, Carmen; Sabal, Gustavo; Villalobos, Gustavo: Chile: la memoria prohibida, Vol. II, Santiago 1989

Allende, Salvador; Partido Democratacristiano: Estatuto de garantías constitucionales, Santiago, 1970

Andino, Ramón; Paredes, Eduardo: Breve Historia de los partidos políticos en Argentina, Buenos Aires, 1974

Atria, Raúl; Tagle, Matías; Barros, Luis ; Lemaitre, María; Vergara, Ximena: Estado y Política en Chile: Ensayo sobre las bases sociales del desarrollo político chileno, Edit.: Corporación de Promoción Universitaria (CPU) Santiago, 1991

Atria, Raúl: Reflexiones sobre Estado y sociedad, Edit.: CPU, Santiago, 1991

Aylwin, Mariana; Bascuñán, Carlos; Carrera, Sofía; Gazmuri, Cristián: Chile en el Siglo XX, Santiago, s/f

Bowen, James; Hobson Peter: Teoría de la educación, México, 1979

Barrios, Marciano: La Iglesia en Chile, Santiago, 1987

Bazan, Armando: Mariátegui y su tiempo, Lima, s/f

Bascuñán, Carlos: La Estrategia Política para la Formación de Frentes Populares, Edit.: CPU, Nr. 33, Santiago, 1982

Bascuñán Carlos: Un modelo autoritario para la universidad, Edit.: CPU Santiago, 1988

Boeninger, Edgardo: 10 años de Régimen militar, Edit.: CPU, Heft Nr.42 von Estudios Sociales, Santiago, 1984

Bravlavsky, Cecilia; Cuhne, Luis; Filgueira, Carlos: Educación en la transición a la democracia en los casos de Argentina, Brasil y Uruguay, Santiago, 1989

Briones, Guillermo: Las Universidades chilenas en el modelo neoliberal, Santiago, 1985

Brunner, José Joaquín: Modelo Cultural y Universidad en el Autoritarismo, Araucaria Nr. 14, Madrid 1978

Brunner, José Joaquín: La Reforma de las Universidades Chilenas: Implicaciones intelectuales, Edit.: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Santiago, 1988

Brunner, José Joaquín; Barrrios, Alicia; Catalán Carlos: Transformaciones culturales y modernidad, Edit.: Flacso, Santiago, 1989

Buci-Glucksmann, Christine: Gramsci y el Estado, Madrid, 1978

Cabezón, Eduardo: Fundamentos filosóficos de la política educacional, Revista Mapocho Nr. 26, Santiago, 1978

Castro, Eduardo: Análisis crítico de la reforma en la educación media, Edit.: PIIE, Santiago, s/f

Castro, Pedro: La educación en Chile de Frei a Pinochet, Salamanca, 1977

Cleary, Patricio: El desmantelamiento de la educación, Araucaria Nr. 14, Madrid, 1981

Confederación americana del Magisterio: Resoluciones del cuarto congreso de maestros, Santiago, 1943

Constitución Política de Chile, con las modificaciones aprobadas en el plebiscito del 30 de julio de 1989 y las efectuadas por la ley 19.055 del 30.04.1991

Corporación de Promoción Universitaria (CPU), Edit.: Juan Gòmez Millas: El legado de un humanista, Santiago, 1988

Cox, Cristián: Sistema político y educación. Medidas propuestas y silencios, Edit.: Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) Santiago, 1989

Cox, Cristián: Políticas educacionales y principios culturales en Chile 1965-85, Edit.: CIDE, Santiago, 1986

Cox, Cristián: Políticas de Educación Superior, categorías para su análisis (documento de trabajo), Edit.: Flacso, Santiago, 1990

Cox, Cristián: Sociedad y conocimiento en los años 90 - Apuntes para una agenda sobre currículo del sistema escolar, Edit.: Flacso, Santiago, 1991

Cox, Cristián: Hacia la elaboración de consensos en política educacional - Actas de una discusión, Santiago, Edit.: CIDE, 1985

Cox, Cristián; Brunner José. J.; Garrido, Oscar; Izquierdo, Luis; Levy, Daniel; Maturana, Humberto; Scherz, Luis: Formas de gobierno en la educación superior: Nuevas perspectivas, Edit.: Flacso, Santiago, 1990

Cox, Cristian; Gysilin, Jacqueline: La formación del profesorado en Chile (1842-1987) Edit.: CIDE, Santiago, 1990

Chaparro, Patricio: Los actores sociales y políticos y el quiebre del sistema político democrático chileno, Edit.: CPU, Estudios Sociales Nr. 37, 1983

De Pujadas, Gabriel: Calidad de la educación - Los nuevos educadores, Edit.: CPU, Santiago, 1991.

De Pujadas, Gabriel: Aportes metodológicos para el análisis de los sistemas educativos, Edit.: CPU, Estudios Sociales Nr.30, 1981

Echeverría, Mónica: Clotario Blest: Antihistoria de un luchador, Santiago, 1993

Echeverría, Rafael: Política educacional y transformación del sistema educacional en Chile a partir de 1973, Edit.: Revista mexicana de Sociología, México, Julio, 1983

Echeverria, Rafael: Evolución de la matrícula en Chile, Edit.: PIIE, Santiago, 1982

Episcopado chileno: La reforma educacional, Edit.: Mensaje Nr. 300, Santiago, 1981

Federacion de Estudiantes de la Univeridad Católica: ENU - el control de las consciencias, Santiago, 1973

Freire, Paulo: Pädagogik der Unterdrückten, Hamburg, 1985

Fuenzalida, Valerio: Televisión Pobreza y desarrollo, Edit.: CPU, Santiago 1991

Gamarra, Juan: La reforma universitaria: el movimiento de los años 20 en Perú, Lima, 1987

García Huidobro, Juan: Exoneraciones de profesores, Mensaje Nr. 358, Santiago, 1987

García, Rigoberto: Economía y política durante el gobierno militar en Chile 1973-87, México, 1989

García Huidobro, Juan; Zuñiga, Luis: Qué pueden esperar los pobres de la educación? Edit.: CIDE, Santiago, 1990

González Moya, Carlos: Nuevo estatuto docente (ley 19.070) Santiago, 1991

Grossi, María: La educación chilena en la prensa de 1980, 1983 y 1985, Edit.: CIDE, Santiago, 1985

Guerra J.: La Constitución de 1925, Santiago, 1929

Guerra Sergio; Prieto, Alberto; Díaz, Omar: Crónicas latinoamericanas, Edit.: Casa de las Américas, La Habana, 1977

Guía de ingreso a los Colegios particulares 1992, Edit.: Edit. Santa Ana, Santiago, 1992

Hevia, Ricardo: La descentralización educacional, Santiago, s/f

Hevia, Ricardo; Beca, Carlos: Los despidos de los profesores y la crisis de la educación chilena, Edit.: Mensaje Nr. 358, 1987

Instituto de cooperación iberoamericana: La reforma educacional en las transiciones democráticas, Edit.:PIIE, Santiago, 1990

Hales, Alejandro: A propósito del golpe, Análisis, Santiago, 12.08.1990

Herrera, Mercedes; Larrain, Rodrigo: Hipótesis mínimas sobre el futuro de la educación privada en Chile, Edit.: CPU, Estudios Sociales Nr. 59, 1988

Hunneus, Carlos: La reforma universitaria 20 años después, Edit.: CPU, Santiago, 1988

Huerta, María Antonieta; Pacheco Pastene, Luis: La iglesia chilena y los cambios sociopolíticos, Santiago, 1988

Jobet, Julio César: Doctrina y praxis de los educadores representativos chilenos, Santiago, 1970

Latorre, Carmen: Funcionamiento de la educación en Chile - evaluación histórica y alternativas futuras, Edit.: PIIE, Santiago, s/f

Latorre, Carmen; González, Luis; Núñez, Iván; Hevia, Ricardo: La municipalización de la educación - una mirada desde los administradores del sistema, Edit.: PIIE, Santiago, 1991

Lehman, Carla; Desormeaux, Jorge; Hachette, Dominique; Koljatic, Matko; Sanfuentes, Andrés: El financiamiento de la educación superior: Antecedentes y desafíos, Santiago, 1990

Mac Brigde, Georg: Chile y su gente, Edit.: Instituto de Capacitación e Investigaciones de la Reforma Agraria (ICIRA), Santiago, 1973

Mac Nin, Noele; Schiefelbein, Ernesto: La prensa y la reforma educativa en Chile 1965-70, Edit.: Centro de Estudios Educativos, Mexico, 1975

Magendzo, Abraham: El control autoritario expresado en las circulares del Ministerio de Educación, Edit.: PIIE, Santiago, 1982

Magendzo, Abraham; Egaña, Loreto: Descentralización del sistema educativo chileno bajo el gobierno militar, regionalización y municipalización, Edit.: PIIE, Santiago, 1988

Manacorde, Mario: El principio educativo en Gramsci, Salamanca, 1977

Mariátegui, J.C.: La escena contemporánea: la política socialista en Italia, Lima, 1925

Mariátegui, J.C.: Temas de educación, Lima, 1970

Mariátegui, J.C.: Sieben Versuche die peruanische Realität zu verstehen, Mit einer Einleitung von Kuno Füssel und einem Nachwort von Wolfgang Fritz Haug, Berlin 1986

Martinelli, Anunciada: Declaración de principios de la Confederación Americana del Magisterio, Santiago, s/f

Ministerio de Educación: Estadísticas educacionales, Santiago, 1988

Ministerio de Educación: Principios educacionales del gobierno de Chile/ Santiago, 1975

Mires, Fernando: Die Indios und das Land - oder: Wie Mariátegui die Revolution in Peru begriff, in: Lateinamerika: Analysen und Berichte, Vol.3, Verelendungsprozesse und Widerstandsformen, Edit.: V. Bennholdt-Thomsen, Berlin, 1979

Moreno, Ernesto; Ramirez, Rodolfo: Las organizaciones sindicales y el contexto autoritario, Edit.: CPU, Estudios Sociales Nr.40, Santiago, 1984

Munizaga, Giselle: El discurso público de Pinochet 1973-76, Edit.: FLACSO, Santiago, 1983

Müller, Jürgen: Nationalsozialismus in Lateinamerika: Die Auslandsorganisation der NSDAP in Argentinien, Brasilien, Chile und Mexiko, 1931-45, Historamericana Vol. 3, Stuttgart 1997

Nazar, Víctor: El ingreso a la Universidad de Chile y a las carreras de pedagogía en 1978, Edit.: CPU, Santiago, 1978

Nohl, Herman: Teoría de la educación, Buenos Aires, 1948

Núñez Prieto, Ramón Iván (=Núñez, Iván): Las transformaciones educacionales bajo el régimen militar, Vol. 1 y 2, Santiago, 1984

Núñez Iván: Cambios en la situación del Magisterio, Edit.: PIIE, Santiago, 1982

Núñez, Iván: Las organizaciones del Magisterio chileno y el estado de compromiso 1936- 73, Edit.: PIIE, Santiago 1982

Núñez, Iván: El Magisterio chileno: sus primeras organizaciones gremiales, Edit.: PIIE, Santiago, 1982

Núñez, Iván: Las organizaciones de los docentes en las políticas y problemas de la educación, Edit.: Unesco, Santiago, 1990

Núñez, Iván: El trabajo docente: dos propuestas históricas, Edit.: PIIE Santiago, 1987

Núñez, Iván: Reforma educacional e identidad de los docentes, Serie histórica, ohne Nr., Edit.: PIIE, Santiago, 1990

Núñez, Iván: Historia del trabajo docente y formación del profesorado en Chile, Edit.: PIIE, Santiago, 1989

Núñez, Iván: Educación popular y movimiento obrero - un estudio histórico, Edit.: PIIE, Santiago, 1982

Núñez, Iván: Notas sobre educación y Fuerzas Armadas, Edit.: PIIE, Santiago, 1983

Núñez, Iván: La descentralización y la reforma educacional en Chile 1940-78, serie histórica Nr. 2, Edit.: PIIE, Santiago, 1989

Núñez, Iván; Casanga, Roberto: Informe sobre Escuela Nacional Unificada, Edit.: Ministerio de Educación, Santiago, 1972

Palomo, Francisco: La normalización fascista del sistema educacional, Edit.: Araucaria Nr. 15, Madrid, 1981

PIIE: Ruptura y construcción de consensos en la educación chilena, Edit.: PIIE, Santiago, 1988

Pinochet, Augusto: Mensaje del excelentísimo Sr. presidente de la Junta del Gobierno a los educadores de Chile., Edit.: Revista de Educación Nr. 47, 1974

Pinochet, Augusto: Discurso, directiva presidencial de educación, 1979

Pinochet Augusto: Patria y Democracia, Santiago, 1983

Pinochet, Augusto: Visión futura de Chile, Santiago, 1979

Pinto F.: La masonería: su influencia en Chile, Santiago, 1966

Portantiero, Juan Carlos: Los usos de Gramsci, México, 1977

Pozo, Hernán: La reforma del régimen municipal propuesta por el gobierno (documento de trabajo) Edit.: Flacso, Santiago, 1990

Prats, Carlos: Memorias, Santiago, 1985

Ramírez Necochea, Hernán: Universidad chilena: democracia y fascismo, Araucaria Nr. 3, Madrid, 1978

Reyes, Regina: La educación básica en Chile, carácter manipulador en planes y programas de estudio, Araucaria Nr. 23, Madrid, 1983

Rosanda, Rosana; Vásquez, Manuel; Santuci, Antonio; Gerratana, Valentín; Fernández, Francisco: El socialismo humano de Gramsci, Edit.: El País, Madrid, 24.01.1991

Sanfuentes, Andrés: Desarrollo de las universidades privadas en Chile 1981-88, Mensaje Nr. 358, Santiago, 1987

Schiefelbein, Ernesto; Magninn Noel: La prensa y la reforma educativa en Chile 1965-70, Revista del centro de estudios educacionales, México, 1975

Schwarz, Simone: Chile in Schatten faschistischen Bewegungen europäischer u. chilenischer Strömungen in der 30 bis 70 Jahre, Frankfurt am Main, 1997

Sociedad Nacional de Profesores (SONAP): Resoluciones de la sexta convención nacional, Santiago, 1967

Soto, Francisco: Fascismo y Opus Dei en Chile, Barcelona, 1976

Suarez, Waldo; Núñez, Iván; Videla, Lautaro; Peralta, Jorge:

Perspectiva de estructura y funcionamiento de la educación chilena, Santiago, s/f

Subercaseux, Bernardo: Visión de Estados Unidos y América en la elite liberal 1860-70, Araucaria Nr. 11, Madrid, 1980

Superintendencia de educación pública: Informe ENU, Ministerio de Educación Pública, Santiago, 1972

Tagle, Matías: Notas sobre la configuración del Estado en Chile, Edit.: CPU, Santiago, 1983

Tedesco, Juan Carlos: El rol del Estado en la educación, Edit.: Unesco, Santiago, s/f

Traverso, Alejandro: Conclusiones generales de evaluación y programación de la IV Conferencia de AGECH en Talagante, Febrero, 1986, Documento fotocopiado

Troncosos, Victor: La educación fundamental y lo fundamental en la educación, Santiago, 1956

Universidad Técnica del Estado: Programa electoral de la Unidad Popular, Santiago, 1970

Valenzuela, Arturo: El quiebre de la democracia en Chile, Edit.: Flacso, Santiago, 1989

Vera, Hernán: Evolución histórica de los intentos de descentralización de la educación en Chile, Edit.: CPU. 1984

Vera, Oscar: Educación y democracia, Santiago, 1985

Vera, Rodrigo; Núñez, Iván: Organización de docentes y políticas educativas y de perfeccionamiento, Edit.:PIIE, Santiago, 1988

Vial Correa, Gonzalo: Un siglo de educación chilena 1879-1973, Conferencia en la fundación Adolfo Ibáñez, Valparaíso, s/f

Vidigial, Fabio; Da Silveira, Xavier: Frei el Kerensky chileno. Edit.: Comité de jóvenes ecuatorianos pro civilización cristiana, Quito, 1967

Vitale, Luis: Interpretación marxista de Chile: de semicolonía inglesa a semicolonía norteamericana, Barcelona, 1980

Zeitungen

El Mercurio, Santiago de Chile
La Nación, Santiago de Chile
La Segunda, Santiago de Chile
La Tercera de la Hora, Santiago de Chile
Las Últimas Noticias, Santiago de Chile

Zeitschriften

Análisis, Santiago de Chile
Cosas, Santiago de Chile
Chile América, Edit.: Centro de estudios y documentacion, Rom
El Pizarrón, Santiago de Chile
EPD-Entwicklungspolitik, Frankfurt am Main
Ercilla, Santiago de Chile
Hoy, Santiago de Chile
Inprekorr (internationale Presse Korrespondenz), Frankfurt am Main, 1986.
Mensaje, Santiago de Chile
Qué Pasa, Santiago de Chile
Signos, publicación de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (Agech)

Personas entrevistadas

Froemmel, Enrique:	Ex Ministro de educación del régimen militar
Monsalve, Verónica:	Consejera nacional del Colegio de Profesores (elegido)
Pavez, Jorge:	Consejero nacional del Colegio de Profesores (elegido) ex Presidente de AGECH
Schulak, Pedro:	Consejero nacional
Valladares, Julio:	Consejero nacional del Colegio de Profesores (elegido)
Verdugo, Osvaldo:	Presidente del Colegio de Profesores (elegido)
Videla, Livia:	Secretaria General del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (SUTE)

Aclaración

Por intermedio de la presente declaro oficialmente que la Tesis de Doctorado denominada: La desarticulación del gremio de maestros en Chile bajo el regimen militar y los factores que determinaron el quiebre del Compromiso Histórico en el ambito educacional, fue realizada sobre la base de una investigación independiente . Los recursos bibliográficos o entrevistas personales usados, están debidamente mencionados en el trabajo.

Omar Antonio Cofré
Firma

Agradecimientos

En primer lugar quisiera agradecer a todos aquéllos representantes del gremio de profesores de Chile por la confianza que me han brindado. De manera especial Livia Videla, Osvaldo Verdugo y Jorge Pavez. De igual forma agradezco a Dieter Maier por sus reflexiones críticas y permanente ayuda en la corrección de la edición alemana. También mis agradecimientos especiales a Loreto Villela por su cooperación en la configuración técnica del trabajo y a mi mujer Gisela por su inagotable paciencia.